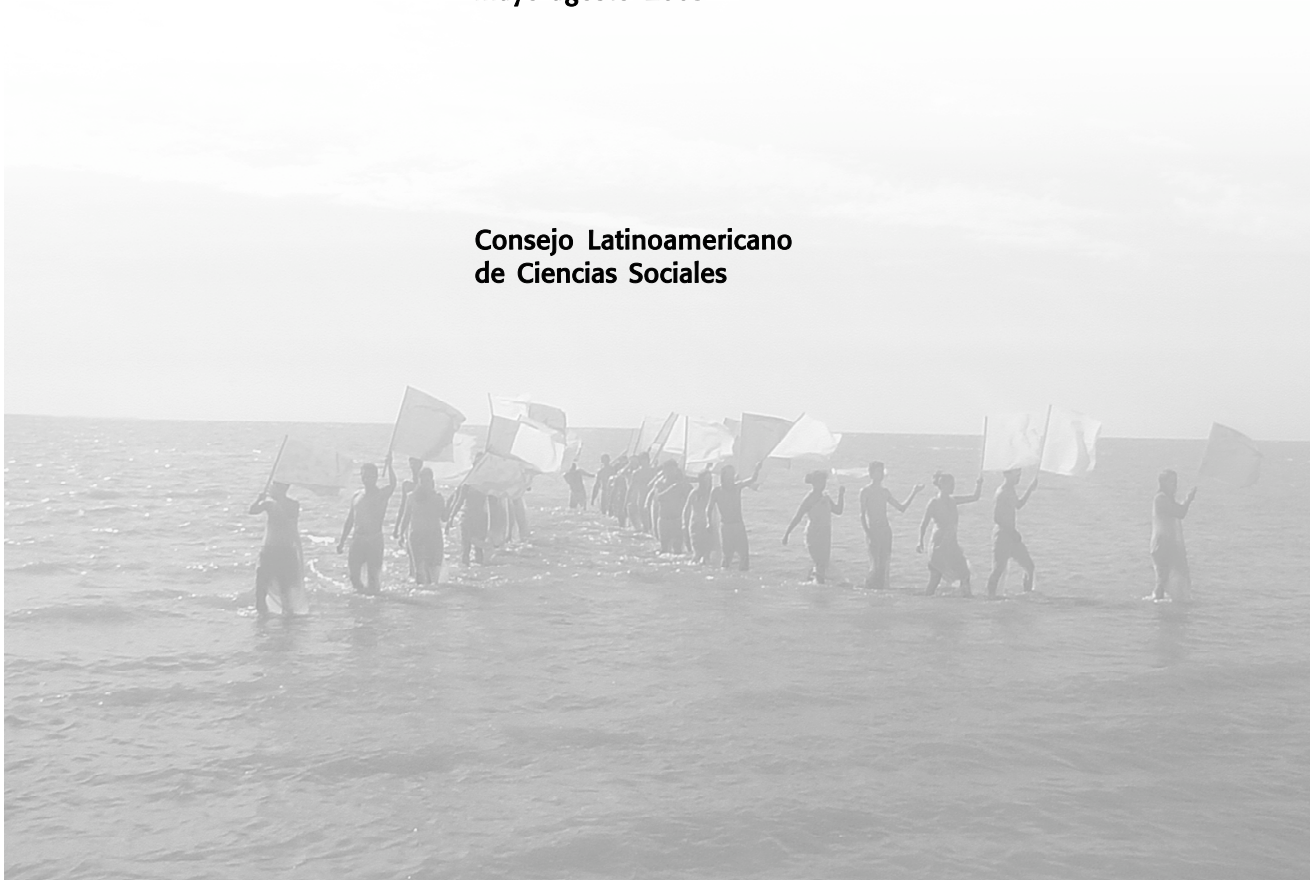
OSAL

Observatorio Social de América Latina

Año VI Nº 17
Mayo-agosto 2005



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

OSAL **Observatorio Social de América Latina**

Año VI Nº 17 / publicación cuatrimestral / mayo-agosto 2005

Editor: Atilio A. Boron, Secretario Ejecutivo de CLACSO

Director: José Seoane, Coordinador del OSAL / CLACSO

Coordinador: Emilio H. Taddei, Coordinador Académico de CLACSO

Responsable de las cronologías y edición OSAL: Clara Algranati

Equipo del OSAL: Juan Chaves, María Chaves, Sol Denot, Mariana Fassi, Martín Fernández, María José Nacci, Marcelo Perera y Magdalena Rauch.

Escriben en este número: Héctor Alimonda, Gustavo Castro Soto, Ana Esther Ceceña, María Celia Cotarelo, Eduardo Galeano, Marco A. Gandásegui (h), Gabriel Herbas Camacho, Enrique Leff, Roberto Leher, Pilar Lizárraga, Esperanza Martínez, Silvia Molina, Carlos Ernesto Motto, Pablo Ortiz-T., James Petras, Ariela Ruiz Caro, Luis Tapia, Carlos Vacaflores R.

Agradecemos especialmente la colaboración de: Héctor Alimonda, Surai Azcárate, Maira Elena Camacho Lalangui, Laura Cassain, Ana Esther Ceceña, María Espinoza, Jaime Estay, Eduardo Galeano, Ana María Larrea, Patricio Realpe, Marcelo Rico, Comité de Derechos Humanos de Orellana, Red de Líderes Comunitarios Angel Shingre y Oficina de Pastoral Social del Vicariato de Aguarico, LPP (Laboratorio de Políticas Públicas, UERJ, Brasil), PIMSA (Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina).

Producción Gráfica Editorial: Área de Difusión de CLACSO

Coordinador: Jorge A. Fraga

Edición: Florencia Enghel

Diseño editorial: Miguel A. Santángelo / Lorena Taibo / Marcelo Giardino

Revisión de pruebas: Mariana Enghel / Ivana Brighenti

Logística y Distribución: Marcelo F. Rodriguez / Sebastián Amenta / Daniel Aranda

Tapa: Diseño de Jorge A. Fraga. Foto de Martín Fernández. Mística popular a orillas de la Lagoa dos Patos en el asentamiento del MST, Lagoa do Junco, en la ciudad de Tapes, Rio Grande do Sul, Brasil, el 31 de enero de 2005, en el marco del V Foro Social Mundial. Simboliza el agua como la sangre del mundo y riqueza que la humanidad debe proteger.

Impreso en: Gráficas y Servicios SRL, Santa María del Buen Aire 347, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Tirada: 2.000 ejemplares

Propietario: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales / CLACSO
ISSN: 1515-3282 - Impreso en Argentina - octubre de 2005
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Domicilio de la publicación: Av. Callao 875, 3º piso, C1023AAB Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4811-6588/4814-2301 • Fax: (54-11) 4812-8459

http://www.clacso.org
http://osal.clacso.org
osal@clacso.edu.ar

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.

Dirección Nacional del Derecho de Autor: Expediente Nº 395.126.

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, Observatorio Social de América Latina - OSAL y sus respectivos isotipos y logotipos son marcas registradas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

Sumario

Editorial 9

Análisis de casos

Movimientos sociales y conflictos por recursos naturales

No es suicidio, es genocidio y ecocidio
Eduardo Galeano 15

La lucha por el excedente del gas y la resignificación de las contradicciones de la identidad regional en Bolivia
Proyectos de dominación y resistencia en una región productora de hidrocarburos
Carlos Vacaflores R. y Pilar Lizárraga A. 21

Cuando los árboles son un desierto
Héctor Alimonda 33

El movimiento social en Mesoamérica por la defensa de los recursos naturales
Gustavo Castro Soto 41

Protestas locales amazónicas y modelo petrolero en Ecuador
Pablo Ortiz-T. 53

Ecuador: contra la globalización de las transnacionales
Esperanza Martínez 61

Recursos naturales y conflicto social en la Argentina actual
María Celia Cotarelo 67

Documentos

Declaración de afectados y amenazados por la construcción de represas 79

Los conflictos mineros se agudizan y el Gobierno incumple creación de Comisión de Diálogo de Alto Nivel 83

CONACAMI insiste en el diálogo para solucionar conflicto minero 86

CONACAMI pide reglamentar el proceso de consulta para el desarrollo de la actividad minera en territorio comunal 88

Declaración del III Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería de la Argentina 90

Cronología del conflicto

Movimientos sociales y recursos naturales en América Latina: resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas
José Seoane 93

Región Sur

Opção pelo mercado é incompatível com a democracia: a crise no governo Lula da Silva e no PT e as lutas sociais
Roberto Leher 109

- Argentina 118
- Brasil 129
- Chile 138
- Paraguay 144
- Uruguay 148

Región Andina

La cuarta derrota del neoliberalismo en Bolivia
Luis Tapia 153

- Bolivia 159
- Colombia 168
- Ecuador 177
- Perú 186
- Venezuela 191

Región Norte **Panamá 2005: movilización popular en defensa de la seguridad social**
Marco A. Gandásegui (h.) 201

- Costa Rica 212
- El Salvador 217
- Guatemala 221
- Honduras 225
- México 230
- Nicaragua 236
- Panamá 242
- Puerto Rico 249
- República Dominicana 254

Debates **Neoliberalismo de guerra y recursos naturales**

La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable
Economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza
Enrique Leff 263

Paraguay: eje de la dominación del Cono Sur
Ana Esther Ceceña y Carlos Ernesto Motto 275

La economía política de la política exterior de Estados Unidos para América Latina
James Petras 289

Recursos naturales y aspectos ambientales en los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos
Ariela Ruiz Caro 297

IIRSA y la integración regional
Gabriel Herbas Camacho y Silvia Molina 307

Editorial

Dedicamos este decimoséptimo número del *OSAL* a la temática de los conflictos sociales por recursos naturales en nuestra América latina y caribeña. Ciertamente, la reflexión sobre estos procesos ha estado presente en números anteriores de esta publicación, en tanto estas experiencias han cobrado una creciente significación en el panorama político-social de nuestros países y agudizado los desafíos y horizontes que enfrentan nuestras sociedades. Valga señalar que, a lo largo del segundo cuatrimestre del presente año sobre el que trata esta revista, las disputas sociales por la propiedad y distribución de los beneficios derivados de la explotación hidrocarburífera en Bolivia desencadenaron la renuncia del presidente Carlos Mesa, así como otros conflictos y emergencias de coordinaciones y convergencias de movimientos sociales recorrieron la mayoría de los países de la región.

Estos hechos, así como la prosecución de políticas orientadas a consolidar la matriz de un modelo societal basado

en la explotación intensiva, depredadora y exportadora de los recursos naturales, nos han motivado, en este caso, a dedicar un número completo a esta cuestión. Inicia el primer dossier una selección de textos del escritor uruguayo Eduardo Galeano, a quien agradecemos especialmente el habernos permitido contar con sus palabras en este número. Más de tres décadas han pasado desde la publicación de su reconocido libro *Las venas abiertas de América Latina* (1971) –que reflejaba una preocupación regional sobre esta cuestión– y las mismas permanecen aún más abiertas que antes.

Este primer dossier ofrece un conjunto de reflexiones que abordan algunas de las experiencias recientes de movimientos sociales y conflictos desplegados en distintas regiones y países latinoamericanos alrededor de diferentes recursos naturales (gas, bosques, agua, petróleo). En la primera de ellas, Carlos Vacaflores y Pilar Lizárraga analizan, en el marco del ciclo de conflictos abierto por la "Guerra del Agua" (Cochabamba, 2000), los sucesos que derivaron en la caída de Carlos Mesa, concentrando su atención particularmente en los procesos vividos en el departamento petrolero de Tarija y las iniciativas desplegadas por la elite tarijeña (Comité Cívico, autonomía departamental) en el sentido de transformar la lucha social por la apropiación de los excedentes gasíferos en un conflicto entre regiones. A continuación, Héctor Alimonda aborda los procesos de deforestación y destrucción de los bosques nativos en Brasil (particularmente en la región amazónica) como resultado de la expansión del agronegocio y las plantaciones industriales (soja, eucaliptos, etc.) que, además de las consecuencias sociales y medioambientales que depara, significa –según señala el autor– el desarrollo de una contrarreforma agraria. Por otra parte, el artículo de Gustavo Castro Soto, partiendo de las reformas neoliberales implementadas en relación a los servicios de agua y el manejo de las cuencas hídricas en Mesoamérica, reflexiona sobre el impacto de las mismas, señalando los procesos de conflicto y surgimiento de experiencias de coordinaciones y encuentros de movimientos sociales en dicha región.

Posteriormente, incluimos dos contribuciones que versan sobre las características de la explotación petrolera y las recientes protestas de las poblaciones amazónicas en Ecuador. En la primera, Pablo Ortiz-T. analiza los rasgos actuales del llamado "modelo extractivo petrolero", las consecuencias que el "boom del petróleo" ha deparado para los pueblos donde se encuentran los yacimientos, y el surgimiento y desarrollo de la Asamblea Biprovincial de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana –espacio donde se articulan diferentes procesos de lucha, movimientos, organizaciones sociales y autoridades departamentales– que habría de ser el convocante del importante paro regional durante agosto de este año. Partiendo también de las consecuencias sociales y medioambientales derivadas de la actividad petrolera en estas provincias, el texto de Esperanza Martínez aborda el desarrollo del paro regional antes referido, la dinámica que el mismo asumió frente a la represión gubernamental y los acuerdos que llevaron a su levantamiento. Finalmente, la contribución de María Celia Cotarelo da cuenta de la emergencia de las pueblades y pique-

tes en ciudades petroleras del Norte y Sur de Argentina a partir de 1996, que habrán de signar el bautismo mediático de "piqueteros" para los movimientos de trabajadores desocupados. Su análisis continúa hasta la actualidad, haciendo referencia también a otros conflictos por recursos naturales recientemente acontecidos en este país.

Lamentablemente, las contribuciones convenidas sobre los recientes conflictos en torno a la explotación minera en Perú no llegaron a tiempo para ser incorporadas en esta publicación. Con el propósito de no dejar de considerar estos procesos en este número, hemos incluido en la sección Documentos que continúa al primer dossier las últimas declaraciones de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) en relación a estos hechos. Dicha sección incorpora también la declaración resultante de la conformación del Frente Nacional Guatematelco contra las Represas, así como el manifiesto del III Encuentro Nacional de Afectados por la Minería en Argentina.

Acompañando estos escritos, el segundo dossier presenta una serie de contribuciones que reflexionan críticamente sobre el modelo neoliberal en su fase actual y el papel que en este cumplen la apropiación y explotación de los recursos naturales. En ellas se examinan estas cuestiones en relación con sus consecuencias ecológicas, la militarización regional, la naturaleza de la política norteamericana para Latinoamérica, el impacto de los tratados de libre comercio que dicho país lleva adelante en nuestro continente y las iniciativas en marcha de integración de la infraestructura en Sudamérica.

Abre dicho dossier el artículo de Enrique Leff, que analiza las recientes políticas en torno a la biodiversidad y el desarrollo sustentable y las formas en que las mismas prolongan e intensifican los procesos anteriores de apropiación destructiva de los recursos naturales, señalando también, por contraparte, la emergencia de una política alternativa del lugar y la diferencia construidos a partir de las luchas actuales por la identidad, la autonomía y el territorio. A continuación, Ana Esther Ceceña y Carlos Ernesto Motto analizan el proceso regional y las coordenadas geopolíticas que permiten entender las implicancias de la reciente aprobación parlamentaria en Paraguay de la inmunidad para las tropas norteamericanas y la serie de operativos militares convenidos entre ambos países para este año. Por otra parte, James Petras reflexiona a partir del concepto marxista de imperialismo sobre las características que asume el proyecto imperial estadounidense para América Latina, los diferentes instrumentos de su construcción y las formas que adopta, a su entender, la aplicación de estas políticas en la región en el último período. En el caso de Ariela Ruiz Caro, su contribución presenta un análisis de los tratados de libre comercio acordados –o en curso de negociación– entre países latinoamericanos y EE.UU., y de las consideraciones que los mismos prevén en relación con los recursos naturales, señalando los peligrosos efectos –en términos medioambientales– que se derivan de ellos. Cierra el dossier la contribución de Gabriel Herbas Camacho y Silvia Molina, quienes nos presentan una visión sobre el pro-

yecto de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), su relación con la explotación de la riqueza natural en dichos países y las consecuencias que la dinámica de los procesos de integración regional tienen para el caso boliviano.

Para la elaboración de los mencionados dossiers contamos con la inestimable colaboración de Ana Esther Ceceña, Coordinadora del Grupo de Trabajo Hegemonía y Emancipaciones, y de Héctor Alimonda, Coordinador del Grupo de Trabajo Ecología Política, ambos grupos del respectivo programa de CLACSO, a quienes agradecemos especialmente sus valiosas sugerencias y aportes y su disposición para este esfuerzo colectivo en los siempre exigentes tiempos que plantea esta publicación.

La parte central de la revista, como es habitual, incluye las cronologías de los principales hechos políticos, económicos y de conflicto social acontecidos en diecinueve países latinoamericanos y caribeños. Sobre la base de un primer análisis de dicha información, abre esta sección un artículo que intenta presentar un panorama de las principales protestas y movimientos sociales en relación con los recursos naturales, así como de las dinámicas que animan al libre comercio y la integración regional, y que ofrece un mapa de las características que presenta la conflictividad social en el período que cubre la publicación.

Antecediendo a la publicación de dichas cronologías, tres investigadores latinoamericanos reflexionan sobre los principales hechos de conflicto y la evolución de la coyuntura político-social en Brasil, Bolivia y Panamá. El texto de Roberto Leher nos presenta una crónica de las denuncias por manejo ilegal de fondos que comprometen al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y de los hechos que estas desencadenan a lo largo del cuatrimestre. El autor analiza dicho proceso y el impacto y posicionamientos adoptados por los movimientos sociales frente a esta crisis. Por otra parte, Luis Tapia, bajo la conceptualización de "reformismo neoliberal", analiza la gestión de Carlos Mesa en Bolivia y el ciclo de conflictos que determinó su renuncia, los diferentes intereses que la motivaron y las confrontaciones que se sucedieron hasta la asunción del gobierno de transición del presidente de la Corte Suprema Eduardo Rodríguez Veltzé. Por último, en el contexto de una reflexión sobre los procesos políticos y sociales vividos en Panamá en los últimos años, Marco A. Gandásegui (h.) analiza el desarrollo del conflicto desplegado en este país frente a la propuesta gubernamental de reforma de la Caja del Seguro Social y las motivaciones y estrategias desplegadas por el gobierno frente a estas resistencias.

Finalmente, queremos agradecer a tod@s aquell@s que, de una u otra manera, hicieron posible la elaboración, preparación y edición de este nuevo número de la revista *OSAL*. Esperamos que el mismo sirva para enriquecer y estimular la reflexión latinoamericana sobre esta temática y contribuya a la construcción colectiva de mejores presentes y futuros para nuestros pueblos.

No es suicidio, es genocidio y ecocidio[1]

Eduardo Galeano*

✱ *Nacido en la Montevideo de 1940, es uno de los más brillantes y comprometidos intelectuales latinoamericanos. Cuenta en su haber con más de 30 libros publicados, entre ellos se destacan obras consagradas tales como* Las Venas Abiertas de América Latina *(1971),* Memorias del Fuego *(1986) y* Patas arriba. La escuela del mundo al revés *(1998).*

Frases que hacen crecer la nariz de Pinocho

La salud del mundo está hecha un asco. "Somos todos responsables", claman las voces de la alarma universal, y la generalización absuelve: si somos todos responsables nadie es. Como conejos se reproducen los nuevos tecnócratas del medio ambiente. Es la tasa de natalidad más grande del mundo: los expertos generan expertos y más expertos que se ocupan de envolver el tema en el papel celofán de la ambigüedad. Ellos fabrican el brumoso lenguaje de las exhortaciones al "sacrificio de todos" en las declaraciones de los gobiernos y en los solemnes acuerdos internacionales que nadie cumple. Estas cataratas de palabras, inundación que amenaza convertirse en una catástrofe ecológica comparable al agujero de ozono, no se desencadenan gratuitamente. El lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo en nombre del desarrollo y las grandes empresas que

le sacan jugo. Pero las estadísticas confiesan. Los datos ocultos bajo el palabrerío revelan que el veinte por ciento de la humanidad comete el ochenta por ciento de las agresiones contra la naturaleza, crimen que los asesinos llaman suicidio, y es la humanidad entera quien paga las consecuencias de la degradación de la tierra, la intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los recursos naturales no renovables (Galeano, 2005: 9 y 10).

La impunidad de los exterminadores del planeta

Crímenes contra la gente, crímenes contra la naturaleza: la impunidad de los señores de la guerra es hermana gemela de la impunidad de los señores que en tierra comen naturaleza y en el cielo engullen la capa de ozono. Las empresas que más éxito tienen en el mundo son las que más asesinan al mundo; y los países que deciden el destino del planeta son los que más méritos hacen para aniquilarlo. Un planeta descartable. Inundación, inmundaciones: torrentes de inmundicias inundan el mundo y el aire que el mundo respira (Galeano, 2003: 221).

Más frases que hacen crecer la nariz de Pinocho

La señora Harlem Brutland, que encabeza el gobierno de Noruega, comprobó recientemente que "si los siete mil millones de pobladores que habitan el planeta consumieran lo mismo que los países desarrollados de Occidente, harían falta 10 planetas como el nuestro para satisfacer todas sus necesidades". Una experiencia imposible. Pero los gobernantes del país del Sur que prometen el ingreso al Primer Mundo, mágico pasaporte que nos hará a todos ricos y felices, no sólo deberían ser procesados por estafa. No sólo nos están tomando el pelo, no: además esos gobernantes están cometiendo el delito de apología del crimen. Porque este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo. Extirpación del comunismo, implantación del consumismo, la operación ha sido un éxito pero el paciente se está muriendo (Galeano, 2005:10).

Es verde lo que se pinta verde

Ahora los gigantes de la industria química hacen su publicidad en color verde y el Banco Mundial lava su imagen repitiendo la palabra ecología en cada página de sus informes y tiñendo de verde sus préstamos […] El BM otorga generosos créditos para la forestación.

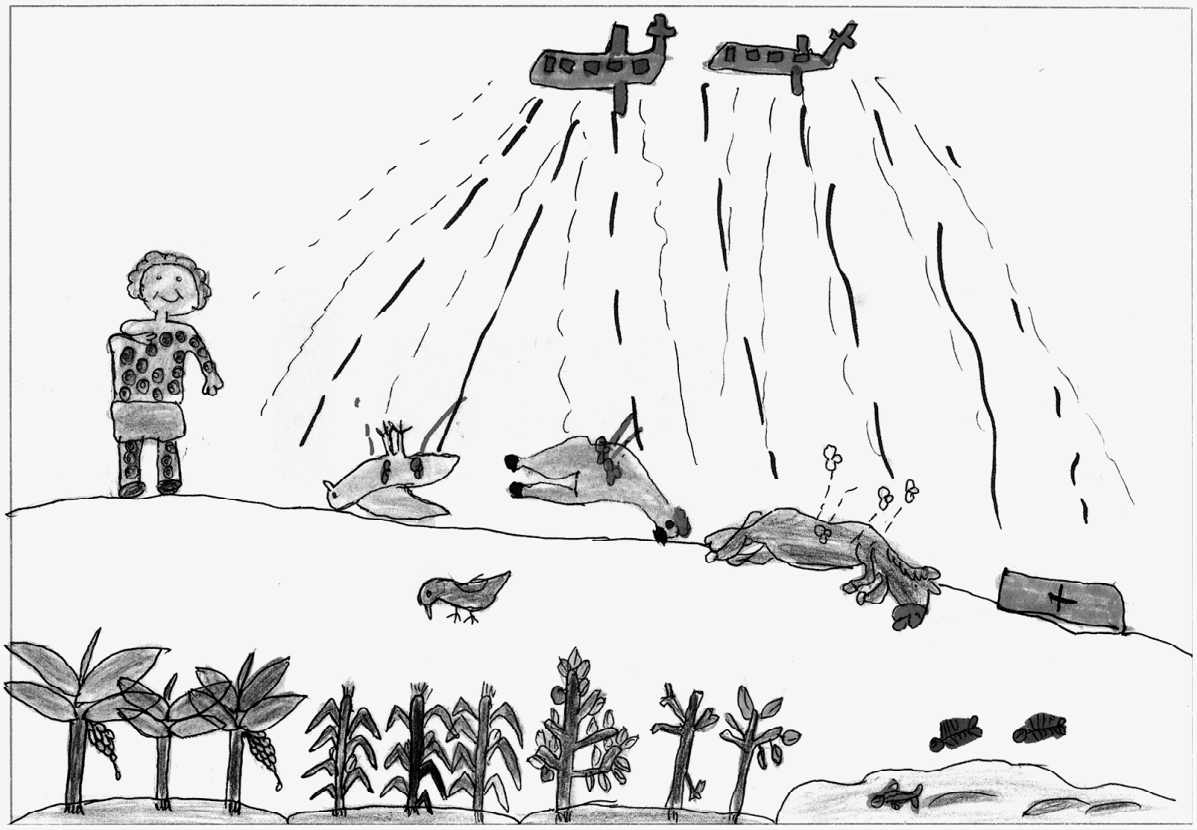
El Banco planta árboles y cosecha prestigio en un mundo escandalizado por el arrasamiento de sus bosques. Conmovedora historia, digna de ser llevada a la televisión: el destripador distribuye miembros ortopédicos entre las víctimas de sus mutilaciones […] Las plantaciones de exportación no resuelven problemas ecológicos, sino que los crean, y los crean en los cuatro puntos cardinales del mundo [Nos preguntamos entonces] ¿Lo que es bueno para las empresas es bueno para la humanidad? La reconquista de este mundo usurpado, la recuperación del planeta o lo que nos quede de él, implica la denuncia de la impunidad del dinero y la libertad humana. La ecología neutral, que más bien se parece a la jardinería, se hace cómplice de la injusticia de un mundo donde la comida sana, el agua limpia, el aire puro y el silencio no son derechos de todos sino privilegio de pocos que pueden pagarlo (Galeano, 2005: 11,14,15,18).

"Es América Latina, región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder"

La militancia ecológica no puede divorciarse de la lucha social

Chico Méndez, obrero del caucho, cayó asesinado en 1988 en la Amazonia brasileña, por creer lo que creía: la militancia ecológica no puede divorciarse de la lucha social. Chico creía que la floresta amazónica no será salvada mientras no se haga la reforma agraria en Brasil […] cinco años después del crimen de Chico Méndez [se denunció] que más de cien trabajadores rurales mueren asesinados cada año en la lucha por la tierra y [se calcula] que más de cuatro millones de campesinos sin trabajo se encaminan a las ciudades desde las plantaciones del interior […] *un campesino vale menos que una vaca y más que una gallina*, me informan en Caaguazú, en el Paraguay, y en el nordeste de Brasil *quien planta no tiene tierra y quien tiene tierra no planta*.

[…] Es América Latina, región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, nor-



Dibujo de Maira Elena Camacho Lalangui, 6º año de básica, Escuela Río Upano, Ecuador

teamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos [...] Hace cinco siglos cuando América fue apresada por el mercado mundial, la civilización invasora confundió la ecología con la idolatría. La comunicación con la naturaleza era pecado, y merecía castigo (Galeano, 2005: 19, 20, 113, 127).

La madre tierra

¿Qué tiene dueño la tierra? ¿Cómo así? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ella no nos pertenece, pues. Nosotros somos de ella. Sus hijos somos. Así siempre, siempre. Tierra Viva. Como cría a los gusanos, así nos cría. Tiene huesos y sangre. Leche tiene, y nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, árboles. Ella sabe parir papas. Hace nacer casas. Gente hace nacer. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos. Ella bebe chicha, acepta nuestro convite. Hijos suyos somos ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? (Galeano, 2005: 38).

Las voces porfiadamente vivas

Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, se reconocen y se abrazan y ese lugar es mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano muy pasado. Las antiguas voces, pongamos por caso, que todavía nos dicen que somos hijos de la tierra, y que la madre no se vende ni se alquila. Mientas llueven pájaros muertos sobre la ciudad de México, y se convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos, esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo que no es este mundo envenenador del agua, el suelo, el aire y el alma. También nos anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas: pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen y presienten un Nuevo Mundo. Porque nada hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras. Foráneo es, en cambio, el capitalismo: como la viruela, como la gripe, vino de afuera (Galeano, 2005: 32 y 33).

Bibliografía

Galeano, Eduardo 2003 *Patas arriba. La escuela del mundo al revés* (Montevideo: El Chanchito) 6ª edición.

Galeano, Eduardo 2005 *Úselo y tírelo: el mundo visto desde una ecología latinoamericana* (Montevideo: El Chanchito) 10ª edición.

Nota

1 Agradecemos especialmente a Eduardo Galeano por habernos permitido y confiado la selección y publicación de los presentes pasajes de su obra ante nuestra invitación a colaborar en este número del *OSAL*. La selección de los textos que presentamos fue realizada por María José Nacci.

La lucha por el excedente del gas y la resignificación de las contradicciones de la identidad regional en Bolivia

Proyectos de dominación y resistencia en una región productora de hidrocarburos

Carlos Vacaflores R.*
y Pilar Lizárraga A.**

* *Investigador y director de la Comunidad de Estudios JAINA (Tarija, Bolivia). Integrante del Grupo de Trabajo Desarrollo Rural de CLACSO.*

** *Investigadora de la Comunidad de Estudios JAINA (Tarija, Bolivia). Integrante del Grupo de Trabajo Desarrollo Rural de CLACSO.*

El conflicto social sobre los recursos naturales en Bolivia es una reedición actualizada de las antiguas contradicciones de la identidad nacional, que a decir de Prada (2004) se manifiesta en varios planos de las luchas sociales y, aunque aflora en las emblemáticas guerras del agua en 2000 y el gas en 2003, no se reduce sólo a la disputa por la recuperación de la propiedad de los recursos naturales y la lucha por su excedente, sino que constituye expresiones de la resistencia de los movimientos sociales al modelo de desarrollo excluyente expresado en un sistema político tradicional que no reconoce la diversidad cultural y que no genera beneficios para las grandes mayorías del país.

La diversidad de manifestaciones y movilizaciones, antes y después de la denominada Guerra del Gas (2003), nos muestra que esta no se reduce sólo a los acontecimientos de octubre de ese año, sino que puede ser comprendida como un proceso más amplio en el tiempo y que se va condensando en diversos momentos en los que los movi-

mientos sociales ejercen su fuerza para expresar una resistencia y cuestionamiento al modelo neoliberal con la consigna de la nacionalización de los hidrocarburos.

Un primer momento de la Guerra del Gas lo podemos ubicar ya desde el año 2000, a partir de las movilizaciones regionales de Tarija como departamento productor, que presiona para la venta del gas. Ello genera un debate y movilización en el Occidente boliviano en torno a la propiedad de los hidrocarburos, cuyo antecedente en tanto discurso lo podemos encontrar en la Guerra del Agua de 2000, donde ya se introduce el cuestionamiento al modelo privatizador de los recursos naturales. Este primer período presenta su desenlace en los acontecimientos de septiembre y octubre de 2003, protagonizados por movimientos sociales de las ciudades de El Alto, Cochabamba y Oruro[1] que, a través de una serie de medidas de presión y de enfrentamientos con los órganos de represión del estado, logran la declinación del presidente Sánchez de Lozada. Estos sucesos develan la crisis del modelo de desarrollo y la falta de legitimidad del sistema político tradicional. Fruto de esta resistencia surge la denominada "Agenda de Octubre", que plantea el compromiso del gobierno de convocar a la realización de la Asamblea Constituyente, espacio donde tendría lugar el debate sobre la nacionalización de los hidrocarburos.

Aparentemente los movimientos sociales logran tomar el control del gobierno al imponer su agenda en la priorización de la política nacional, lo cual genera una reacción de la clase dominante, que, aunque aturdida momentáneamente por el golpe de la destitución de Sánchez de Lozada, se repone rápidamente y reacciona ejecutando una serie de movidas políticas para posicionar una agenda propia y retomar el control del país.

Entre octubre de 2003, fecha en la que se da la sucesión constitucional, y el 10 de junio de 2005, con la declinación del gobierno de Carlos Mesa, se da un segundo momento de la Guerra del Gas (JAINA, 2005) que se caracteriza por el entrampamiento de la agenda política a partir del compromiso que el presidente Carlos Mesa asume tanto con los movimientos sociales como con la oligarquía del Oriente, generando una agenda paralela a la de Octubre, denominada "Agenda de Enero", que exige al gobierno la realización del referéndum por la autonomía y la elección de prefectos previo a la realización de la Asamblea Constituyente, con lo cual se inserta en la agenda política del gobierno la aparente inviabilidad de desarrollar una agenda única.

De esta manera se perfila la confrontación de visiones desde las "agendas", las cuales inicialmente se apoyan en la supuesta dicotomía territorial occidente-media luna propugnada desde las elites regionales de Tarija y Santa Cruz; pero que, paulatinamente, se van desprendiendo de este refuerzo del imaginario para constituirse en instrumentos de confrontación en sí mismas, cada vez más relacionadas a la confrontación de clases, naturaleza subterránea que finalmente empieza a aflorar en el discurso público del conflicto social boliviano.

Durante el gobierno de Mesa el escenario nacional sigue marcado por intensas movilizaciones y medidas de presión de los movimientos sociales, que van evidenciando el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en octubre de 2003. El tratamiento de la Ley de Hidrocarburos es marcado por otra serie de movilizaciones que obligan al gobierno a desechar una primera propuesta y promulgar otra con fecha 17 de mayo de 2005. Esta nueva ley sigue cuestionada por los movimientos sociales y genera una mayor polarización entre las regiones del bloque de la media luna y los movimientos sociales del occidente.

"En medio de movilizaciones y manifestaciones que tienen paralizado al país y de las presiones de las elites regionales, que tienen visiones encontradas sobre la refundación de la nación y el tratamiento que se tiene que dar a la propiedad de los recursos, Carlos Mesa renuncia"

La otra medida asumida por el gobierno mediante la promulgación del Decreto Supremo 28.195 en junio de 2005, que define la convocatoria a la Constituyente y al Referéndum, es duramente cuestionada por diferentes sectores. Para los movimientos sociales estas están desfasadas en el tiempo y no garantizan que el Congreso las viabilice. Tras estas medidas del gobierno, que son cuestionadas, en medio de movilizaciones y manifestaciones que tienen paralizado al país y de las presiones de las elites regionales, que tienen visiones encontradas sobre la refundación de la nación y el tratamiento que se tiene que dar a la propiedad de los recursos, Carlos Mesa renuncia y el Congreso se ve forzado a seguir la cadena de mando democrático que, al renunciar los presidentes de las cámaras (Mario Cossio y Hormando Vaca Diez) a pedido de los movimientos sociales, recae en el presidente de la Corte Superior de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, como nuevo mandatario de la nación.

El gobierno transitorio asumido en junio de 2005 por Eduardo Rodríguez Veltzé marca un siguiente momento de la Guerra del Gas. Este gobierno tiene como mandato del pueblo la convocatoria adelantada a elecciones nacionales y prefecturales en el mismo año. En este período se nota una tensa calma, y el conflicto en torno al gas viene adquiriendo otros matices: ahora se habla de la guerra de los impuestos, protagonizada por otros

actores, que exigen la asignación de los recursos de la venta del gas definidos por la nueva ley de hidrocarburos.

Los acontecimientos de los diferentes momentos de la Guerra del Gas nos muestran cómo el conflicto va asumiendo distintas facetas e incorporando en el escenario a diversidad de actores. Se hace evidente la confrontación entre los sectores dominantes y excluidos a partir de dos visiones de país: por un lado, la que no pretende cuestionar ni alterar las relaciones de poder que estructuran la sociedad nacional; y, por otro, la visión que busca transformar la estructura de las relaciones de poder para generar condiciones de inclusión de los vastos sectores marginados de la nación. La confrontación de estas dos visiones genera una exacerbación de las identidades, cuyo objetivo claro es demostrar la existencia de sectores poblacionales que son excluidos, marginados e invisibilizados de la realidad nacional. Pero no sólo se demanda reconocimiento, sino que simultáneamente se construye conciencia, en los sectores excluidos, de su propia condición de marginados y excluidos, y se genera rápidamente una polarización entre ambas posiciones, que ahora debaten visiones de país y proyectos de desarrollo diferentes en base al excedente que empieza a producir la venta del gas en los mercados regionales.

A lo largo de esta confrontación, pero especialmente durante el período de gobierno de Carlos Mesa, se produce una configuración territorial circunstancial de Bolivia en el imaginario de la pugna de discursos entre los sectores dominantes y los movimientos sociales. Las clases dominantes de Tarija y Santa Cruz, usando la intermediación de los Comités Cívicos, plantean que el país está claramente dividido en dos partes, una conformada por los departamentos andinos de Bolivia, donde explotan los movimientos sociales reivindicatorios del proyecto emancipatorio y a la que se trata de desvalorizar al identificarla como un "occidente convulso y decadente"; y una "media luna pujante y progresista" conformada por los departamentos relacionados con la llanura amazónica y chaqueña de Bolivia (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni), donde aparentemente no habría movilizaciones sociales problemáticas, lo que por ende demostraría la vocación progresista de dichas regiones.

La emergencia de la denominada media luna fue un movimiento propiciado por la clase dominante de los departamentos que la forman, como una estrategia para posicionar el conflicto social en el plano de la confrontación de regiones y evitar así la construcción del escenario del conflicto en el plano de la lucha entre clases sociales, que es por otro lado la apuesta de los movimientos sociales. Con ello las clases dominantes aspiran a evitar el cuestionamiento de las relaciones de poder que generan las condiciones de atraso y pobreza de Bolivia, pero de las cuales ellos se benefician para acceder a un nivel de vida al cual no puede acceder la gran mayoría de los bolivianos.

© Martín Fernández

La estrategia de las clases dominantes es posicionar una agenda que ubique el discurso en la "regionalización" del conflicto, para lo cual enarbola la demanda de autonomías regionales como eje de su proyecto de desarrollo, mientras que los movimientos sociales enarbolan una demanda sobre el eje de la Asamblea Constituyente, que implica trabajar una refundación del país a partir de la crítica a las relaciones de poder actualmente establecidas.

A partir del uso masivo y monopolizante de los medios de comunicación, el discurso de la media luna logra imponer inicialmente su visión de conformación de la identidad nacional como "dos Bolivias" muy diferentes entre sí, expresadas en las regiones oriente y occidente, en el cual se busca resaltar el nexo de los sectores *conflictivos* con el occidente, y de los sectores *progresistas* con la media luna. Además, el discurso de la clase dominante busca demostrar que es representativo y totalmente legítimo de sus regiones, para lo cual se vale de la palestra de los Comités Cívicos departamentales, instituciones que supuestamente se constituyen por la confluencia de las diferentes instituciones que conforman las regiones departamentales, y por tanto voceros de los departamentos. Sin embargo, estos comités son cuestionados porque no representan a los sectores subalternos de las propias regiones, y estarían formados, según los movimientos sociales, por "los de la plaza" solamente, aludiendo a las familias tradicionales que viven en el centro de las ciudades capitales y que monopolizan el acceso al poder político y económico en el país.

Aun así, al principio los Comités Cívicos logran sortear esta crítica y consiguen mostrar en un primer momento una aparente cohesión de las identidades regionales, y por tanto una legitimidad del discurso regional que los sectores dominantes aspiran a representar. Sin embargo, el discurso de la aparente confrontación entre un occidente convulso y decadente y una supuesta media luna progresista, a pesar de tener un momento de fuerza, poco a poco se va diluyendo hasta quedar abandonado casi por completo en la actualidad, ya que los movimientos sociales logran reposicionar su discurso y demuestran la naturaleza contradictoria de la constitución de las identidades regionales, tal como ocurre en la escala nacional. Resulta ser que en todo el país existen las dos Bolivias: la de los ricos y la de los pobres, la de la clase dominante y la de los excluidos, la de los bloqueadores cuya única forma de hacerse oír es mediante el conflicto en las calles y los caminos, y la de los empresarios y políticos que se quejan de la mala imagen que dan los bloqueos y marchas de protesta en el exterior y no incorporan estas demandas en agendas de desarrollo nacional.

El conflicto por el gas en la región productora

En el departamento de Tarija se encuentra la mayor parte de las reservas de gas descubiertas hasta ahora en Bolivia, cerca del 80% del total nacional, y debido a un mecanismo de compensación directa previsto en la legislación boliviana, conocido como "regalías", este departamento recibe según la nueva Ley de Hidrocarburos el 15% de las ventas del gas (anteriormente era el 11%, al cual se le suma el 4% como región productora). Considerando la magnitud de las reservas gasíferas presentes en suelo tarijeño, que sobrepasan los 40 trillones de pies cúbicos (TCFs) probados hasta el momento, el monto de las regalías asciende a cifras nunca antes disponibles para la administración pública departamental, cuyo presupuesto anual pasa, de manejar un poco más que un par de millones de dólares en los años previos a 2002, a manejar más de 60 millones de dólares en la gestión 2004, monto que en la gestión 2005 ya asciende a más de 130 millones de dólares.

Por otro lado, Tarija es un departamento que siempre se ha percibido como postergado de los esfuerzos del desarrollo nacional, cuyo accionar ha estado centrado en el denominado "eje central" de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, departamentos donde se han focalizado las políticas de inversión del desarrollo promovidas por el gobierno central de Bolivia. Debido a esta situación, la identidad regional tarijeña ha estado articulada históricamente en torno a los reclamos contra la política centralista del gobierno, tanto así que el nacimiento del Comité Cívico departamental está asociado a las luchas departamentales de la década del setenta por conquistar inversión de desarrollo para el departamento.

La movilización social en torno al gas se inicia en Tarija tempranamente, puesto que los trabajos de exploración de las empresas petroleras en la zona del subandino tarijeño y sus

resultados preliminares ya eran conocidos por los políticos departamentales a fines de la década del noventa. Motivados por el descubrimiento de este recurso natural en territorio propio, y calculando los probables ingresos en concepto de regalías, la movilización regional se empieza a gestar entusiastamente en torno a la construcción de un proyecto departamental de desarrollo con la participación de todos los actores sociales de la región, para lo cual la prefectura realiza sucesivos eventos de planificación departamental participativa denominados "mesas de concertación" entre los años 2000 y 2003. Estas mesas no eran espacios legales, pero se implementaron de todas maneras como mecanismo interno de la prefectura para poder canalizar la evidente demanda de participación social en la planificación del desarrollo de Tarija.

"La evolución y potenciamiento del criterio de confrontación entre regiones [es promovida por] la elite política y económica tarijeña, que busca asumir un liderazgo regional en el nuevo escenario de desarrollo con las prometedoras regalías"

Con la realización de las mesas se genera una sensación de cohesión en el imaginario del colectivo regional, reforzada a partir de la construcción de un plan departamental de desarrollo, y es desde este pacto social implícito que la elite regional inicia desde el departamento una campaña de presión sobre el gobierno central para agilizar la venta del gas.

La evolución y potenciamiento del criterio de confrontación entre regiones en el conflicto social nacional de este período (2003-2005) son promovidos a partir de los esfuerzos de la elite política y económica tarijeña, que busca asumir un liderazgo regional en el nuevo escenario de desarrollo con las prometedoras regalías, esfuerzo por demás justificado ante las perspectivas de controlar estos recursos desde las estructuras de poder ya establecidas. Para la elite tarijeña, en control de las instituciones estatales, políticas y Comités Cívicos, era evidente en ese momento que debería promover su legitimidad en el liderazgo si quería controlar dichos recursos, y por ende despliega una serie de estrategias destinadas a este fin. Estas incluyen el disfrazar de participativa a la planificación verticalista de la prefectura mediante las mencionadas mesas de concertación, y por otro lado descalificar a los poten-

© Comité de Derechos Humanos de Orellana, Red de Líderes Comunitarios Angel Shingre y Oficina de Pastoral Social del Vicariato de Aguarico

ciales adversarios, que claramente están latentes entre los sectores populares descontentos, para lo cual se tuvo que promover un discurso que concibe a la región como una entidad sin conflictos internos y con un solo proyecto de desarrollo, del cual ellos son los portavoces mediante el Comité Cívico.

Los datos sobre la existencia de megacampos gasíferos fue conocida en forma masiva en Bolivia recién a fines del año 2002 y principios de 2003, no tanto por la información gubernamental, sino más bien por la campaña del Comité Cívico tarijeño que exigía al gobierno acelerar la venta del gas a mercados norteamericanos vía un puerto chileno. La falta de celeridad gubernamental, y los cuestionamientos que empezaban a surgir desde diversos sectores de los departamentos de occidente, estimularon la emergencia del discurso regionalista tarijeño, con grandes impactos benéficos para los planes de la elite de dicha región, ya que la misma, "históricamente postergada", era sujeto nuevamente de la burla del "estado centralista, sangrón e indolente". Ante este agravio, la movilización regional tiende a ser unificada bajo el mando del Comité Cívico.

El discurso regionalista es propiciado a toda costa por la clase dominante en la estrategia de gestión del conflicto regional, y pasa de identificar inicialmente a un enemigo de Tarija en el estado centralista, a identificar a un enemigo de Tarija en los "collas" del "occidente convulso", en alusión a los movimientos sociales que se oponían a la venta del gas en esas condiciones iniciales, y que luego de la Guerra del Gas en octubre de 2003 imponen una agenda de gobierno que contraría los intereses de la clase dominante de la región (Vacaflores, 2005). A la luz de estos acontecimientos, la elite tarijeña articula su discurso regionalista con la elite de Santa Cruz, y se comienza a gestar el proyecto de la "media luna", con su ingrediente de la "nación camba", desde el cual se proyecta el dis-

curso de la "autonomía" como una contramedida al avance del proyecto popular de nacionalización y refundación del país.

El discurso regionalista se sustenta en la negación de las contradicciones internas de la región y busca reproducir las condiciones históricas que beneficien a sus intereses de clase, esta vez bajo la consigna de la venta del gas para el desarrollo departamental. Esto no les sirve a los sectores excluidos al interior de las regiones, pues no reconoce su condición de exclusión ni incorpora sus necesidades y demandas de desarrollo, ya que ello implica reconocer las relaciones de dominación que configuran las relaciones sociales regionales, y por tanto cuestiona la legitimidad de la clase dominante como líder del proceso de desarrollo.

Consciente de este peligro, la elite tarijeña maneja un discurso de descalificación de cualquier intento de incorporar la visión de "lucha de clases" en la discusión de la problemática y el desarrollo regional. Así, cualquiera que no apoye al Comité Cívico en sus "justas reivindicaciones" es por supuesto *anti-tarijeño*, y la solución al problema del atraso y la pobreza en Tarija radica en mantener la "unidad incólume" de todos los tarijeños a toda costa, incluso negando la presencia de profundas contradicciones internas a lo largo de la historia.

Esta estrategia coyuntural de la clase dominante tarijeña, expresada en el discurso regionalista, no supo gestionar la inclusión efectiva de las demandas de los sectores excluidos en la planificación y ejecución de obras de inversión pública con los primeros ingresos de la venta del gas, circunstancia a partir de la cual se comenzó a gestar en los *excluidos* la conciencia de la naturaleza contradictoria de la identidad regional, y la conciencia de la naturaleza excluida de los sectores populares y provincias en la vida regional. Los sectores excluidos empezaron a retomar conciencia de sí mismos, de su condición de excluidos. Y desde este re-emerger de conciencia se comienzan a disputar visiones diferentes de desarrollo a la clase dominante.

La construcción de conciencia es también favorecida por el contexto nacional, donde el fracaso del modelo de desarrollo impuesto por la clase dominante en función de gobierno y la desacreditación de los partidos políticos generan la desconfianza de los sectores empobrecidos sobre la clase dominante y sus planes de desarrollo, que se muestran claramente sólo como planes de apropiación del excedente que genera el gas.

Así, el Comité Cívico departamental, que es la instancia de legitimización de la estrategia de la clase dominante en el departamento de Tarija, comienza a ser cuestionado por varias organizaciones de base, como la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) y la Central Obrera Departamental (COD), y por Comités

Cívicos provinciales, que poco a poco forman un frente de clara oposición al discurso regionalista del Comité Cívico y cuya lucha movilizada empieza a concretar un discurso de reivindicación de clase excluida, enfocando su análisis en la crítica a las relaciones de poder que condicionan el estado de atraso y pobreza en la región.

Tanto la COD como la FSUCCT amplían sus ámbitos de lucha a la discusión de la gestión del desarrollo departamental, rol hasta el momento totalmente novedoso para estas organizaciones, que obliga a desarrollar capacidades e instrumentos nuevos al interior del movimiento obrero y campesino. La COD lidera por ejemplo un arduo y amplio trabajo de denuncia, investigación y confrontación con el Comité Cívico y la prefectura durante el año 2004 a raíz de un conflicto de visiones sobre la mejor forma de invertir los recursos públicos provenientes de las regalías en lo referido a la generación de energía eléctrica para la ciudad de Tarija. El bloque Comité Cívico-prefectura defendía la propuesta de alquilar turbinas generadoras a empresas transnacionales, mientras que el frente COD-FSUCCT más bien planteaba construir una planta generadora de energía eléctrica en base al uso del gas para abastecer al departamento y vender a mercados circundantes.

Por otro lado, la FSUCCT construye su plan de desarrollo rural para el departamento, instrumento que se constituye en el mecanismo para disputar los recursos económicos provenientes del gas. Con esto busca incorporar en la planificación departamental su estrategia de desarrollo rural, pero rápidamente se enfrenta de nuevo a la realidad de la exclusión, ya que la prefectura departamental define las prioridades de inversión en base a intereses de la clase dominante y no asigna recursos para ejecutar obras priorizadas por la organización campesina, que debe recurrir a la realización de movilizaciones con bloqueos de caminos tanto en 2003 como en 2004 y 2005, logrando firmar acuerdos con la prefectura para realizar proyectos priorizados por los campesinos, que finalmente no son ejecutados. A raíz de esta experiencia, la FSUCCT se plantea controlar directamente la prefectura para implementar desde allí su estrategia de desarrollo rural, para lo cual hace crear la Unidad de Desarrollo Rural de la Prefectura de Tarija, también mediante la presión del bloqueo de caminos, y construye su propio instrumento político para terciar en las elecciones de prefecto a realizarse en diciembre de 2005 con el objetivo de tomar el control de esta institución en alianza con los sectores populares del departamento.

La confrontación de visiones en Tarija se debate en una disputa por consolidar un discurso regionalista que promueve la clase dominante como estrategia de control regional, y una lucha por emancipar el discurso de lucha de clases a partir de la construcción de conciencia de sí mismos de los sectores excluidos, en la que destacan la COD, la FSUCCT y en menor medida los pueblos indígenas por su capacidad de resistencia en la evolución del conflicto.

Esta lucha social en Tarija se desarrolla de manera simultánea con las luchas a nivel nacional, en las que los movimientos sociales del occidente posicionan un discurso en torno a la nacionalización de los hidrocarburos, cuestionando el modelo de desarrollo vigente. En el nivel regional los conflictos disputan el control sobre el excedente, y a través de sus conceptos cuestionan al modelo de desarrollo, coincidentemente con los movimientos sociales a nivel nacional.

Así, a nivel regional la lucha social se centra en los planos de la conquista de ciudadanía y reconocimiento de la identidad diferenciada y de la condición de exclusión de los sectores movilizados, y en la disputa por el excedente del gas y la participación en la gestión del desarrollo departamental. Esta característica del conflicto social en el departamento se diferencia del conflicto social a nivel nacional debido a la presencia de las regalías por la venta del gas, cuya magnitud y disponibilidad real proveen otro marco para la confrontación de discursos. Primero, la disponibilidad de recursos económicos en el presupuesto departamental provee un marco de incentivos propicio para la articulación de la acción colectiva de los diferentes actores sociales del departamento, y la disputa se presenta con gran intensidad en el plano de la construcción de propuestas de desarrollo que compiten entre sí. Pero, por otro lado, la presencia de capital en cantidades importantes en la región, aunque sea proveniente de la venta de un recurso natural no renovable, también genera un ambiente favorable para la consolidación de las estructuras clientelares que han servido para perpetuar a la clase dominante en su condición de privilegio en la vida regional, y son un factor de desmovilización de los sectores populares empobrecidos, sobre todo del área urbana, que dependen en gran medida de la red clientelar que proveen estructuras como los partidos políticos para acceder a ingresos económicos.

Bibliografía

PIEB-JAINA 2005 "Cronología del conflicto de la guerra del gas. Clasificación hemerográfica" en *Nuevo Sur* 2003-2005.

Prada, Raúl 2004 *Largo octubre* (PLURAL).

Vacaflores, C. 2005 *Discursos y relaciones de poder en la constitución de la región de Tarija* (Bolivia: PIEB).

Nota

1 Para ampliar la información de este tema ver revista *OSAL* Nº 12, dossier "La Guerra del Gas en Bolivia"; particularmente los artículos de Raúl Prada Alcoreza y Silvia Escobar de Pabón.

Cuando los árboles son un desierto

Héctor Alimonda*

* *Profesor del Curso de Posgrado en Desarrollo, Agricultura y Sociedad, Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (CPDA-UFRRJ). Coordinador del Grupo de Trabajo Ecología Política de CLACSO.*

Un poco de la historia del capitalismo...

Hace varias décadas, desde su celda en la prisión de Turi, Antonio Gramsci supo vislumbrar un cambio radical en la lógica de la acumulación capitalista del siglo XX (paradójicamente, en una obra que, en su conjunto, otorga una atención muy secundaria a la "determinación económica" que obsesionaba al marxismo de su época). Se trataba del "fordismo", un régimen de acumulación originado en los métodos productivos y en la lógica de intervención del capital sobre el conjunto de las relaciones sociales que comenzó a aplicar Henry Ford en sus fábricas de automóviles. Típico de Estados Unidos, donde, a diferencia de Europa (territorio de "pensionistas de la historia económica", diría Gramsci), el "fordismo" suponía una hegemonía naciendo de las fábricas, y una reorganización de la sociedad a partir de la lógica del capital: si los obreros son incorporados también como consumidores (los trabajadores de la Ford llegando al trabajo en sus propios automóviles

Ford), ningún detalle de sus vidas queda fuera de la mirada del capital, que se preocupa ahora por la estandarización de las normas de vivienda y de higiene, por la estabilidad matrimonial y por el anti-alcoholismo. Estas lúcidas observaciones de Gramsci fueron debidamente rescatadas, en la década de los setenta, por la llamada "escuela de la regulación" (Michel Aglietta, Robert Boyer, Alain Lipietz, entre otros), que identificó al "fordismo" como un régimen de acumulación específico en la historia del capitalismo.

Todo esto es conocido, pero quizás sea menos recordado que el sueño hegemónico de Henry Ford de una refundación de las relaciones sociales a partir de la lógica de la producción industrial que implicó también, en cierta medida, un proyecto de reformulación de ecosistemas tropicales, de creación artificial y planificada de una "segunda naturaleza", a la medida de la acumulación del capital, en la selva amazónica. A partir de una concesión del gobierno brasileño de un millón de hectáreas en el valle del río Tapajós, a 120 kilómetros de Santarém, Henry Ford comenzó a concretar su sueño de una inmensa plantación de *hevea brasiliensis*, el árbol del caucho: Fordlandia. Se aplicó un "corte raso" en una enorme extensión de selva amazónica, y se implantó en su lugar una plantación homogénea de *seringueiras*, una reconstrucción de la naturaleza que permitiría a las fábricas Ford abastecerse de caucho para los neumáticos y piezas de sus automóviles. Monopolio del poder industrial sobre un recorte del mundo tropical, rígidos dispositivos de control aislaban a los trabajadores de Fordlandia de cualquier contacto con el exterior, y los sometían a una rutina disciplinadora de horarios estrictos, prohibición moralizante de todos los vicios y alimentación balanceada (es la época de apogeo de Popeye, y los planteles de trabajadores semi-esclavos de Fordlandia eran alimentados con espinaca en lata traída de EE.UU.). Pero la naturaleza y los humanos se rebelaron y vencieron: las plantaciones homogéneas de *Hevea Brasiliensis* fueron arrasadas por su enemigo más entrañable, el hongo *microciclo uei*, del cual los árboles se protegían, justamente, por medio de su dispersión en ejemplares aislados en la selva, siempre separados por lo menos por cincuenta metros. Y los trabajadores se insubordinaron al grito de *¡Basta de espinaca! ¡Queremos arroz, frijoles y cachaça!*, e incendiaron las instalaciones de Fordlandia. En 1945, Henry Ford devolvió la concesión al gobierno brasileño[1].

... hasta los tiempos del gobierno Lula

El tiempo fue pasando, algunos países latinoamericanos incorporaron versiones periféricas de la acumulación fordista que luego fueron desmontadas por el neoliberalismo, y entramos al siglo XXI, como en los últimos cinco siglos, como reserva de recursos naturales disponibles para el resto del mundo.

En Brasil, 2004 fue un año récord desde el punto de vista del capital financiero, ya que los bancos tuvieron la mayor tasa de ganancias en la historia de ese país. Pero ha sido también un récord desde el punto de vista de la deforestación: con 26 mil kilómetros cuadrados de bosque nativo arrasados, el año 2004 está en segundo lugar en la historia desde que se llevan estos registros[2].

La mayor parte de esa destrucción es atribuible a la soja, en el llamado "arco de desmatamiento" que avanza desde el Sur, en la región de Mato Grosso[3], pero que está ya presente también muy al Norte, como en el municipio de Santarém, en Pará, a orillas del Amazonas, donde la Cargill ha construido un puerto granelero para sus operaciones de exportación. Pero otras causas de destrucción de bosque nativo en la Amazonía, la "Mata Atlántica" o el "cerrado" están vinculadas con la extracción maderera, tanto como materia prima para usos industriales como para fuente de energía (leña) para la industria siderúrgica.

"En Brasil, 2004 fue un año récord desde el punto de vista del capital financiero [y] ha sido también un récord desde el punto de vista de la deforestación: con 26 mil kilómetros cuadrados de bosque nativo arrasados"

A principios del siglo XXI, el sueño de Henry Ford de una recomposición de la naturaleza tropical según la lógica de la producción industrial parece haber tenido más éxito en Brasil que el fordismo industrial. Con los recursos de gerenciamiento de la naturaleza aportados por la ingeniería forestal, plantaciones de árboles de uso industrial –en general eucaliptos y pinos– se van extendiendo por las regiones tropicales (donde su crecimiento es más rápido que en regiones templadas o frías), en superficies antes ocupadas por bosques tropicales nativos. Estamos en presencia de un vasto proceso de destrucción de espacios de extrema biodiversidad y su reemplazo por una naturaleza simplificada al extremo, "desiertos verdes" homogéneos, constituidos por especies oriundas de otros climas.

En Brasil este proceso se fue estructurando desde la década del sesenta, cuando el gobierno militar trató de impulsar la forestación para producción de celulosa para la industria del papel, y fueron creados los mecanismos legales e institucionales básicos: el Código Forestal

© Martín Fernández

(1965), el Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal (IBDF) en 1967, y la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural, que difundió en muchas regiones el cultivo del eucalipto y del pino como medio para obtener rápidas ganancias. Estos mecanismos fueron acompañados por medidas fiscales y líneas de crédito[4].

Así, la producción brasileña de celulosa pasó de 73 mil toneladas en 1955 a 8 millones de toneladas en 2002 (52% de esa producción es exportada, siendo Brasil el primer exportador mundial). Entre los mismos años, la producción de papel creció de 346.000 a 7.700.000 toneladas. La previsión de una expansión de la demanda internacional en los próximos años está llevando a las empresas a formular también previsiones de expansión. Las demandas de otros sectores industriales, como la siderurgia y las industrias de muebles y laminados, han reforzado la expansión de los bosques artificiales, que hoy ocupan una superficie estimada de 4.800.000 hectáreas en todo el país. Minas Gerais, un estado con una tradicional vocación agrícola, tiene hoy una participación del 36% en la extensión total de plantaciones de árboles, mientras que el estado de São Paulo tiene el 17%.

Antes de continuar, aclaremos la significación social que estos datos implican. De forma aún más marcada que en el caso de la soja, en la expansión de las plantaciones de árboles se está produciendo en Brasil una contrarreforma agraria. Los bosques artificiales suponen un grado inaudito de concentración de la propiedad de la tierra, ya que están

vinculados directamente o por medio de contratos con las industrias consumidoras de su producción. En el caso de la celulosa, por ejemplo, se calcula que el 77% de la producción mundial proviene de plantaciones de propiedad directa o contratadas por la industria del papel. La uniformización y simplificación biológica de estos territorios supone la conformación de nuevos espacios de naturaleza reconstruida (que arrasan con las pequeñas cuencas hidrográficas, por ejemplo), pero también de nuevos latifundios, ahora con poderes enraizados en la industria globalizada, que "borran" antiguos territorios socio-políticos. La agricultura de pequeños productores campesinos o de grupos "tradicionales" es desplazada por los árboles, al mismo tiempo en que los seres humanos son desplazados por la reconfiguración territorial de las plantaciones[5]. Por este motivo, la expansión de las plantaciones forestales viene siendo acompañada, en todo Brasil, por infinidad de conflictos locales, y ha dado origen a fuertes tomas de posición de los movimientos sociales de base agraria (como el MST, que protagonizó en 2004 ocupaciones de plantaciones de árboles, que son talados para abrir espacio para agricultura) y de ONGs, como la Red Alerta contra el Desierto Verde.

No sorprende tampoco que los paquetes tecnológicos de manejo forestal acaben siendo origen de nuevos conflictos socio-ambientales, producidos por contaminación de fuentes de agua y de los propios trabajadores o habitantes resistentes de las cercanías de las plantaciones.

La Amazonía artificial

En la región amazónica, las plantaciones de árboles están localizadas en los tres estados más orientales, Amapá (84.900 ha), Pará (114.400 ha) y Maranhao (27.800 ha). Aquí las plantaciones han implicado el reemplazo del bosque húmedo tropical por especies exóticas como el eucalipto y el pino, que se caracterizan justamente por impedir el crecimiento de otras plantas y por secar los suelos, con lo que provocan un impacto ambiental especialmente grave en el ecosistema amazónico.

En Pará, la introducción de plantaciones de árboles con fines industriales comenzó en 19 67, cuando el millonario norteamericano Daniel Ludwig compró tierras y fundó la empresa Jarí Celulosa, destinada a producir celulosa para exportación. Ludwig derribó 100 mil hectáreas de selva amazónica para plantar eucalipto, y trajo desde Japón una isla flotante que contenía una planta elaboradora de celulosa.

En la actualidad, luego de la muerte de Ludwig, la Jarí Celulosa es propiedad de una sociedad de empresas brasileñas (CAEMI y Orsa Forestal) que posee 1.800.000 hectáreas en los Estados de Pará y Amapá[6].

Una investigación parlamentaria de 2004 comprobó graves irregularidades en el proceso de apropiación de tierras por parte de estas y otras empresas. Existen conflictos con tierras de indios y con tierras públicas, muchos de los cuales fueron documentados por la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica. Como ejemplo está la compra de tierras públicas al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). La empresa Champion (hoy International Paper do Brasil) compró, usando testaferros, 6 mil hectáreas vendidas por el INCRA a precio subsidiado para personas físicas, en 12 lotes de 500 hectáreas. Cuando en 2003, con el nuevo gobierno, las autoridades del INCRA quisieron anular estos procesos, los expedientes habían desaparecido de los archivos.

En la región fronteriza del Este de Pará/Oeste de Maranhao, las plantaciones de árboles tienen como objetivo proveer de combustible a la industria siderúrgica. Como ejemplo, la Ferro Gusa Carajás, una sociedad entre la ex estatal Vale do Rio Doce, propietaria de la mayor reserva de hierro del mundo, y la japonesa Nisho Iwai, tiene plantadas allí 35 mil hectáreas de eucaliptos –en una propiedad con una superficie total de 81 mil hectáreas, que abastecen de leña a las catorce siderúrgicas que operan en la región.

En este complejo, el problema primordial es el trabajo esclavo. En agosto de 2004, por iniciativa del Ministerio del Trabajo, la Justicia del Trabajo y la OIT, se firmó un acuerdo entre todas las empresas siderúrgicas por el cual estas se comprometen con la erradicación del trabajo esclavo en la producción de carbón, certificada en la forma de un sello de responsabilidad socio-ambiental.

En esta región especialmente conflictiva, con la presencia de un importante movimiento social dividido en tres tendencias principales, y de asentamientos de reforma agraria, la expansión de plantaciones para la producción de carbón ha multiplicado las tensiones. En la región de Imperatriz, Sur de Pará, por ejemplo, cinco haciendas de la Ferro Gusa Carajás ya han sufrido diez invasiones en los últimos años. El MST denuncia el cerco de los asentamientos por parte de las plantaciones de eucalipto, que afectaría inclusive a la productividad agrícola.

Otros problemas están vinculados con el envenenamiento generado por el uso de productos químicos en el manejo de las plantaciones, algunos de los cuales producen ceguera en los trabajadores. Sobre las condiciones reales de trabajo en esas plantaciones, nos basta con referirnos a la necesidad de la firma de un compromiso para erradicar el trabajo esclavo. A pesar de esto, la Ferro Gusa Carajás se jacta de estar creando 1.200 puestos de trabajo por año en sus plantaciones.

El enclave del Sudeste

Sin embargo, el área más conflictiva de las forestaciones artificiales en Brasil no se encuentra en la Amazonía, sino en otra región donde el bosque nativo sobreviviente está siendo destruido y reemplazado por monocultivos de eucalipto. Se trata del Norte del estado de Espírito Santo y Sur del estado de Bahía, aunque sus conflictos ya se asoman en el Norte del estado de Río de Janeiro.

Está aquí el imperio de la Aracruz Celulosa, la mayor productora mundial de celulosa de fibra corta blanqueada a partir del eucalipto. Responde por 28% de la oferta mundial de materia prima para papel higiénico, de impresión, para escribir y papeles especiales. Formada en la actualidad por una asociación entre tres empresas de capital industrial-bancario nacional más una participación del Banco Nacional de Desarrollo, la Aracruz está inaugurando en 2005 en Eunápolis, Bahía, la mayor fábrica de celulosa del mundo, con participación de la sueco-finlandesa StoraEnso. Contrariando su discurso de relaciones públicas, que destaca la creación de fuentes de trabajo, la Aracruz tiene sólo 2 mil empleados, cifra mucho menor sin duda que la de los indígenas y pequeños agricultores desplazados de sus tierras.

Este complejo empresarial poderosísimo adopta un discurso políticamente correcto, destacando sus iniciativas de desarrollo rural, construcción de infraestructura, promoción social, servicios médicos, etc., que vendrían a redimir a una población rural "atrasada". Sin embargo, lo que parece evidente en función de la multiplicidad de pequeños conflictos que asolan la región es que los pequeños campesinos y las poblaciones "tradicionales" no se sienten incluidos en este modelo agro-industrial exportador. Quizás lo que sucede es que las inversiones en bienes públicos son un requisito para atraer la necesaria fuerza de trabajo calificada (y para valorizar la propiedad territorial adyacente), mientras la población tradicional en realidad está siendo desplazada.

Las empresas se formaron y crecieron utilizando grandes recursos económicos y políticos, al mismo tiempo que los movimientos de base se ramificaban por la sociedad civil como expresión de intereses ambientales y sociales. En el caso del Sudeste de Brasil, los autores del estudio que estamos comentando llegan a la conclusión de que empresas y actores socio-ambientales parecen vivir y construir sus percepciones en universos paralelos. Las empresas y el gobierno esperarían que la inversión en bienes públicos locales sea suficiente como para producir consenso. Sin embargo, como el establecimiento y la gestión de estos complejos demandan la concentración de tierras con expulsión de sus habitantes, la sustitución de la vegetación nativa por materia prima de rápido crecimiento y la utilización de insumos químicos que generan contaminación hídrica y atmosférica, el funcionamiento cotidiano del proceso de producción se contrapone a la constitución

de una hegemonía "fordista", donde la fábrica actuaba como organizadora del conjunto de las relaciones sociales.

Un protagonista central de estos conflictos es la *Rede Alerta contra o Deserto Verde*. Formada en 1998 en Espírito Santo, congrega más de 100 entidades comunitarias, de indígenas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, y actúa en ese estado y en los de Bahía, Minas Gerais y Río de Janeiro.

Recientemente, esta activa articulación ha obtenido una victoria que merece ser destacada. Desde hace 35 años, las comunidades indígenas Tupiniquín y Guaraní del estado de Espírito Santo mantienen un conflicto con la Aracruz, que ocupó 11 mil hectáreas de tierras de su reserva, y las transformó en monocultivo de eucaliptos. En mayo de 2005, 500 indígenas invadieron esas tierras, y se dedicaron a reconstruir dos antiguas aldeas, Ojo de Agua y Arroyo de Oro, donde se instalaron. Ahora, en una audiencia pública realizada el 10 de agosto, el Ministerio de Justicia ha reconocido la pertinencia de la reivindicación indígena y la irregularidad de la usurpación protagonizada por la Aracruz (que de cualquier forma ha prometido continuar la disputa por vía judicial)[7].

Notas

1 Sobre Fordlandia y su historia hay una razonable producción de trabajos en Brasil y en EE.UU. Una curiosidad quizás más fácilmente accesible al lector hispanoamericano puede ser la novela del economista-diplomático argentino Eduardo Sguiglia *Fordlandia* (Buenos Aires: Editorial Debolsillo, 2004).

2 De hecho, la tasa media de deforestación durante las devastadoras décadas del setenta y el ochenta fue de algo más de 21 mil kilómetros cuadrados anuales.

3 El gobernador del estado de Mato Grosso, Carlos Maggi, es también el mayor plantador de soja del mundo.

4 A partir de este punto estamos siguiendo el informe coordinado por Anna Franzeres para el Programa Nacional de Florestas, Brasilia, marzo de 2005.

5 La Red Alerta contra el Desierto Verde calcula que en la forestación industrial se crea un empleo por cada 330 mil dólares de inversión.

6 La legislación forestal brasileña para la región amazónica establece que las plantaciones de árboles no pueden superar el 20% de la superficie de las propiedades. Esta proporción rara vez se cumple, pero aun así el efecto real de la norma de protección ambiental acaba siendo el de estimular la concentración, ya que las empresas se dedican a ampliar sus propiedades a cualquier costo para poder extender la superficie plantada.

7 Más información sobre este conflicto, y las interesantes publicaciones de la Red Alerta contra el Desierto Verde, están disponibles en <www.fase.org.br>.

El movimiento social en Mesoamérica por la defensa de los recursos naturales[1]

Gustavo Castro Soto*

* *Investigador y miembro del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC).*

La puesta en marcha del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), del Plan Puebla-Panamá (PPP) y del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés)[2] plantea y requiere –entre otras cuestiones– dos elementos centrales: una serie de reformas legales (que implican un proceso de desregulación nacional y regulación regional) y el motor que mueve al sistema y su modelo de producción neoliberal: la energía. Sin ella, las inversiones que se esperan así como la extracción de los recursos naturales no serían posibles. Maquiladoras, puertos, aeropuertos, canales secos, autopistas, ferrocarriles y corredores industriales; el turismo, las grandes extensiones de monocultivos para la exportación (palma aceitera o eucalipto), o la extracción de petróleo, oro, plata y aluminio, requieren de grandes cantidades de energía. Y uno de los recursos que se ha privilegiado para la producción de energía es precisamente el agua (el *oro azul*), que también está asociado –y es imprescindible– a cualquier otro tipo de producción,

así como su explotación está vinculada –al mismo tiempo– a la de los bosques y su banco genético de millones de dólares: la biodiversidad (el oro verde). Es así como el conjunto de los recursos naturales que están siendo incorporados a la lógica del mercado como "bienes comerciales" están íntimamente vinculados y al mismo tiempo son disputados por diversos sectores económicos como las mega-corporaciones de alimentos, de agua, de papel, de energía eléctrica, petroleras y farmacéuticas, entre otras.

Ciertamente todas esas inversiones tampoco llegarán sin otro elemento crucial: la construcción de vías de comunicación y su infraestructura asociada. Sin embargo, esta infraestructura y los recursos naturales están en su mayoría en tierras de los pobres, de campesinos e indígenas por toda Mesoamérica[3]. La tierra se encuentra así en el centro de la disputa, lo que implica iniciar un proceso de desincorporación de la propiedad comunal, ejidal o comunitaria en manos de núcleos agrarios y rurales para trasladarla al gran capital[4]. En este proceso, y en la medida en que los gobiernos van cediendo su lugar y papel a las grandes empresas transnacionales, puede visualizarse un corrimiento de la confrontación "sociedad vs. gobiernos" a la de "sociedad vs. empresas transnacionales" (ET). Confrontación a la que asistimos hoy en relación a los temas de agua, energía eléctrica, bosques, petróleo, entre otros conflictos; y que señala la emergencia de la resistencia mesoamericana.

Los cambios legales

En el año 2000 el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó préstamos a 12 países bajo la condición de privatizar el agua (Grusky, 2001), entre ellos Honduras, Nicaragua y Panamá[5]. La misma condición impuso el Banco Mundial (BM) entre 1990 y 1995 al conceder 21 préstamos para proyectos de agua. En este período México[6], El Salvador[7] y Honduras, entre otros, iniciaron diversos procesos y proyectos –a distintos niveles– de privatización del agua. Frente a estas políticas, para septiembre de 2005, en Guatemala más de 15 mil personas se movilizaron frente al gobierno departamental de Totonicapán para rechazar la nueva ley de aguas.

Sin embargo, el proceso de privatización del agua va también asociado a la financiación de represas para las cuales, al finalizar el siglo XX, los bancos multilaterales habían destinado 125 mil millones de dólares (Castro Soto, 2005). Este proceso también está vinculado con el negocio del agua embotellada[8] y con los requerimientos de otros sectores empresariales que consumen grandes cantidades del líquido: el petrolero, el automotriz, de cervezas y refrescos[9], minero, textil, aluminio, hidroeléctrico, del papel y el cartón, la agroindustria, y en especial las grandes extensiones de monocultivos para la exportación, entre otros.

Por otra parte, en relación a los recursos genéticos se han generado también modificaciones legales en toda Mesoamérica, particularmente en el contexto de la creación del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). En 2005 México aprobó la ley sobre biodiversidad, mejor conocida como la "Ley Monsanto". Pero también en Costa Rica, Honduras y Guatemala se han aprobado legislaciones en torno al manejo de recursos forestales, material genético y áreas naturales protegidas. Por ello, desde el punto de vista de la privatización de la biodiversidad, la región está plagada de proyectos de los bancos multilaterales, fundaciones, corporaciones transnacionales[10], organizaciones y

© Marcelo Rico

universidades extranjeras, entre otros muchos actores que se disputan los recursos genéticos[11]. En el caso de la región de Montes Azules en el estado de Chiapas, México, la alta concentración de agua y material genético ha llevado al gobierno a incorporar diversos esquemas de desalojo y reubicación de la población indígena de la zona. Aunado a ello, el proyecto de biopiratería ICBG-Maya aplicado en la región llevó a una lucha encarnizada en su contra por parte del Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales del estado de Chiapas (Compitch), hasta que se logró cancelarlo[12].

A este nivel el movimiento mesoamericano también ha impulsado y protagonizado diferentes iniciativas y procesos sociales, entre ellas la llamada "Semana por la Diversidad Biológica y Cultural" iniciada en Chiapas en 2001 y que desde entonces se lleva a cabo cada año en diversos países de Centroamérica. En este espacio confluyen cientos de organizaciones que elaboran diagnósticos, análisis y planes de acción conjuntos[13]. Sin

embargo, la reacción de los gobiernos de la región y de EE.UU. ha sido la militarización de la región, la instalación de más bases militares[14] y la creación de una nueva escuela de capacitación militar en El Salvador[15].

El agua como recurso natural estratégico

Después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1948 a 2002, se registraron 1.831 interacciones y conflictos provocados por el agua. Todo parece indicar que la incorporación del *recurso natural* agua como *recurso económico* será el detonador de los mayores conflictos en el mundo durante el siglo XXI. Ismail Serageldin, vicepresidente del BM, lo expresó afirmando que "la próxima Guerra Mundial será por el agua" (Rothfeder, 2001). Los frentes de estos conflictos habrán de situarse en cinco niveles: dentro y fuera de las naciones; entre poblaciones rurales y urbanas; entre intereses río arriba y río abajo; entre los sectores agrícola, industrial y doméstico; entre las necesidades humanas y los requisitos de un medio ambiente sano (CMR).

"Todo parece indicar que la incorporación del* recurso natural *agua como* recurso económico *será el detonador de los mayores conflictos en el mundo durante el siglo XXI"

Ante este escenario hay que tomar en cuenta que, de las 261 vertientes de agua que cruzan fronteras políticas de dos o más naciones en el mundo, 80 se encuentran en el continente americano; siendo que la privatización también abarca el subsuelo, donde las reservas de agua se concentran 60 veces más que en la superficie (CMR). Tan sólo en Mesoamérica se calculan 120 cuencas hidrográficas principales, de las cuales 23 son internacionales, equivalentes al 19% de los sistemas hídricos de la región y al 10,7% de las cuencas internacionales del planeta (Delgado, 2004: 23). En el caso de esta región podremos encontrar en un futuro fuertes conflictos en torno a los ríos Lempa, Bravo[16] o Usumacinta, o en torno a las necesidades de la agricultura (que hoy consume el 67% del agua dulce del mundo), la industria (20%) y los usos municipales y domésticos (10%). Tampoco podemos olvidar que en las ciudades de los países pobres el 70% de pobres no tienen agua potable

(CMR). En este sentido, la perspectiva de conflictos nacionales e internacionales por la disputa del agua habrá de incrementarse en la medida en que la resistencia social aumente.

Por otra parte, las políticas privatizadoras, aunadas a la comercialización del agua, llevarán a justificar la construcción de más represas, la infraestructura que mayor impacto medioambiental ha provocado en el mundo, que aporta además grandes cantidades de gases de efecto invernadero acelerando el cambio climático, que más población ha desplazado en el mundo (entre 80 a 100 millones de personas entre las más de 45 mil grandes represas que han bloqueado el 60% de los ríos del planeta), y que ha levantado una resistencia mundial sin precedentes. La contención de grandes volúmenes de agua en los embalses ha provocado el agudo deterioro de las condiciones de vida de los desplazados así como graves enfermedades (Delgado, 2005: 113).

Estos procesos han generado la emergencia y crecimiento de la resistencia en Mesoamérica por la defensa de los recursos naturales que no tiene precedente. Así, la lucha estratégica popular contra la privatización del tríptico tierra-agua-energía ha significado el talón de Aquiles del modelo neoliberal.

La agenda de la resistencia global

Paralelamente al Foro Mundial del Agua (FMA) se han conformado una serie de procesos de resistencia global, como el llamado Foro Mundial Alternativo del Agua, que en su tercera versión, en marzo de 2005, reafirmó en su declaración final el derecho al agua como derecho humano, el estatuto del agua como bien común, el financiamiento colectivo del acceso a este recurso y su gestión democrática en todos los niveles. Al mismo tiempo se reafirmó la necesidad de fortalecer la campaña contra el Acuerdo General de Comercios y Servicios de la OMC (GATS, por sus siglas en inglés), contra la privatización y por la defensa de los servicios públicos de distribución del agua[17]. Del mismo modo, en el V Foro Social Mundial llevado a cabo en enero de 2005 se lanzó la Plataforma Global de Lucha por el Agua, refrendando el acceso a esta como un derecho humano y un recurso público. La Plataforma se comprometió a una campaña contra las ET como Vivendi, Suez y RWE; a luchar para que el agua no sea incluida en el GATS y contra las políticas privatizadoras de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs); a preservar las aguas de la naturaleza y defender el Acuífero Guaraní; a poner énfasis en la cuestión de género y la defensa de los grupos más débiles, y a ampliar las alianzas para la unidad de la lucha mundial contra la privatización del agua.

En el caso de las represas, a fines del siglo XX la Comisión Mundial de Represas (CMR) confirmó que los conflictos en torno a estas "han aumentado en las dos últimas décadas

© Martín Fernández

debido en gran parte a los impactos sociales y ambientales de las represas" (CMR, 2000), siendo que las protestas cobraron más visibilidad pública hacia fines de la década de 1980 y principios de la del noventa. "Durante los últimos treinta años, la alianza de grupos activistas del Norte (grupos ambientalistas y de derechos humanos) con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y asociaciones de grupos de afectados en el Sur, ha conducido a una oposición más coordinada y más vigorosa contra las represas en todo el mundo" (CMR, 2000). En México las comunidades indígenas y campesinas lograron detener en 2004 la construcción de la represa Itzantún en Chiapas. En Oaxaca detuvieron la ampliación hidroeléctrica de la presa Benito Juárez, y en el estado de Guerrero siguen resistiendo contra la represa La Parota y han logrado detener la maquinaria. En Guatemala se ha iniciado ya un proceso para reclamar reparaciones por la presa Chixoy, mientras que el Frente Petenero contra las Represas en Guatemala declaraba "¡Nos oponemos a las represas asesinas!".

El I Encuentro Internacional de Afectados por las Represas y sus Aliados llevado a cabo en Curitiba (1997, Brasil), y su llamado al "Día Internacional de Acción Contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida" cada 14 de marzo, fue retomado por otros procesos que se fueron conformando en los años siguientes y que en Mesoamérica cobraron auge a partir de 2003. En 1999, en São Paulo (Brasil) se lleva a cabo el I Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, y en 2002, el II Encuentro en Posadas (Argentina) con la participación por primera vez de organizaciones de Mesoamérica. Un año después, y luego de pasados cinco años de la primera reunión, se retoma el proceso mundial con el II Encuentro Internacional de Afectados por

las Represas y sus Aliados en Tailandia en 2003 (CMR, 2000), donde también participó una nutrida delegación del movimiento mesoamericano. Es así como las redes comenzaron a tejer vínculos orgánicos y programáticos en la lucha y resistencia por la defensa de los derechos humanos, el agua, los ríos, y en la búsqueda de un desarrollo sustentable.

En este proceso la resistencia que se encontraba aislada en Mesoamérica logró organizarse bajo el I Foro Mesoamericano contra las Represas en Guatemala (2002), que al año siguiente se llevó a cabo en Honduras (2003) y luego en El Salvador (2004), fortaleciendo sus alianzas y estrategias. Las movilizaciones del 14 de marzo, nunca antes vistas en la región, empezaron entonces a ser visibles. Por otra parte, a partir de los Foros Mesoamericanos se constituyeron el Frente Petenero contra las Represas (2002), el Frente Chiapaneco contra las Represas (2003) y el Movimiento Mexicano contra las Represas y por la Defensa de los Ríos (MAPDER, 2004); y se inició la consolidación de las resistencias en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, entre otras entidades y países[18]. Es en 2005 que se conforma el Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas, que no tiene precedentes, y se lleva a cabo el III Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua en la comunidad desplazada por la presa Chixoy. A partir de 2002, cuando el Movimiento Mesoamericano comienza a coordinar y vincularse con los procesos latinoamericanos y mundiales contra las represas, se ha avanzado en una rápida organización, articulación y toma de conciencia de los pueblos sobre el problema de los recursos naturales en el contexto del PPP y del ALCA.

Así en Honduras se fortalecieron las luchas de muchas organizaciones, entre ellas el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). En Costa Rica, la Federación de Costa Rica para la Conservación del Ambiente (FECON) y otras organizaciones mantienen una significativa resistencia contra los proyectos de represas como el de Boruca. En El Salvador, el Grupo Bajo Lempa, así como en Panamá organizaciones como el Equipo de Acompañamiento a la Lucha contra los Embalses de Cáritas Panamá, las organizaciones indígenas Kuna, y el Movimiento 10 de Abril en Defensa del Río Tabasará (M-10), han fortalecido sus acciones. Por otra parte, en Belice el Institute of Development Law and Policy (BELPO) inició un proceso de luchas contra la presa El Chalillo y en defensa de la selva y los humedales más ricos del planeta, experiencia que ha sido uno de los escasísimos casos de vinculación social del país beliceño con el resto de Mesoamérica.

El movimiento mesoamericano por la defensa de los recursos naturales ha logrado articularse orgánicamente no sólo en torno al eje de las represas sino también al movimiento regional contra el PPP y a la Semana por la Diversidad Biológica y Cultural, cuyos procesos dieron inicio en Chiapas, en 2001, a la lucha centroamericana contra el CAFTA y al Movimiento Centroamericano contra las Minas creado en 2005. En este sentido, paulatinamente, se ha elevado el nivel de conciencia logrando vincular estos diversos

aspectos y conflictos de manera integral, enlazando la lucha por la defensa del agua, la tierra y la biodiversidad con el rechazo al PPP, el ALCA, el CAFTA, el TLCAN, la OMC, las IFIs[19] y las Corporaciones Transnacionales[20]. Esta visión global ha llevado a que las resistencias populares sean cada vez más integrales y a que luchando en lo global se piense en lo local y viceversa. Sin embargo, todavía existe un aspecto pendiente en el actuar del movimiento popular: la construcción de alternativas. Nos referimos no sólo a la búsqueda y logro de alternativas para generar energía eléctrica descentralizada y sustentable, sino también a los métodos de captación de agua, a la gestión de bosques y suelos, a los mecanismos de soberanía alimentaria, a la protección del medio ambiente y de la tierra, entre otros aspectos alternativos al modelo neoliberal que apunten hacia un nuevo sistema frente al capitalismo terminal. Si bien hay experiencias exitosas en este terreno, existe aún poca sistematización sobre ellas.

Por otra parte, la resistencia del movimiento social también ha significado un saldo de perseguidos, encarcelados, asesinados, amenazados y desplazados. Pese a ello y a las mentiras, engaños y trampas por parte de empresas y gobiernos, los pueblos siguen en marcha y resistiendo, convocando reuniones y encuentros, y vinculándose con redes para defender la vida de todos y todas en la búsqueda de alternativas.

Pueblos y ríos amenazados

Uno de los ejes de la resistencia del movimiento social mesoamericano que habrá de crecer en el futuro próximo girará en torno a la disputa alrededor del agua. En esta región, donde casi todos sus ríos han sido represados, un nuevo proyecto tiende su amenaza a partir del año 2001: el Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC). Proyecto que pretende interconectar todo el sistema eléctrico en una sola red, con una sola ley para la región por encima de las soberanías nacionales y bajo el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este sistema implica entregar el sector eléctrico y el agua a las manos de las grandes corporaciones transnacionales[21]. En este contexto tenemos que analizar el hecho de que en el PPP existen alrededor de 330 planes de construcción de represas[22] que amenazan a aproximadamente 170 ríos –entre los que se encuentran los más grandes y bellos de la región– y a una gran cantidad de ecosistemas, con sus especies de plantas, animales y peces únicos en el mundo. También están amenazados cientos de sitios arqueológicos, lugares sagrados y cementerios; tierras indígenas e infraestructura (carreteras, escuelas, clínicas, casas, puentes, etc.); y miles y miles de campesinos e indígenas.

Si bien el avance de la incorporación de los recursos naturales a la lógica del mercado ha ido ganando terreno, lo ha ganado también el movimiento social. Mientras este exista,

existirá también la esperanza de que otro mundo es posible. En este camino, sin duda los procesos organizativos que surgen por todo el globo son signos de esperanza, de que podemos construir un mundo donde quepan todos los mundos, un mundo donde el agua alcance para todos y sea signo de paz.

Proceso del movimiento anti-represas*

		Evento	Lugar	Objetivos	Logros	Participantes
1	Declaración de San Francisco (1988)	Conferencia Internacional sobre Grandes Represas y el Manejo de Recursos Hídricos	San Francisco, California, EE.UU.	Diagnóstico sobre el impacto de las grandes represas	Programa de acción parte de la campaña mundial de IRN para la protección de los ríos en el mundo	60 (26 países)
2	Declaración de Manibelli (1994)	Conferencia Internacional en el 50 Aniversario del BM	Manibeli, India	Evaluar el papel del BM en la construcción de presas	Diagnóstico; llamado a la moratoria al BM	
3	Declaración de Curitiba (1997)	I Encuentro Internacional de Afectados por las Represas y sus Aliados	Curitiba, Brasil			(20 países)
4	(1999)	I Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua	San Pablo, Brasil	Fortalecer movimiento LA; intercambiar experiencias, conocimientos, estrategias	Acuerdo: crear la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua	
5	Declaración de Posadas (2002)	II Reunión de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua	Posadas, Misiones, Argentina	Fortalecer movimiento		70 (8 países)
6	Declaración de La Quetzal (2002)	I Encuentro Movimiento Mesoamericano contra las Represas	La Quetzal, Petén, Guatemala	Compartir experiencias e información	Planes de acción; oposición a toda represa	350 (21 países)
7	Declaración de La Esperanza (2003)	II Encuentro Movimiento Mesoamericano contra las Represas	La Esperanza, Intibucá, Honduras	Compartir experiencias y fortalecer luchas	Planes nacionales de acción. No a las represas	800 (15 países)
8	Declaración de Rasi Salai (2003)	II Encuentro Internacional de Afectados por las Represas y sus Aliados	Rasi Salai, Tailandia	Compartir experiencias, información, planes de acción regionales	Plan de acción para AL. No todas las represas son negativas (India)	340 (62 países)
9	Declaración de Carolina (2004)	III Encuentro Movimiento Mesoamericano contra las Represas	Carolina, San Miguel, El Salvador	Compartir luchas, problemas y estrategias comunes	Lucha integral sobre recursos naturales	536 (10 países)
10	Declaración de Aguas Calientes (2004)	I Encuentro Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)	Aguas Calientes, Acapulco, Guerrero, México	Compartir experiencias, información y plan de acción	Plan de acción y definición de comisiones	500 (3 países)
11	Declaración de Arcediano (2005)	II Encuentro Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)	Arcediano, Guadalajara, México	Compartir experiencias, información y plan de acción	Plan de acción y definición de comisiones. No a las represas	350 (6 países)
12	Declaración de Los Laureles (2005)	I Encuentro Frente Guatemalteco contra las Represas	Los Laureles, La Libertad, Petén, Guatemala	Conformar el frente nacional No a las represas	Nacimiento del Frente Nacional y acciones	300 (4 países)

* Las declaraciones de cada evento pueden consultarse en <www.ciepac.org>.

Bibliografía

Castro Soto, Gustavo 2002 "La estrategia para el control eléctrico del Plan Puebla-Panamá" en *Chiapas al Día* (CIEPAC) Nº 307, 11 de septiembre.

Castro Soto, Gustavo 2005 *No Seas Presa de las Represas* (México: CIEPAC).

Comisión Mundial de Represas (CMR) 2000 *Informe anual.* En <www.dams.org>.

Delgado, Gian Carlo 2004 *Biodiversidad, desarrollo sustentable y militarización. Esquema de saqueo en Mesoamérica* (México: Plaza y Valdés).

Delgado, Gian Carlo 2005 *Agua y Seguridad Nacional. El recurso natural frente a las guerras del futuro* (México: Arena Abierta).

Grusky, Sara 2001 *IMF Forces Water Privatization on Poor Countries* (Globalization Challenge Iniciative).

Rothfeder, J. 2001 *Every Drop for Sale* (Sandia Water Iniciative). In <www.sandia.gov/water>.

Notas

1 N. del E.: El presente artículo es una versión resumida del texto original que puede consultarse en formato completo en la sección debates de la página web del OSAL <http://osal.clacso.org>.

2 Para consultar análisis sobre el PPP, el ALCA y la OMC, ver boletines *Chiapas al Día* en <www.ciepac.org>.

3 Para este análisis entendemos por "Mesoamérica" a la región que comprende los siguientes países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y el Sur-Sureste de México.

4 En el caso de México, antes de la firma del NAFTA, el 50% de la tierra estaba en manos de ejidatarios y comuneros.

5 Los documentos se pueden consultar en <www.imf.org>.

6 Para un análisis sobre el contrato referido a la privatización del agua entre el BM, el gobierno del presidente Fox y el gobierno de Chiapas, ver *Chiapas al Día* (CIEPAC) Nº 348 y Nº 357.

7 A inicios de 2000 el BID aprobó un préstamo a El Salvador de 46 millones de dólares del cual el 75% son fondos para la reforma empresarial con el fin de promover la inversión privada y crear las condiciones para que se apropie del negocio.

8 Coca-Cola-FEMSA, la embotelladora más grande de América Latina, vende 30 millones de litros diarios de refrescos en América Latina, equivalentes al consumo normal de agua diaria de 14.500.000 personas. Entre 2000 y 2003 en México el gobierno otorgó 27 concesiones para la extracción de agua en 10 estados y sobre 15 ríos del país a 16 embotelladoras. Ver Castro Soto, Gustavo 2005 "La Coca-Cola en México. El Agua tiembla" en *Chiapas al Día* (CIEPAC) Nº 445.

9 Actualmente existen demandas sociales contra Coca-Cola y PepsiCola en diversos países de Mesoamérica debido a la violación de derechos laborales y la contaminación de agua y ríos.

10 Entre las empresas transnacionales interesadas en la privatización de los recursos genéticos podemos encontrar a Bristol-Myers Squibb, Dow Agrosciences, Monsanto, McDonalds, Ford, Conservación Internacional y Pfizer, entre otras.

11 Para un muy detallado panorama de estos actores en Centroamérica, ver Delgado (2004).

12 Para una relación detallada sobre la problemática de Montes Azules y el proyecto ICBG-Maya en Chiapas, ver documentos en <www.ciepac.org>.

13 Para conocer este proceso ver *Chiapas al Día* (CIEPAC) Nº 248, Nº 296, Nº 364 y Nº 423.

14 Ver "I Encuentro Hemisférico contra la Militarización" en *Chiapas al Día* (CIEPAC) Nº 340-342. Sobre la militarización en torno al petróleo, ver "Petromilitarización del Continente y de la América de en medio" en *Chiapas al Día* (CIEPAC) Nº 371-372.

15 Sobre la campaña contra la ILEA ver <www.sitiocompa.org>.

16 Para una historia sobre el proceso del conflicto entre EE.UU. y México en torno a las aguas del Río Bravo, ver Delgado (2005).

17 Declaración Final del 3º Foro Mundial Alternativo del Agua, Ginebra, Suiza, marzo de 2005. En <www.fame2005.org>.

18 Para conocer estos procesos, latinoamericanos e internacionales, de lucha contra las represas, ver *Chiapas al Día* (CIEPAC) Nº 395, Nº 396, Nº 404, Nº 422, Nº 434, Nº 472, Nº 457.

19 Entre las Instituciones Financieras Internacionales: BM, FMI, BID y BCIE, principalmente.

20 Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, entre otras corporaciones, son ya claramente identificadas por la resistencia social.

21 Para un análisis sobre el SIEPAC, ver Castro Soto (2002).

22 Para un detalle sobre la especificidad de cada una, ver Castro Soto (2005).

Protestas locales amazónicas y modelo petrolero en Ecuador[1]

Por Pablo Ortiz-T.*

* *Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. Magíster en Ciencias Políticas y Doctor en Estudios Culturales.*

El jueves 25 de agosto de 2005 se suscribió en Quito el acuerdo entre el gobierno ecuatoriano, las empresas petroleras y las autoridades de las provincias de Sucumbíos y Orellana que puso fin a nueve días de paralización del Nororiente amazónico. El paro biprovincial significó, entre otras cuestiones, la suspensión de las exportaciones petroleras durante ese lapso de tiempo, el desgaste del debilitado gobierno de Alfredo Palacio y la violación de los derechos humanos de la población local tras la violenta represión que se abatió sobre ella. Pero, sobre todo, la protesta –que movilizó a alrededor de 30 mil personas– puso en evidencia el elevado desencanto social debido, entre otras razones, a la ausencia inveterada del estado y a la vigencia de un modelo extractivo que se instaló en la región, desde fines de los años sesenta, con el ingreso y desarrollo de las actividades petroleras. Son estos dos ejes los que motivan el presente artículo, tratando de responder a un interrogante central: ¿de qué manera el modelo extractivo y la ausencia crónica del estado

crean condiciones para garantizar los derechos y responder a las demandas de los habitantes de regiones periféricas como la Amazonía ecuatoriana? El presente texto se divide en dos partes: una primera en la que se analizan los principales aspectos que componen el modelo extractivo petrolero y una segunda que esboza los elementos de la coyuntura que involucra a los actores del Nororiente amazónico y las perspectivas futuras de su relación.

Saqueo o la lógica del modelo extractivo

Entre 1970 y 1981 el auge exportador del petróleo impactó en el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador a una tasa promedio anual del 8%, con índices espectaculares en algunos años (25,3% en 1973). Según Acosta, "a pesar de estos logros el país no logró la senda del desarrollo [...] expectativas de precios crecientes del petróleo, tasas de interés relativamente bajas o aun negativas en el mercado financiero internacional, así como gobiernos embebidos por prácticas rentistas y aliados de sectores empresariales oligárquicos constituyeron el camino más directo al endeudamiento externo, luego a la crisis, y por cierto al ajuste fondomonetarista con el que se ha intentado conjurarla" (Acosta, 2003: 24).

Actualmente el petróleo representa alrededor del 15% del PIB y más del 40% de los ingresos del estado. Desde 1971, año en que se expide la Ley de Hidrocarburos, el estado ha sido un actor central en la conducción y operaciones del sector. Las reservas probadas del país se estiman en 4.629 millones de barriles de petróleo. De un promedio diario nacional de 400 mil bpd (barriles por día), corresponde a Petroecuador el 56% y a las compañías privadas el 44% (Petroecuador, 2005: 9).

Existen 22 contratos de exploración y explotación de petróleo suscriptos con veinte empresas nacionales y extranjeras desde 1985. De estos, 19 están vigentes, dos en estado de "fuerza mayor" (por la resistencia de los pueblos indígenas Kichwa de Pastaza y Achuar a que ingresen a sus territorios) y uno en trámite de caducidad (de la estadounidense Occidental, OXY) dados sus incumplimientos.

La mayoría de las inversiones privadas en exploración y explotación de petróleo se realizan bajo la modalidad conocida como Contratos de Participación, que fue introducida en 1993 con las reformas a la Ley de Hidrocarburos, bajo el argumento de atraer inversión extranjera para áreas de riesgo y abrir el sector petrolero hacia la participación del capital privado. "Estas reformas se dieron como parte del paquete neoliberal de reformas estatales. Con las mismas se allanó el camino perfecto para la concreción de los intereses de los grupos de poder vinculados al negocio de los hidrocarburos" (Llánes, 2003: 83). La mayoría de los acuerdos de participación se negociaron entre 1995 y 1999, cuando el

precio del barril de petróleo llegaba a 15 dólares. Con las reformas legales aprobadas, el estado ha tenido una participación decreciente en la renta petrolera, mientras que a las petroleras privadas se las exoneró de pagar regalías, primas de entrada, derechos superficiarios y aportes en obras de compensación.

Adicionalmente, las petroleras han incrementado su participación en condiciones muy superiores a las de años atrás. "En esta modalidad de contratos, el Estado tiene una participación que oscila entre el 12,5% y el 18,5% de la producción diaria de los yacimientos, mientras que la contratista recibe la mayor parte, entre el 81,5% y el 87,5%" (Llánes, 2003: 101). Según Luis Aráuz, ex funcionario de Petroecuador, "sólo en la última década el país dejó de recibir entre 50 centavos y 38 dólares más, por cada barril de crudo exportado" (*El Universo*, 2005b: 2D), lo que en cifras totales representaría más de 4 mil millones de dólares anuales.

"En suma, ni empleo, ni ingresos, ni desarrollo, ni modernidad para los sectores más excluidos y vulnerables es el balance de 32 años de explotación petrolera en esta región"

Hasta diciembre de 2004, las petroleras privadas tenían en concesión un territorio de 3.983.000 ha, y su producción alcanzó los 120 millones de barriles. Mientras que el estado opera en una superficie de 740.100 ha y el año pasado produjo 70 millones de barriles (Petroecuador, 2005: 10). Según Petroecuador, en el período 1996-2002 las compañías transnacionales extrajeron 207 millones de barriles, de los cuales recibieron 162 millones, mientras que al estado le entregaron 45 millones[2]. A eso se añade un impuesto que pagan las petroleras por la explotación de un barril de petróleo en la Amazonía, mediante la Ley del Fondo de Ecodesarrollo de la Amazonía[3]. Esta ley ha tenido tres reformas que han ido incrementando el fondo año a año. A partir de 1998, el Congreso aprobó que este impuesto se aumente en 5 centavos al año hasta alcanzar los 50 por barril. Ese límite llegó en el año 2005, y representa alrededor de 102 millones de dólares que en un 90% benefician a los municipios y consejos provinciales de la región, que los destinan en su mayor parte a gastos corrientes y a inversiones bajo

una óptica clientelar, manejada por los nuevos caudillos locales. En suma, ni empleo, ni ingresos, ni desarrollo, ni modernidad para los sectores más excluidos y vulnerables es el balance de 32 años de explotación petrolera en esta región. Al igual que en otras regiones como Nigeria, la riqueza petrolera ha fortalecido a las elites corruptas del país y no ha mejorado la vida de la mayoría de la población. Ni siquiera ha fortalecido la presencia estatal. Luis Yanza, del Frente de Defensa de la Amazonía, señala que la presencia del estado en esta región es frágil: "Es común que las petroleras ingresen a una comunidad incumpliendo leyes, pero el Estado no está ahí para hacerlas cumplir" (*El Comercio*, 2005: A3). Según el diputado de Sucumbíos, Juan Manuel Fuertes, la debilidad del estado se debe al proceso histórico de formación de ambas provincias, sobre todo Sucumbíos: "la provincia nació alejada del país, en décadas estuvieron ausentes las señales de TV, conllevando un distanciamiento de la realidad... sabíamos más de los líos de Alberto Fujimori que lo que ocurría en el país. Además, la progresiva explotación de los pozos petroleros a lo largo y ancho de la geografía de la provincia, ha provocado una colonización desigual, complicando y encareciendo la dotación de los servicios básicos, sin que el Estado desee hacerse cargo de los gastos" (*El Universo*, 2005a: 6A).

Frustraciones y nuevas expectativas

En el contexto del "boom petrolero" de inicios de los setenta, la mayoría de los inmigrantes colonos esperaban empleo, crédito, servicios básicos e infraestructura. Tres décadas después, las actividades agrícolas concentran al grueso de la población, cuya producción se orienta hacia el café (35,7%), maíz (21,6%), plátano (12,5%), cacao (10%), naranjilla (7,1%) y palma (4,1%). Adicionalmente, desarrollan actividades pecuarias de vacunos, producción de leche, huevos y gallinas de campo. Esta producción resultó fuertemente afectada por los cambios suscitados a raíz de la dolarización y la caída mundial de los precios del café, lo cual afectó a unas 25 mil familias de agricultores, cuyos ingresos dependen en un 70% de esta producción. La producción de vacunos y naranjilla que se dirigía al mercado colombiano dejó de ser competitiva. "En suma, se agravó la crisis fronteriza, no sólo con el aumento de refugiados, el incremento de la violencia y la delincuencia social, sino también que decayó el comercio fronterizo y se redujeron las oportunidades de empleo, incrementándose la emigración al extranjero, además de expandirse un clima de inseguridad visible en los comportamientos de la población" (Ramón, 2004: 35). Este cuadro se traduce en el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. De acuerdo a los datos del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), la mayoría de los poblados asentados en los alrededores de los campos petroleros están por encima del promedio de pobreza del país. La media nacional se ubica alrededor del 53%, pero en el caso de estas localidades el promedio bordea el 73,09% de pobreza, de un total aproximado de 200 mil personas.

A esa variable se agrega la de carácter político-administrativo. Durante los setenta y ochenta, la región Nororiental estaba aglutinada en una sola unidad administrativa: la provincia de Napo. Su capital, Tena, durante casi dos décadas concentró la atención de la mayoría de los gobiernos. Las diferencias entre Tena y las demás zonas periféricas se acentuaron hasta desencadenar un movimiento por la provincialización de dos de sus cantones territorialmente más extensos, en donde además se desarrollan las operaciones petroleras centrales: Sucumbíos (1988) y Orellana (1998). La creación de estas provincias se tradujo en el aumento de expectativas y necesidades. Los recursos inicialmente entregados fueron destinados al levantamiento de infraestructuras administrativas, aun cuando estas provincias muestran una baja densidad en la malla administrativa, puesto que tienen gran-

© Patricio Realpe

des superficies, menos población y menor número de parroquias. La mayoría de cantones y parroquias no reúnen los requisitos exigidos por la Ley de Régimen Municipal, y evidencian una marcada dependencia económica del presupuesto estatal y severas limitaciones para ordenar sus territorios y generar recursos propios vía tributos.

Pese a esas condiciones, desde 1998 en esta región se desarrolló un amplio proceso de organización de una Asamblea Biprovincial que incluyó a los principales actores sociales e institucionales: organizaciones indígenas y campesinas, juntas parroquiales, iglesia católica, medios de comunicación, municipios y consejos provinciales (Rojas, 2004). Se trata de un movimiento nacido de la iniciativa de la sociedad civil, que logró reunir varios procesos sociales: los desarrollados por la pastoral social, los movimientos campesinos

afectados por el petróleo y las fumigaciones del ejército colombiano, los movimientos indígenas y afroecuatorianos, las cámaras de comercio y turismo; y que respondió a la crisis de la región sacudida por el Plan Colombia, la dolarización, los impactos petroleros y la crisis de la producción agropecuaria y de las actividades comerciales y turísticas.

En un primer momento el movimiento biprovincial se planteó un programa reivindicativo sobre los diferentes impactos de la crisis, para pasar a una segunda fase de propuestas que interpelan directamente a los gobiernos locales y los organismos públicos. Reunidos y aglutinados alrededor de una asamblea, los delegados de las dos provincias han otorgado a los gobiernos locales tres tareas: el papel de negociadores con el estado y las empresas petroleras; el de vigilantes y monitores de las actividades petroleras (contaminación ambiental y respeto a las leyes); y la coordinación interinstitucional.

El ascenso al poder de Gutiérrez en el año 2003 abrió una nueva fase de expectativas y frustraciones en la región, pues, al ser oriundo de la provincia de Napo, una de sus consignas giró alrededor de la necesidad de priorizar las demandas insatisfechas de la Amazonía, especialmente en los temas de infraestructura vial. Lo hizo al tiempo que decretó ilegalmente que todos los crudos pesados, incluido el estatal, debían servir para financiar dos fondos: por un lado, el Fondo de Estabilización Petrolera (en un 45%), y, por el otro, un fondo para recomprar deuda externa (en un 70%). A ello se agrega su beneplácito para sumarse a la estrategia del Plan Colombia impulsada por la alianza entre los gobiernos de George W. Bush y Álvaro Uribe.

La caída de Gutiérrez en abril del presente año, y la ausencia de cumplimientos por parte del presidente Palacio, fueron los antecedentes de esta coyuntura. Lo vivido en agosto de 2005 en esta parte de la Amazonía ecuatoriana deja entrever lo incierto de varios de estos procesos aún en marcha, en la medida en que el estado central se muestra cada vez más débil para hacer frente a la ofensiva del capital petrolero transnacional, ávido de ampliar sus fronteras en el inicio de la era del petróleo caro a nivel global, y frente a las estrategias norteamericanas de regionalizar el conflicto colombiano. Nuevamente la interrogante a responder es: ¿significa la ampliación de las fronteras extractivas de petróleo (y otros recursos como los minerales o la madera) un mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población pobre? De su contenido dependerá también que estos conflictos apenas sean el preámbulo de tensiones aún desconocidas en el escenario ecuatoriano.

Bibliografía

Acosta, A. 2003 "Preparémonos para lo que se avecina" en Ponce, J. (ed.) *El Oriente es un Mito* (Quito: CEP/Abya Yala/FLACSO/ILDIS/GTZ).

El Comercio 2005 (Quito) 28 de agosto.

El Universo 2005a (Guayaquil) 16 de julio.

El Universo 2005b (Guayaquil) 14 de agosto.

Escobar, A. 1996 *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo* (Bogotá: Norma).

Gestión: Economía y Sociedad, varios números.

Gordillo, R. 2003 *¿El Oro del Diablo? Ecuador: historia del petróleo* (Quito: Corporación Editora Nacional).

Hicks, J. 1990 *Ecuador's Amazon Region. Development Issues and Options* (Washington: World Bank) Discussion Papers Nº 75.

Larrea, C. 2004 "Dolarización, exportaciones y pobreza en Ecuador" en Korovkin, T. (comp.) *Efectos sociales de la globalización. Petróleo, banano y flores en Ecuador* (Quito: CEDIME/Abya Yala).

Llánes, H. 2003 *Análisis de la política petrolera del estado ecuatoriano* (Quito: Dpto. de Sociología y Ciencias Políticas-Pontificia Universidad Católica del Ecuador).

Narváez Q., I. 2005 "El Petróleo en el Ecuador desde la Perspectiva de una Agenda Nacional" en *Entre Voces* (Quito: Grupo Democracia y Desarrollo Local) Nº 3.

Ortiz-T., P. 2005 *Petroleum Development on Indigenous Lands in the Ecuadorean Amazon* (Toronto: CERLAC/York University/UCGS).

Ortiz-T., P.; Guerrero, M. y López, V. 2000 *Planificación socioambiental y compañías petroleras* (Quito: PUCE-Petroecuador).

Petroecuador 2005 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Operaciones e Inversiones", Quito.

Ramón, G. y Torres, V. H. 2004 *Frontera Norte Ecuatoriana: desafío de la gobernabilidad* (Quito: Comunidec/Abya Yala).

Rojas, L. 2004 *La participación ciudadana en la provincia de Sucumbíos a través de la ASCIS* (Nueva Loja: FLACSO).

Ross, S. et al. 1998 "Naturaleza comprometida. Actores interesados", PUCE/Departamento de Sociología (Quito) mimeo.

Tamariz, M. E. y Villaverde, X. 1997 *Diagnóstico de la tenencia de la tierra en las provincias de Sucumbíos y Napo* (Quito: FEPP).

Taylor, A. C. 1994 "El Oriente Ecuatoriano en el Siglo XIX: el 'otro litoral'" en Maiguashca, J. (ed.) *Historia y Región en el Ecuador 1830-1930* (Quito: Corporación Editora Nacional/CERLAC/FLACSO/IFEA).

Varea, A. et al. 1995 *Marea Negra en la Amazonía. Conflictos socioambientales vinculados a la actividad petrolera en el Ecuador* (Quito: FT PP/FAO/UICN/ILDIS/Abya Yala).

Whitten, N. 1989 *Amazonía Ecuatoriana. La otra cara del progreso* (Quito: Abya Yala).

Notas

1 N. del Ed: el presente artículo es una versión reducida del original que puede consultarse en la sección debates de la página web del OSAL <http://osal.clacso.org>.

2 Hay que notar que a favor de las petroleras privadas existe la exoneración de aranceles de importación y exportación, el no pago de impuesto a la renta por concepto de pérdidas e impactos económicos por la mezcla de crudos, con lo cual la participación del estado es aún menor.

3 También conocida como Ley 122, que se financia con 2,5 y 4,5% del total de la facturación que cobren a Petroecuador y sus filiales y a las empresas operadoras privadas.

Ecuador: contra la globalización de las transnacionales

Esperanza Martínez*

* *Bióloga, miembro de Acción Ecológica y coordinadora de la red internacional OILWATCH.*

Después del derrocamiento del presidente Lucio Gutiérrez y de la formación del renovado gabinete, como en ocasiones anteriores, se abrió en Ecuador una fase que bien podría llamarse "estado de gracia". En el estado de gracia, como lo señala el Grupo de Reflexión Rural, priman los gestos: los reportajes, las declaraciones, las comprensiones, los diagnósticos, las sutiles confianzas, los entusiasmos exquisitos. El hechizo, tan necesario para el inicio, en un punto se suspende. ¿Y qué comienza? Nuevamente la debacle o la construcción (Grupo de Reflexión Rural, 2003).

Como en momentos similares en donde con la movilización popular se ha derrocado al presidente, en el Ecuador la esperanza de construcción desde el "nuevo gobierno" poco a poco fue diluyéndose entre retiradas de ministros, renuncias a promesas y protestas de la gente. Si la expectativa y la demanda de la sociedad es la (re)construcción, entonces las preguntas obvias son: ¿desde dónde? ¿Sobre qué se asienta? ¿Qué se busca con ella? Y, sobre todo,

¿quién la construye? El paro de las provincias amazónicas y petroleras en agosto de 2005 nos da algunas respuestas sobre estas preguntas.

Las movilizaciones tuvieron una demanda de fondo: las condiciones ambientales y sociales de la zona. Y tuvieron un sujeto de presión: las empresas petroleras. Nunca antes había sido tan clara y fuerte la denuncia por la contaminación, por la soberanía y por los abusos de las empresas. Así, temas que habían sido postergados pasaron al centro de la escena.

El primer punto de la agenda del paro fue la caducidad del contrato de la petrolera Oxy, empresa que cometió abusos económicos contra el estado, violó todas las leyes posibles, abusó de los derechos humanos y provocó la contaminación de las áreas en donde intervenía. En este sentido, el paro se convirtió en una acción de hecho con un carácter profundamente patriótico, comparable con las movilizaciones en Bolivia contra la venta del gas. Bolivia y Ecuador son dos escenarios en donde se ha declarado una guerra frontal contra la globalización de las transnacionales, y en donde el pueblo es el que asume la lucha por los recursos naturales, por la soberanía y por la dignidad.

El telón de fondo

La región amazónica ha sido el lugar del drama y del experimento fallido de las diferentes políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde los años setenta. Como resultado de la propuesta de modernización, integración, extracción de materia prima –que en la Amazonía se traduce en el desastre de la crisis del café, la agresión de la palma africana y la contaminación petrolera–, el Norte de la Amazonía es un inmenso jardín de escombros al que todos los gobernantes se acercan con un simple levantamiento de hombros.

La Amazonía ecuatoriana es una de las zonas más ricas en términos de agua, biodiversidad y minerales, tres objetivos en la mira de las transnacionales. Cubre el 45% del territorio nacional y, aunque represente solamente el 1,9% de la Cuenca Amazónica, su diversidad es sorprendente. Su región amazónica hace del Ecuador el tercer país de la cuenca en número de especies de anfibios, el cuarto en lo que respecta a aves, reptiles, y mamíferos, el quinto en cuanto a primates, y el sexto en cuanto a plantas con flores. A nivel mundial ocupa el tercer lugar en número de anfibios, el cuarto en aves, y el sexto en mariposas. Es además el centro de origen de algunas variedades de cultivos de cacao, yuca, camote, papa china, o de frutas como la papaya y la chirimoya, entre otras.

A pesar de la idea, fomentada desde el estado, de "tierras baldías" de libre ocupación, la región ha sido cultivada, enriquecida en su biodiversidad y conservada de manera inteligente por los pueblos indígenas milenariamente. Diferentes estudios señalan que la pro-

© Patricio Realpe

ductividad de una hectárea de bosque en pie daría 6.500 dólares al año, cifra que contrasta con la baja productividad de la agricultura promovida por los programas de colonización de la región. Esta política de invasión transformó para siempre la dinámica natural de los ecosistemas amazónicos y la vida de sus habitantes ancestrales y, además, empobreció los suelos amazónicos y a los campesinos, volviéndolos dependientes de los empleos vinculados a las actividades petroleras.

La actividad central de la región es, desde la década del setenta, la extracción de crudo, siendo en la actualidad de alrededor de 400 mil barriles por día (bpd). Empresas petroleras extranjeras tienen concesionadas 4,3 millones de hectáreas de las más de 5 millones de hectáreas de lotes petroleros. La empresa nacional actualmente mantiene una zona de extracción concentrada en los bloques que fueron de Texaco, y cuyos impactos ahora son

reconocidos, medidos y valorados –con un juicio en marcha– frente a las amplias extensiones para exploración y explotación intensiva en manos de las transnacionales.

En las áreas petroleras los derrames son continuos. Fernando Reyes (2005) presenta una serie de informes en donde se revela la gravedad de la situación en cuanto a estos derrames. Por ejemplo, el Informe Semestral de Protección Integral del año 2002 indica que desde 1994 a junio de dicho año se produjeron 779 derrames a un promedio de casi 92 anuales u ocho mensuales. El Informe Anual del Distrito Amazónico de 1997 revela la ocurrencia de 108 derrames. Los costos por la contención y remediación ascendieron a 750 dólares el barril.

Pero la contaminación no sólo es accidental. En realidad, la peor es la rutinaria. Un promedio de 1.500.000 barriles de agua se está produciendo en los campos petroleros, con 250 mil barriles correspondientes a Petroproducción y 1.250.000 correspondientes a las empresas. De cada 4 barriles extraídos, 3 corresponden a agua. Esto significa que para bombear por el OCP (Oleoductos de Crudo Pesado) los 450 mil barriles de petróleo, según lo planteado en las metas, se descargarán al ambiente 5.475 MMBLS de aguas de formación (Reyes, 2005).

El Paro Biprovincial

El paro amazónico en las provincias de Orellana y Sucumbíos se inició el pasado 14 de agosto con varias acciones simultáneas; entre ellas, la toma del aeropuerto, el corte de las principales carreteras, la ocupación de varios campos petroleros y el cierre de las estaciones de Sacha Norte, Shushufindi y Amazonas. Las protestas fueron convocadas y lideradas por la Asamblea Biprovincial que venía reclamando frente a la explotación petrolera desde hace cinco años y había ya convocado tres paros provinciales con anterioridad. En este caso las demandas centrales de la movilización fueron la caducidad de los

"El paro amazónico en las provincias de Orellana y Sucumbíos se inició el pasado 14 de agosto con varias acciones simultáneas: entre ellas, la toma del aeropuerto, el corte de las principales carreteras"

contratos de las empresas petroleras Occidental (OXY) y Encana, y la exigencia a las transnacionales que operan en la zona de compensación a la población en temas como el mejoramiento vial, el pago por la utilización de otros recursos naturales como el agua y la madera, y la dotación de servicios básicos. Se incluyeron también propuestas para un manejo local de los recursos económicos generados por el petróleo y el pago de impuestos a los gobiernos locales. Asimismo, se demandó la creación de una universidad y la construcción de un hospital especializado en la cura del cáncer, ya que esta enfermedad es una de las causas de mayor mortalidad en la zona.

Durante los días de la paralización, la intensidad del conflicto fue creciendo, profundizando las diferencias entre el gobierno central y la sociedad civil. Frente a ello, el día 17 de agosto el gobierno nacional decretó el estado de emergencia en las dos provincias, suspendiendo todas las garantías constitucionales de la población y clausurando los medios de comunicación locales. Dos días después, el 19 de agosto, detuvo, entre otros, al alcalde de Lago Agrio y al prefecto de Sucumbíos, enardeciendo aún más el ánimo popular de continuar con la medida de hecho. Finalmente, el jueves 25, doce días después de iniciado el paro, las autoridades locales, el gobierno y las empresas petroleras transnacionales firmaron un acuerdo con el compromiso de elevar la tasa que reciben las provincias amazónicas de los impuestos que pagan las empresas petroleras y construir algunos kilómetros de carreteras en la región.

El precio del petróleo subió dos dólares

El paro en la región amazónica sin duda fue exitoso como forma de presión, pues paralizó totalmente la actividad petrolera, pero además colocó en la agenda internacional un nuevo hecho. Las poblaciones locales, que han debido sufrir la contaminación y destrucción de sus tierras, son capaces de golpear al "negocio petrolero". De hecho, de acuerdo a la prensa internacional el crudo subió dos dólares el barril.

Los índices sociales y económicos de las zonas petroleras son escalofriantes. La tasa nacional de mortalidad infantil registrada por 1.000 nacidos vivos es de 17,6 mientras que la tasa de mortalidad infantil estimada en la Amazonía es de 30 por 1.000 (INEC-MSP, 2001). En zonas aledañas a las actividades petroleras, la mortalidad registrada en la década pasada (UPPSAE, 1993) alcanzó la cifra de 133 por 1.000 en niños menores de 5 años. En la región abundan enfermedades como el cáncer, y la leucemia es frecuente, así como otras enfermedades ligadas a la pobreza.

La actividad petrolera destruye las bases de la subsistencia de la población local. De acuerdo a un inventario de daños, cada familia reporta una pérdida media de 8 vacas, 5 cerdos, 2 caballos y 43 gallinas, así como 2,6 hectáreas dañadas (Maldonado y Narváez, 2003).

Si comparamos los indicadores sociales en el país por regiones y provincias petroleras, nos encontraremos con verdaderas sorpresas en las provincias amazónicas petroleras. Los índices de pobreza son mayores, con 84,2% en Sucumbíos y 80,2% en Orellana frente al 55% nacional (Isamis, 2001). De igual manera, las obras de infraestructura demuestran el abandono de esta población. Sucumbíos cuenta con una tasa de 27% de alcantarillado y 19% en Orellana, frente al 48% del país. El 14% de la población cuenta con agua entubada en Sucumbíos y el 13% en Orellana, frente al 48% nacional (SIISE, 2001). Por otra parte, las empresas utilizan los recursos de la zona libremente (arena, agua, madera y otros), mientras que las poblaciones locales deben pagar por ellos o hacer mingas para sustituirlos.

En cuanto a la inseguridad en las provincias petroleras de la Amazonía, se puede decir que es abrumadora. Mientras diariamente se reportan en los medios de comunicación delincuencia, violencia y muerte entre los pobladores locales, las empresas cuentan con seguridad militar. Esto constituye un subsidio por parte del estado con el que cuentan las trasnacionales.

La gente en la Amazonía tiene acumuladas denuncias de derrames, reclamos por daños a la salud, pérdidas materiales, pero también su conocimiento sobre el papel de las transnacionales en su malestar, miseria y abandono. La población local sabe de las formas de trabajar que tienen las transnacionales y comprende perfectamente el significado del neoliberalismo. Es por esto que, desde su tierra, da una batalla frontal contra él y sus primogénitas, las transnacionales petroleras. Los hombres y mujeres amazónicos saben cómo y por dónde se debe buscar la re-construcción del estado.

Bibliografía

Acción Ecológica 2003 "¿Cuánto nos debe Texaco? Un caso de deuda ecológica" en *Alerta Verde* (Quito) Nº 125.

Grupo de Reflexión Rural 2003 *Estado en construcción: Estado de Gracia* (Buenos Aires: Tierra Verde).

Maldonado, A. y Narváez, A. 2003 *Ecuador ni es, ni será ya, país amazónico. Inventario de impactos petroleros-1* (Quito: Acción Ecológica).

Reyes, F. y Ajamil, C. 2005 "I. El agua producida, escalas y sedimentos como pasivo ambiental acumulado" en s/d *Petróleo, Amazonía y Capital Natural*, en prensa.

Reyes, F. y Ajamil, C. 2005 "II. Los derrames de petróleo en la amazonía como masivo ambiental flujo" en s/d *Petróleo, Amazonía y Capital Natural*, en prensa.

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 2001 *Informe anual*. En <www.siise.gov.ec>.

Unión de Promotores Populares de Salud de la Amazonía Ecuatoriana (UPPSAE) 1993 *Culturas bañadas en petróleo. Diagnóstico de salud realizado por promotores* (Lago Agrio: Abya-Yala).

Recursos naturales y conflicto social en la Argentina actual

María Celia Cotarelo*

* *Profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Directora del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA) e integrante del Grupo de Trabajo Historia Reciente de CLACSO.*

La preservación del ambiente y la explotación racional de los recursos naturales constituyen dos de los principales desafíos que enfrenta hoy la humanidad. Ambas cuestiones se encuentran cotidianamente afectadas hoy por la acción el capital financiero. Contaminación del agua, del aire y el suelo; emanación de gases tóxicos y agotamiento de los recursos no renovables, con su secuela de calentamiento global, enfermedades y muertes evitables, son algunos de los flagelos que los pueblos están sufriendo. A la vez, la búsqueda de apropiación y control de los recursos estratégicos por parte de los diversos capitales ha llevado al desarrollo de una política de guerra a nivel mundial, impulsada por las potencias imperialistas[1].

Como parte de una estrategia global, en las últimas décadas el territorio argentino fue apropiado por el capital financiero a través de distintos mecanismos. Uno de ellos fue el proceso de privatización de empresas estatales, a partir del cual Argentina enajenó el control de sus recursos

estratégicos –el petróleo, la electricidad, el agua, el gas, los minerales– y el control de los transportes y las comunicaciones. Capitales estadounidenses y europeos, junto con socios locales, se repartieron el botín, poniendo fin a cualquier ilusión de soberanía nacional en las condiciones actuales.

Para llegar a esta situación la oligarquía financiera debió destruir las relaciones sociales y políticas dominantes hasta la década de 1970 y construir relaciones nuevas, propias de esta fase de descomposición capitalista[2]. La realización de su hegemonía en la década de 1990 se manifestó en el consenso alcanzado por las políticas neoliberales en la mayor parte de la sociedad. Así, el proceso de privatización de las empresas de servicios públicos fue apoyado con entusiasmo por amplios sectores de la población, incluyendo algunas de las fracciones obreras directamente afectadas. La lucha de los trabajadores que ofrecieron resistencia –como ferroviarios, telefónicos y siderúrgicos– fue derrotada en condiciones de profundo aislamiento social.

Sin embargo, a pesar de esta relación de fuerzas desfavorable para la clase obrera y el pueblo en general, distintas fracciones sociales se movilizaron contra los efectos de esas políticas neoliberales, conformando un proceso de rebelión iniciado en el motín de Santiago del Estero en diciembre de 1993, y que tuvo su punto culminante en la insurrección espontánea de diciembre de 2001 (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003).

En este trabajo nos referiremos a algunos hechos que formaron parte de este proceso: las protestas que ocurrieron en las llamadas "ciudades petroleras" como consecuencia de la destrucción de relaciones sociales y su reconstrucción en nuevas condiciones a partir de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y las protestas populares en defensa del ambiente ante la acción de empresas que ponen en peligro la vida de las generaciones presentes y futuras. Si bien son diferentes, ambas protestas tuvieron en común el rechazo a hechos que refieren a la destrucción de fuerzas productivas por parte del capital, en un caso por la expulsión de fuerza de trabajo, y en el otro por la destrucción de recursos esenciales para la vida humana.

Protestas en las "ciudades petroleras"

Durante décadas el estado nacional tuvo el monopolio en la exploración y explotación del petróleo a través de YPF, empresa considerada por el pueblo como un baluarte y símbolo de soberanía nacional. Sus trabajadores se consideraban parte de la "familia ypefiana". Solían ingresar desde jóvenes y trabajaban allí hasta jubilarse, y en muchas ocasiones sus hijos también eran trabajadores de la empresa. Dio origen a pueblos enteros, cuya actividad económica y social giraba en torno a la empresa; proveía de vivienda

a sus trabajadores y sostenía los clubes deportivos y la vida cultural de la comunidad (Klachko, 2005). Tal era el caso, entre muchos otros, de Cutral-Có y Plaza Huincul en Neuquén, General Mosconi y Tartagal en Salta, y Cañadón Seco en Santa Cruz.

"Después de algunos años de producida la privatización, trabajadores despedidos de YPF y otros desocupados llevaron a cabo protestas en reclamo de puestos de trabajo en las distintas empresas petroleras o de trabajo en general. El corte de ruta en Cutral Có-Plaza Huincul en junio de 1996 fue la primera de estas"

Su privatización, en la década de 1990, implicó un cambio radical. Su propietario mayoritario pasó a ser la empresa española Repsol. La cantidad de trabajadores se redujo drásticamente[3]: miles de trabajadores fueron jubilados anticipadamente o se acogieron al "retiro voluntario", por el cual recibieron altas indemnizaciones. Muchos invirtieron dichas indemnizaciones en pequeños comercios, gran parte de los cuales quebraron. Otros fueron alentados a crear microemprendimientos productivos, por medio de los cuales YPF tercerizaba actividades, y que en muchos casos también terminaron quebrando.

La reducción en el número de trabajadores empleados provocó un abrupto aumento en las tasas de desocupación en las localidades petroleras, afectándose así el conjunto de la actividad económica local. Por ejemplo, en Caleta Olivia y Pico Truncado, donde las tasas de desocupación siempre se habían mantenido por debajo del 5%, entre 1993 y 1995 llegaron al 15 y 19% respectivamente, con picos de casi 30% (Luque et al., 2003).

Desde 2003 pareció haber un cambio en las políticas seguidas hasta entonces. Durante el gobierno de Kirchner se creó la empresa estatal ENARSA, que tiene la concesión de áreas petroleras en el litoral marítimo y que se asoció con Petróleos de Venezuela para formar Petrosur[4]. Sin embargo, hasta el momento no se advierten progresos significativos en esos proyectos, ni se han revertido en absoluto los efectos del proceso de privatización.

La oposición o resistencia de los trabajadores a los procesos de privatización, extranjerización y expulsión de fuerza de trabajo en la rama petrolera fue escasa a comienzos de la década de 1990. Las altas indemnizaciones por los reti-

ros "voluntarios" constituyeron uno de los mecanismos centrales utilizados para evitar el conflicto laboral y social. A esto se sumó el otorgamiento de acciones de la empresa a trabajadores bajo la figura de "propiedad participada".

© Juan Chaves

Sin embargo, después de algunos años de producida la privatización, trabajadores despedidos de YPF y otros desocupados llevaron a cabo protestas en reclamo de puestos de trabajo en las distintas empresas petroleras o de trabajo en general. El corte de ruta en Cutral Có-Plaza Huincul en junio de 1996 fue la primera de estas, que alcanzó repercusión nacional. En abril de 1997 se produjo el segundo gran corte de ruta en esas localidades neuquinas. En mayo de ese mismo año, desocupados de General Mosconi y Tartagal, en Salta, participaron del primer corte de ruta en la zona por los mismos reclamos. Allí volvieron a producirse cortes importantes en diciembre de 1999, mayo y noviembre de 2000, y junio de 2001. También en la zona Norte de Santa Cruz, desocupados cortaron las rutas en Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras entre 2000 y 2005.

Estos grandes cortes de rutas tuvieron varios rasgos en común (Klachko, 2005): se produjeron en ciudades en crisis tras la privatización de YPF; se prolongaron durante varios días (un mínimo de seis y hasta más de veinte); constituyeron no sólo el bloqueo de las rutas con construcción de barricadas, sino también la virtual toma de cada una de esas ciudades, paralizando las actividades. A partir de 2000, varios incluyeron la toma y destrucción de comisarías y edificios públicos y toma de rehenes entre los policías, así como la toma de empresas petroleras y la amenaza de hacer explotar tanques de combustibles ante el intento de desalojarlos.

Fueron acciones masivas, con miles de manifestantes en las rutas. Contaron con la participación activa del conjunto de la población local: desocupados, trabajadores estatales, docentes, comerciantes, estudiantes, pequeños productores de la zona, entre otros. Las decisiones fueron tomadas en asamblea en las rutas o en las plazas principales de los pueblos. Estas prácticas de "democracia directa" fueron de la mano de una crisis de representación evidenciada en el repudio a funcionarios, políticos y dirigentes en general. Los dirigentes de la lucha eran elegidos en el piquete, formándose "comisiones de vecinos" que estaban encargadas de transmitir el mandato de la asamblea[5].

Además del reclamo de trabajo, incluyeron demandas generales como el reembolso por parte del estado nacional de las regalías por el petróleo y el gas, inversión en obras públicas, medidas que tendieran a la reactivación de la zona, así como demandas propias de las distintas fracciones sociales involucradas. Los reclamos se dirigieron hacia los gobiernos municipales, provinciales y nacional; y, principalmente en Salta y Santa Cruz, hacia las empresas petroleras que operaban en la zona.

En el transcurso de la lucha se produjeron divisiones entre los participantes. Por lo general, las fracciones de pequeña burguesía asalariada y no asalariada lograron satisfacer sus demandas más rápidamente, por lo que se mostraron más proclives a firmar acuerdos con los gobiernos y a levantar los cortes antes que otras fracciones, en particular, los trabajadores desocupados.

Los gobiernos movilizaron fuertes contingentes de sus fuerzas armadas (policía provincial y gendarmería) para desalojar las rutas. Ante el avance de las tropas, los piqueteros respondieron con piedras, bombas molotov y palos, y en Salta con armas de fuego, mostrando alta disposición al enfrentamiento. Como resultado de los choques hubo numerosos detenidos y heridos. A la vez, se produjeron cuatro de las muertes en protestas durante los últimos años: Teresa Rodríguez en Cutral Có en 1997, Aníbal Verón en General Mosconi en noviembre de 2000, y Carlos Santillán y José Barrios en General Mosconi en junio de 2001.

Estos hechos presentan un desarrollo similar al del conjunto de los hechos de rebelión del período (Cotarelo e Iñigo Carrera, 2004). Los cortes de Cutral Có de 1996 y de General Mosconi-Ta rtagal de 1997 fueron llevados adelante por fracciones obreras –trabajadores ocupados y desocupados– y de pequeña burguesía conjuntamente. Se produjeron en un momento de ascenso en las luchas, medido por la unidad al interior de la clase obrera y su capacidad para establecer alianzas con otras fracciones sociales. En el corte de Cutral Có en 1997 ya se observan algunos rasgos del momento descendente que tuvo origen a mediados de ese año: comenzó como una protesta de docentes, a la que se sumaron trabajadores desocupados. Pero mientras estos últimos plantearon continuar la lucha, asu-

miendo la identidad de "fogoneros", los docentes levantaron la huelga que llevaban a cabo y plantearon el levantamiento del corte de ruta. El corte de General Mosconi en diciembre de 1999 también se realizó durante el momento descendente en las luchas.

Por el contrario, si bien el siguiente gran corte en General Mosconi fue llevado a cabo por desocupados beneficiarios de planes sociales, recibió el apoyo del conjunto de la población de las ciudades de la zona, a la vez que en el resto del país numerosos sectores se expresaron en contra de la acción de la gendarmería, que derivó en heridos y detenidos. Este corte, realizado en mayo de 2000, se produjo en los comienzos de un nuevo momento de ascenso. Lo mismo sucedió en noviembre de 2000, cuando desocupados beneficiarios de planes de empleo, trabajadores despedidos de la empresa provincial de electricidad EDESA y de la empresa de ómnibus Atahualpa, deudores del Banco Nación e indígenas, cortaron nuevamente la ruta. Esta situación volvió a repetirse en junio de 2001, cuando desocupados y obreros de la construcción realizaron un nuevo corte de la ruta en General Mosconi en demanda de aumento salarial, mayor cantidad de planes de empleo y alimentos, un plan de obras públicas para generar empleo y el reembolso de las regalías petroleras y gasíferas. Por último, los últimos cortes en la zona Norte de la provincia de Santa Cruz, en el Sur del país, realizados por desocupados en demanda de puestos de trabajo en las petroleras, si bien fueron importantes se efectuaron en condiciones de aislamiento relativo, tendiendo a predominar la fractura al interior de la clase obrera y la falta de alianzas con otras fracciones.

"Si bien el siguiente gran corte en General Mosconi fue llevado a cabo por desocupados beneficiarios de planes sociales, recibió el apoyo del conjunto de la población de las ciudades de la zona"

Por otra parte, el relativamente reducido grupo de trabajadores que permaneció en la empresa Repsol-YPF, así como los de otras petroleras extranjeras (que incrementaron su presencia en la última década), protagonizaron según nuestro registro cuarenta y cinco acciones desde 1994 hasta la fecha. Se trató principalmente de huelgas y manifestaciones en reclamo de aumento de salarios y por

mejores condiciones de trabajo; pero también, entre estas, se encuentran una huelga declarada por el Sindicato del Petróleo y Gas Privados y la participación en un acto organizado por las empresas contratistas en febrero de 2002 en rechazo a la decisión del gobierno nacional de gravar con un 20% las exportaciones del petróleo (retenciones), por considerar que podría dar lugar a despidos masivos[6]. Por lo tanto, los trabajadores que lograron insertarse en las nuevas condiciones se movilizaron también en algunos casos en defensa de los intereses de los empresarios petroleros por temor a perder esa posición[7], en detrimento de intereses más generales[8].

En relación a ello, distinta ha sido la posición de otras fracciones obreras en los últimos años, aunque su acción no se desarrolló en las ciudades petroleras sino en otras ciudades del país, en particular Buenos Aires. En mayo de 2002, integrantes de la Federación de Gremios de la Energía y desocupados marcharon a la sede de Repsol-YPF en Buenos Aires "en defensa de la soberanía energética". Ante el anuncio oficial del proyecto de creación de una empresa de energía estatal (ENARSA), los dirigentes del sindicato de trabajadores de estaciones de servicio reunieron 50 mil firmas y las llevaron a los diputados a fin de presionar para la sanción de la ley. En marzo de 2005 grupos de desocupados nucleados en organizaciones piqueteras que apoyan al gobierno del presidente Kirchner, sumándose a un boicot propuesto por este contra la empresa Shell por haber dispuesto un aumento en el precio de las naftas, se movilizaron expresando su apoyo a la empresa ENARSA. En noviembre de 2004, manifestantes se concentraron en una estación ferroviaria en Buenos Aires en reclamo de la reestatización de las empresas con la consigna "El agua, la energía, el acero, los transportes, los puertos, el correo, todos son nuestros". En este sentido, a partir de la insurrección espontánea de 2001, diferentes fracciones de trabajadores ocupados y desocupados se movilizaron por la reestatización de YPF y otras empresas o por la creación de una empresa estatal a fin de que el estado recuperara el control de los recursos, siendo que en muchos de estos casos lo hicieron a partir de iniciativas tomadas por el gobierno nacional.

Protestas en defensa del ambiente

La acción de organizaciones ambientalistas no es nueva en Argentina. Desde hace varios años se han sucedido las protestas de alto impacto mediático por parte de pequeños grupos de militantes, en particular de Greenpeace. Pero más recientemente se han producido protestas masivas protagonizadas por pobladores de distintos lugares del país en defensa del ambiente y las reservas naturales. Así, en 1998 y en 2003 indígenas protestaron por la construcción de gasoductos en sus tierras. Desde mayo de 2004, campesinos de General Pizarro, en Salta, protestan por la venta de una reserva natural. Desde 2001, en el Gran Buenos Aires creció el número de protestas

© Surai Azcárate

de vecinos por la instalación de basurales en los barrios. Pero las principales protestas fueron las de los habitantes de Esquel, en Chubut, en 2002 y 2003, y de Gualeguaychú, en Entre Ríos, en 2005.

En 2002 la empresa canadiense Meridian Gold presentó un proyecto para explotar un yacimiento de oro y plata en Esquel que crearía 400 puestos de trabajo directos y otros 1.200 indirectos. La mayoría de los pobladores, que al principio se mostraron de acuerdo con el proyecto, lo rechazaron al enterarse de que se usaría cianuro, porque contaminaría las fuentes de agua y destruiría el ecosistema. Se autoconvocaron, y en diciembre convocaron a una masiva caravana en distintas ciudades de la provincia de Chubut. Por su parte, el concejo deliberante aprobó una ordenanza que prohibía el uso de cianuro en su ejido. En enero de 2003, 3 mil "vecinos autoconvocados" realizaron una nueva caravana hacia las oficinas de la empresa. Participaron asambleas vecinales, grupos ambientalistas, agrupaciones indigenistas, comerciantes locales y empresarios turísticos.

Nuevamente, en febrero de 2003, se movilizaron 2 mil pobladores en Esquel repudiando a todos aquellos que apoyaban el proyecto, entre ellos el gobernador de la provincia y el intendente. Días después, en un acto oficial, mil manifestantes expresaron su oposición al proyecto, mientras otros 150 –entre ellos, desocupados de la rama de la construcción agrupados en la Unión Obrera de la Construcción– manifestaron su apoyo.

El 23 de marzo se realizó un plebiscito, con alta participación ciudadana: más del 80% (11.046) de los ciudadanos votó contra el proyecto, mientras que sólo 2.561 votaron

por la aprobación. Ante este resultado, el gobernador anunció la suspensión indefinida del proyecto minero. Tras este triunfo popular sobre los intereses de una empresa extranjera respaldada por los gobiernos locales (provincial y municipal), pobladores de otras zonas encararon la resistencia a proyectos similares. Por ejemplo, en octubre de 2004 los habitantes de Gualjaina, en Chubut, se movilizaron contra la exploración de oro aluvional por parte de la empresa minera Trinidad Vial SRL, logrando que esta se retirara de la zona.

Asimismo, en agosto de 2005, en Andalgalá, Catamarca, mil agricultores, artesanos, empresarios e indígenas repudiaron los trabajos que realizaba la empresa minera Agua Rica, en defensa de la preservación del agua y el ambiente. Y, en septiembre de 2005, 3 mil vecinos y productores agropecuarios cortaron una ruta en el valle de Uco, en Mendoza, para rechazar las tareas de exploración de una subsidiaria de una empresa canadiense en una mina de oro y cobre en la que se utilizaría cianuro de sodio.

Por su parte, a fines de abril de 2005, en el puente internacional que une Gualeguaychú (Argentina) con Fray Bentos (Uruguay), más de 30 mil comerciantes, docentes, empleados y obreros se movilizaron respondiendo a la convocatoria de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú contra la instalación de dos grandes plantas de fabricación de pasta celulósica en Fray Bentos, sobre la costa del río Uruguay. La instalación de estas plantas, pertenecientes a una empresa española y a una finlandesa respectivamente, fue aprobada por el gobierno de Uruguay. Las movilizaciones se repitieron en julio, cuando se realizaron tres marchas, tras las cuales la Cancillería argentina anunció que exigiría al gobierno uruguayo la paralización de la construcción de las papeleras.

A modo de conclusión

A comienzos de la década de 1990 buena parte de la sociedad argentina contempló, pasiva o entusiastamente, la entrega de nuestro petróleo y demás recursos al capital extranjero. Las empresas petroleras han vendido su producto internamente a precios internacionales y, según algunos cálculos, en pocos años más agotarán nuestras reservas. Este saqueo se lleva a cabo con la anuencia incluso de una parte de los trabajadores insertos en la rama, que hasta el momento se han alineado con sus patrones.

Si bien en los últimos años ha habido protestas en que se planteó la reestatización de YPF o el apoyo a la creación de una empresa estatal, hasta el momento las mismas no han sido masivas. Las protestas desarrolladas en las ciudades petroleras tuvieron como reclamos centrales la creación de empleo a través de la reactivación de las zonas, trabajo en las plantas petroleras o planes de empleo. Pero, más allá de los reclamos, la signi-

ficación de esas protestas consistió en la aparición y desarrollo de algunas prácticas de organización y de lucha que se hicieron presentes en la insurrección espontánea de 2001, punto más alto del proceso de rebelión en Argentina en el período actual.

En cuanto a las protestas en defensa del ambiente, y en particular el agua, han logrado frenar, en algunos casos, la acción de empresas dispuestas a explotar recursos naturales sin la más mínima preocupación por las consecuencias ambientales. También han puesto de manifiesto una mayor preocupación social acerca de la preservación y el control de recursos, por cuya apropiación se plantearán conflictos en un plazo probablemente no muy lejano.

En la medida en que logre formarse un movimiento que tenga entre sus metas fundamentales el control popular de los recursos estratégicos en este territorio, podrá empezar a plantearse no sólo la posibilidad de una política soberana, sino incluso nuestra propia supervivencia; y en tanto estos procesos logren articularse en un movimiento popular latinoamericano, podrán tener éxito.

Bibliografía

Cotarelo, M. C. e Iñigo Carrera, N. 2004 *Algunos rasgos de la rebelión en Argentina 1993-2001* (Buenos Aires: PIMSA) Documento de Trabajo N° 49.

Favaro, Orietta; Arias Bucciarelli, Mario e Iuorno, Graciela 1999 "Políticas de ajuste, protestas y resistencias. Las puebladas cutralquenses" en Favaro, O. (ed.) *Neuquén. La construcción de un orden estatal* (Neuquén: Cehepyc/CLACSO/Universidad Nacional del Comahue).

Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia 2003 *La insurrección espontánea. Argentina diciembre 2001* (Buenos Aires: PIMSA) Documento de Trabajo N° 43.

Klachko, Paula 2005 "Las consecuencias políticas y sociales de la privatización de YPF. El impacto en las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul" en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) Nº 209.

Luque, Élida; Martínez, Susana; Auzoberría, Miguel y Huenul, Hugo 2003 *Conflictos sociales en la provincia de Santa Cruz. Los años noventa* (Buenos Aires: PIMSA) Documento de Trabajo N° 41.

Notas

1 Esta política incluye las denuncias estadounidenses sobre la presencia de presuntas células terroristas en la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil) y la presencia creciente de tropas de ese país en Paraguay, que son atribuidas por diversos analistas a sus intenciones de controlar el Acuífero Guaraní.

2 Esta destrucción-construcción de relaciones sociales se produjo a través de un proceso cuyos hitos fueron la llamada guerra antisubversiva, la guerra de Malvinas en 1982, la forma en que se desarrolló la salida electoral en 1983 y las hiperinflaciones de 1989 y 1990.

3 Unos 3.500 trabajadores quedaron sin trabajo en Cutral Có-Plaza Huincul, y otros 3.500 en Tartagal.

4 También se creó Líneas Aéreas Federales para absorber a los empleados de Lapa y Dinar; Correo Oficial SA; Arsat, que se quedó con la concesión de la órbita satelital que tenía la privada Nahuelsat; le quitaron la concesión del Ferrocarril San Martín a la empresa Metropolitano; y se reestatizó el control del espectro radioeléctrico, que estaba concesionado a la francesa Thales.

5 Dos de los principales dirigentes surgidos de los cortes de ruta en General Mosconi y Tartagal eran ex trabajadores de YPF, despedidos en 1991 luego de 17 y 14 años de trabajo respectivamente, e hijos a la vez de un trabajador de YPF. Invirtieron la indemnización en un negocio, que quebró unos años después.

6 Por el contrario, el Frente Gremial y Social (sindicatos docentes, de judiciales y personal jerárquico) no se sumó a la protesta "para no ser cómplices del chantaje de las petroleras. Acompañamos al obrero en caso de que haya despidos, pero no de este modo perverso" (*La Nación*, 19/2/02).

7 Debe tenerse presente también que se trata de trabajadores relativamente muy bien pagos. Un operario de boca de pozo en Comodoro Rivadavia en 2005 gana unos $3.000 pesos, mientras que los ingresos promedio en la ciudad son de $680 (*Clarín*, 11/9/05).

8 Parte de los ingresos obtenidos por el estado nacional debido al aumento en las retenciones fue destinada al pago de los planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.

Documentos

Declaración de afectados y amenazados por la construcción de represas

Conformación del Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas

Petén, Guatemala, 31 de julio de 2005

Representantes de diferentes comunidades, organizaciones, municipios y departamentos de Guatemala y Sur de México, en su mayoría campesinos e indígenas, así como de comunidades internacionales, nos hemos reunido con el objetivo de conformar un movimiento nacional de afectados y amenazados por la construcción de represas, que luche por nuestras tierras y comunidades, y por la defensa del agua.

Trescientos nueve hombres y mujeres de 42 organizaciones, de 8 departamentos de Guatemala y de 3 estados de México, con presencia de compañeros y compañeras de Italia, España, Irlanda, Austria, Costa Rica y Nicaragua, hemos compartido durante tres días las experiencias y las historias de lucha en defensa de nuestros ríos y en contra de la construcción de represas, y hemos construido estrategias comunes para defender la vida y la paz en nuestras comunidades.

Tomando en cuenta que actualmente en Guatemala existen 17 represas hidroeléctricas que han causado inundaciones, desplazamientos, despojo de recursos naturales, muerte y destrucción.

Considerando que en Guatemala están planteados más de 33 proyectos hidroeléctricos que se inscriben en el contexto neoliberal entre los cuales destacan

los planificados en Baja Verapaz, Alta Verapaz, Petén, Quiché, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Retalhuleu, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos.

Tomando en cuenta la discusión nacional en torno a la iniciativa de la Ley de Concesiones y la Ley de Agua, que se relacionan estrechamente con la problemática de las represas ya que proponen un marco legal para la privatización del recurso hídrico y otros recursos naturales. Por ello:

Denunciamos:

• Que nuestras comunidades están amenazadas por el despojo de sus tierras y sus recursos naturales por parte de empresas transnacionales interesadas en la generación de energía eléctrica, la explotación petrolera, minera y en agroindustria, avaladas por el gobierno.

• Que a nivel mundial hay más de 40 millones de personas desplazadas por represas, que sufren las consecuencias económicas, sociales y ambientales. También, en Guatemala, hemos visto la masacre de más de 400 personas donde se construyó la represa de Chixoy, y seguimos solidarizándonos con las familias desplazadas que perdieron sus tierras y viven en extrema pobreza.

• No se hace consulta, ni se toma en cuenta la opinión de las comunidades para decidir la construcción de las represas hidroeléctricas, a pesar de que seremos las más afectadas.

• El engaño, las mentiras y la desinformación que las autoridades, empresarios extranjeros y funcionarios públicos hacen en las comunidades, negando los planes y proyectos hidroeléctricos y atacando a la dirigencia de nuestras organizaciones y dividiendo nuestras comunidades.

• Del mismo modo, denunciamos a los medios de comunicación, que se prestan al juego de gobierno y hacen publicidad a favor de los proyectos neoliberales, como el Plan Puebla Panamá y TLC, y no toman en cuenta las opiniones y daños que esto genera en nuestro pueblo. Creemos que se han convertido en mercaderes de la mentira, ya que para financiarse son capaces de engañar y confundir a nuestra población.

• Denunciamos los desalojos e intentos de despojos de tierra y los planes ocultos que el gobierno y los poderosos hacen en las comunidades en donde ya se han concesionado los proyectos de represas, tal es el caso de las comunidades Trece Aguas de Senahú, y Chulac, en Santa María Cahabón, ambas en el departamento de Alta Verapaz; en Xálala y Serchil sobre el río Chixoy, municipio de Ixcán, Departamento de Quiché, cuyos estudios de factibilidad y pre-factibilidad, han sido adjudicados a la empresa colombiana INGETEC.

• Que a pesar de haber transcurrido 22 años de la construcción de la represa de Chixoy, hasta el día de hoy siguen esperando el cumplimiento de los com-

promisos adquiridos por el INDE, sin que los gobiernos de turno den solución a su problemática. Además continúan las amenazas y los intentos de desprestigio hacia los sobrevivientes y sus organizaciones.

• La ampliación de las áreas protegidas que afectan la vida y sobrevivencia de las comunidades, tal es el caso de Semuc Champey en el municipio de Lanquín, Alta Verapaz y de la cuenca El Mirador, en Petén.

Frente a esto, las organizaciones y comunidades participantes de este Encuentro,

Exigimos:

• La cancelación definitiva de los estudios, de la construcción y los posibles planes de represas que tienen los poderosos para nuestro país.

• También queremos la suspensión total de las concesiones mineras y petroleras que afectan a muchas comunidades de nuestro territorio nacional, ya que, hasta el momento, el gobierno no ha respondido al clamor de la población y ha continuado apoyando a las empresas transnacionales de minería y petróleo.

• Al Congreso de la República, que no aprueben la Ley de Aguas y la Ley de Concesiones, ya que es el marco legal que las empresas y los poderosos esperan para llevar adelante las privatizaciones de nuestros recursos.

• Al gobierno y los funcionarios públicos, que cumplan con su tarea de trabajar para la ciudadanía y que no nieguen a las comunidades y sus organizaciones la información sobre proyectos que pueden afectar su vida y su futuro.

• Al INDE, al gobierno y a las instituciones involucradas, la inmediata reparación de los daños causados a las y los compañeros afectados por la construcción de la represa de Chixoy.

Finalmente enviamos nuestra más fuerte solidaridad al Encuentro contra la represa de La Parota, que se está realizando en estos días en la comunidad de Aguas Calientes, Acapulco, Estado de Guerrero, México, animándoles a no desmayar y continuar su lucha.

Invitamos a todas las organizaciones y comunidades para que participen en la 3ra. reunión de la REDLA, Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus comunidades y el Agua, a realizarse entre el 17 y 21 de octubre en Cubulco, Baja Verapaz.

Del mismo modo nos sumamos a la organización y convocatoria para participar en las manifestaciones en contra del IV Foro Mundial del Agua, que realizarán en México DF, en Marzo del 2006, convocado por empresas transnacionales y el Banco Mundial.

Anunciamos que en este encuentro, hemos tomado la decisión de conformar el Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas, para luchar de forma unida, organizada y solidaria en contra de las hidroeléctricas y en defensa del agua. Agradecemos a todas las organizaciones e instituciones que han hecho posible la realización de este primer encuentro.

¡El agua es nuestra, las represas la secuestran!
¡Las y los seres humanos tenemos derecho a la Vida!
¡Somos de maíz, pero también de agua!
¡Ríos Libres y Ríos Vivos!

Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas, integrantes: *Petén:* Frente Petenero contra las Represas, que incluye las comunidades de las riveras de los ríos Usumacinta, Pasión, Sainas y San Pedro; Alianza por la Vida y la Paz; Asociación de Mujeres Guatemaltecas Ixmucané; Programa Agrícola, Pastoral de La Libertad; Juventud CPR; Centro de Investigación y Educación Popular-CIEP; Asociación de Víctimas del Conflicto Armado; Consejo Indígena Q'eqchi' Sayaxché; Asociación de Promotores de Salud Maya Petén; Pastoral Social; Cooperativa Nuevo Horizonte; Asociación de Servicios Comunitarios de Salud ASECSA; Asociación UNCADI, Pastoral Social San Luis; Asociación de Guías Espirituales de Poptún; Asociación para el Desarrollo Indígena, Tierra Blanca Sayaxché; Asociación Elías Manuel; Radio Libertad; Federación Luterana Mundial. *Alta Verapaz:* Pastoral Social de Cobán; Directiva Parroquia Lanquín; UNICAN-Unidad Indígena Campesina de Cahabón; UVOC-Unión Verpacense de Organizaciones Campesinas; Lajep Canil, La Tinta; Aldea Yalicar, La Chúa municipio de Cobán. *Suchitepéquez–Retalhuleu:* Comité de Desarrollo Campesino-CODECA Cuyotenango. *Sololá:* CCDA-Comité Campesino de Altiplano, San Lucas Tolimán. *Ixcán:* Coordinadora Municipal del Ixcán, Pastoral Social del Ixcán, Serjus Proceso Ixcán, Fuente de Paz. *Quiché:* CONAVICUA-Coordinadora de Viudas de Guatemala. *Huehuetenango:* Asociación para el desarrollo sostenible de la mancomunidad Huista-ADSOSMHU, Asociación y Equipo Técnico de Educación en Salud Comunitaria-ETESC, CONCAD-Consejo Cristiano de Desarrollo. *Baja Verapaz:* ASCRA COCAICH; ACSODI-MA - Asociación Integral Maya Achí.

México: COMPPA-Comunicadores Populares Por la Autonomía; CIEPAC-Centro de Investigaciones Económicas, Políticas y de Acción Comunitaria; La Voz de Nuestro Corazón; Frente Chiapaneco contra las Represas; Educación para la Paz-Edupaz; Centro Mexicano de Derecho Ambiental-CMDA.

Otros Países: Federación Luterana, Departamento de Servicio Mundial, Caritas Italia.

Los conflictos mineros se agudizan y el Gobierno incumple creación de Comisión de Diálogo de Alto Nivel

Comunicado de CONACAMI
Lima, Perú, 25 de julio de 2005

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería –CONACAMI PERU– se dirige al Presidente del la República, al Congreso de la República, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, al Presidente del Consejo de Ministros, a las organizaciones de Derechos Humanos y a la opinión pública nacional e internacional, para manifestar lo siguiente:

Considerando

Que, CONACAMI es la organización nacional de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería, que surge de la desatención del Estado a los conflictos socio ambientales entre comunidades y empresas mineras, así como ante los impactos negativos de la minería que generan una destrucción ambiental en territorios comunales y la sistemática violación de sus derechos humanos; por ello CONACAMI constituye respuesta colectiva, que de manera organizada reclama la reivindicación de nuestros derechos colectivos y de allí la necesidad de constituir una Comisión Nacional de Diálogo de Alto Nivel.

Que, en julio del 2002, los entonces ministros de Energía y Minas, Jaime Quijandría Salmón; de Agricultura, Álvaro Quijandría Salmón; y de Salud,

Fernando Carbone Campoverde, suscribieron en representación del gobierno un acta de compromiso con la CONACAMI para instalar una Comisión de Diálogo Tripartito de Alto Nivel mediante Decreto Supremo con el propósito de dar tratamiento descentralizado y solución a los conflictos surgidos en los territorios y poblaciones de las comunidades campesinas e indígenas por efectos de la actividad minera, energética y de hidrocarburos; han pasado más de 3 años y pese a los múltiples esfuerzos desplegados por CONACAMI para que se concrete el compromiso, ninguno de los tres portafolios cumplió con la implementación de esta instancia de diálogo, a pesar que son múltiples los conflictos entre poblaciones locales y empresas mineras en todo el país.

Que, algunos espacios coyunturales de diálogo constituidos por el Ministerio de Energía y Minas, como mesas técnicas, comisiones de diálogo, etc., no estarían incluyendo la participación de las comunidades y poblaciones directamente afectadas, legítimamente representados por sus organizaciones de base, así como la de actores con conocimiento técnico-legal que respalden a las comunidades en conflicto.

Que, la CONACAMI a la fecha tiene registrado 42 conflictos mineros, siete de los cuales están catalogados como críticos. En su mayoría son por violación de los derechos al territorio, al medio ambiente, derecho a la salud y derecho a la vida de los pobladores de las comunidades. Entre los conflictos más emblemáticos podemos señalar:

- El caso de las comunidades de Yanta (Ayabaca), Segunda y Cajas (Huancabamba) en PIURA que sufren la violación del derecho al territorio y el riesgo de afectación de las cuencas hidrográficas por el proyecto minero Río Blanco de la Minera Majaz (Monterrico Metals).
- El caso La Zanja en CAJAMARCA por violación del derecho al territorio por parte de la Cia. Minera Buenaventura.
- El Caso San Cirilo y la Quinuaanacocha.
- Caso Huaraz en ANCASH, cuya población demanda el pago por evasión tributaria para del desarrollo regional por parte de Minera Barrik.
- Caso Secclla en HUANCAVELICA por violación del derecho al territorio por parte de Minera Pampamali.
- Caso Alto Chicama (LA LIBERTAD), en donde se ha incumplido procedimientos adecuados para la aprobación de los estudios de impacto ambiental, que constituyen una violación de los derechos a la consulta previa e informada por parte de Minera Barrik y Misquichilca.

Por tanto

PRIMERO.- Exigimos al Gobierno, a los Ministerios de Energía y Minas, de Agricultura y de Salud, el cumplimiento del acta suscrita el 8 de julio del 2002 y la dación del Decreto Supremo para la inmediata instalación de la Comisión de Diálogo Tripartito de Alto Nivel, espacio que debe servir para resolver los diversos conflictos entre comunidades y mineras.

SEGUNDO.- Pedimos al Estado Peruano y a las organizaciones de Derechos Humanos garantizar el respeto a la vida y la integridad física de nuestros dirigentes y sus familiares, en todas las regiones del Perú, especialmente en las zonas en conflicto.

TERCERO.- Expresamos que de agudizarse cualquiera de los conflictos será de entera responsabilidad del Gobierno y de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) que no tienen iniciativa ni el interés para resolver los conflictos.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
CONACAMI PERU

CONACAMI insiste en el diálogo para solucionar conflicto minero

Consejo Directivo de CONACAMI
Lima, 1 de agosto de 2005

Ante los lamentables sucesos ocurridos esta mañana en el distrito de Carmen de la Frontera, en Huancabamba, Piura, donde han ocurrido enfrentamientos entre policías y comuneros y ronderos con un saldo de varios heridos graves, desde la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI Perú, hacemos de conocimiento público:

- Como CONACAMI hicimos todos los esfuerzos para evitar actos de violencia entre los comuneros de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio con efectivos de la Policía Nacional. Con ese sentir impulsamos, integramos y participamos en la Comisión de Paz y promoción del diálogo que viajó a la zona para iniciar el proceso y garantizar la integridad física de los comuneros, ronderos, policías y trabajadores de la minera.
- Sin embargo, dicha comisión –integrada también por el obispo de Chulucanas, Daniel Turley, y el representante de Oxfam América, Javier Aroca– no recibió del Ejecutivo el apoyo necesario para cumplir con su misión. Al contrario, el viernes último, los comisionados, durante todo el día, fueron abandonados y aislados en el sector denominado Pan de Azúcar mientras ocurría un primer enfrentamiento muy cerca del campamento de la minera Majaz que dejó cuatro heridos. Al día siguiente fueron trasladados a Huancabamba, donde tampoco se les brindó apoyo para llegar a la zona de conflicto a pesar de sus múltiples esfuerzos por cumplir la misión humanitaria.

- Desde entonces advertimos del peligro de la agudización del conflicto y de la eventual ocurrencia de un nuevo enfrentamiento, en vista que los comuneros y ronderos de Ayabaca se sentían burlados porque nunca pudieron contactarse con la Comisión de Diálogo y Paz, y porque las autoridades del Ministerio de Energía y Minas ofrecieron viajar recién el lunes para atender sus demandas. CONACAMI pidió que el viceministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se traslade de inmediato a la zona del conflicto.

- Esta madrugada, primero de agosto, entre las seis y siete de la mañana, según informó desde el lugar de los hechos el corresponsal de Radio Cutivalú de Piura, unos dos mil comuneros y ronderos se enfrentaron con los policías. Dio cuenta de varios heridos, en su mayoría ronderos y campesinos. "Es un panorama de guerra", alcanzó a decir el periodista antes de interrumpir la transmisión por efectos de las bombas lacrimógenas.

- Toda esta violencia, estamos seguros, no se habría producido si la Comisión de Diálogo y Paz hubiera entablado contacto con los comuneros y escuchado sus demandas dado que ello era el acuerdo y el encargo que se le había encomendado.

- Nuevamente hacemos un llamado al presidente Alejandro Toledo y a los ministros del Interior y de Energía y Minas, así como a la empresa Majaz para que se instale con celeridad una nueva instancia de diálogo a la que tengan acceso los comuneros y ronderos que permanecen en el campamento minero y recoja de ellos sus planteamientos y se resuelva el conflicto.

- Cualquier lentitud a la atención del conflicto tendrá consecuencias graves. El conflicto se extiende y agudiza. Por ello reiteramos el llamado al diálogo y la paz que debe retornar cuanto antes a Huancabamba.

CONACAMI pide reglamentar el proceso de consulta para el desarrollo de la actividad minera en territorio comunal

Entrega al Congreso propuesta de ley como alternativa de solución a los conflictos mineros

Nota de prensa de CONACAMI Lima, 8 de setiembre de 2005

Para contar con un instrumento de solución y prevención de futuros conflictos mineros, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería –CONACAMI-Perú– pidió al Congreso de la República que apruebe el reglamento del proceso de participación y consulta para el desarrollo de actividades mineras en territorios comunales estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT.

El pedido fue formulado por el presidente de CONACAMI-Perú, Miguel Palacín Quispe, al presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Walter Alejos, a quien

entregó una propuesta de ley del referido reglamento elaborado por su organización social que representa a pueblos y comunidades indígenas de 18 regiones del país.

La participación y consulta a los pueblos y comunidades indígenas para que participen y decidan voluntariamente sobre la pertinencia de realizar actividades mineras en su territorio es un derecho que le es reconocido por el Convenio 169 de la OIT, que el Perú está obligado a acatar desde 1993.

Sin embargo, desde ese entonces, ninguno de los gobiernos ha respetado ese derecho a pesar de que su vulneración es el origen de la mayoría de los conflictos mineros. Por eso resulta sumamente necesario no sólo aprobar el referido reglamento sino también emprender políticas públicas para la utilización de los recursos naturales pero que estas sean acordes con un desarrollo sostenible.

Miguel Palacín también entregó al congresista Alejos un proyecto de ley para la creación de la Defensoría Adjunta en Asuntos Mineros, cuya tarea será la resolución de conflictos por la actividad minera, considerando que no existe un órgano especializado que asuma de manera imparcial e independiente la defensa de las comunidades cuando sus derechos son violentados por la actividad minera.

CONACAMI, asimismo, entregó ambas propuestas al representante del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos–INDEPA, Luis Huarcaya, para que esta institución las evalúe y respalde su aprobación.

Declaración del III Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería de la Argentina

Andalgalá, Catamarca
14 de agosto de 2005

A casi diez años de la puesta en marcha del primer emprendimiento minero a gran escala en nuestro país –Minera Alumbrera en la Provincia de Catamarca–, la Red de Comunidades Afectadas por la Minería de Argentina manifiesta que:

I- Reafirmamos plenamente las declaraciones de noviembre de 2003 en Buenos Aires, y de abril de 2004 en Tafí del Valle (Tucumán).

II- La Gran Minería no significa otra cosa que un plan de entrega total e irrestricto de nuestros recursos minerales, nuestras tierras, y la afectación y contaminación de nuestras reservas de agua dulce y los ecosistemas en todo el territorio nacional.

III- Todos los emprendimientos se localizan en zonas de fuentes y cursos de agua: glaciares, humedales, mallines, vertientes, arroyos, ríos, lagos y lagunas, de donde las poblaciones toman directamente el agua para sus actividades vitales. La Gran Minería consume millones de litros de agua por día, y la devuelve contaminada al ambiente.

IV- Esta actividad sólo es posible en el país porque está legitimada e incentivada por un marco legal colonialista, que consagra un régimen brutal de beneficios y exenciones fiscales a las empresas mineras, discriminatorias de todas las actividades productivas sustentables, que son realmente el motor de nuestras economías regionales.

V- La Gran Minería es incompatible con cualquier otro tipo de actividad social y económicamente sustentable, y cultural y ecológicamente sostenible, e impide su desarrollo a futuro en los lugares donde hubo emprendimientos mineros.

VI- Estos emprendimientos se imponen a espaldas de la población: a) no se brinda la información pública que el Estado tiene obligación de otorgar; b) se manipulan y falsean las verdaderas consecuencias que provocan los emprendimientos mineros; c) se impide la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Por todo ello, exigimos a los Poderes del Estado:

1) La inmediata paralización de todos los emprendimientos mineros a gran escala en marcha, en cualquiera de sus etapas, y la suspensión de nuevos permisos y concesiones bajo el régimen legal actual.

2) La reparación integral de los daños y perjuicios ya causados, sin la afectación de dineros públicos.

3) La Nulidad y Derogación del Régimen Legal Minero actual, y la elaboración de un nuevo régimen, con participación de las Comunidades.

4) La inmediata aplicación de la Legislación Indígena comprendida en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (ratificado por el Congreso Nacional) que consagra la Autodeterminación de los Pueblos Originarios sobre sus Territorios y su desarrollo.

5) Que se garantice a la ciudadanía el acceso a la Información Pública sobre la actividad minera.

6) Que se garantice la participación de las comunidades en los procesos de toma de decisión respecto a la evaluación y aprobación de emprendimientos mineros.

7) La impulsión de todas las causas judiciales concernientes a la contaminación ambiental y otros delitos provocados por la minería, y de las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos de aquellos que se oponen a la minería.

8) Libertad y desprocesamiento de los luchadores sociales perseguidos por su oposición a la actividad minera.

Este documento ha sido redactado y avalado por las siguientes comunidades participantes en el Encuentro: Vecinos Autoconvocados de Andalgalá (Catamarca), Vecinos Autoconvocados de los Valles Calchaquíes (Santa María –Catamarca, Salta, Tucumán), Vecinos Autoconvocados de Belén (Catamarca), Vecinos Autoconvocados de Catamarca, Movimiento de

Autoconvocados de Concepción (Tucumán), Jóvenes Autoconvocados de Andalgalá (Catamarca), Jóvenes Autoconvocados de Santa María (Catamarca), Jóvenes Autoconvocados de Belén (Catamarca), Intersectorial de Tafí del Valle (Tucumán), Comunidad Indígena de Tafí del Valle (Tucumán), Federación Ambiental de Tucumán, Pro-Eco-Tafí Viejo (Tucumán), Comunidad Indígena de Quilmes (Tucumán), Comunidad Indígena de Santa María (Catamarca), Comunidad Indígena de Concepción, Comunidad Indígena de Amaicha del Valle (Tucumán), Comunidad Indígena de Ingamana (Catamarca), Colegio de Abogados de Catamarca, Asociación de Prestadores de Turismo Aventura (San Juan), Frente Cívico por la Vida (San Juan), Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Neuquén, Río Negro, Chubut y Patagones por el no a la minería contaminante, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel (Chubut).

Cronología del conflicto
Mayo-agosto 2005

Movimientos sociales y recursos naturales en América Latina: resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas[1]

José Seoane

Los pueblos de la América latina y caribeña habitan un territorio en el que crecen el 25% de los bosques y el 40% de la biodiversidad del globo. Casi un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y guarda en sus entrañas el 27% del carbón, el 24% del petróleo, el 8% del gas y el 5% del uranio. Y sus cuencas acuíferas contienen el 35% de la potencia hidroenergética mundial. La extensión de las contrarreformas neoliberales a toda la región durante la década de los noventa, las más recientes olas de libre comercio (con las iniciativas de control militar y gobernabilidad sistémica que las acompañan) y el incremento de la demanda del mercado mundial durante el último año hicieron de la explotación de estos recursos naturales (intensiva, orientada a la exportación y, en gran parte, bajo control del capital transnacional) una de las fuerzas centrales de la recuperación del crecimiento económico regional, afirmando este modelo societal. Por otra parte, frente a sus devastadoras consecuencias sobre el medio ambiente

y el hábitat de pueblos y comunidades enteras, y a la apropiación privada de esas riquezas y de los beneficios resultado de su explotación, un sinnúmero de movimientos sociales, coordinaciones, conflictos y resistencias se han desplegado en los últimos años en toda la región construyendo alternativas y promoviendo horizontes emancipatorios (ver el artículo de Enrique Leff en este número). El presente artículo, que –como es habitual– quiere servir como introducción a la lectura de las cronologías del conflicto social acontecido durante el segundo cuatrimestre de 2005, intenta presentar un panorama de estas experiencias en el período reciente. Se inicia con un análisis de las características que presenta la conflictividad social en dicho lapso, para referir luego a los principales conflictos, sujetos y organizaciones, sus particularidades y el contexto político y regional donde los mismos se inscriben.

El mapa del conflicto social en América Latina

Estos procesos que jalonan el segundo cuatrimestre de 2005 ocurren en un contexto de relativo crecimiento de la conflictividad social. En relación con los hechos de conflicto registrados para el primer cuatrimestre del año, la misma se incrementa en un 8% (2.302 protestas), alcanzando valores similares a los obtenidos para el período mayo-agosto de 2004. El análisis de la distribución regional de estos conflictos permite señalar su crecimiento por segundo cuatrimestre consecutivo en el área comprendida por los países andinos, siendo que esta concentra –como viene sucediendo en los últimos dos años– la mayor proporción de las protestas relevadas (un 40%). En este caso, el incremento de la conflictividad social expresa particularmente el significativo aumento en Venezuela y Bolivia, mientras que disminuye en Ecuador (-20%), Perú (-13%) y Colombia (-8%).

Sin embargo, los cambios más relevantes en este nivel del análisis aparecen en las regiones Sur y Norte. En el primer caso, luego de tres cuatrimestres consecutivos de descenso, la conflictividad social registra un crecimiento importante (30%) entre los meses de mayo y agosto de 2005, resultado de los procesos de conflictos sociales en Uruguay, Argentina y, en menor medida, Chile; que compensa la disminución registrada en Paraguay. En el caso de la región Norte, los hechos de protesta registrados por el OSAL para este período muestran una caída (-8,7%) respecto del importante crecimiento que había caracterizado la realidad sociopolítica de esta región durante el primer cuatrimestre del año. Este señalamiento, sin embargo, abarca disímiles situaciones. Mientras la disminución de la conflictividad en la comparación intercuatrimestral (I y II de 2005) es significativa en cuatro países (El Salvador, México, Guatemala y Nicaragua), la misma crece significativamente en Panamá y, en menor medida, en Costa Rica y Honduras; permaneciendo en el resto relativamente estable.

Finalmente, en relación a los sujetos que protagonizan estos conflictos, es importante señalar que respecto del primer cuatrimestre de 2005 se incrementan, en este caso, aquellos impulsados por los asalariados urbanos ocupados (30%), tanto en lo que respecta a los trabajadores del sector público (29%, particularmente las series de protestas de los docentes) como del sector privado de la economía (37%, especialmente de ocupados en la industria). El conjunto de estos conflictos representa aproximadamente un cuarto del total registrado para el presente período, porcentaje que se eleva al tercio si consideramos también los que resultan de la acción de trabajadores desocupados. En el mismo sentido es necesario considerar el crecimiento de las protestas multisectoriales y de las llevadas adelante por los propietarios del transporte (pequeños y medianos, relacionadas con los incrementos del precio de los combustibles) y los estudiantes.

"El conflicto social por los recursos naturales, particularmente centrado alrededor de los hidrocarburos, habrá de asumir en la experiencia de la región Andina de los últimos años una creciente proyección política nacional"

Hidrocarburos, conflicto social y alternativas societales en la región Andina

El conflicto social por los recursos naturales, particularmente centrado alrededor de los hidrocarburos, habrá de asumir en la experiencia de la región Andina de los últimos años una creciente proyección política nacional. En más de un sentido, la experiencia venezolana reciente resulta un ejemplo de ello. En oportunidades anteriores en las páginas de esta revista se ha analizado el ciclo de movilizaciones, golpe de estado y *lock out* patronal que confrontó, entre otras cuestiones, a la política petrolera y la reforma de la empresa estatal promovida por el gobierno del presidente Chávez en Venezuela, así como el papel que cumple en el desarrollo de la política social (particularmente las llamadas "misiones") de dicho gobierno la apropiación pública de la renta petrolera. En el marco del crecimiento de la conflictividad social a lo largo del segundo cuatrimestre y de la campaña electoral motivada por la renovación de las autoridades municipales, las acciones callejeras de la oposición y el oficialismo habrán de incrementarse, siendo que el resultado

de dichas elecciones otorgará nuevamente un significativo triunfo a las fuerzas bolivarianas, que obtendrán aproximadamente el 75% de los cargos en disputa. Sin embargo, en este caso –prolongando una tendencia del último período–, el aumento del conflicto expresa particularmente un conjunto diverso de acciones que, en su mayoría, tienden a reflejar en términos sociales la matriz de la polarización política antes referida. Por un lado, el proceso de reforma agraria impulsado por el gobierno –que inicia la expropiación y entrega de tierras– tiene su contraparte en las movilizaciones e iniciativas asumidas por las organizaciones campesinas y las respuestas de propietarios y latifundistas. Por otro lado, se destacan también en distintas ciudades del país una serie dispersa y localizada pero numerosa de protestas de vecinos de barriadas populares (particularmente cortes de calles) en reclamo del mejoramiento del servicio eléctrico, cloacas y calles; las acciones impulsadas por los trabajadores de la salud y empleados públicos y por los estudiantes; la serie de conflictos y motines carcelarios (en reclamo de mejores condiciones y derechos), así como distintas protestas frente a la aplicación del SISDEM (Sistema de Democratización del Empleo) en la empresa petrolera estatal (PDVSA).

En el caso de Bolivia, de la "Guerra del Agua" (Cochabamba, 2000) a la "Guerra del Gas" (2003), la disputa social por la propiedad y distribución de los beneficios obtenidos de la explotación de la riqueza hidrocarburífera se ha transformado también y de manera creciente en el centro de la lucha política, articulándose a su alrededor las diferentes fuerzas y coaliciones sociales. En este caso, como resultado de la intensificación del proceso de confrontaciones sociales que venía desplegándose en los meses anteriores, durante mayo se sucederá en este país una creciente polarización y movilización social alrededor de la sanción de la nueva ley de hidrocarburos que convocará tanto a un amplio arco de movimientos sociales –en pos de la nacionalización de dicho recurso y de una mayor imposición tributaria sobre su explotación– como a las elites y los Comités Cívicos de los departamentos petroleros, quienes bregarán por la impugnación de dicha legislación y el reclamo de autonomía política para sus regiones. La profundización de esta confrontación habrá así de desencadenar la renuncia del presidente Carlos Mesa (6/6) y finalmente la instalación (9/6) de un gobierno de transición a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé (sobre este proceso pueden consultarse los artículos de Carlos Vacaflores y Pilar Lizárraga, y de Luis Tapia, en este número del *OSAL*). Es este período de poco más de un mes el que comprende el 58% de los conflictos registrados por el OSAL para el segundo cuatrimestre de 2005. A partir de allí el horizonte de las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas, en principio, para diciembre próximo irá absorbiendo la energía de los movimientos sociales, las representaciones políticas y las elites; proyectando la confrontación al escenario electoral.

En relación también con el petróleo, durante el mes de agosto, Ecuador estuvo atravesado por un proceso de conflictos impulsado por las poblaciones de las provincias petroleras

amazónicas de Sucumbíos y Orellana que, aunque de menor intensidad y significación que el acontecido en Bolivia, por el contexto político-social en el que se origina y desenvuelve permite vislumbrar similitudes y diferencias. La lucha contra la contaminación y los abusos de las empresas petroleras y el reclamo por la apropiación de los beneficios –o de parte de estos– que las mismas obtienen (ver sobre ello el artículo de Pablo Ortiz-T. en este número) motivaron en el pasado diversas y recurrentes protestas de las comunidades de estas regiones que también se manifestaron entre los meses de mayo y junio[2]. A lo largo de estos meses la cuestión petrolera también hubo de transformarse en uno de los temas del debate político ecuatoriano alrededor de la reforma al FEIREP (Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público) promovida por el ministro de Economía Rafael Correa –integrante del gobierno de Alfredo Palacio que sucedió a la caída de Gutiérrez en abril de 2005– y que aspiraba a incrementar la proporción de los recursos fiscales destinados a la política social obtenidos de la actividad petrolera, en desmedro de aquellos dirigidos al pago de la deuda externa. La renuncia del ministro Correa a principios de agosto, en el marco de la negociación con el FMI y tras la decisión del BM de suspender un préstamo, motivará una nueva protesta de los llamados "forajidos" –principalmente en la ciudad de Quito– que, sin embargo, parecerá no alterar la tendencia de los cambios gubernamentales. Lejos de los centros urbanos de Quito y Guayaquil, en las provincias de Sucumbíos y Orellana –donde la actividad petrolera se combina con las tensiones y operativos alrededor de la frontera con Colombia–, la renuncia del referido ministro y el pedido de caducidad del contrato de la empresa petrolera norteamericana Occidental (OXY) formulado por el presidente de Petroecuador, antes de renunciar él también, precipitarán el reinicio de la protesta de las poblaciones amazónicas. La convocatoria al paro regional por la Asamblea Biprovincial iniciado el 14 de agosto que habrá de suponer el despliegue de un conjunto diverso de acciones (ocupación del aeropuerto y de pozos petroleros, corte de las principales carreteras) y la respuesta gubernamental de militarizar la región y detener a las autoridades y líderes del conflicto intensificarán el mismo hasta la suspensión del paro (20/8) y la firma de un acuerdo (25 y 30/8) que prevé la construcción de carreteras y el cobro provincial de parte de los tributos pagados por las empresas petroleras (ver el artículo de Esperanza Martínez en este número).

Integración regional y tratados de libre comercio en el Área Andina

Durante este período el gobierno venezolano despliega una energía particular en relación con la concreción de proyectos de integración con diferentes países y regiones de América Latina, particularmente en el sector petrolero, inspirados en la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). En este sentido, la I Cumbre Energética del Caribe (Puerto La Cruz, Venezuela, junio) avanza en acuerdos de intercambio preferencial de petróleo y redundará en los meses siguientes en la creación y puesta en mar-

cha de la empresa regional Petrocaribe; posteriormente, en el marco de la XVI Cumbre de Presidentes de la Comunidad Andina (Lima, Perú, 18/7), el gobierno venezolano promoverá en la declaración final la propuesta de avanzar en la conformación de Petroandina; y finalmente –luego de sendos acuerdos de suministro e inversión en el sector petrolero firmados en agosto con Argentina y Uruguay– en el marco de la II Cumbre de Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones (Brasil, septiembre) habrán de celebrarse distintos acuerdos entre las empresas petroleras de Venezuela (PDVSA) y Brasil (PETROBRAS), todo ello en la orientación de avanzar en la puesta en marcha de Petrosur. Esta intensa iniciativa del gobierno bolivariano en relación a proyectos sectoriales de integración regional –que mereció en este caso el acápite de "diplomacia petrolera"– está lejos de circunscribirse a acuerdos alrededor de los hidrocarburos. Vale señalar como ejemplo que a partir de mediados de julio habrá de iniciar sus transmisiones el emprendimiento televisivo regional Telesur.

De manera simultánea los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador (con Bolivia en calidad de observador) avanzan en la elaboración del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. En el período bajo estudio tienen lugar dos rondas de negociaciones (la X, durante el mes de junio, en Guayaquil; y la XI, en julio, en Miami). Del conjunto de las protestas y movilizaciones contra estos acuerdos se destacan las motorizadas por el sector agrícola. En Perú tendrán lugar un paro agrario nacional de 48 hs (mayo) de la CONVEAGRO (Convención Nacional del Agro Peruano) y un paro de todas las organizaciones agrarias y campesinas (julio); y en Colombia la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria realizará una consulta popular arrocera contra el TLC (julio) que rechaza la inclusión de este cultivo en las negociaciones. Como resultado de estas protestas la cuestión agraria motiva diferentes reuniones bilaterales que, tras su fracaso, parecen postergar este tema hacia el tramo final de la negociación. Por otra parte, la negativa norteamericana a acceder a los mínimos

"En Colombia la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria realizará una consulta popular arrocera contra el TLC (julio) que rechaza la inclusión de este cultivo en las negociaciones"

requerimientos planteados por los gobiernos andinos provocará la renuncia del equipo de negociadores colombiano del Ministerio de Protección Social y la prolongación de las negociaciones en la previsión de una última ronda en noviembre próximo. Aun en este contexto, los presidentes Uribe (Colombia) y Toledo (Perú) ratifican su voluntad y decisión de culminar lo más rápido posible la negociación del TLC. En este proceso diferentes autoridades norteamericanas visitan estos países; entre ellas, el secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, se reúne con el presidente del Perú (en momentos en que se desarrolla el conflicto cocalero en diferentes regiones del país), y el jefe del Comando Sur realiza sendos viajes a Ecuador (junio y agosto) promoviendo la resolución de los diferendos surgidos recientemente en relación a la fumigación con glifosato y el control coordinado de la frontera entre ambos países, iniciativas del llamado Plan Andino. En el caso de Colombia, la aprobación del proyecto de ley llamado "de justicia y paz", que otorga marco jurídico a las negociaciones entre el gobierno y los paramilitares y protege a estos de posteriores juicios, despierta nutridas críticas en el ámbito nacional e internacional. En el mismo período, la aprobación norteamericana del paquete de ayuda exterior autoriza un nuevo financiamiento para el gobierno colombiano, y la certificación de "buena conducta" en el terreno de los derechos humanos permite la liberación de asistencia a las fuerzas armadas en el marco de una reorganización de los comandos militares. Como ya señalamos, en el período analizado la conflictividad social en Colombia disminuye; no obstante ello, resultan significativas las protestas y movilizaciones del sector de la salud pública –contra el cierre de hospitales y centros sanitarios y por aumento salarial– así como de la comunidad educativa en defensa de la educación pública y contra su privatización[3].

Conflictos sociales y explotación minera

A lo largo de la década del noventa y en el marco de las políticas de desregulación, privatización e incremento de inversiones extranjeras, la actividad minera en Perú –orientada a la exportación– se incrementó significativamente llegando a sextuplicarse la superficie destinada a estos emprendimientos. Las gravosas consecuencias (contaminación de ríos y tierra, desplazamientos) que dicha actividad descargó sobre las comunidades rurales y urbanas y su pauperización –contrastante con el crecimiento de las ganancias empresarias– marcaron la persistente emergencia de protestas y conflictos que conllevaron a la creación de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI, 1999 y 2003[4]) que agrupa más de 1.500 comunidades rurales y urbanas de 18 regiones del Perú. Según los registros de la CONACAMI existen actualmente en Perú 42 conflictos planteados alrededor de las explotaciones mineras, 7 de los cuales pueden considerarse críticos (ver al respecto la declaración de CONACAMI del 25/7, incluida en la sección Documentos de este número). De aquellos que tienen lugar a lo largo de este

segundo cuatrimestre de 2005 (entre ellos en las provincias de El Espinar, Tambobamba y la región de Cajamarca) se destaca el protagonizado por comunidades de las provincias de Ayabaca y Huancabamba (Piura) contra el proyecto Río Blanco de la minera Majaz propiedad de la empresa inglesa Monterrico Metal. Dicho proyecto, destinado a la extracción de cobre y otros minerales, afecta las cuencas hidrográficas de la región, amenazando la vida y la actividad agrícola de las comunidades campesinas. Hacia fines de julio, comuneros de dichas provincias y de Jaén y San Ignacio (Cajamarca) inician una masiva marcha hacia el campamento minero de Majaz exigiendo el retiro de la empresa y ser incluidos en la mesa técnica de diálogo convocada por el gobierno. Frustrados los intentos de establecer un diálogo ante la falta de voluntad gubernamental, el arribo de la marcha a las proximidades del campamento minero enfrenta una violenta represión policial que el 1º de agosto cobra trágicamente centenas de heridos y por lo menos un comunero muerto. Los conflictos se suceden en la zona, llegando los comuneros a detener a trabajadores de la mina para evitar su funcionamiento. A pesar de ello y del paro interregional en las provincias de Huancabamba, Jaén y Ayabaca (18/8), la actividad de la empresa Majaz continúa.

Aun en un contexto de relativo descenso de la conflictividad social (-13%) se destacan también en Perú las protestas, movilizaciones y paros territoriales promovidos por los movimientos de campesinos cultivadores de coca (o "cocaleros"). Entre estos, aunque en un marco de divisiones al interior del movimiento, vale señalar el paro territorial que entre fines de junio y principios de julio llevan adelante miles de productores de los valles de la selva central contra las políticas de erradicación del cultivo y el tratado de libre comercio con EE.UU., y la serie de conflictos protagonizados por el movimiento cocalero del Valle del Monzón (provincia de Huamalíes, departamento de Huanuco). Como resultado de estas protestas, distintos gobiernos regionales (Huanuco y Cusco) dictan diferentes medidas que legalizan en algunas regiones el cultivo de coca, así como otros (Ucayali) deciden retirarse del acuerdo de erradicación de cultivos promovido por DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) con el patrocinio de la agencia norteamericana AID (Agency for International Development)[5].

Los conflictos frente a los emprendimientos mineros resultan también significativos en los últimos años en Mesoamérica, en particular en Guatemala. En este caso, y en el marco de distintos conflictos locales contra la entrega de licencias mineras, se destaca el de Sipacapa, donde las comunidades al mismo tiempo reclaman la realización de un plebiscito sobre la explotación minera en la zona y realizan una consulta popular (18/6) que mayoritariamente rechaza la misma. Tienen lugar también en el occidente del país distintas convocatorias y la constitución de coordinaciones contra la explotación minera (por ejemplo en Sololá y Huehuetenango, distritos donde hubo recientemente importantes protestas). Conflictos similares se extienden y recorren todo el cinturón de sierras y mon-

tañas latinoamericanas y se hacen presentes en Chile (en junio tendrá lugar una jornada nacional contra la destrucción ambiental y la injusticia social) y en Argentina (ver artículo de María Celia Cotarelo en este número), donde se destaca la realización, en agosto, en Andalgalá, provincia de Catamarca, del III Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería de la Argentina (ver declaración en la sección Documentos en el presente *OSAL*).

Libre comercio, privatización y recursos naturales en Mesoamérica

La iniciativa norteamericana de consolidar y profundizar la integración subordinada de la región mesoamericana a partir de acuerdos de libre comercio fructifica, en este período, en los avances obtenidos en relación al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y el DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana). En el primero de los casos, nuevos acuerdos sobre comercio, carreteras y pasos transfronterizos son suscriptos en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Ottawa, Canadá, junio) conocida bajo el apelativo de TLCAN Plus. Por otra parte, luego de una prolongada labor de *lobby*, el gobierno norteamericano obtiene la ratificación del DR-CAFTA en el Senado (54 a 45 votos, 30/6) y, en una más ajustada votación, en la Cámara de Representantes (217 a 215 votos, 27/7), promulgando la ley respectiva a principios de agosto. La refrendación parlamentaria de este acuerdo por parte de EE.UU. –siendo que sólo resta similar ratificación en tres de los países signatarios: Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana[6]– habrá de expresarse también en la dinámica que adquieren las iniciativas de integración en el terreno de la infraestructura (Plan Puebla Panamá-PPP) y las fuerzas de seguridad. Así, en el marco de la VII Cumbre de Presidentes de Centroamérica, México, Colombia y República Dominicana se acuerda destinar mayores fondos para el PPP, y diferentes tipos de préstamos son otorgados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y distintas agencias del gobierno norteamericano a algunos de los gobiernos del istmo. En relación con las fuerzas policiales y militares, la XXVI Asamblea Ordinaria del Sistema de la Integración Centroamericana (Honduras, junio) formula acuerdos para la creación de una fuerza regional contra el terrorismo y la entrega rápida de delincuentes (sólo Costa Rica se abstiene de suscribir los mismos) y Guatemala y Honduras coinciden en la creación de una fuerza binacional de seguridad. Los progresos en el orden de consolidar la coordinación de las fuerzas de seguridad, bajo iniciativa norteamericana, habrán de expresarse también en los intentos de profundizar diagramas represivos al interior de estos países. En este sentido, vale resaltar las denuncias formuladas por la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría de Derechos Humanos de Honduras frente a la implementación de la segunda fase del llamado "Plan Super Mano Dura" que, justificado en la persecución de las bandas juveniles conocidas como maras, es señalado como restrictivo de las libertades democráticas y como un retroceso respecto de las garantías

constitucionales. En similar sentido, sucesivos ataques a locales y activistas de organizaciones sociales tienen lugar en Guatemala.

Las resistencias sociales desplegadas frente a los tratados de libre comercio, el PPP y la militarización regional se prolongan también en los conflictos y coordinaciones de movimientos sociales que despiertan las iniciativas empresarias que dichos acuerdos promueven y legalizan. Hemos referido anteriormente a los conflictos y experiencias forjadas por los movimientos sociales frente a las consecuencias de la expansión minera en esta región. También diferentes reformas a la legislación sobre el servicio de agua orientadas a su privatización son impulsadas en distintos países de Mesoamérica (ver el artículo de Gustavo Castro Soto en este número); frente a ello tiene lugar en Guatemala una importante movilización contra los proyectos de Ley General de Aguas y Ley de Concesiones que amenazan con la privatización del agua y los recursos naturales. Asimismo, en este país, se conforma en junio el Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas (ver manifiesto en la sección Documentos del presente *OSAL*). También en Nicaragua organizaciones sociales se movilizan contra el proyecto de Ley General de Aguas, en este caso en el marco de la disputa entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria conformada por el PLC (Partido Liberal Constitucionalista) y el sandinismo. En el contexto de estas luchas regionales habrá de sesionar en junio el Foro Centroamericano del Agua que, pronunciándose contra la privatización del recurso, promoverá la coordinación de manifestaciones nacionales contra estas reformas legales así como el boicot al IV Foro Mundial del Agua que habrá de realizarse en México (2006), donde también tienen lugar diferentes protestas sobre el tema del agua y contra la construcción de represas.

"En el contexto de estas luchas regionales habrá de sesionar en junio el Foro Centroamericano del Agua que, pronunciándose contra la privatización del recurso, promoverá la coordinación de manifestaciones nacionales contra estas reformas legales"

Las propuestas de reformas a la legislación sobre el servicio de aguas y el manejo de los recursos hídricos se extienden también en el resto de América Latina, convirtiéndose en uno de los elementos centrales de lo que dio

en llamarse en el discurso de los organismos internacionales las "reformas de segunda generación". En este caso, en Perú, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CONAGUAVIDA) promueve una movilización nacional en rechazo al anteproyecto de ley del agua aprobado por una comisión parlamentaria, que prevé la privatización del servicio y legitima la contaminación. Por otra parte, en Uruguay se destacan las protestas impulsadas por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) y la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) contra la sanción del decreto presidencial (20/5) que ratifica las concesiones privadas de abastecimiento de agua y saneamiento, contradiciendo el espíritu del último referéndum (31/10/04) donde mayoritariamente la población se manifestó contra su privatización.

Los procesos de conflicto social que describimos en Centroamérica y México, como señalamos en la primera parte de este artículo, se dan en el contexto de un marcado descenso de la conflictividad social. De esta tendencia se eximen tres países: Costa Rica, Honduras y Panamá. En el primero de ellos se destacan la huelga general y movilizaciones contra la ratificación parlamentaria del DR-CAFTA, y aquella que –impulsada por las cámaras empresariales– demanda su aprobación. En el caso de Honduras, prolongando un proceso iniciado ya el cuatrimestre pasado, se despliega una intensa y extendida serie de conflictos estudiantiles (una larga huelga, movilizaciones y cortes de calles) que concluye transitoriamente con la obtención del pago de un bono para transporte (ante el incremento del mismo, resultado del aumento de los precios del petróleo), becas y bonos para gastos de graduación. Pero ciertamente es Panamá donde, en mayor medida, se destaca el crecimiento de la conflictividad social desplegada, desde el cuatrimestre pasado, frente a la propuesta de reforma de la Caja del Seguro Social promovida por el nuevo gobierno de Martín Torrijos (la descripción y análisis de este proceso puede consultarse en el artículo de Marco A. Gandásegui (h.) que incluimos en este número).

Conflictos sociales, gobernabilidad y proyecto imperial en el Cono Sur

Señalamos anteriormente el crecimiento que experimenta a lo largo de este segundo cuatrimestre el conflicto social en la región del Cono Sur (resultado particularmente de las protestas que tienen lugar en Uruguay y Argentina) luego de un período prolongado de descenso (mayo 2004-abril 2005). Este proceso es en buena medida la razón del incremento regional de las acciones promovidas por los trabajadores ocupados y desocupados que presentábamos al inicio de esta contribución, siendo que de estas casi un tercio corresponde a los países del Sur del continente.

En el caso de Uruguay, el importante aumento de los hechos de conflicto registrados por el OSAL para el período bajo estudio (mayo-agosto 2005) interrumpe una tendencia de

disminución de los mismos iniciada a principios de 2004, situándose en este caso en valores similares a los registrados para el segundo cuatrimestre del año pasado. Estas protestas se despliegan fundamentalmente a partir de fines de mayo, luego de las elecciones municipales (8/5) en las que EP-FA-NM[7] triunfa en 8 distritos. Entre ellas se destaca una serie de ocupaciones de fábricas y empresas –particularmente por reincorporación de delegados y trabajadores, pago de haberes o aumento salarial– que, al obtener conquistas en algunos casos, estimulan esta modalidad de lucha[8]. La misma se ampara en la reciente derogación del decreto que permitía a las fuerzas policiales intervenir en este tipo de conflictos, lo que despierta la crítica de las cámaras empresariales. Asimismo, a partir de junio, tienen lugar numerosas protestas (cortes de calle) de vecinos de barriadas populares en reclamo de su inclusión en el recientemente creado Plan Nacional de Emergencia Social (PANES). Como hemos mencionado anteriormente, también se realizan distintas movilizaciones impulsadas por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y el sindicato del sector ante la decisión del gobierno de prorrogar, hasta el vencimiento de sus contratos, las concesiones privadas del servicio de aguas y saneamiento a pesar del resultado del referéndum de fines del pasado año.

El crecimiento del conflicto social en Argentina, en un contexto de crecimiento económico e inflación y en los inicios de la campaña electoral por la renovación de los parlamentos nacional y provinciales, resulta particularmente de las acciones de los trabajadores en demanda de aumento salarial, que comprenden aproximadamente el 45% de las protestas registradas. La mayoría de las mismas (62%) corresponden a empleados del sector público nacional y provincial (donde se destacan las de los trabajadores administrativos del estado y los maestros de distintas provincias); pero es importante el peso de los conflictos protagonizados por los trabajadores del sector privado (38%, dos quintos de ellos resultan en la industria). Más prolongadas e intensas en el sector público, la mayoría de estas protestas obtiene un incremento salarial que, en los mejores casos, permite recuperar el poder adquisitivo erosionado por la inflación. Por otro lado, se incrementan también las acciones promovidas por los trabajadores desocupados (piqueteros) que, si bien recorren todo el cuatrimestre, se intensifican desde mediados de julio cuando la mayoría de las organizaciones piqueteras llevan adelante un plan de lucha nacional en demanda de la universalización del subsidio de desempleo y su aumento a 350 pesos (que lo situaría alrededor de la línea de indigencia). Frente a las jornadas nacionales de cortes de ruta, movilizaciones y acampe en la Plaza de Mayo, y en un clima mediático de criminalización de las protestas, hacia fines de agosto el gobierno nacional moviliza las fuerzas de seguridad para impedir las acciones de estos movimientos[9]. Se destacan también en Argentina los paros y movilizaciones de los docentes y estudiantes universitarios por mayor presupuesto y la derogación de la Ley de Educación Superior sancionada durante el gobierno de Menem (1995), y las intensas y reiteradas movilizaciones (que en repetidas oportunidades cortan el puente internacional) de los pobladores de la ciu-

dad de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos) contra la instalación de dos empresas papeleras transnacionales sobre la ribera uruguaya (Fray Bentos) del río Uruguay que, con menor intensidad, también tienen lugar en el país oriental.

Finalmente, en el caso de Chile, el rechazo a la Ley de Financiamiento de la Educación Superior –que habilita al privado a intervenir en el otorgamiento de préstamos para el pago de aranceles– motivará diferentes protestas y movilizaciones de los estudiantes universitarios[10], así como también se registran acciones impulsadas por mapuches por posesión de tierras.

En un contexto de disminución del conflicto en Paraguay, luego de las importantes protestas campesinas por entrega de tierras que recorren el pasado año y que fueron acalladas por una significativa represión estatal, en este cuatrimestre se destacan las movilizaciones impulsadas por la coordinadora Frente de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional contra la propuesta de ley de privatizaciones que finalmente es dejada de lado, por lo menos hasta el momento. En este caso, y en su estrategia continental, uno de los más importantes logros obtenidos por el gobierno norteamericano en la región ha sido, sin dudas, la aprobación parlamentaria en Paraguay (5/5) de inmunidad (estatus diplomático) para su personal militar y de un intenso calendario de intercambio militar, ingreso de efectivos y operativos conjuntos (sobre sus características e implicancias geopolíticas ver el artículo de Ana Esther Ceceña y Carlos Ernesto Motto en este número). Si sumamos a ello las declaraciones del vicepresidente paraguayo, luego desmentidas, en relación con la voluntad de negociar un TLC con EE.UU., y las tratativas, actualmente postergadas, sobre un tratado de protección mutua de inversiones entre Uruguay y el país del Norte, pueden visualizarse algunas líneas de la estrategia estadounidense en el Sur del continente en el marco de las divergencias y dificultades que parecen atravesar al MERCOSUR (bloque que, junto a la negativa venezolana, se constituyó en uno de los obstáculos al desarrollo del proyecto norteamericano del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA).

En este sentido, vale considerar también la crisis que afecta al gobierno del presidente Lula en Brasil, tras el escándalo del manejo ilegal de fondos que compromete a dicho gobierno, cuyas primeras denuncias aparecen a mediados de mayo para intensificarse a lo largo del cuatrimestre y conllevan, entre otras, la renuncia (16/6) del jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu, y del presidente y secretario del Partido de los Trabajadores, PT (9/7) (para una cronología y análisis de lo sucedido ver el artículo de Roberto Leher en este número). Estos hechos han vuelto público que la dominancia de la política económica ortodoxa y de las reformas neoliberales (Frigotto, 2004) que signó la gestión del gobierno de Lula en estos años –manifestada ya en la elaboración, bajo la presión de los "mercados", de la "Carta a los Brasileros" en 2002 (Leher, 2003)– parece

expresarse también en la continuidad de las formas de la gobernabilidad política tradicionales en Brasil. En este contexto, la conflictividad social se mantiene en similares valores al cuatrimestre pasado; siendo que en mayo se destaca el fin de la movilización nacional promovida por el MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra) en reclamo del efectivo cumplimiento de los compromisos gubernamentales en relación a la entrega de tierras y la reforma agraria (sobre el MST y la lucha contra el *agrobusiness* ver el artículo de Héctor Alimonda en este número); para luego incrementarse las protestas de los trabajadores ocupados, particularmente del sector público, en demanda de recomposición salarial.

A dos meses de la realización de la IV Cumbre de Presidentes de las Américas (Mar del Plata, Argentina) –en el año en que el proyecto estadounidense del ALCA preveía ponerse en marcha–, la dinámica y límites de la ola de libre comercio (y los procesos de militarización social que la acompañan), las nuevas formas que adopta la gobernabilidad neoliberal, así como la persistencia de las resistencias y configuración de alternativas ante estos proyectos, entretejen los desafíos presentes y futuros de las sociedades latinoamericanas y caribeñas.

Bibliografía

Frigotto, Gaudêncio 2004 "Brasil e a política econômico-social: entre o medo e a esperança" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Nº 14, mayo-agosto.

Leher, Roberto 2003 "O governo Lula e os conflitos sociais no Brasil" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 10, enero-abril.

Notas

1 Este artículo es fruto de un trabajo colectivo desarrollado en el marco del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO). Para la elaboración del mismo se han utilizado las cronologías del conflicto social –resultado de una tarea coordinada por el OSAL desde el año 2000 y que abarca el esfuerzo de diferentes investigadores y centros de investigación de la región– y los informes cuatrimestrales respectivos preparados por el equipo del OSAL (Juan Chaves, María Chaves, Sol Denot, Mariana Fassi, Martín Fernández, María José Nacci, Marcelo Perera y Magdalena Rauch). A todos ellos mis agradecimientos y especialmente a Emilio Taddei y Clara Algranati por sus comentarios y sugerencias y a Mariana Fassi por la revisión del texto. Las referencias a los datos cuantitativos sobre las características de la conflictividad social del período resultan del análisis de los resultados de la base de datos elaborada por el OSAL en función de la información suministrada por las referidas cronologías.

2 En este caso, entre otros conflictos, los pobladores de Orellana realizan durante el mes de mayo un paro provincial y ocupan pozos petroleros exigiendo obras de infraestructura, en salud y educación, y en junio, ante el incumplimiento de las promesas oficiales, las

autoridades de ambas provincias amenazan con un paro regional. Asimismo, comunidades campesinas e indígenas se manifiestan reclamando la caducidad del contrato de la empresa petrolera Occidental (OXY).

3 Entre las protestas del sector privado se destaca una prolongada huelga –que se extiende por casi dos meses– realizada por los trabajadores de 7 ingenios azucareros en rechazo a los bajos salarios, la precariedad laboral y la falta de seguridad social.

4 En 1999 tiene lugar el I Congreso Nacional con la participación de 13 departamentos, fundándose la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería. En octubre de 2003 se desarrolló el II Congreso donde se aprobó la constitución de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería.

5 En relación a ello vale señalar que, frente a estas medidas, el recurso judicial interpuesto por el gobierno del presidente Toledo ante el Tribunal Constitucional obtuvo una resolución favorable por parte de este a fines de septiembre.

6 Fuera del período que consideramos, el Parlamento nicaragüense ratificó dicho tratado.

7 Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría.

8 La ocupación de la sede administrativa de la empresa de gas (Gaseba) por trabajadores de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UAO EGAS) a comienzos de mayo en reclamo de la reincorporación de 7 dirigentes gremiales despedidos en 1996, entre otras reivindicaciones, logra un acuerdo favorable una semana después. La resolución del conflicto es considerada por las organizaciones sindicales como un triunfo histórico para el movimiento obrero uruguayo.

9 En relación con la represión de los conflictos, vale señalar el violento desalojo y detención (20/7) de los trabajadores desocupados que habían tomado la planta petrolera de la empresa Repsol-YPF en Cañadón Seco (provincia de Santa Cruz) en reclamo de los puestos de trabajo comprometidos por dicha empresa en un conflicto anterior, que cobra decenas de heridos y detenidos.

10 Vale mencionar que en el período se sanciona la Ley de Control de Armas que, entre otras cosas, habilita a los carabineros a ingresar a las universidades en búsqueda de estudiantes, así como tienen lugar diferentes detenciones de activistas indígenas en el Sur. En el mismo período se reforma la estructura parlamentaria heredada de la dictadura pinochetista derogando, entre otras cuestiones, la figura de los senadores vitalicios y facultades de las FF.AA.

Región Sur

Opção pelo mercado é incompatível com a democracia: a crise no governo Lula da Silva e no PT e as lutas sociais[1]

Roberto Leher

✱ *Profesor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisador do Laboratorio de Politicas Publicas (LPP), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Coordenador do Grupo de Trabalho "Universidade e Sociedade" do CLACSO e do OSAL-Brasil.*

Em 14 de maio do corrente ano, a revista *Veja* denunciou um esquema de corrupção na Empresa Brasileira de Correios que estaria beneficiando diversos políticos, entre os quais o deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ). Pressionado pelas denúncias, este cinzento deputado por seis mandatos pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)[2], denunciou ao jornal *Folha de São Paulo* –FSP– (6/6/05) a existência duma capilarizada rede de corrupção no governo Federal operada a partir do PT. O esquema estaria centrado no pagamento periódico dum montante de recursos (R$ 30 mil) para que deputados de partidos da bancada aliada ao governo Lula da Silva –Partido Progressista (PP), Partido Liberal (PL) e PTB– votassem projetos de interesse do governo. Os recursos mensalmente repassados (denominados de "mensalão") também teriam como objetivo viabilizar a transferência de parlamentares da oposição (Partido da Frente Liberal-PFL e Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB) para os partidos da base governista.

Essas denúncias não são *um raio em céu azul* na política brasileira, reconhecidamente permeável à ação de grupos particularistas que se apoderam de verbas e patrimônio público (vide Collor e Cardoso e as privatizações). A imensa repercussão da crise se deve a uma combinação de fatores, como:

1 O agente da denúncia, o Dep. Jefferson, pertencia à base de apoio ao governo. O seu partido possui um ministério (Turismo) e diversos cargos importantes nas mais capitalizadas empresas públicas do país. Não são, por conseguinte, denúncias provenientes da oposição (PSDB/PFL).

2 Muitas denúncias de Jefferson foram comprovadas por fatos que foram surgindo nos últimos 100 dias com uma rapidez desconcertante, abalando o governo: toda a cúpula do PT caiu e o chefe da Casa Civil teve de se afastar, provocando ampla reforma ministerial em que os setores de esquerda, ainda no governo, saíram perdendo.

3 A crise tem enorme destaque na imprensa, depoimentos de testemunhas e acusados são transmitidos ao vivo pela TV-Câmara e, ademais, as forças políticas também difundem o tema no cotidiano: (i) o campo do capital mantém o apoio a Lula da Silva, mas as tensões são significativas. As forças ligadas ao PFL e ao PSDB, até então sem um discurso para a eleição de 2006, tendo em vista que Lula da Silva opera a agenda desse campo, tenta caracterizar a crise do governo de Lula como "moral" –fruto dum governo "corrupto e incompetente", mas o grande capital segue apoiando o governo, protegendo a sua área econômica; e (ii) o campo da esquerda também está dividido: a) a direção majoritária da CUT, liderada pela mesma corrente que dirigia o PT e que teve de se afastar, saiu em defesa do governo. O MST, embora esteja sustentando o governo, exige mudanças na política econômica. Em comum, afirmam que está em curso uma conspiração das "elites" para derrubar Lula da Silva, ecoando o discurso que o presidente tem feito junto aos pobres; b) setores do PT (como o bloco parlamentar de esquerda que reúne 13 deputados petistas e parte das candidaturas de oposição à corrente majoritária no processo de eleição do próximo presidente do PT) e oposicionistas como PSOL, PSTU, intelectuais, sindicatos etc., criticam a tese da conspiração e, embora com divergências, associam a corrupção às opções políticas-econômicas do governo.

Cronologia comentada da crise

Embora o governo federal tivesse tentado impedir a instalação duma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), após as denúncias de *Veja* e do jornal *FSP*, esta

foi aprovada em 9/6/05. As denúncias ganharam consistência com a declaração da deputada Raquel Teixeira, PSDB-GO de que um deputado lhe ofereceu dinheiro para migrar para a base governista, fato que teria sido relatado pelo governador de Goiás ao Presidente Lula da Silva. Em nova entrevista do jornal *FSP* (12/6), Jefferson identifica o operador dos recursos ilegais do PT, o publicitário Marcos Valério que, segundo ele, atuaria a mando de José Dirceu (ex-presidente do PT e então ministro da Casa Civil), José Genoino (presidente do PT), Delúbio Soares (tesoureiro do PT), Silvio Pereira (secretário geral do PT) e Marcelo Sereno (ex-assessor de Dirceu e secretário de comunicação do PT), todos do chamado "campo majoritário" do PT.

"As denúncias ganharam consistência com a declaração da deputada Raquel Teixeira, PSDB-GO de que um deputado lhe ofereceu dinheiro para migrar para a base governista"

Enfraquecido, José Dirceu renuncia em 16/6 ao cargo de ministro chefe da Casa Civil. A quebra do sigilo bancário de Valério comprova que foram sacados cerca de R$ 21 milhões em espécie das contas das suas empresas (24/6). Em entrevista a imprensa (14/6), a secretária de Valério afirma que este freqüentemente levava cerca de R$ 1 milhão em espécie quando ia a Brasília. Em 2/7 foi comprovado que Valério tomou emprestado junto a um banco (BMG) R$ 2,4 milhões em favor do PT. Dois dias depois, em 4 de julho, foi descoberto que o Banco do Brasil emprestou cerca de R$ 20 milhões ao PT. O Secretário do PT renuncia após ter sido divulgado que ele recebera um Land Rover de presente duma grande empreiteira que presta serviços a Petrobrás. No dia seguinte (5/7), Delúbio pede licença de seu cargo de tesoureiro. Em 7 de julho, foi descoberto um novo empréstimo de R$ 3 milhões ao PT, cujo avalista era Valério e que este pagara uma parcela do empréstimo de R$ 350 mil. No dia seguinte (8/7) é preso um assessor do irmão de Genoino com R$ 200 mil numa mala e US$ 100 mil na sua cueca. O presidente do PT e o secretário de comunicação renunciam no dia seguinte (9/7). Tarso Genro sai do ministério da educação é vai para a presidência do PT, junto com outros dois ministros: Berzoini (trabalho) e Humberto Costa (Saúde).

Em 15 de julho, Valério alega que tomava recursos nos bancos para financiar com recursos ilegais as campanhas do PT, tentado tirar de foco o pagamento mensal aos deputados. O ex-tesoureiro Delúbio confirma a versão e, tacitamente, Lula da Silva também ("todos partidos têm caixa-dois"). A quebra do sigilo bancário revela que deputados e assessores sacavam periodicamente nas contas de Valério, entre os quais o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha e o ex-líder do governo, totalizando 18 parlamentares.

Ao longo do mês de agosto, a CPMI revela uma engenhosa operação envolvendo fundos de pensão das estatais, agências de publicidade, bancos e dirigentes governamentais e partidários do PT e de partidos aliados. Em depoimento à CPMI, o publicitário da campanha, Duda Mendonça, afirma que recebeu R$ 11,5 milhões por seu trabalho via uma *offshore* nas Bahamas (11/8). Considerado uma âncora da estabilidade do governo, o ministro da Fazenda Antônio Palocci é denunciado em 19 de agosto por seu ex-colaborador, Rogério Buratti, de receber "mesada" de R$ 50 mil entre 2001 e 2002, quando foi prefeito de Ribeirão Preto. Lula da Silva afirma que Palocci fica no governo, pois, com sua saída, o governo acabaria. No final de agosto (30) o presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti, declara que o "mensalão" não existe e que o uso de dinheiro ilegal nas campanhas eleitorais é um delito que não justifica a cassação dos mandatos, provocando revolta entre parlamentares. No dia 2 de setembro, o próprio Severino é acusado de receber um pequeno "mensalão" de R$ 10 mil, devendo renunciar nos próximos dias.

Para tornar pensável a crise

Interpretar esses vertiginosos acontecimentos a quente é uma tarefa arriscada. Algumas hipóteses explicativas dos exorbitantes gastos com a campanha eleitoral e da corrupção do legislativo pelo executivo terão de ser apreciadas.

Custos da campanha eleitoral. Vale lembrar que o "marqueteiro" de Lula da Silva sempre esteve associado a campanhas da direita. A campanha milionária do PT se deve, conforme Garcia dos Santos e Francisco de Oliveira[3], à opção pelo aprofundamento da lógica neoliberal e, por isso, a necessidade de substituir a política pelo marketing, instrumento fundamental de controle social pelos donos do poder. Mais difícil é explicar porque o governo precisaria subornar deputados para votar matérias que compõem a agenda do capital (reforma da previdência, parceria público-privada, lei de falências, isenções tributárias para as instituições de educação superior privadas, liberalização dos transgênicos, alienação de terras na região amazônica, ampliação do capital estrangeiro sobre as reservas petrolíferas, etc.) se a maior parte do parlamento representa o capital? Essa indagação é central para tornar inteligível toda a crise.

O "mensalão" foi pago a deputados da base governista, como o PL (partido original do vice-presidente da república), o PP (liderado pelo presidente da Câmara e pelo ex-deputado Paulo Maluf, atualmente preso por corrupção), o PTB de Jefferson (os repasses para o PT majoritário parecem ter sido para o custeio da campanha), bancadas de onde provém a maioria do chamado "baixo clero", deputados obscuros que representam setores mais arcaicos da burguesia.

Uma hipótese é esses setores "arcaicos" estão sendo atingidos pela política econômica neoliberal de Lula da Silva e, por isso, exigem recompensas "por fora" visando os seus futuros mandatos, daí o "mensalão".

De fato, a política econômica vigente hipertrofia o capital financeiro[4], por meio de altas taxas de juros (a maior do mundo), elevados superávits primários (4,6% em 2004 e 7,2% até meados de 2005) e gigantescos pagamentos do serviço da dívida. É indubitável também o apoio ao agronegócio (vide Lei Kandir). Mas muitos perdem com essa política, como os trabalhadores que viram a participação do trabalho no PIB cair de 1995 a 2003, de 38,2% para 35,5% e os setores não inseridos em circuitos do grande capital internacional. Distintamente, os principais representantes do PFL e do PSDB apóiam organicamente essa agenda por suas conexões com o capital financeiro e o agronegócio. Isso explicaria porque suas bancadas não foram atingidas pelo "mensalão" e, principalmente, porque não atacam Palocci e Meirelles.

Quando Palocci foi denunciado, lideranças empresariais de porte como Antônio Ermínio de Moraes, entidades como a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) e os representantes do agronegócio e proeminentes lideranças do PSDB, como o governador de Minas Gerais e o líder do PSDB no Senado saíram em sua defesa.

Se houvesse um real interesse no impeachment de Lula da Silva, esses setores atacariam Palocci e Meirelles que, conforme as palavras de Lula da Silva, se atingidos, acabariam com o governo. E denúncias consistentes não faltam, como remessas ilegais para o exterior (Meirelles) e operação por meio dos fundos de pensão e recebimento de recursos provenientes de empreiteiras (Palocci).

Conforme o secretário do Tesouro, Joaquim Levy: "a crise brasileira é uma crise de país desenvolvido, afeta a política mas não a economia: os lucros das empresas são os maiores em mais de 20 anos"[5]. O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, um dos organizadores dos contatos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve com investidores em New York com representantes de empresas como Citigroup, Ford, Fedex, Shell, Lucent Technologies e Microsoft[6], a crise política não atrapalha o "vigor" da economia brasileira.

Outra evidência importante foi a visita do secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, que chegou ao país quando o governo Lula parecia se desfazer, reunindo a Câmara Americana de Comércio. Snow fez elogios ao presidente Lula e ao ministro da Fazenda e afirmou que enquanto a estabilidade econômica for mantida, o governo e os investidores não devem se preocupar com as denúncias de corrupção e a crise política que atinge o país. Afirmou, ainda, que o ministro da Fazenda "reflete o compromisso do país com boas políticas" e "uma boa economia é aquela na qual o capital circula livremente". Defendeu a retomada da criação da área de livre comércio das Américas (ALCA), citando o acordo dos países da América Central e do Caribe (CAFTA) que, segundo ele, daria outro ímpeto as negociações da ALCA[7].

Grandes empresários têm se reunido para discutir saídas para blindar a economia. Uma das saídas apontadas seria costurar um acordo político que interrompesse a "onda de denuncismo"[8]. O presidente do Bradesco e da FEBRABAN, Márcio Cypriano, o empresário Antônio Ermírio de Moraes e o presidente do BNDES, Guido Mantega, vão na mesma linha: as denúncias de corrupção política não podem parar o Brasil[9].

Os adeptos da tese dum suposto golpe da direita contra Lula da Silva reivindicam a fala do ex-presidente Cardoso que propôs que Lula deveria anunciar que não se candidataria em 2006 e a realmente repugnante virulência da revista *Veja*, um periódico semanal de direita que representa parte do PSDB e é muito vinculada ao capital estrangeiro. Contudo, os ataques diretos a Lula da Silva e Palocci/Meirelles não têm o aval do sistema Globo, o maior do país, cuja tevê (TV Globo) é líder inconteste de audiência. Ao contrário, quando Palocci foi denunciado, deram grande cobertura a favor do ministro.

As críticas do PSDB e do PFL –junto com a revista *Veja*– objetivam atingir principalmente o PT e denunciar "a mediocridade do governo Lula". Quanto mais frágil e debilitado, mais Lula abraça a causa do grande capital (ver proposta de Palocci de provocar uma drástica queda no que restou das barreiras alfandegárias no país, acima inclusive dos marcos da Organização Mundial de Comercio, OMC). E, se Lula da Silva sangrar até a morte, o PSDB estará credenciado para sucedê-lo e dar continuidade à agenda. O capital vence em todas as alternativas!

Existem fortes elementos que corroboram que o capital ainda vê em Lula da Silva um aliado útil, visto que, estando no governo, Lula da Silva é uma garantia de que o transformismo da CUT manterá a central dócil ao capital e às reformas que desmontam os direitos sociais. Tarso Genro, o atual presidente do PT, pediu moderação nas críticas mais duras ao PT, lembrando que, sem este partido, as lutas de classes estariam muito mais aguçadas e abertas e que o PT é um fator importante para a própria governabilidade.

As ações da esquerda e dos movimentos sociais

Está em curso a maior operação transformista da história brasileira, conforme Carlos Nelson Coutinho[10]. A subordinação da CUT ao governo foi agravada com a ida do ex-presidente Luís Marinho para o ministério do Trabalho. No dia 21/6, foi divulgada uma Carta aos Brasileiros (mesmo título da Carta de Lula ao capital internacional, lançada em meados de 2002) assinada pela CUT, UNE e MST que afirma: "somos contra qualquer tentativa de desestabilização do governo legitimamente eleito, patrocinada pelos setores conservadores e antidemocráticos"[11]. É importante destacar o contexto em que a Carta foi divulgada. José Dirceu havia caído há poucos dias e o governo ainda tentava sustentar que as denúncias eram provenientes da insatisfação duma vaporosa elite que não estava de acordo com o compromisso de Lula da Silva com os pobres. O apoio da CUT não causa estranheza, dada a conexão dos dirigentes da Central com o grupo envolvido nos saques da conta de Valério (todos pertencentes ao campo majoritário). Entretanto, a assinatura da MST foi duramente questionada por diversos movimentos, intelectuais e apoiadores. Como visto, os emissários dos EUA, do setor financeiro, do grande capital industrial e do agronegócio, em suma, o fundamental das classes dominantes, segue apoiando Lula da Silva: então, de que "elite" a Carta estaria falando?[12].

"Em 9 de agosto, o MST divulgou um documento 'Posições políticas do MST nessa conjuntura' [...] fazendo críticas severas aos rumos do governo Lula da Silva"

Em 9 de agosto, o MST divulgou um documento "Posições políticas do MST nessa conjuntura" que sequer menciona a Carta aos Brasileiros, fazendo críticas severas aos rumos do governo Lula da Silva, qualificado como de "centro". O documento explicita que dos 115 mil assentamentos previstos para o ano, apenas 20 mil foram realizados e o não cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo por ocasião da Marcha Nacional pela Reforma Agrária (maio de 5). Ao final, o documento afirma que se o governo abandonar a sua política econômica o povo estará com ele. Em 16 de agosto, contudo, a tese do golpe das elites volta à baila com a

marcha convocada pela CUT, UNE e MST. Apesar de todo aparato, apenas entre 7 a 10 mil manifestantes compareceram à manifestação qualificada como "chapa-branca" pela grande imprensa. No dia seguinte, sindicatos dos servidores públicos, a esquerda da CUT, estudantes e partidos como o PSOL e o PSTU levaram aproximadamente o dobro de manifestantes a Brasília, sem contar com os mesmos recursos.

Nos embates internos do PT, acentuados pelo processo de eleição direta, os principais dirigentes do MST e da esquerda católica apóiam Plínio de Arruda Sampaio que tem feito densas críticas ao governo, em especial a sua política econômica. Aqui, é possível registrar um progressivo distanciamento do MST em relação à corrente majoritária da CUT, favorável ao candidato Ricardo Berzoini (campo majoritário).

A concepção tática do MST parece estar centrada na idéia de que Lula da Silva, apesar de não avançar na reforma agrária, é um mal menor frente ao PSDB e, de certo modo, que é melhor tê-lo como adversário. É um posicionamento distinto do da CUT/UNE: a sua direção não é burocratizada e o movimento segue organizando as lutas por reformas, nas ocupações, no Grito dos Excluídos em 7/9/05 e no documento do dia 9/8/05. Ficam em aberto questões como: até quando será possível sustentar Lula da Silva e combater as suas políticas econômica e agrária? Como acumular forças indicando que Lula da Silva não é inimigo da reforma agrária, mas é o melhor amigo do agronegócio?

A crise, as perplexidades, mobilizações e controvérsias indicam que o futuro da esquerda socialista brasileira está em aberto. Algumas experiências estão sendo esboçadas. A criação da Coordenação Nacional de Lutas, inicialmente pensada como uma frente de unidade de luta de forças de esquerda dentro e fora da CUT, foi redimensionada para menos em um primeiro momento (2002/2003) entre outros fatores pela tentativa do PSTU de subordiná-la às suas táticas. Apesar das tensões, sindicatos importantes hoje a compõem e, com isso, foi possível ampliá-la. Concomitantemente, estão sendo convocadas Assembléias Populares por militantes do PSOL, da esquerda da CUT e por militantes que estão em processo de rompimento com o PT. Parte da esquerda católica e da Consulta Popular está promovendo os "círculos socialistas" que também se difundem.

A questão de fundo é a construção da unidade das forças que compõem a esquerda socialista. A profundidade da crise requer um reexame radical das práticas, da agenda e um mergulho profundo no debate teórico a partir de formas de produção do conhecimento em que os saberes acadêmicos e provenientes das lutas interajam de modo verdadeiro. As consignas, mais do que nunca, precisam ganhar carne e sangue, pois existe um perigoso vácuo no ideário da esquerda que requer, para a sua superação, real protagonismo e autonomia dos movimentos, sindicatos e partidos que forjam a sociedade do futuro.

Notas

1 Esta análise contou com levantamentos realizados por Alice Coutinho da Trindade, Cristina Gomes de Oliveira, Graziela Bortoluzzi Postay, Heloisa Barbosa e Mariana Setúbal.

2 Legenda construída por trabalhista-nacionalistas como Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. No final da ditadura, dois grupos reivindicaram a sigla: Leonel Brizola e Ivete Vargas (direita). Por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, a sigla foi atribuída ao grupo de Ivete Vargas em 1980.

3 Laymert Garcia dos Santos e Francisco de Oliveira 2005 "Tem limite?" em *FSP*, 18 de setembro: 3.

4 Os lucros dos bancos cresceram 14% ao ano em 2003 e 2004 e, em 2005, já é 52% acima do de 2004. O Bradesco, o maior banco privado do país, quase dobrou seu lucro no primeiro trimestre deste ano (*O Globo*, 10/5/05).

5 Entrevista ao sítio do informativo do PSDB, *Primeira Leitura*, em <www.primeiraleitura.com.br> 15 de Setembro de 2005.

6 Entrevista ao sítio do informativo do PSDB, *Primeira Leitura*.

7 Palocci reflete compromisso do país com boas políticas, diz Snow (*Folha Online*, 2/8/05). Risco Brasil cai para menor patamar em cinco meses (*Folha Online*, 5/8/05). "Até pouco depois do meio-dia (desta segunda feira), quando Snow decidiu sair em apoio explícito ao governo, o céu parecia derrubar-se sobre Lula e sua equipe. A oposição […] parecia empenhada em dar uma estocada definitiva contra Lula. Mas o governo dos Estados Unidos optou por se manter à margem de uma aventura onde tem pouco a ganhar e bastante a perder" (*Clarín*, 2/8/05).

8 Setúbal defende punições e acordo (*Folha Dinheiro*, 28/8/05).

9 Guilherme Barros 2005 "Governo e empresários se unem contra crise" em *Folha Online*, 31 de julho.

10 "Falar em golpe é mistificação". Entrevista em *Jornal da UFRJ*, agosto de 2005. Em <www.jornal.ufrj.br>.

11 Informativo do MST, 21/6/05.

12 [Para o jornalista Rother] "se há uma conspiração ocorrendo no país ela é comandada pela oposição e por grandes empresários de São Paulo" e tem como objetivo "manter Lula no poder e não tirá-lo" (*Herald Tribune*, 11/8/05). Em <www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2005/08/050811_pressreviewfn.shtml>.

Argentina

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 En el Día Internacional de los Trabajadores se realiza un acto multitudinario en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires (BA), bajo las consignas "Por salario y por trabajo. No al pacto con el FMI. Con Kirchner siguen el hambre y la entrega". Participan los movimientos de desocupados combativos, los obreros de Zanon, la comisión interna del Garrahan y trabajadores de otros hospitales, el cuerpo de delegados del subte, de Líneas Aéreas Federales (LAFSA), los obreros de Parmalat, de Transporte del Oeste, de Astilleros Río Santiago, ferroviarios, telefónicos y representantes de los docentes de Salta, entre otros; así como estudiantes y familiares de las víctimas de Cromagnon. También convocan partidos políticos de izquierda.

DOMINGO 8 Más de 5 mil pesqueros de Puerto Rawson, Chubut, agremiados al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), mantienen paralizadas las plantas desde el 13 de abril en demanda de aumento salarial.

MIÉRCOLES 11 Luego de un paro de 48 hs llevado adelante la semana pasada, los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), agremiados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), inician un paro nacional en demanda de una recomposición salarial.

JUEVES 12 Los trabajadores no médicos de los hospitales de la provincia de Buenos Aires (PBA) agrupados en ATE cumplen 48 hs de paro en demanda de aumento salarial y del pase a planta permanente de unos 14 mil contratados.

SÁBADO 14 Más de 7 mil personas, en su mayoría familiares de las víctimas de Cromagnon, junto con las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y representantes de las Madres del Dolor, realizan un abrazo simbólico al Palacio de Justicia y marchan hasta Plaza de Mayo para repudiar la excarcelación de Omar Chabán, sindicado como responsable de la masacre.

MARTES 17 Comienza el juicio oral y público por los hechos ocurridos durante la llamada "masacre de Avellaneda", durante la que fueron asesinados por la policía los piqueteros Santillán y Kosteki.

MIÉRCOLES 18 La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la CONADU Histórica inician un paro de 72 hs en todo el país para exigir mayor presupuesto, 800 pesos para el cargo testigo y el 85% móvil para los jubilados, así como la derogación de la Ley de Educación Superior (LES).

Obreros de los frigoríficos de todo el país, nucleados en el gremio de la carne, realizan una huelga en reclamo de aumento salarial.

JUEVES 19 Los estudiantes secundarios de más de 20 escuelas de BA realizan una jornada de lucha con toma de los establecimientos, en el marco del paro nacional docente. Al mismo tiempo, los universitarios convocados por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y centros de estudiantes, como el de la Facultad de Ciencias Sociales, toman las facultades en apoyo a los docentes y exigen la anulación de la LES.

VIERNES 20 Docentes agremiados a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizan el primer paro nacional al gobierno de Kirchner con una movilización hacia Plaza de Mayo para exigir una Ley de Financiamiento Educativo.

JUEVES 26 Los médicos del Hospital Posadas, PBA, inician una huelga por 48 hs en demanda de aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo. También realizan huelgas por aumento salarial los médicos de los hospitales públicos de Salta y de Catamarca.

VIERNES 27 Bajo el lema "Ni una muerte más por aborto clandestino" distintas organizaciones de mujeres, sociales y políticas lanzan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

MARTES 31 En Neuquén, los docentes en lucha, con el apoyo de trabajadores de la salud, instalan una carpa frente a la casa de gobierno provincial, y son reprimidos por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos, resultando heridos varios de los manifestantes. Demandan un incremento salarial, el pase a planta permanente de los contratados y un plan de obras de infraestructura escolar con supervisión de la comunidad.

Convocado por ATE comienza un paro de 48 hs en la PBA en reclamo de aumento salarial, un salario mínimo de 770 pesos mensuales y un piso de 350 pesos para los planes sociales, e incremento de presupuesto para la salud y la educación, entre otras reivindicaciones.

Los trabajadores del Teatro Colón, nucleados en ATE, inician un paro de 72 hs en reclamo de un aumento salarial del 60%.

JUNIO

MIÉRCOLES 1 Más de 8 mil maestros, estatales, trabajadores de hospitales, docentes y estudiantes universitarios, ceramistas, organizaciones de derechos humanos, de desocupados y partidos de izquierda marchan a la casa de gobierno de Neuquén para repudiar la represión a los docentes ocurrida el día anterior. A la vez, los docentes neuquinos realizan una huelga por 24 hs y la CTERA hace un acto frente a la Casa de Neuquén en BA.

En Córdoba, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y Fiat Auto Argentina acuerdan un incremento salarial del 29% para los obreros. En BA se movilizan hacia el Ministerio de Trabajo por aumento de salarios, unos 5 mil trabajadores de las automotrices Ford, Daimler-Chrysler y Volkswagen.

JUEVES 2 En Jujuy, se inicia el juicio oral y público contra la joven Romina Tejerina que se encuentra presa, acusada de haber matado a su hija recién nacida, concebida producto de una violación. En San Salvador de Jujuy y en BA, organizaciones de mujeres, de derechos humanos y piqueteros se congregan para exigir su libertad.

MARTES 7 Los docentes universitarios de la CONADU y la CONADU Histórica inician un paro nacional por 72 hs en demanda de un aumento salarial y el blanqueo de los pagos en negro. Los estudiantes toman las facultades de Filosofía y Letras, Psicología, Sociales e Ingeniería en BA.

MIÉRCOLES 8 Trabajadores de LAFSA, actualmente LAN Argentina, realizan una protesta en el hall de aeroparque metropolitano en demanda de estabilidad laboral.

Los trabajadores químicos realizan paros de 2 hs por turno en todas las fábricas químicas y petroquímicas del país en reclamo de un salario básico de 1.000 pesos.

VIERNES 10 El tribunal de San Salvador de Jujuy condena a Romina Tejerina a 14 años de prisión.

MARTES 14 La Corte Suprema de Justicia emite un fallo que declara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Los municipales de la localidad santacruceña de Caleta Olivia mantienen tomados los edificios públicos desde hace más de 50 días, en demanda de un aumento de salarios. En Pico Truncado permanecen bloqueadas por los trabajadores las rutas 12 y 43 por los mismos reclamos. Algunos manifestantes agreden a la presidenta del Concejo Deliberante local y a la concejala justicialista durante una refriega ocurrida frente a la sede comunal.

MIÉRCOLES 15 Las automotrices Ford y Daimler-Chrysler acuerdan con el SMATA y el ministro de Trabajo un aumento salarial que eleva el salario a 1.800 pesos para la categoría mínima, y en enero de 2006 se aproximará a los 2 mil pesos que reclaman los trabajadores. Las negociaciones en Volkswagen continúan.

Docentes de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Neuquén y Buenos Aires realizan sendas huelgas en reclamo de aumento salarial.

JUEVES 16 Los médicos de los 77 hospitales públicos de la PBA, enrolados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, inician un paro de 48 hs en demanda de mejoras salariales.

La Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQyP) firma con la cámara empresaria un acuerdo salarial que contempla un aumento del 116% en los sueldos básicos.

DOMINGO 26 A 3 años de la masacre de Avellaneda, en la que fueron asesinados por la policía Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, organizaciones de desocupados y partidos de izquierda realizan un acto en el Puente Pueyrredón, del que participan más de 50 mil personas.

MARTES 28 La ATE realiza un paro nacional con movilizaciones y cortes de ruta en todo el país para exigir la libertad del titular del gremio en Santa Cruz, Alejandro Garzón, y de otros 5 delegados de ATE en esa ciudad, detenidos el viernes último. En Río Turbio, Santa Cruz, es encarcelado el dirigente gremial de ATE, Lino Heredia. Rápidamente, es liberado ante la presión de cientos de manifestantes que exigen su libertad. La ciudad de Pico Truncado se encuentra prácticamente sitiada por las protestas y más de mil personas realizan una marcha de silencio para pedir la libertad de los 6 sindicalistas detenidos.

MIÉRCOLES 29 Los docentes de Chaco llevan 22 días de huelga por reclamos salariales, han instalado 5 carpas en distintos puntos de la provincia.

JUEVES 30 Trabajadores de los hospitales de BA y PBA, agremiados a ATE y a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, realizan un paro en reclamo de un aumento salarial. También paran los docentes convocados por el Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) en demanda de mejoressalarios.

A 6 meses de la masacre de Cromagnon, más de mil personas realizan un acto frente al santuario de Once y se movilizan a Plaza de Mayo para reclamar justicia y castigo para Omar Chabán y el jefe de gobierno de BA, Aníbal Ibarra.

Trabajadores aeronáuticos, convocados por la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), realizan una movilización en aeroparque para reclamar la continuidad de la fuente de trabajo en Southern Winds (SW).

JULIO

VIERNES 1 La policía ingresa a las instalaciones de los hospitales Perrando y Pediátrico, en Resistencia, Chaco, donde los trabajadores se encuentran en huelga desde hace casi 2 meses, y reprimen con gases lacrimógenos.

En Chubut y Santa Cruz, más de 5 mil trabajadores agremiados a la Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados (FASPyGP) inician un paro por tiempo indeterminado en reclamo de un incremento que eleve el salario mínimo de 550 a 850 pesos.

MARTES 5 La FEB y el Sindicato de Docentes Particulares (SADOP) realizan su octavo paro del año en medio de fuertes cruces entre las autoridades y los gremialistas, debido al anuncio del gobierno bonaerense de descontar los días de paro a los maestros.

La FASPyGP levanta el paro luego de acordar con los empresarios y el Ministerio de Trabajo un básico de 650 pesos para los trabajadores del sector.

MIÉRCOLES 6 La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud y trabajadores no médicos agrupados en ATE, del hospital Posadas, PBA y del Garrahan, BA, inician un paro de 48 hs para exigir un aumento salarial y mejoras laborales. También paran los empleados judiciales y del Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) La Plata, en reclamo de aumentos salariales y del pase a planta permanente del personal precarizado.

El dirigente sindical Hugo Moyano se consagra como titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) y expresa su apoyo al gobierno nacional.

El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) marcha por el centro de BA en reclamo de la liberación de su líder, Raúl Castells.

JUEVES 7 Más de 2 mil trabajadores de la salud y docentes agremiados a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Neuquén, los obreros de Zanon y el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN), la Federación Universitaria de Comahue (FUC) y desocupados, realizan una jornada de paro y movilización a la Casa de Gobierno provincial para reclamar mejoras salariales y la expropiación de la fábrica de cerámicos bajo control obrero.

SÁBADO 9 Miles de personas realizan una marcha por el centro de la BA organizada por la Convocatoria Antiimperialista No a Bush, que nuclea a distintas organizaciones, para repudiar la presencia del presidente estadounidense durante el 4 y 5 de noviembre en el marco de la IV Cumbre de las Américas, en Mar del Plata.

VIERNES 15 Tras 46 días de paro, los gremios Unión de Trabajadores de la Educación (UTRE) y Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco (SITECH) Federación levantan la medida de fuerza, y aceptan el ofrecimiento del gobierno provincial que asigna un incremento de 40 pesos en sus sueldos básicos.

LUNES 18 Más de una veintena de organizaciones, entre ellas el Polo Obrero, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Sin Trabajo (MST) Teresa Vive y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), realizan una jornada nacional de protesta con cortes en los principales accesos a BA y movilizaciones en distintas provincias para exigir al gobierno la universalización y el aumento a 350 pesos mensuales de los planes sociales, trabajo y la libertad de los presos políticos.

MIÉRCOLES 20 Los 11 organismos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán (ANLIS) continúan en lucha tras 50 días de paro ininterrumpido y progresivo, en demanda de una mejora salarial del orden del 40% y de la rejerarquización profesional.

Los trabajadores no médicos del Hospital Garrahan, nucleados en ATE, inician un paro por 48 hs en reclamo de un sueldo básico de 1.800 pesos, entre otras cuestiones.

Los desocupados que mantienen tomada una planta de Repsol-Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en la localidad de Cañadón Seco, Santa Cruz, son salvajemente reprimidos por la policía que lanza gases lacrimógenos y utiliza palos para golpear a los manifestantes, llevándose detenidas a unas 60 personas.

SÁBADO 23 Las mujeres y los menores de edad detenidos en Santa Cruz por la toma de una planta de Repsol-YPF son liberados, pero permanecen detenidos 8 hombres.

DOMINGO 24 Mediante un fuerte operativo, la policía reprime a los obreros de Tango Meat, en General Pacheco. Los mismos se encuentran en huelga desde hace 24 días, realizando un piquete frente al frigorífico en demanda de la reincorporación del delegado que fuera suspendido ilegalmente, de un aumento salarial y de que se respeten sus derechos.

LUNES 25 Tras el receso escolar de invierno, los docentes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa y Jujuy comienzan sendas huelgas en demanda de aumento salarial.

En su decimoquinta semana de conflicto, los empleados del Ministerio de Justicia inician un paro por 120 hs en BA en reclamo de un incremento salarial.

MARTES 26 Pilotos y personal técnico, que pertenecen a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y a APTA, respectivamente, realizan un paro para exigir un

aumento de salarios, la reincorporación de 40 despedidos, el pase a planta de 400 contratados y el respeto a la libertad sindical.

El MIJD realiza una nueva marcha hasta la Casa Rosada en BA para pedir por la libertad de Raúl Castells, que se encuentra preso y en huelga de hambre desde hace 26 días.

JUEVES 28 El ministro de Salud, Ginés González García, califica de "terroristas sanitarios" a los trabajadores no profesionales del Garrahan que se encuentran en su segundo día de huelga en esta semana.

El Polo Obrero, el MST Teresa Vive, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), entre otras organizaciones, se movilizan en el centro de BA hasta la Casa de Santa Cruz, para exigir la libertad de los 6 desocupados que se encuentran detenidos en Caleta Olivia desde hace una semana.

AGOSTO

MARTES 2 Los trabajadores no médicos del Garrahan inician un paro de 72 hs en rechazo a la propuesta del gobierno de incrementar los salarios en un 20%. Los médicos y profesionales del Hospital Posadas realizan una segunda jornada de paro en reclamo de aumentos salariales.

JUEVES 4 Los trabajadores ferroviarios de carga y de pasajeros, agremiados a La Fraternidad, realizan un paro para exigir un salario básico de 1.800 pesos.

VIERNES 5 La CONADU y la CONADU Histórica rechazan una propuesta del gobierno que contempla el blanqueo parcial del 50% de los aumentos recibidos en 2004 y agregar una suma fija que significa, según fuentes oficiales, un incremento del 22,7% en la masa salarial.

DOMINGO 7 Trabajadores de la empresa Cargo (subcontratista de Volkswagen), en Córdoba, realizan un quite de colaboración para exigir un aumento del 50% y mejores condiciones de trabajo.

MARTES 9 Los trabajadores no médicos del Hospital Garrahan inician un nuevo paro de 72 hs en reclamo de una oferta salarial que supere el 20% ofrecido por el gobierno la semana pasada.

Como sucede todos los días, desocupados integrantes del MIJD marchan por el centro porteño para reclamar la libertad de su dirigente, Raúl Castells.

Camioneros bloquean el ingreso del centro de distribución de la empresa láctea SanCor, ubicada en General Pacheco, PBA, en demanda de un aumento salarial y del encuadramiento del personal en el sindicato de camioneros.

MIÉRCOLES 10 La CONADU y la CONADU Histórica inician un paro por 48 hs para exigir al gobierno nacional una mejora en la oferta salarial realizada la semana pasada.

Las autoridades del Garrahan envían un centenar de telegramas a los trabajadores que realizan un paro de 72 hs intimándolos a que retomen sus tareas o, caso contrario, serán despedidos.

JUEVES 11 La jueza laboral Silvia Sayazo detiene los despidos en el Hospital Garrahan con una medida cautelar. Mientras el gremio sostiene que está ejerciendo el derecho a huelga, el gobierno critica con dureza la medida, apelando a que la misma viola el derecho a la salud de los niños.

Raúl Castells es excarcelado por orden judicial, tras dos meses de huelga de hambre y decenas de manifestaciones de los integrantes del MIJD.

Los estatales y el personal de salud de Chaco que se encuentran en paro por tiempo indeterminado, agrupados en la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), inician una vigilia en el entrepiso de la Casa de Gobierno a la espera de respuestas oficiales a las demandas de recomposición salarial.

Más de 900 trabajadores de las concesionarias de automóviles de Córdoba, agrupados en el SMATA, realizan un paro y se concentran en la intersección de la avenida Colón y Sagrada Familia, para exigir una recomposición salarial del 50% para los obreros de taller y vendedores.

VIERNES 12 El gobernador bonaerense acuerda con el Frente Gremial Docente un incremento salarial de 100 pesos al sueldo básico, entre otras cuestiones. Los maestros se comprometen a no realizar más paros hasta fin de año.

LUNES 15 Más de 3.500 vecinos de Gualeguaychú bloquean el paso de la ruta internacional 136, a unos pocos kilómetros del puente Gualeguaychú, Fray Bentos, para protestar por la instalación de 2 plantas de celulosa en Fray Bentos.

MARTES 16 Una veintena de organizaciones de desocupados, entre ellas la CCC, el Bloque Piquetero Nacional (BPN), el MTD Aníbal Verón y el MIJD, inician una jornada nacional de protesta en reclamo de la universalización de los planes sociales y de su aumento a 350 pesos. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirma que entre los manifestantes "no hay piqueteros. Son militantes de izquierda, activistas de un partido con vocación política".

Los docentes universitarios de todo el país inician una huelga por 15 días en demanda de un salario básico de 800 pesos. En Córdoba, más de 300 estudiantes toman el Consejo Superior y realizan protestas por las calles de esa ciudad en apoyo al paro docente y por la derogación de la LES.

MIÉRCOLES 17 Más de mil estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, junto con los no docentes, toman las sedes de la misma y del Consejo Superior en reclamo de un aumento del presupuesto universitario y en apoyo a los docentes.

JUEVES 18 En el marco del paro nacional docente, más de 25 mil personas realizan una movilización por las calles de la ciudad de Córdoba en defensa de la educación pública y en reclamo de mejoras salariales. La columna más numerosa es la convocada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba (ADIUC) y agrupaciones estudiantiles opositoras al rector González. Adhieren al paro los colegios secundarios Manuel Belgrano y Montserrat.

MARTES 23 En Tucumán, más de 1.500 docentes y estudiantes universitarios y de las escuelas medias realizan una marcha en apoyo al reclamo de aumento salarial que exigen los docentes y por la derogación de la LES. En Córdoba, los estudiantes de Ciencias de la Información y Trabajo Social, dependientes de la Facultad de Derecho, la Escuela de Letras (Casa Verde) de la Facultad de Filosofía, y un edificio de la Facultad de Arquitectura en la Ciudad Universitaria ocupan las instalaciones de las mismas en apoyo al paro docente y contra la LES. También se toma la Universidad de Río Cuarto y el colegio Manuel Belgrano.

JUEVES 25 La CONADU Histórica, la CONADU y los estudiantes realizan movilizaciones en la mayoría de las 39 universidades públicas del país para exigir mayor presupuesto e incremento salarial para los docentes. En BA, más de 5 mil personas convocadas por la FUBA, la Federación Universitaria de La Plata (FULP), y varios centros de estudiantes, junto a trabajadores del Garrahan, realizan una movilización desde Plaza Houssay hasta el Ministerio de Educación. En Córdoba, más de 10 mil personas se movilizan convocadas por la Multisectorial por la Educación Pública. También hay marchas en Rosario, San Luis, Río Cuarto y Bahía Blanca, entre otros lugares.

Desocupados del Bloque Obrero y Popular (BOP) se concentran frente a la Sociedad Rural, en BA, para exigir fuentes de trabajo y entregar un petitorio con sus reivindicaciones. La policía los reprime produciéndose incidentes que dejan un saldo de 16 detenidos y varios heridos.

En Santa Cruz, desocupados nucleados en el Movimiento por la Dignidad bloquean desde hace 11 días el acceso a una planta petrolera de Repsol-YPF, en la localidad de Pico Truncado, para exigir puestos de trabajo para los desocupados de la zona, por lo que son reprimidos por la policía que pretende desalojarlos. Más de 10 de los manifestantes resultan heridos y 12 son detenidos. Familiares de los presos se concentran frente a la comisaría del lugar para exigir la libertad de los mismos, produciéndose nuevos incidentes.

Los trabajadores no médicos del Garrahan inician otro paro por 48 hs en demanda de un incremento salarial de 1.800 pesos, entre otras cuestiones.

Por la mañana, un fiscal ordena la detención de un auxiliar de terapia intensiva por supuesto hurto de equipos del hospital. Posteriormente, un grupo de policías con perros recorre el establecimiento por amenazas de bomba y revisa los *lockers* de las trabajadoras. Se realiza un acto frente al nosocomio en el que las enfermeras reciben el apoyo de distintos sectores.

VIERNES 26 A 3 años y 2 meses de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, desocupados del Frente Popular Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón y la CCC, intentan realizar un acto sobre el Puente Pueyrredón, pero efectivos de Gendarmería se lo impiden mediante un fuerte operativo dispuesto por el gobierno.

LUNES 29 Argentina y Chile acuerdan formar una fuerza militar de paz conjunta que actuará bajo las instrucciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Luego de una asamblea de más de 700 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los mismos deciden tomar las 2 sedes de la facultad en apoyo al paro docente y por la anulación de la LES. También se realizan asambleas y tomas en las facultades de Psicología, Filosofía y Letras y Ciencias Exactas de la UBA.

MIÉRCOLES 31 El gobierno de Kirchner vuelve a desplegar un fuerte operativo policial para evitar las protestas en la capital, en varios puntos del conurbano y en el interior del país.

GLOSARIO DE SIGLAS

ADIUC	Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba
ANLIS	Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán
APLA	Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
APTA	Asociación de Personal Técnico Aeronáutico
ATE	Asociación de Trabajadores del Estado
BA	Ciudad de Buenos Aires
BOP	Bloque Obrero y Popular
BPN	Bloque Piquetero Nacional
CCC	Corriente Clasista y Combativa
CGT	Confederación General del Trabajo
CONADU	Confederación Nacional de Docentes Universitarios
CTA	Central de los Trabajadores Argentinos
CTERA	Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
FASPyGP	Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados
FATIQyP	Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas
FEB	Federación de Educadores Bonaerenses

FUBA	Federación Universitaria de Buenos Aires
FUC	Federación Universitaria de Comahue
FULP	Federación Universitaria de La Plata
IOMA	Instituto de Obra Médica Asistencial
LAFSA	Líneas Aéreas Federales
LES	Ley de Educación Superior
MIJD	Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MST	Movimiento Sin Trabajo
MTD	Movimiento de Trabajadores Desocupados
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PBA	Provincia de Buenos Aires
PTS	Partido de los Trabajadores Socialistas
Repsol-YPF	Repsol-Yacimientos Petrolíferos Fiscales
SADOP	Sindicato de Docentes Particulares
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
SITECH	Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco
SMATA	Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
SOECN	Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén
STIA	Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación
SW	Southern Winds
UBA	Universidad de Buenos Aires
UPCP	Unión del Personal Civil de la Provincia
UTRE	Unión de Trabajadores de la Educación

Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA-Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios Clarín, Página 12 y La Nación.
Otras fuentes: Indymedia.

Brasil

[cronologia maio-agosto 2005]

MAIO

4ª FEIRA 4 A comissão externa criada pela Câmara dos Deputados para investigar a morte de 21 crianças indígenas de tribos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (região centro-oeste) conduiu em relatório que a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) é "omissa" em diversos aspectos: irregularidades, relações de trabalho em situação análoga a escravidão, arrendamento de terras indígenas, por exemplo, entre outros –além de estar sucateada. As críticas se estendem também à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que informou que não comentaria as conclusões do relatório, assim como a FUNAI alegou não ter recebido cópia do documento.

5ª FEIRA 5 É instalado um comitê gestor de coordenação das ações do governo federal em Boa Vista-Roraima (região norte). O governo federal anunciou medidas que serão tomadas para concretizar a homologação contínua da reserva indígena Raposa Serra do Sol no estado e diminuir a resistência a ela (o decreto de homologação foi assinado em 16/4/2005 e teve como decorrência vários conflitos na região). Entre as medidas, está a implantação de uma linha de crédito com juros de 4% ao ano para financiamento de projetos direcionados aos índios, com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Alrededor de 28 famílias não índias que vivem dentro da terra indígena serão realocadas e receberão R$ 1 milhão de indenização através da FUNAI.

5ª FEIRA 12 Em Brasília mulheres de militares voltaram a protestar este mês com manifestação em frente ao Itamaraty, durante um almoço oferecido pelo presidente Lula ao presidente da Argélia, reivindicando reajuste salarial para os militares. Desde abril os protestos vêm crescendo e o pedido de audiência com o Presidente foi endossado pelos presidentes dos clubes Militar, da Aeronáutica e Naval. Em 2004, o então ministro da Defesa, José Viegas, havia prometido correção salarial de 23% aos militares. O Ministério da Fazenda informou que não está analisando aumento para os militares e que tal decisão cabe ao presidente. O governo federal alega que não há recursos orçamentários para conceder o aumento.

SÁBADO 14 Cerca de 600 pessoas se reuniram no centro de São Paulo numa manifestação organizada pela Educafro (entidade que atende cerca de 13 mil alunos em cursos pré-vestibular) que tinha como principal motivo chamar a

atenção para a exclusão do negro no mercado de trabalho, principalmente nas instituições bancárias. Com alguns integrantes acorrentados e amarrados em alusão à abolição da escravatura, reivindicavam de 9 instituições bancárias a adoção de políticas para inclusão de trabalhadores negros entre os seus funcionários. Em carta entregue à gerentes de banco, os manifestantes informaram que se medidas não forem tomadas até 20 de novembro, entrarão com representação no Ministério Público.

Foi denunciada uma fita de vídeo em que um ex-funcionários dos Correios revela um esquema de corrupção na estatal que seria comandado pelo deputado Roberto Jefferson, então presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O funcionário aparece recebendo uma quantia em dinheiro dum empresário interessado em uma licitação dos Correios.

3ª FEIRA 17 Em Porto Velho-Rondônia (região norte), estudantes motivados pelas sucessivas denúncias de cobrança de propina por parte de parlamentares ao governador Ivo Cassol, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), para não votarem seu impeachment, se manifestaram em protesto contra a corrupção generalizada no Estado, entrando em choque com policiais militares. Segundo informações da Polícia Militar (PM), mais de 500 estudantes jogaram pedras, quebraram vidraças e lançaram coquetel molotov no prédio da Assembléia Legislativa, seguindo mais tarde para o Palácio do Governo onde também tentaram entrar, sendo contidos pelos efeitos das bombas de gás lacrimogêneo utilizadas pelos policiais. O Senado aprovou o requerimento à criação duma comissão especial para acompanhar as investigações de corrupção em Rondônia.

SÁBADO 21 O deputado Roberto Jefferson também foi acusado de pressionar a direção do Instituto de Resseguros do Brasil para dar uma mesada de R$ 400 mil ao partido, em troca de indicações para cargos no órgão. No dia 26/5 a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi criada.

DOMINGO 29 A 9º edição da Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros reuniu no centro de São Paulo 1,8 milhão de pessoas, segundo a PM. Militantes e organizadores do evento, celebrando um possível recorde mundial neste tipo de manifestação, falavam em 2,5 milhões de participantes. A edição teve como tema a união civil entre homossexuais e trazia como lema "Parceria Civil Já! Direitos iguais: Nem mais, nem menos".

3ª FEIRA 31 Cerca de 350 estudantes protestam contra o aumento de 8,8% nas tarifas de ônibus em Florianópolis, Santa Catarina (região sul). As manifestações tiveram início no dia anterior, quando houve confronto com a PM, resultando na prisão de alguns estudantes e ferimentos em PMs e manifestantes. A Secretaria de Transportes e Terminais, não se manifestou. Em julho de 2004 uma série de protestos de estudantes impediu o reajuste nos preços de passagens na cidade.

JUNHO

5ª FEIRA 2 Iniciou por tempo indeterminado a greve de diversas categorias de servidores públicos em protesto pela proposta de reajuste de 0,1% do governo federal para este ano, contrariando a reivindicação de reposição salarial emergencial de 18% (referente às perdas acumuladas no governo Lula) com recomposição das perdas salariais registradas na gestão anterior (de Fernando Henrique Cardoso), que acumulados podem ultrapassar um reajuste de 100%. Segundo cálculos da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (FENASPS), a paralisação dos servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) atinge 70% da categoria em todo o país. O Ministério do Planejamento, afirmou que os reajustes serão dados dentro dos limites orçamentários.

2ª FEIRA 6 O deputado Roberto Jefferson revelou a existência do pagamento de uma mesada de R$ 30 mil a parlamentares aliados em troca de apoio ao governo, e acusou, sem apresentar provas, seis líderes do Partido Progressista (PP) e do Partido Liberal (PL) de receberem o chamado "mensalão", e o então chefe da Casa Civil, José Dirceu, o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), José Genoino, e o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, de serem os operadores deste esquema. Contou ainda que acertou com o PT um repasse no valor de R$ 20 milhões ao PTB na campanha de 2004, mas que recebeu apenas R$ 4 milhões, valor que não foi declarado à Justiça Eleitoral.

5ª FEIRA-16 José Dirceu renunciou ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil.

4ª FEIRA 22 Líderes de 42 entidades dos movimentos sociais, entre os quais o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foram recebidos pelo presidente Lula em Brasília. Eles entregaram ao presidente a "Carta ao Povo Brasileiro", onde expressam apoio ao governo neste momento de crise, propondo que a sociedade se mobilize para a defesa do governo Lula, mas também cobram mudanças na política econômica e ética na política. O presidente Lula afirmou que as denúncias de corrupção serão investigadas a fundo, e que a política econômica não pode ser modificada.

4ª FEIRA 29 A Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (FEBEM) convocou uma parte dos 1.751 funcionários demitidos em fevereiro, após serem acusados de agressão aos internos. A instituição tentará regularizar a situação de funcionários que possuíam estabilidade no emprego.

JULHO

6ª FEIRA 1 A PM estimou entre 17 e 20 mil o número de manifestantes que participaram, em Goiânia-GO (região centro-oeste), da primeira manifestação da União

Nacional dos Estudantes (UNE) e dos movimentos sociais aliados ao governo desde o início da crise política no país deflagrada por denúncias de corrupção no governo. Em passeata organizada pela Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS), que congrega mais de 50 entidades, da qual participaram também integrantes do MST da Confederação Nacional de Trabalhadores em Agricultura (CONTAG), e da Marcha Mundial das Mulheres, foram levantadas 4 bandeiras: mudanças imediatas na política econômica, o fim da desestabilização do governo, a apuração de todos os casos de corrupção e uma reforma política democrática. A CMS e o MST, que apóiam o presidente Lula, afirmaram que o apoio ao atual governo não é incondicional, mas orientado pela retomada do projeto político de mudança, que elegeu Lula.

SÁBADO 2 Início de greve por tempo indeterminado de 3,6 mil agentes penitenciários do estado do Rio de Janeiro. Por conta disso, os detentos não poderão receber visitas durante a greve. A categoria reivindica 80% de reajuste salarial para compensar os 4 anos sem aumento.

3ª FEIRA 5 Rebelião de internos do Complexo de Tatuapé da FEBEM em São Paulo, após os menores se recusarem de realizar as atividades de rotina da instituição. Este foi o 30º motim do ano na unidade e a diretoria do sindicato da categoria, após um debate sobre a situação dos funcionários com representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do PT, decidiram ir para Brasília protestar fazendo greve de fome na porta do Supremo Tribunal Federal (STF).

2ª FEIRA 11 Ato realizado no salão nobre do Palácio do Planalto em Brasília, em solidariedade ao presidente Lula da Silva, organizado pela CUT, Central Geral dos Trabalhadores (CGT) e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), com a participação de cerca de mil sindicalistas. Eles entregaram uma carta, na qual defendem a apuração das denúncias, mas defendem o presidente Lula. A Força Sindical, a Social Democracia Sindical (SDS) e a Central Autônoma dos Trabalhadores (CAT), não foram ao ato.

4ª FEIRA 6 Na CPI dos Correios, o publicitário Marcos Valério, dono da agência SMPB, admite ter feito vultuosos empréstimos para o PT, supostamente para pagar dívidas de campanha; Delúbio Soares dá a mesma versão e assume a culpa por ter criado um "caixa dois" no PT.

SÁBADO 9 José Genoíno renunciou à presidência do PT.

3ª FEIRA 19 Uma professora indígena denunciou à Organização das Naçoes Unidas (ONU) assassinatos cometidos contra índios durante o mês de junho nos estados de Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Maranhão, de acordo com dados do Conselho Indigenista Missionário (CIMI).

4ª FEIRA 20 Divulgado um estudo pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) e pela Fundação Seade que demonstra

que não houve melhora na renda dos trabalhadores nos últimos meses; o rendimento médio real dos ocupados caiu 3,2% no período. Um outro estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comprovou que a taxa de desemprego atingiu no mês de junho o seu menor nível desde março de 2002: 9,4% da força de trabalho.

DOMINGO 24 Em Vitória-ES (região sudeste), o governador Paulo Hartung (sem partido) revogou o aumento na tarifa do transporte coletivo da região metropolitana em função de diversas manifestações estudantis contra o reajuste. Os protestos tiveram início no mesmo dia em que o aumento foi anunciado (19/7) e sofreram repressão da PM. O governo declarou que adiou a agenda de aumento das tarifas para o próximo ano.

2ª FEIRA 25 A CMS, entidade liderada principalmente pela CUT e pelo MST, faz uma série de pequenas manifestações em vários pontos do país. Segundo presidente da CUT do Maranhão, as manifestações têm 3 eixos principais: a punição dos culpados nas acusações de corrupção no governo, mudanças na política econômica, e contra as tentativas de desestabilização do governo federal. A Coordenação Nacional e Lutas (CONLUTAS), o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), junto com setores de esquerda da CUT, convocaram uma marcha em 17 de agosto, em Brasília, pela investigação rigorosa nas denúncias ligadas ao governo.

3ª FEIRA 26 Uma nova revelação envolveu também o PSDB nas denuncias de corrupção política: o publicitário Marcos Valério teria feito um empréstimo de R$ 11,7 milhões para financiar a campanha à reeleição do então governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo (PSDB).

4ª FEIRA 27 Funcionários da refinaria de Manguinhos fizeram uma passeata no centro da cidade do Rio de Janeiro contra o possível fechamento da empresa que, se confirmado, resultará na extinção de 500 empregos diretos e indiretos até 19 de agosto. O governo está estudando alternativas para resolver o caso, mas a direção da Agência Nacional de Petróleo (ANP) já descartou o aumento de combustíveis, que teria sido colocada como uma das alternativas para a manutenção dos funcionários.

Manifestantes acendem velas em frente à embaixada do Reino Unido em Brasília, em protesto contra a morte do eletricista brasileiro Jean Charles de Menezes, que foi confundido com um terrorista pela polícia britânica no dia 22/7 e assassinado numa estação de metrô em Londres, com 7 tiros na cabeça.

5ª FEIRA 28 Cerca de 1.000 pessoas se reuniram em ato público organizado pelos partidos PSTU, PSOL, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Popular Socialista (PPS) e Partido Comunista Brasileiro (PCB) contra a corrupção no governo e contra a política econômica. O ato foi realizado no auditório da Associação

Brasileira de Imprensa (ABI), no centro do Rio de Janeiro, e contou com a participação de representantes do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais (SINTUPERJ), do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (SINTRASEF), do Sindicatos dos Trabalhadores Públicos da Saúde, Trabalho e Previdência Social (SINDSPREV), do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDJUSTIÇA) do RJ, do Conselho Regional de Economia, da CONLUTAS, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de Geografia e Estatística (ASSIBGE), da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES), além de estudantes de diversas universidades públicas do Rio de Janeiro, e de outras entidades e movimentos da sociedade civil.

Em Porto Alegre-RS (região sul), 4 manifestantes foram presos durante protesto contra a corrupção. Cerca de 50 pessoas faziam manifestação em frente a um hotel onde estava hospedado o presidente Lula. De acordo com a Brigada Militar, os detidos, que foram soltos em seguida, jogavam ovos e pedaços de pneus contra os policiais. O protesto também foi organizado por membros dos partidos PSOL, PSTU, e teve a participação de servidores da Previdência que estava em greve há 2 meses.

SÁBADO 30 A versão final da Reforma Universitária foi apresentada ao presidente Lula da Silva. Os empresários reconheceram que muitas de suas reivindicações foram atendidas, assim como a UNE. A ANDES - SN vêm criticando o projeto que não assegura um novo padrão de financiamento das universidades públicas, promove a abertura ao capital estrangeiro e amplia os cursos de graduação e pós-graduação a distância. As políticas de ação afirmativas tiveram sua vigência adiada.

AGOSTO

2ª FEIRA 1 Em depoimento à CPI dos Correios, a diretora financeira da empresa de Marcos Valério revela que a maior beneficiária dos saques de Marcos Valério foi Zilmar Fernandes, sócia do publicitário Duda Mendonça, responsável pela campanha presidencial do PT em 2002.

5ª FEIRA 4 Professores e alunos de escolas situadas no Rio de Janeiro fizeram protesto contra a falta de segurança nas escolas da zona oeste da cidade. A manifestação ocorreu em frente a um colégio onde um professor havia sido assassinado no dia anterior, em sala de aula. Segundo os manifestantes, escolas da região são alvos freqüentes da violência, com assaltos na porta e dentro das unidades, além de ameaças feitas pelos próprios alunos.

6ª FEIRA 5 Cerca de 1.000 pessoas participaram de um ato no centro de Fortaleza-Ceará contra a corrupção. A manifestação foi organizada por partidos de esquerda: PSOL, PDT, Partido Verde (PV) e PPS, que fazem oposição ao governo.

2ª FEIRA 8 Mulheres de militares queimam bandeira do PT durante cerimônia da troca da bandeira nacional, em frente ao Planalto Central, sede do governo federal, em Brasília, em protesto salarial contra reajuste do soldo em 23%, em duas parcelas. Em Belo Horizonte-Minas Gerais (região sudeste), ao desembarcar na base aérea de Pampulha em Belo Horizonte, o presidente Lula da Silva se deparou com um grupo de mulheres e filhas de militares portando faixas em protesto também contra o reajuste dividido em duas parcelas concedido às Forças Armadas.

5ª FEIRA 11 O publicitário Duda Mendonça, em depoimento à CPI dos Correios, admite que a dívida da campanha do PT foi paga através dêste esquema de Marcos Valério, e que o mesmo solicitoulhe que abrisse uma conta num paraíso fiscal com o objetivo de receber os pagamentos do PT.

3ª FEIRA 16 Marcha da CUT, UNE e MST reúne cerca de 7 mil manifestantes em ato pró-Lula em frente à Esplanada dos Ministérios em Brasília.

4ª FEIRA 17 Marcha organizada pela CONLUTAS, ANDES-SN, o setor da esquerda da CUT e da UNE e pelos partidos PSOL e PSTU vindos de todo o país reúne 17 mil na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Durante a marcha, representantes do ANDES - SN e de outras entidades protocolaram documento no Ministério do Trabalho pedindo a retirada do projeto de Reforma Sindical e o aumento do salário mínimo. Ao final da manifestação, foi entregue à senadora Heloísa Helena (PSOL) uma carta para ser encaminhada ao presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Correios, Delcídio Amaral. O documento pede rigorosa investigação das denúncias de corrupção envolvendo o governo e parlamentares.

6ª FEIRA 19 O INSS começa a repor os dias após a paralisação da FENASPS nos próximos finais de semana. A meta é reduzir o trabalho acumulado durante a greve dos servidores públicos federais que durou 76 dias.

SÁBADO 20 Militantes do PT se mobilizaram em Ribeirão Preto no estado de São Paulo e entregaram panfletos de apoio ao ministro Antonio Palocci Filho. Palocci foi acusado pelo advogado Rogério Buratti, em depoimento ao Ministério Público paulista e na CPI dos Bingos, de receber propina mensal no valor de R$50 mil de uma empresa no período em que foi prefeito de Ribeirão Preto pela segunda vez, o que aconteceu entre os anos de 2001 e 2002. Palloci negou as acusações em depoimento na TV.

O deputado Roberto Jefferson também foi acusado de pressionar a direção do Instituto de Resseguros do Brasil para dar uma mesada de R$ 400 mil ao partido, em troca de indicações para cargos no órgão. No dia 26/5 a CPI foi criada.

3ª FEIRA 23 Forte confronto durante 5 horas entre um grupo de 32 sem-teto ligados ao Movimento de Luta de Resistência Popular e PM no centro do Recife-Pernambuco, durante a reintegração de posse de um imóvel de 3 pavimentos, ocupado pelo grupo há 4 meses. Garrafas e coquetel molotov foram lançados

pelos sem-teto contra a polícia, que respondeu com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. O conflito terminou com 3 pessoas feridas e 5 presas.

5ª FEIRA 25 Aproximadamente 1.000 vereadores de todo o país protestaram em Brasília contra a rejeição por parte do STF de duas ações que restabeleceriam mais de 8 mil vagas de vereadores em todo o país, que foram cortadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições do ano passado. A Constituição prevê que o número de vereadores deve ser proporcional ao número de habitantes.

Início da greve dos funcionários da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto-São Paulo, paralisando inclusive as bibliotecas, o restaurante universitário e a creche que atende os filhos dos funcionários. O movimento é contra o veto do governador Geraldo Alckmin (PSDB) ao aumento da verba para as universidades estaduais paulistas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2006. Os professores apóiam o movimento, mas não paralisaram as aulas. Na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)-São Paulo, os funcionários também se encontram em greve há 12 dias, e pensam em paralisar as aulas se o governo federal não aprovar verba de R$ 320 milhões para o plano de carreira. O Ministério da Educação anunciou que está negociando a verba para 2006 com a área econômica.

4ª FEIRA 31 O Congresso derrubou os vetos presidenciais ao reajuste de 15% nos salários dos funcionários da Câmara e do Senado. De acordo com o governo, a medida custará cerca de R$ 600 milhões aos cofres públicos e abre a possibilidade de uma despesa adicional de até R$ 11 bilhões, caso o aumento seja concedido a outras categorias de servidores públicos.

A Comissão de Ética do PT apresentou à direção do partido o relatório que propõe a expulsão do ex-tesoureiro Delúbio Soares do "quadro de filiados". No parecer a expulsão de Delúbio Soares é baseada em 3 incisos do artigo 213 do estatuto do partido, incluído o VI, por "improbidade no exercício" de suas funções.

SIGLAS

ABI	Associação Brasileira de Imprensa
ANDES	Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior
ANP	Agência Nacional do Petróleo
ASSIBGE	Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de Geografia e Estatística
CAT	Central Autônoma dos Trabalhadores
CGT	Central Geral dos Trabalhadores
CGTB	Central Geral dos Trabalhadores do Brasil
CIMI	Conselho Indigenista Missionário
CMS	Coordenação dos Movimentos Sociais
CONLUTAS	Coordenação Nacional e Lutas
CONTAG	Confederação Nacional de Trabalhadores em Agricultura
CPI	Comissão Parlamentar de Inquérito

CPMI	Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
CUT	Central Única dos Trabalhadores
DIEESE	Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos
FEBEM	Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor
FENASPS	Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social
FUNAI	Fundação Nacional do Índio
FUNASA	Fundação Nacional de Saúde
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social
MST	Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
ONU	Organização das Naçoes Unidas
PCB	Partido Comunista Brasileiro
PDT	Partido Democrático Trabalhista
PL	Partido Liberal
PM	Polícia Militar
PP	Partido Progressista
PPS	Partido Popular Socialista
PRONAF	Programa Nacional de Fortalecimento
PSDB	Partido da Social Democracia Brasileira
PSOL	Partido Socialismo e Liberdade
PSTU	Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
PT	Partido dos Trabalhadores
PTB	Partido Trabalhista Brasileiro
PV	Partido Verde
SDS	Social Democracia Sindical
SINDISPREV	Sindicatos dos Trabalhadores Públicos da Saúde, Trabalho e Previdência Social
SINDJUSTIÇA	Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do RJ
SINTRASEF	Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal
SINTUPERJ	Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais do RJ
STF	Supremo Tribunal Federal
TSE	Tribunal Superior Eleitoral
UFSCAR	Universidade Federal de São Carlos
UNE	União Nacional dos Estudantes
USP	Universidade de São Paulo

Equipe: Coordenação: Prof. Dr. Roberto Leher (UFRJ/LPP-UERJ). Assistentes de Pesquisa: Mariana Setúbal (LPP/UERJ), Cristina Oliveira (LPP/UERJ) e Graziela Postay (LPP/UERJ). Colaboração: Coordenado por Profa. Dra. Silene de Moraes Freire (PROEALC/CCS/UERJ).

Fontes: Jornal do Brasil, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Globo, Jornal O Estado de São Paulo.

Outras fontes: Imprensa-CUT, Jornal Brasil de Fato, Agência de Notícias Carta Maior, Informe Letra Viva-MST, MST na Imprensa, Resenha Federal, Jornal do MST.

Chile

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 Diversas manifestaciones tienen lugar en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, tal como aquellas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santiago, Concepción, Valparaíso, Iquique, Valdivia, Antofagasta y Arica. En la capital del país se concentran 40 mil personas para repudiar la reforma laboral, y son reprimidos por carabineros que detienen a 33 asistentes.

MARTES 3 La Cámara de Diputados aprueba la Ley de Financiamiento de la Educación Superior, la cual supone el ingreso de capitales privados al sistema de crédito de estudios en calidad de prestamistas. Por ello, los universitarios realizan diversas manifestaciones en Concepción, Temuco, Iquique, Antofagasta y Arica, en una jornada que concluye con 107 detenidos.

MIÉRCOLES 4 Alrededor de 10 mil estudiantes universitarios de Santiago, Valparaíso y Concepción, entre otros, acuden a la capital del país para manifestarse, donde son reprimidos por la policía que detiene a 184 personas. Mientras tanto, el senado aprueba la Ley de Financiamiento de la Educación Superior. En Antofagasta, Osorno, Concepción y Tarapacá acontecen otras protestas.

MARTES 10 Un grupo mapuche de la comunidad Lonko Mawida de Collipulli, en la Araucanía, bloquea el viaducto de Malleko en reclamo de tierras usurpadas y en repudio a la destrucción de un rewe y de otros elementos de su espiritualidad, perpetrada por la empresa forestal Mininco. Durante la movilización, un camión intenta traspasar el cerco y atropella a Zenén Alfonso Díaz Neculpan, a quien da muerte. Luego de ello interviene la policía de Collipulli reprimiendo a los indígenas, lo que fuerza su retiro.

SÁBADO 14 Unas 400 personas convocadas por organizaciones mapuche de Santiago marchan por la Alameda hacia los pies del cerro Welén para conmemorar la muerte de Zenén Díaz Neculpan y denunciar las leyes Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado y la persecución racista. Entre los convocantes están Meli Wixan Mapu, la Agrupación Mapuche Kilapan y la Wemollfun.

LUNES 16 Pablo Vargas, Hardy Peña y Claudio Melgarejo, quienes componen el Colectivo de Prisioneros Políticos Convergencia por la Libertad, inician una

huelga de hambre líquida por tiempo indefinido en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), en Santiago, para exigir al parlamento que apruebe un proyecto de ley que disponga su libertad y la de otros 3 presos políticos.

El Consejo Autónomo Aymara y el Consejo Nacional Aymara (CNA), de la I Región; la Red Indígena Atacameña y la Asociación Sumac Llajta del Pueblo Quechua, de la II Región; el Consejo de Todas las Tierras, la Asociación Mapuche de la Comuna de Llonquimay y la Asociación Mapuche de Galvarino, IX Región; junto a las Comunidades Mapuche Panguipulli y Futrono, de la X Región, inician movilizaciones para exigir al congreso que rechace ciertas indicaciones del ejecutivo en materia de pueblos indígenas y con rango constitucional, que desconocen sus derechos colectivos a las tierras, aguas, salares, hielos, recursos del mar, del suelo y subsuelo, tanto como el principio de autodeterminación y la participación de los pueblos o la nación indígena en la vida política del país. En consecuencia, 10 líderes inician una huelga de hambre en la catedral de Arica, otros 7 en la sede de la CUT en Calama y 17 más en la ciudad de Valdivia.

JUEVES 19 Los universitarios realizan una jornada de paro nacional que es acompañada en Santiago por una marcha a la que también asiste la Confederación de Estudiantes de la Educación Superior Privada (CONFESUP). Los manifestantes son atacados y una centena es detenida por carabineros.

SÁBADO 21 Las federaciones estudiantiles que componen la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) junto a la CONFESUP convocan a una marcha en Valparaíso hacia el congreso nacional, a fin de exigir al presidente Lagos que vete la ley de financiamiento universitario. A ella asiste también una delegación pequeña del Colegio de Profesores, la CUT y el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). La represión es perpetrada por las fuerzas especiales de carabineros que detienen a más de 160 descontentos. Otras 4 mil personas protestan en Valparaíso.

SÁBADO 28 Las federaciones que componen la CONFECH se reúnen en Talca y acuerdan negociar con el gobierno un arancel diferenciado, entre otras cosas. Se mantienen las tomas y las huelgas estudiantiles que vienen sucediéndose en distintas universidades desde principios de abril.

LUNES 30 Carabineros desalojan, a pedido del rector, a estudiantes que toman la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) en las sedes de Macul y en la de educación física. Detienen a 41 y 18 estudiantes, respectivamente.

La Primera Sala de la Corte Suprema emite un fallo favorable a la planta de Celulosa Arauco y Constitución SA (CELCO) en la ciudad de Valdivia, perteneciente al grupo Angelini, cuyas obra de construcción se hayan en suspenso por contaminar el río Cruces.

JUNIO

MIÉRCOLES 1 La dirigencia de la zona central de la CONFECH, que es donde están las federaciones de Santiago, lanza una jornada de lucha con ocupaciones en las universidades. Las mismas son reprimidas cuando los estudiantes salen a manifestarse.

JUEVES 2 La convocatoria de lucha de la CONFECH continúa en Santiago y Temuco.

VIERNES 3 El presidente Ricardo Lagos promulga la Ley de Financiamiento de la Educación Superior.

DOMINGO 5 Un millar de personas marcha en Santiago contra el proyecto Pascual Lama de extracción de oro y otros minerales en la provincia de Vallenar, que es alentado por la empresa trasnacional Barrick Gold, junto al gobierno chileno.

Los representantes de la CONFECH, reunidos en Concepción, acuerdan un plan de lucha para los próximos días 8, 9 y 15 de junio.

JUEVES 9 Dos mil estudiantes y las organizaciones que componen la CONFECH metropolitana intentan marchar al Ministerio de Educación, pero son reprimidos por los carabineros, que detienen a medio centenar de asistentes. Luego, la represión se extiende a la escuela de derecho de la Universidad de Chile (UCH) y a la sede de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).

LUNES 13 Las organizaciones mapuche de Santiago de Chile acuden a las afueras del Palacio de Tribunales para denunciar que el fallo de la Corte Suprema del pasado 6 de abril, que anuló la absolución dictada en noviembre de 2004, responde a la persecución política del estado por sobre su pueblo. La Coordinación de Organizaciones e Identidades Mapuche lidera la medida.

MIÉRCOLES 15 La convocatoria a la jornada de lucha lanzada por la CONFECH tiene una escasa repercusión, siendo las manifestaciones más destacadas las que se suceden en Santiago y Concepción. En la capital del país, los carabineros interrumpen una marcha al Ministerio de Educación y detienen a cerca de un centenar y medio de personas. Mientras tanto, se reúnen para negociar los representantes designados por la CONFECH con el ministro, tras lo cual la confederación suspende las medidas de fuerza y se declara en estado de alerta.

JULIO

SÁBADO 2 Doce integrantes de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales (ANDHA) de varias comunas de Santiago inician una huelga de hambre por tiempo indeterminado.

MIÉRCOLES 6 El Colectivo de Presos Políticos Convergencia por la Libertad emite una declaración pública en la que anuncia el fin de la huelga de hambre, al tiempo que saluda a quienes los ayudaron en la gestión política necesaria para la aprobación del proyecto de ley que busca su liberación.

SÁBADO 9 Una treintena de organizaciones ambientalistas, vecinales y mapuche protagonizan distintas manifestaciones en circa 20 ciudades del país, bajo la consigna "Chile contra la Destrucción Ambiental y la Injusticia Social", con la que pretenden denunciar el daño a la naturaleza que causan varios tipos de empresas contaminantes, como las forestales, celulosas, de minería, aguas residuales y vertederos de basura. Impugnan también las políticas ambientales del gobierno. Así, se suceden manifestaciones en Santiago, Valdivia, Temuco, Arica, Antofagasta, Vallenar, Concepción, Valparaíso, Quillota y Chillán. Entre las organizaciones convocantes está Acción por los Cisnes, el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, el Comité de Defensa de Itata, la Agrupación de Defensa de Itata, el Grupo de Acción Ecológica de Atacama, Autoconvocados por la Tierra, Greenpeace y la agrupación Konapewman.

LUNES 18 El senado de la nación aprueba el proyecto de ley para permitir la liberación condicional de los 3 presos políticos en huelga de hambre en la CAS.

VIERNES 22 El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco absuelve por 2 votos a 1 a los 6 mapuche acusados de asociación ilícita terrorista en relación a la existencia de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko.

AGOSTO

MARTES 2 La asamblea de dirigentes de la ANDHA resuelve concluir la huelga de hambre, por considerar que corre riesgo el estado de la salud de quienes la implementan.

VIERNES 5 Medio millar de personas acude a la Plaza Italia, tal como convocó la ANDHA, provenientes de comunas del gran Santiago o bien de regiones como La Calera o Quillota. Los manifestantes emprenden su marcha hacia el centro de la ciudad y se enfrentan con carabineros al llegar a las cercanías del Ministerio de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).

MIÉRCOLES 10 Alrededor de 3 mil integrantes de asociaciones mapuche y lafkenche, comunidades indígenas, sindicatos de pescadores y organizaciones sociales de las provincias de Valdivia y Cautín realizan una caravana marítima y una concentración en la ciudad de Queule para rechazar el ducto que CELCO pretende instalar entre San José de la Mariquina y las costas marítimas a esa altura, a fin de arrojar allí los desechos tóxicos que expele la planta de celulosa. La movilización se articula en torno al Comité de Defensa del Mar.

JUEVES 11 Unos 120 miembros de la ANDHA marchan en Concepción y despiden a una delegación que se dirige caminando hasta Santiago, para pedir al gobierno nacional soluciones de fondo a sus reclamos.

VIERNES 12 Luego de más de 2 meses de permanecer cerrada por las movilizaciones, es reabierta la planta Valdivia de la compañía CELCO, en San José de la Mariquina. La medida cuenta con el apoyo del gobierno nacional y de la intendencia de la X Región.

SÁBADO 13 Un centenar de habitantes de Temuco, entre quienes están los de la comunidad mapuche Hueche Huenulaf, bloquea una de las rutas que atraviesa la ciudad a fin de repudiar la instalación de una planta de aguas servidas de la empresa Aguas Araucanía, del *holding* Aguas Nuevas del grupo Solari, que amenaza arrojar a un río local desechos contaminantes malolientes, que matan peces y aves, y arruinan tierras y cultivos; la empresa no respeta uno de sus cementerios ni el apego de los lugareños por la tierra.

MARTES 16 Las bancadas parlamentarias de la Democracia Cristiana (DC), el PS, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) aprueban en el senado unas 58 reformas a la constitución de 1980, cuando la dictadura pinochetista, lo que recibe la negativa del bloque militar. Las modificaciones constitucionales eliminan a los senadores designados y vitalicios y restituyen la facultad presidencial para remover a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y de carabineros, así como establecen que el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) es un organismo asesor del presidente y sólo puede reunirse a pedido del primer mandatario y no de los demás integrantes.

MIÉRCOLES 17 Más de 4 mil trabajadores del sector público convocados por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH) y el Colegio de Profesores marchan en Santiago para interpelar al gobierno nacional en relación a lo que consideran un daño previsional, causado por el actual régimen jubilatorio a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), que les implica una reducción en sus haberes y otros perjuicios mientras las administradoras se quedan con ganancias monetarias exorbitantes que invierten en el extranjero.

MARTES 23 Unos 800 pescadores de Queule, Mehuín, Corral, Niebla, Maiquillahue, Misissipi y demás localidades entre las IX y X regiones atracan sus embarcaciones en Valdivia y marchan por el centro de la ciudad para manifestar su oposición rotunda a que la planta de CELCO en San José de la Mariquina, sea provista de un ducto mediante el cual tirar la basura contaminante al mar. La Asociación de Armadores Cerqueros de Valdivia participa en la protesta.

DOMINGO 28 Los miembros de la ANDHA, que el 11 de agosto partieron de Concepción, arriban a la comuna metropolitana de San Bernardo, desde donde planean dirigirse al centro de Santiago en la llamada Marcha por la Vida, la Dignidad y la Vivienda.

GLOSARIO DE SIGLAS

AFPs	Administradoras de Fondos de Pensiones
ANDHA	Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales
ANEF	Asociación Nacional de Empleados Fiscales
ASEMUCH	Confederación Nacional de Funcionarios Municipales
CAS	Cárcel de Alta Seguridad
CELCO	Celulosa Arauco y Constitución SA
CNA	Consejo Nacional Aymara
CONFECH	Confederación de Estudiantes de Chile
CONFESUP	Confederación de Estudiantes de la Educación Superior Privada
CONFUSAM	Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada
COSENA	Consejo de Seguridad Nacional
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
DC	Democracia Cristiana
FENPRUSS	Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud
FPMR	Frente Patriótico Manuel Rodríguez
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria
PC	Partido Comunista
PS	Partido Socialista
RN	Renovación Nacional
SERVIU	Servicio de Vivienda y Urbanismo
UCH	Universidad de Chile
UDI	Unión Demócrata Independiente
UMCE	Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
UTEM	Universidad Tecnológica Metropolitana

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios El Mercurio y La Tercera.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe,
Meli Wixan Mapu, Medios en la Calle, Hommodolars,
Indymedia Santiago, Indymedia Valparaíso e Indymedia Chilesur.

Paraguay

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, integrantes de organizaciones campesinas y sindicatos de empresas privadas e instituciones públicas –entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), Central Nacional de Trabajadores (CNT), Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida (FNLSV) y la Organización Nacional Campesina (ONAC)– junto a jubilados y víctimas de la dictadura stronista y del supermercado Ycuá Bolaños, se manifiestan por las calles de Asunción y realizan un acto frente al Panteón de los Héroes. Repudian la política económica del gobierno y el proyecto de privatización de los entes públicos, reclaman más trabajo, salarios dignos y el cese de las persecuciones gremiales y campesinas y piden que los propietarios del supermercado incendiado sean encarcelados. Afiliados a la Coordinadora Obrera, Campesina y Popular (COCP), a la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay (OTEP) y disidentes de la CNT depositan una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes, desde donde marchan a la Plaza Italia y al Congreso.

MIÉRCOLES 11 Unos 1.200 estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) copan la asamblea extraordinaria universitaria que se realiza en el aula magna de la Facultad Politécnica y –como modo de presión para que convoquen a una nueva asamblea y revean la idea de permitir la reelección indefinida de las autoridades – retienen a los asambleístas que se encuentran en el lugar (rector, decanos, representantes estudiantiles, docentes y graduados). Proponen otras modificaciones al estatuto, como aumento de representantes estudiantiles (co-gobierno paritario) y mayor número de becas. El rector se niega a negociar y solicita la intervención de la Fiscalía de San Lorenzo, tras lo cual los estudiantes son dispersados con gases lacrimógenos y balas de goma, resultando heridos decenas de ellos.

JUEVES 19 Cerca de 7 mil integrantes de la Coordinadora de Jubilados y Pensionados del Paraguay se movilizan por el centro de Asunción y realizan un acto frente al Panteón de los Héroes para reclamar al gobierno que no intervenga la Caja Bancaria y no recorte los beneficios del personal del estado.

JUNIO

JUEVES 9 Pobladores de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay, inician un paro cívico en protesta por la falta de atención de las autoridades a sus pedidos de expropiación de tierras.

MIÉRCOLES 15 Alrededor de 45 mil docentes de escuelas públicas de todo el país, pertenecientes a la Unión Nacional de Educadores (UNE-SN) y a la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), inician una huelga indefinida, en reclamo de reajustes salariales.

VIERNES 17 Los docentes de la FEP y la UNE-SN ponen fin a la huelga iniciada el miércoles pasado, luego de acordar con el gobierno un aumento del 10% a partir de noviembre, a ser completado con otro incremento del 5% el año próximo.

DOMINGO 19 Concluye en Asunción la XXVIII Cumbre del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Paraguay y Uruguay son beneficiados con la creación del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), que dará a ambos países un millonario aporte anual para aplacar los efectos de la asimetría con los países grandes del bloque.

VIERNES 24 Sin orden judicial, pero a pedido de la Fiscalía General, 74 familias campesinas del Asentamiento Tekojoja, en Vaquería, Caaguazú, son desalojadas por militares y policías de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOPE). Sus viviendas son quemadas, sus cultivos arrasados y 2 personas asesinadas, 5 heridas de gravedad y alrededor de 50 detenidas. Los labriegos forman parte de la Organización Agraria y Popular, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y del FNLSV, y están asentados legalmente por el actual gobierno del presidente Duarte Frutos, de acuerdo con el Código Agrario y en condición de sujetos de la reforma agraria. Los disparos son hechos por 6 colonos brasileños cultivadores de soja que afirman haber comprado la propiedad y por sus 19 empleados paraguayos, a quienes les son secuestradas armas de fuego y proyectiles.

LUNES 27 Sectores sindicales, campesinos y estudiantiles integrados al Frente de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional, a los que se suman la Federación Nacional Campesina (FNC), el FNLSV y la MCNOC, inician una masiva movilización en todo el país en contra de la reapertura de la ley de privatización de las empresas públicas. En el interior del país miles de personas realizan varias movilizaciones, como cortes de ruta en el Cruce Tacuara de San Estanislao o en la ruta 1 de Misiones, o marchas en las ciudades de Caaguazú y Coronel Oviedo. En Asunción, unas 200 personas marchan por las principales calles de la ciudad hasta la Plaza de la Democracia, donde acampan hasta que se trate la ley.

MARTES 28 La Cámara de Senadores aprueba el ingreso de tropas de EE.UU. para realizar ejercicios militares en Paraguay desde julio de 2005 hasta septiembre de 2006. Los soldados contarán con inmunidad diplomática.

JUEVES 30 Mientras una multitud de manifestantes aguarda en la Plaza Uruguaya la decisión de los legisladores, y rodea el edificio del Congreso con cánticos de *no a la privatización*, la Cámara de Diputados decide rechazar la reactivación de la Ley 1.615 de privatización de empresas públicas. Tras la noticia, los manifestantes del interior del país levantan las movilizaciones que vienen llevando a cabo desde el comienzo de la semana.

Dos empresarios brasileños dedicados al cultivo de soja son condenados a 2 años de prisión, acusados de ser responsables de la muerte del niño Silvino Talavera, quien falleciera en enero de 2003 por una intoxicación con herbicidas usados por estos para fumigar plantaciones linderas a la vivienda de la familia Talavera, en Pirapey 35, Encarnación.

JULIO

DOMINGO 3 Llegan al país tropas norteamericanas, cuya misión será entrenar a soldados paraguayos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. De acuerdo a distintas fuentes, entre 7 y 500 marines se radicarán en una base construida en el Chaco paraguayo, preparada para albergar hasta 16 mil soldados, aterrizar aviones Galaxy y desembarcar armamento pesado.

MARTES 19 Luego de 5 días de caminata, 350 pobladores de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay, llegan a Asunción, en reclamo de la expropiación de 52 mil hectáreas del pueblo, que están en manos de la firma Victoria SA, propiedad de la secta Moon.

DOMINGO 24 Arriba al país un nuevo contingente de marines norteamericanos, 45 soldados en total, de los cuales 16 son médicos. Fuentes oficiales señalan que cooperarán en trabajos de salud pública.

AGOSTO

JUEVES 4 La Cámara de Senadores aprueba una ley que expropia 52 mil hectáreas en Puerto Casado, por lo cual las tierras pasarán a manos de sus actuales pobladores. Los vecinos de Casado, que desde hace 3 semanas se encuentran en la capital, festejan en la plaza ubicada frente al Congreso Nacional. En Puerto Casado la medida genera la inmediata reacción de la gente, que en forma espontánea se reúne en las esquinas y en la plaza frente al templo parroquial. El vocero de Victoria SA anuncia que la firma retira todos los planes de inversión previstos para lo que resta del año.

VIERNES 12 En el marco de una asamblea extraordinaria solicitada por los estudiantes, los actuales decanos de la UNA modifican el estatuto institucional a través del cual podrán ser electos por 10 años más a partir del cumplimiento del actual mandato. Así se elimina la medida aprobada en la asamblea del 11 de mayo en la que se estableciera la reelección indefinida.

MARTES 16 El secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, llega al país para una visita de 24 hs. Funcionarios de Defensa aclaran que uno de los principales motivos de su viaje es informarse sobre las actividades de Cuba y Venezuela en la región.

GLOSARIO DE SIGLAS

CNT	Central Nacional de Trabajadores
COCP	Coordinadora Obrera, Campesina y Popular
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
CUT-A	Central Unitaria de Trabajadores Auténtica
FEP	Federación de Educadores del Paraguay
FNC	Federación Nacional Campesina
FNLSV	Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida
FOCEM	Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR
FOPE	Fuerza de Operaciones Especiales
MCNOC	Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
ONAC	Organización Nacional Campesina
OTEP	Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay
UNA	Universidad Nacional de Asunción
UNE-SN	Unión Nacional de Educadores

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora y ABC Color.
Otras fuentes: Jaku´éke Paraguay, CLAJADEP, Rebelión y ADITAL.

Uruguay

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 En celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) realiza un acto en Montevideo, al cual acude el presidente Tabaré Vázquez junto a los miembros de su gabinete. La central sindical expresa su confianza en la voluntad transformadora del gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM), sin embargo, realiza varios demandas, entre ellas la reestatización del servicio de agua potable y saneamiento, que el gobierno impida la instalación de plantas de celulosa en Fray Bentos que contaminarán el río Uruguay y cuestiona la ampliación de la privatización de la telefonía móvil y el mantenimiento de la concesión del suministro de gas a la empresa Gaseba. Por su parte, el ministro de Economía, Danilo Astori, declara que existen varios puntos de disidencia con el movimiento sindical, principalmente en lo referente a la presencia de capitales privados en servicios públicos y a la implementación de plantas de celulosa en el litoral, y afirma que el gobierno no cambiará de parecer, alegando que son inversiones generadoras de fuentes de trabajo.

LUNES 2 Trabajadores de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UAOEGAS) ocupan por tiempo indeterminado la sede administrativa de la empresa concesionaria Gaseba –perteneciente a la compañía Gas de France– en Montevideo. La medida de fuerza se realiza en apoyo a la huelga de hambre sostenida por 3 trabajadores de la empresa, en reclamo de que se reincorporen a los 7 dirigentes gremiales despidos.

DOMINGO 8 Se llevan a cabo elecciones municipales en todo el país. El EP-FA-NM se impone en 8 distritos, en su mayoría de la costa, entre los que se encuentran, Montevideo, Canelones y Maldonado; mientras que el Partido Nacional triunfa en 10 distritos del interior del país, entre las que se cuentan Colonia, Tacuarembó y Artigas.

LUNES 9 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) logra un acuerdo con la empresa Gaseba por medio del cual restituyen a los trabajadores despedidos en 1996 y se pone fin a las medidas de fuerza. La resolución del conflicto es

considerada como un triunfo histórico, sin precedentes, para el movimiento sindical uruguayo.

VIERNES 20 El Poder Ejecutivo sanciona un decreto mediante el cual se estipula que las empresas de agua y saneamiento continuarán concesionadas hasta que venza el contrato.

LUNES 30 Integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) instalan una carpa frente a la sede de Aguas de la Costa, en Maldonado, para repudiar el decreto sancionado por el gobierno nacional que establece el mantenimiento de las concesiones privadas de los servicios de agua y saneamiento. Los manifestantes reclaman el cumplimiento de la reforma constitucional aprobada el 31 de octubre de 2004 por más del 60% de la población.

JUNIO

JUEVES 2 La Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) realiza un paro nacional activo de 24 hs en exigencia de que se respete la voluntad ciudadana plasmada en el referéndum del 31 de octubre de 2004 que plantea que se remuevan las concesiones de agua de manos privadas.

MIÉRCOLES 8 El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba, por unanimidad, un programa de 3 años para el país. No obstante, jerarcas del organismo advierten sobre las debilidades de la economía uruguaya. El ministro de Economía, Danilo Astori, por su parte, celebra la aprobación del programa que considera muy importante para el rumbo del país.

MARTES 21 La CNDAV inicia una larga marcha desde las puertas de la empresa Aguas de la Costa, en Maldonado, hasta el edificio Libertad, en Montevideo, en demanda de que se cumpla la reforma constitucional aprobada mayoritariamente por el pueblo uruguayo en 2004 que contempla la estatización de los servicios de agua y saneamiento.

JUEVES 30 El PIT-CNT convoca el primer paro nacional parcial de actividades desde que asumiera el gobierno del EP-FA-NM y realiza una movilización en Montevideo, desde la plaza Libertad hasta la Cámara de Comercio. Los docentes secundarios y de la Universidad del Trabajo de Uruguay (UTU), así como médicos y odontólogos realizan un paro por 24 hs. Los trabajadores de la salud privada y de la administración central, entre otros, paran por 6 hs. Los manifestantes declaran que la medida de fuerza no es en contra del gobierno sino para fortalecer al movimiento sindical.

JULIO

VIERNES 8 Centenares de habitantes de la periferia de la ciudad de Montevideo realizan al menos 6 cortes de calle a la entrada de la ciudad para reclamar su inclusión en el Plan de Atención Nacional de Emergencia Social (PANES).

SÁBADO 23 Grupos ecologistas y habitantes de las ciudades de Gualeguaychú, Argentina, y Fray Bentos, Uruguay, cortan el puente internacional que une ambas ciudades en repudio a la instalación de plantas de celulosa que contaminarían el Río Uruguay.

VIERNES 29 El gobierno nacional y las empresas papeleras Botnia y Ence, pese a las manifestaciones de repudio desde Argentina y Uruguay, ratifican que seguirán adelante con las inversiones y que, efectivamente, se instalarán las plantas de celulosa en el río Uruguay.

AGOSTO

MARTES 2 Trabajadores del frigorífico de Durazno –el mayor exportador del país en su rubro– deciden ocupar las instalaciones de la empresa en reclamo de mejoras salariales.

MIÉRCOLES 10 El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, visita el país y se entrevista con su par, Tabaré Vázquez. Ambos mandatarios firman una serie de acuerdos, entre los que se destaca el convenio alcanzado en materia energética que asegura al país abastecimiento de petróleo por más de 25 años.

El director de la corporación financiera internacional del Banco Mundial (BM) se ofrece a colaborar con el gobierno uruguayo para asegurar que se lleven a cabo los proyectos de construcción de las polémicas papeleras en el río Uruguay.

SÁBADO 20 Los trabajadores del frigorífico de Durazno, tomado por sus trabajadores desde hacía casi 2 semanas, deciden levantar las medidas de fuerza tras llegar a un acuerdo con el municipio.

VIERNES 26 Un grupo de jóvenes realiza un escrache frente al Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en Montevideo, para repudiar la llegada de las multinacionales Botnia y Ence que se proponen instalar las polémicas plantas de celulosa en Fray Bentos.

GLOSARIO DE SIGLAS

BM	Banco Mundial
CNDAV	Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
EP-FA-NM	Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría
FFOSE	Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado
FMI	Fondo Monetario Internacional
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
PANES	Plan de Atención Nacional de Emergencia Social
PIT-CNT	Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
UAOEGAS	Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas
UTU	Universidad del Trabajo de Uruguay

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.
Fuentes: diarios La República, El País y semanario Brecha.
Otras fuentes: Indymedia Uruguay.

Región Andina

La cuarta derrota del neoliberalismo en Bolivia

Luis Tapia*

* *Coordinador del Doctorado Multidisciplinario del Posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).*

Del dogmatismo neoliberal al reformismo neoliberal

En Bolivia se está viviendo un ciclo largo de crisis política en el seno del estado y del bloque político dominante que expresa también una crisis del modelo neoliberal. Ahora bien, dicha crisis no significa que este modelo no siga funcionando como núcleo organizador de la economía en Bolivia, o que no sigan gobernando miembros del mismo bloque dominante. La crisis ha producido falta de consenso y de estabilidad para dicho bloque y su proyecto.

Hasta octubre de 2003 el dogmatismo neoliberal en persona estaba a la cabeza del gobierno. La posición era no negociar ni reformar nada; se trataba, más bien, de radicalizar el modelo que combinaba privatización y exportación, con la venta del gas por Chile hacia Estados Unidos. Para sostener este proyecto se había dispuesto el despliegue de la represión policial y militar sobre los sectores críticos.

Las movilizaciones populares vencen esta faceta dogmática del neoliberalismo encarnada en Sánchez de Lozada, que a su vez representaba la faz tiránica que este tiende a adoptar en sus momentos de descomposición política. Según Sánchez de Lozada, el referéndum y la asamblea constituyente eran antidemocráticos.

La victoria popular sobre Sánchez de Lozada produce la transición a la faceta reformista del neoliberalismo. De hecho, la transición comienza con la aceptación de la realización de un referéndum sobre el gas y de la asamblea constituyente como parte de la agenda estatal. Se trata, en principio, de un reformismo político, no así económico; aunque la realización del referéndum llevaba a enfrentar una reforma de la regulación sobre la propiedad de los hidrocarburos. El reformismo neoliberal pensó luego incluso algunas políticas para apoyar la producción nacional, como el plan de "compro boliviano".

"La victoria popular sobre Sánchez de Lozada produce la transición a la faceta reformista del neoliberalismo. De hecho, la transición comienza con la aceptación de la realización de un referéndum sobre el gas y de la asamblea constituyente"

El núcleo de este reformismo neoliberal tenía como programa aceptar y afrontar la demanda generalizada de un referéndum sobre el gas sin que esto significara sustituir el modelo de privatización transnacional del sector. Por otra parte, esta situación de demanda de reforma del régimen de contribución fiscal le posibilitaba al gobierno enfrentar otra situación sumamente crítica: su déficit fiscal y las crecientes dificultades para financiar el funcionamiento normal de la administración estatal. Así, la demanda social le permitía al ejecutivo oponer ante las transnacionales una reforma que ampliara el margen de ingresos del tesoro nacional.

En este contexto, el gobierno de Mesa se organizó sobre dos ejes políticos. Uno fue la política en relación a Chile, aprovechando la ola contra la exportación del gas a través de ese país como un eje de articulación de su apoyo político. El otro eje, que ocupó un lugar central, fue la cuestión del gas, en torno a la cual se jugó su gobierno y su poder político. A lo largo de todo este prolongado proceso de discusión sobre la reforma de la ley del gas se organizó la subordinación de la realización del referéndum y de las

preguntas que el mismo contemplaría a la formulación que asumían las alternativas de ley de hidrocarburos preparadas por el ejecutivo, en constante consulta con las empresas petroleras. La primera operación consistió en transformar la demanda de referéndum sobre la nacionalización del gas en una consulta sobre el control del 50% de las regalías, posición compartida por el Movimiento al Socialismo (MAS) por un buen tiempo. La segunda operación, posterior al referéndum, fue transformar el masivo apoyo a esa dirigida opción por el 50% de regalías, en una versión de ley que no cumplía con los resultados mismos de la consulta. Así, las propuestas de ley elaboradas por el ejecutivo significaban un retroceso en relación a la respuesta a las preguntas que el mismo poder estatal había hecho en el referéndum. Se podría decir que Carlos Mesa se jugó por las petroleras –y por el tipo de apoyo político y económico que estas gestionan a través de los organismos internacionales de regulación económica y política mundial– pero lo hizo en un campo político o de fuerzas que le ofrecía una frágil base social para su gobierno.

La relación de fuerzas

En este sentido, el gobierno de Carlos Mesa encarnaba la continuidad del modelo económico neoliberal, sólo que en una situación de fragmentación de fuerzas en el seno del bloque político que había implantado y gobernado este modelo por veinte años. En el marco de esta fragmentación, una de las divisiones se dio en relación a los principales partidos de la coalición de gobierno de Sánchez de Lozada, que ya no estaban incluidos en el gabinete. Esto hizo que uno de los ejes de la confrontación y la lucha política se situara entre el ejecutivo y la parte del legislativo controlada por los partidos expulsados del gobierno.

En este contexto, el principal problema que tuvo que enfrentar Mesa fue llevar adelante la reforma a la ley de hidrocarburos, reduciendo el alcance de los resultados del referéndum y respondiendo a los intereses de las transnacionales petroleras, pero sin contar con el apoyo decidido de los partidos políticos y en un clima de constante desconfianza por parte de varias fracciones de la burguesía boliviana, en particular de la oriental.

El principal apoyo a esta fase de transición y a la realización del referéndum fue el MAS, aun sin estar en el gobierno. En todo este período el MAS ha sido, tal vez, el único partido político que ha defendido la continuidad del régimen de democracia representativa en el país, junto a la mayoría de las organizaciones populares, como se vio en la coyuntura de junio de 2005.

Hacia fuera del país suele parecer que fueron los movimientos sociales los que derrocaron al presidente Mesa. Sin embargo, considero que las fuerzas que se movieron contra

él, lo boicotearon y conspiraron durante meses fueron los partidos políticos desplazados del gobierno y la burguesía cruceña en particular. Por contrapartida, las organizaciones populares, incluido el MAS, comenzaron a movilizarse en demanda de que se cumplieran, por lo menos, los resultados de la consulta del referéndum sobre el gas –en el proceso de reforma de la ley de hidrocarburos y la realización de la asamblea constituyente–; es decir, que el presidente cumpliera los compromisos adquiridos en el momento de la transición.

Para explicar mejor este proceso cabe retroceder un poco para establecer algunos hitos que organizan el conflicto en la coyuntura de crisis de junio del presente año. Frente a la demanda del referéndum sobre el gas y de convocatoria a una asamblea constituyente –que es el programa del campo nacional-popular y que llevó a la crisis y derrota de Sánchez de Lozada– las oligarquías del oriente y sur del país articularon la consigna de las autonomías regionales o departamentales para contrarrestar la demanda de una decisión a nivel nacional sobre el destino de los hidrocarburos y el proceso de reforma de la constitución política del país. El programa de las autonomías forma parte de una estrategia defensiva de las oligarquías bolivianas, que han visto durante los últimos años un proceso de ascenso de fuerzas campesinas y populares en los espacios de las instituciones liberales, en particular los municipios y el sistema de partidos, y que tendencialmente ha creado las condiciones para que puedan disputar el ejecutivo en las próximas elecciones. Ante la posibilidad de un legislativo con mayorías indias y populares y un ejecutivo ganado por estas fuerzas a nivel nacional, las oligarquías han lanzado su programa contrainsurgente de autonomías departamentales para poder controlar las regalías de la explotación de los hidrocarburos, ya que los departamentos en los que se han descubierto más reservas e, históricamente, se explotan los hidrocarburos son aquellos en los que todavía hay un control más patrimonial de la tierra y la vida social.

La primera gran oposición a Mesa fue la de estas oligarquías que trataron de boicotear la realización del referéndum. Estas oligarquías aprovecharon la decisión de alza del precio de la gasolina para lanzar una nueva ofensiva contra Mesa a inicios de 2005. La salida de esa coyuntura de crisis fue el compromiso de realización de elecciones de prefectos y de un referéndum sobre autonomías departamentales antes de la convocatoria a asamblea constituyente. Es decir, a inicios del año 2005, Mesa aceptó el programa político oligárquico y, con ello –considero– firmó el fin de su gobierno; era, a partir de allí, cuestión de poco tiempo el que las oligarquías partidarias y departamentales lo desplazaran del ejecutivo.

La ola de movilizaciones que comienza en mayo fue una reacción y ofensiva contra una ley de hidrocarburos que ni siquiera cumplía la imposición del 50% de regalías; y también contra el programa de realizar un referéndum sobre autonomías antes de la asamblea constituyente. En este sentido, estas movilizaciones fueron como la reactivación del

programa de octubre de 2003, ante un cambio explícito en la dirección del ejecutivo que seguía las presiones de las oligarquías locales y transnacionales. La consigna de nacionalización se renovó, se generalizó a través del país y de los sectores sociales, y se radicalizó frente al retroceso producido en y desde el ejecutivo y el legislativo, que acabó aprobando una ley similar a la anteriormente vigente.

En este proceso, la ola de movilizaciones que se despliega de mayo a junio tiene una primera fase que persigue como objetivo presionar sobre el ejecutivo y el legislativo a favor de una ley de hidrocarburos que nacionalice el gas, demandando una inmediata convocatoria a la asamblea constituyente. Como el ejecutivo no estaba dispuesto a modificar la orientación de su posición en relación al gas, la coyuntura se volvió crítica. Sobre esta ola de movilizaciones populares se monta, por detrás, la conspiración de los partidos políticos y de las oligarquías locales para desplazar a Mesa del ejecutivo. En este sentido, el interés de las oligarquías partidarias y económicas se logra con la movilización de las fuerzas populares que perseguían otros objetivos.

Una vez que el presidente Mesa renuncia, después de haber emitido un decreto de convocatoria a la asamblea constituyente que ya no tuvo efecto político alguno –a no ser el de trasladar la responsabilidad al parlamento– la disputa y el conflicto se desplazan en torno a las decisiones sobre la sucesión presidencial, que es lo que estaban impulsando y esperando el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en particular, ya que la presidencia y vicepresidencia del parlamento estaban a cargo de estos partidos respectivamente y, según la Constitución, uno de los dos debía asumir el ejecutivo.

La segunda ola de movilizaciones populares se despliega justamente contra la posibilidad de que uno de estos dos partidos asuma la presidencia del país, para evitar que estos vuelvan a ser gobierno. En la persona de Hormando Vaca Diez (que ocupaba la presidencia del parlamento) se resumía a la vez toda la negatividad acumulada por la historia reciente de los partidos gobernantes del neoliberalismo y el programa de la oligarquía cruceña. En este sentido, las movilizaciones contra Vaca Diez y Cossío eran movilizaciones contra los partidos políticos y contra el programa de la autonomía oligárquica. A esto habría que añadir el tercer eje de resistencia, y que refería a que estos partidos representaban también el poder de las transnacionales y el de la embajada de Norteamérica. En este sentido, se podría decir que esta segunda ola de movilizaciones es antiimperialista, antioligárquica (como la primera ola) y anti-partidos.

El intento del MNR y el MIR de hacerse de nuevo con el ejecutivo generó así una dinámica de expansión de la resistencia, en un proceso de nacionalización de las movilizaciones, bloqueos y huelgas contra una sucesión presidencial que los beneficiaba y que

significaba el regreso de la coalición vencida junto a Sánchez de Lozada. Por contraparte, este programa político de un nuevo gobierno del MNR y el MIR fue apoyado por la oligarquía cruceña a través del Comité Cívico de Santa Cruz y las confederaciones empresariales. En este sentido, su derrota también fue una derrota del programa y las fuerzas autonomistas de Santa Cruz.

Este intento de sucesión presidencial promovido por el MIR y el MNR –con el apoyo norteamericano– generó una de las movilizaciones más grandes en la historia contemporánea de Bolivia. Por varias semanas diferentes fuerzas y organizaciones campesinas bloquearon el campo y diariamente atravesaban las ciudades con marchas y luchas callejeras. Así también, en esta segunda ola, empiezan a plegarse algunas organizaciones urbanas, en particular las juntas de vecinos, que en el caso de la ciudad de El Alto habían estado movilizadas desde un inicio. El intento de Vaca Diez había generado una indignación general y, por tanto, una movilización general.

Se podría decir que la movilización de este conjunto de fuerzas contra las privatizaciones del agua y de los recursos naturales y por una reforma global del estado boliviano –que empieza con demandas específicas o puntuales– cuando se generaliza y se produce la crisis del gobierno y su posible caída –frente a la cual se despliegan las estrategias de reacción autoritaria y militarización– se vuelven básicamente defensoras de la democracia y de las libertades políticas. Mientras las organizaciones partidarias y civiles que han propiciado el neoliberalismo en el país han estado dispuestas a abandonar las instituciones políticas liberales; las fuerzas que las han defendido son más bien organizaciones campesinas que no tienen una mentalidad liberal pero que constituyen hoy la base social de la democracia política en el país.

Para terminar, quiero justificar el título de este breve escrito. La primera derrota del neoliberalismo ocurrió en la Guerra del Agua, en abril de 2000, contra la privatización transnacional de dicho recurso en Cochabamba. La segunda derrota se dio en febrero de 2002 contra el intento del alza de impuestos al 25%. La tercera derrota la sufrieron Sánchez de Lozada y su proyecto de exportación del gas bajo control transnacional, y la cuarta se dio en junio de 2005. Sin embargo, estos procesos no implican que el neoliberalismo no siga organizando actualmente la estructura y política económica en Bolivia, así como el conjunto de las instituciones políticas del estado; habría que pensar, en realidad, que se trata de una guerra de posiciones contra el neoliberalismo, que tiene fechada su próxima batalla para diciembre de 2005 en las elecciones generales.

Bolivia

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 Miles de personas, entre trabajadores, campesinos, estudiantes, jubilados y docentes, marchan por el centro de la ciudad de La Paz hacia la plaza Murillo en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. La movilización, convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) y un conjunto de organizaciones sociales, tiene por objetivo exigir al gobierno la nacionalización de los hidrocarburos. En la ciudad de Sucre, cientos de personas se manifiestan en reclamo de la creación de fuentes laborales y el respeto al fuero sindical.

JUEVES 5 La Cámara de Diputados aprueba por 59 votos a 48 las modificaciones realizadas por el Senado a la ley de hidrocarburos. La misma, que consta de 142 artículos, fija el pago de regalías sobre la producción en un 18% más impuestos directos no deducibles por un 32%. En el mismo sentido, establece la prioridad del estado sobre los recursos energéticos en boca de pozo y obliga a las empresas petroleras a pasar los contratos a las actuales reglas de juego. El presidente Carlos Mesa deberá, en un plazo máximo de 10 días, vetar o promulgar la normativa.

Médicos y trabajadores de la salud de todo el país, convocados por la Confederación de Trabajadores de la Salud, cumplen con la primera jornada de un paro de 48 hs en demanda de un aumento salarial del orden del 20% sobre su salario básico, entre otras cuestiones.

DOMINGO 8 Alrededor de 600 integrantes del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MSTB) ocupan terrenos en la comunidad Pueblos Unidos de la localidad de Los Yuquises, departamento de Santa Cruz, y se enfrentan con campesinos allí asentados quienes intentan resistir la toma de las propiedades. Horas más tarde, el MSTB consolida su posición en la zona y toma como rehenes a unas 69 personas.

LUNES 9 En la ciudad de Santa Cruz se realiza la Asamblea Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) con la presencia del líder nacional de la organización, Evo Morales. En la reunión, los principales dirigentes del partido firman con representantes de diversas organizaciones sociales, entre las que se cuentan la

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Central de Pueblos Mojeños de Beni (CPEMB) y el MSTB, el denominado Pacto por la Unidad. En el acto lanzan la convocatoria a una marcha nacional hacia La Paz para el próximo lunes 16 de mayo donde exigirán la modificación de la ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso el pasado jueves.

La Federación de Maestros Urbanos de Chuquisaca inicia un paro de labores por 24 hs en todo el departamento para exigir la cancelación de los salarios correspondientes al mes de abril, rechazar la ley de pensiones y reclamar la reposición de los aportes realizados al Fondo Nacional de la Vivienda Solidaria (FONVIS).

MARTES 10 El presidente Carlos Mesa observa la ley de hidrocarburos recibida del Congreso Nacional, por lo que la normativa retorna a la instancia parlamentaria para su revisión.

Cientos de trabajadores, entre cooperativistas mineros y docentes primarios y universitarios, bloquean diversos puntos del departamento de Potosí en la jornada de paro cívico convocada por la Central Obrera Departamental (COD) para exigir la definitiva nacionalización de los hidrocarburos, la inmediata convocatoria a la Asamblea Constituyente, y en repudio al referéndum autonómico pretendido por el Comité Cívico de Santa Cruz.

MIÉRCOLES 11 El Congreso Nacional rechaza las observaciones conceptuales realizadas por el presidente Carlos Mesa a la ley de hidrocarburos por considerar que tal figura no está contemplada en la constitución. Por tal motivo, el primer mandatario tiene hasta el próximo martes 17 para formular observaciones concretas a la normativa, caso contrario, la misma se considerará promulgada por el poder ejecutivo.

Los dirigentes del MSTB que lideran la ocupación de unas 126 mil hectáreas en la localidad de Los Yuquises, departamento de Santa Cruz, liberan a la totalidad de los rehenes mantenidos desde el pasado domingo 8 de mayo.

JUEVES 12 Trabajadores de diversas organizaciones, afiliadas a la COD de Oruro, marchan por el centro de la ciudad en rechazo a la ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso Nacional por considerar que la misma no recupera los recursos naturales para el pueblo boliviano.

LUNES 16 Miles de personas se movilizan por distintas ciudades del país y bloquean calles y rutas en el inicio de la jornada de protesta convocada por diversas organizaciones sociales con el objetivo de modificar la ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso Nacional. Cientos de afiliados a la COD de La Paz arriban a la

ciudad capital para exigir al gobierno la definitiva nacionalización de los hidrocarburos. Con la misma demanda, cientos de vecinos de la ciudad de El Alto, integrantes de Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) local, y un numeroso grupo de trabajadores convocados por la COB, marchan hacia la Casa Presidencial. Luego, decenas de personas intentan ingresar a la Plaza Murillo y son reprimidas por la policía por medio de gases lacrimógenos y balas de goma, lo que deja un saldo de 8 heridos. Por su parte, las organizaciones firmantes del Pacto de Unidad inician una marcha desde la localidad de Caracollo, departamento de Oruro, hacia el centro paceño, para exigir que la ley del gas incluya el pago del 50% de regalías por parte de las empresas petroleras.

Alrededor de 200 mineros cooperativistas bloquean, a unos 40 km de la ciudad de La Paz, la carretera que une Cochabamba con el occidente del país para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En Potosí, cientos de cooperativistas mineros bloquean los accesos a la ciudad para exigir la recuperación de los recursos naturales y la entrega de los bienes de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

Integrantes de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz y de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa inician una huelga de hambre en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y la renuncia del presidente Carlos Mesa.

MARTES 17 Con la firma del presidente de la Cámara de Senadores se promulga la ley de hidrocarburos, luego de vencido el plazo para que el poder ejecutivo realice las observaciones pertinentes. La nueva normativa establece el pago del 18% de regalías y el 32% en concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la migración obligatoria de los contratos firmados bajo la antigua ley, la recuperación de los hidrocarburos en boca de pozo y la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Los dirigentes de las principales organizaciones sociales del país rechazan la ley y anuncian la continuidad de las medidas de fuerza en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos.

MIÉRCOLES 18 Los mineros cooperativistas levantan los diversos bloqueos de rutas organizados en los departamentos de La Paz y Potosí para exigir la nacionalización de los hidrocarburos luego de firmar un acuerdo con el gobierno por medio del cual este se compromete a ejecutar políticas que apunten a la reactivación del sector.

JUEVES 19 Trabajadores mineros y campesinos del departamento de Potosí inician, con una marcha por el centro de la ciudad, la primera jornada de un paro por 48 hs convocado por la COD local y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de Potosí (FSUTCOP) en demanda de la definitiva nacionalización de los hidrocarburos.

MARTES 24 Cerca de 10 mil personas, entre campesinos de los Yungas, cocaleros de Cochabamba, colonizadores, maestros y trabajadores mineros, se movilizan por la ciudad de La Paz para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Al promediar la actividad, tropas antimotines del Grupo Especial de Seguridad (GES) disparan gases lacrimógenos y balas de goma y logran dispersar a los manifestantes en las puertas de la Plaza Murillo, quienes se reagrupan en otra zona de la ciudad y continúan con la protesta. Por su parte, afiliados a la FEJUVE de El Alto y miembros de la Central Obrera Regional (COR) de la misma ciudad, bloquean diversas rutas en la región del altiplano y la autopista que conduce hacia el centro de La Paz en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos.

MIÉRCOLES 25 Los trabajadores de la Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) inician un paro por 24 hs para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y el cumplimiento de un conjunto de demandas sectoriales.

LUNES 30 Vecinos de la ciudad de El Alto, convocados por la FEJUVE local, bloquean la carretera que conduce al aeropuerto internacional para exigir que el Congreso Nacional apruebe la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Alrededor de 1.000 maestros rurales del departamento de Oruro bloquean el acceso a la ciudad de Caracollo en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y para exigir que el gobierno cumpla con una serie de reclamos sectoriales. Por su parte, cientos de docentes rurales del departamento de Sucre bloquean calles en el centro de la ciudad exigiendo un aumento salarial.

MARTES 31 Miles de personas, entre afiliados a la FEJUVE y la COR de El Alto, estudiantes de la Universidad Pública del Alto (UPEA) y padres de familia, marchan desde El Alto hacia La Paz y bloquean todos los accesos al centro paceño y cortan calles y avenidas para exigir que el Congreso Nacional apruebe la definitiva nacionalización de los hidrocarburos. Con las mismas reivindicaciones, cientos de personas, integrantes del Comité de Coordinación para la Nacionalización de los Hidrocarburos y las Empresas Capitalizadas, se movilizan por la ciudad de Oruro.

JUNIO

MIÉRCOLES 1 Miles de personas, entre maestros urbanos y rurales, integrantes de juntas vecinales, trabajadores fabriles, estudiantes y jubilados, marchan por el centro de la ciudad de Cochabamba hacia la plaza 14 de septiembre, en respuesta a la convocatoria realizada por diversas organizaciones sociales, para demandar la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a la Asamblea

Constituyente, la renuncia de los presidentes de ambas cámaras parlamentarias, Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, y el cierre del Congreso Nacional.

Integrantes de diversos sectores, entre maestros urbanos y rurales, desocupados, trabajadores fabriles y estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), se movilizan por distintas calles del centro de La Paz para confluir en los alrededores de la Plaza Murillo en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Con las mismas reivindicaciones, algunos manifestantes bloquean caminos en el departamento paceño y las rutas que conducen hacia Oruro, Copacabana y Desaguadero.

JUEVES 2 Choferes de micros urbanos de La Paz, integrantes de la Asociación de Transporte Libre (ATL) inician un paro de actividades por 24 hs para exigir la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a la Asamblea Constituyente y mayor seguridad para circular por la ciudad. Por su parte, los afiliados a la Federación de Choferes de La Paz inician una huelga por 48 hs con las mismas reivindicaciones.

DOMINGO 5 Miles de personas, entre campesinos de los Yungas paceños, estudiantes universitarios, maestros, trabajadores de la salud, comerciantes y desocupados, marchan por el centro de La Paz en el duodécimo día de paro departamental para repudiar el decreto gubernamental que convoca a la realización conjunta de la elección de delegados a la Asamblea Constituyente y al referéndum autonómico para el próximo 16 de octubre.

LUNES 6 En horas de la noche, y a través de un mensaje transmitido por cadena nacional, Carlos Mesa renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. En los argumentos señalados por el primer mandatario se destacan tanto la crisis social y el bloqueo nacional de caminos como la imposibilidad de alcanzar acuerdos con los diversos bloques parlamentarios y las presiones sostenidas por las organizaciones cívicas del departamento de Santa Cruz en torno a la demanda de autonomía regional. En las próximas horas, el Congreso Nacional deberá aprobar o rechazar la renuncia y nombrar a un nuevo presidente de la República. Representantes de diversos sectores sociales exigen la renuncia de los presidentes de ambas cámaras parlamentarias y la designación del presidente de la Corte Suprema de Justicia como primer mandatario.

Miles de personas, entre campesinos, mineros, maestros urbanos y rurales, estudiantes de la UPEA y de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), trabajadores de la COR y vecinos de la FEJUVE de El Alto, marchan por el centro de La Paz para exigir la nacionalización de los hidrocarburos. Al promediar la movilización, se producen enfrentamientos con comerciantes y las fachadas de la Corte Superior de Justicia, de la Casa de la Cultura y del Hotel Presidente resultan apedreadas. En las primeras horas de la tarde, los manifestantes realizan un cabildo abierto en la plaza Murillo en donde el principal dirigente de

la FEJUVE alteña, Abel Mamani, expresa su repudio a la renuncia de Carlos Mesa y a la posible sucesión presidencial a favor de Hormando Vaca Díez, presidente del Senado. Al terminar el acto, un grupo de manifestantes intenta traspasar las vallas policiales y es reprimido con gases lacrimógenos, mientras que un total de 26 personas acusadas de dañar propiedad privada resultan detenidas por la Policía Técnica Judicial (PTJ).

MARTES 7 Miles de personas, entre mineros cooperativistas, campesinos de diversas provincias del departamento de La Paz, estudiantes de la UMSA, maestros rurales y miembros de la FEJUVE de El Alto, marchan por el centro de la ciudad y ocupan la plaza Murillo para exigir la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a la Asamblea Constituyente y rechazar la sucesión constitucional a favor tanto del presidente del Senado como del de la Cámara de Diputados. Ante el intento de los manifestantes de traspasar las vallas policiales que resguardan la Casa de Gobierno, agentes del GES disparan gases lacrimógenos y despejan la zona. Como resultado de la represión, son detenidas 54 personas mientras que otras 12 resultan heridas. Con las mismas reivindicaciones, diversas movilizaciones se realizan en las ciudades de Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí y Santa Cruz.

JUEVES 9 En horas de la noche y con el apoyo de las bancadas del MAS, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), Nueva Fuerza Republicana (NFR) y una fracción del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Eduardo Rodríguez Veltzé es ungido como tercer presidente del actual período constitucional. El flamante primer mandatario expresa que su principal objetivo es lograr un acuerdo nacional que permita, a corto plazo, convocar a elecciones presidenciales. Por la tarde, integrantes de diversas organizaciones sociales realizan manifestaciones en los alrededores del recinto legislativo en repudio a los representantes de los partidos tradicionales. Las movilizaciones son reprimidas por efectivos policiales, lo que causa la muerte de un trabajador minero.

VIERNES 10 Diversas organizaciones sociales, entre maestros urbanos y rurales, trabajadores de la salud, campesinos y mineros, anuncian una tregua en las medidas de presión luego de la asunción de Eduardo Rodríguez Veltzé como primer mandatario. De esta manera se levantan la mayoría de los bloqueos de rutas y caminos del país, a excepción de los de la región del altiplano, la ciudad de El Alto y los Yungas paceños. Por su parte, los líderes de la FEJUVE y la COR de El Alto, así como de la COB, manifiestan su decisión de mantener las medidas de presión hasta que las conquistas se hagan efectivas.

DOMINGO 12 El presidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, se reúne en la ciudad de El Alto con los dirigentes de la COR y FEJUVE locales. El primer mandatario expresa la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan realizar las elecciones nacionales a fin del presente año. Los líderes sociales anuncian la suspensión de las

medidas de fuerza mantenidas durante 3 semanas a condición de que se conformen diversas comisiones multilaterales en las que se presenten y resuelvan las demandas de la población.

MARTES 14 Representantes de la Confederación de Maestros Rurales y de la Confederación de Maestros Urbanos anuncian la suspensión de la huelga indefinida y de las movilizaciones en torno a la nacionalización de los hidrocarburos que mantienen desde el pasado 16 de mayo. Los dirigentes gremiales expresan que no se reanudarán las clases hasta que no se abone el sueldo correspondiente al mes de mayo y el bono institucional.

SÁBADO 18 Alrededor de 70 organizaciones vecinales, sociales, cívicas, campesinas y sindicales de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre resuelven, en la ciudad de Cochabamba, la suspensión de las movilizaciones en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, y acuerdan encausar estas y otras reivindicaciones a través del Congreso Nacional y el poder ejecutivo.

JULIO

MIÉRCOLES 6 El presidente Eduardo Rodríguez Veltzé firma el decreto 28.228 por el que se convoca para el próximo 4 de diciembre a elecciones generales en todo el territorio nacional para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados por un período constitucional de 5 años. Acto seguido, el primer mandatario emite el decreto 28.229 por medio del cual se establece, para la misma fecha, la realización de las elecciones de prefectos departamentales por un período de 3 años. El Congreso Nacional debe ratificar o rechazar lo establecido por el poder ejecutivo. Esta resolución se suma a la aprobada días atrás en donde los senadores y diputados convocan a la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente y la realización del referéndum autonómico en todo el territorio nacional para el 2 de julio de 2006.

VIERNES 8 Alrededor de 50 estudiantes de la Universidad Autónoma Tomás Frías ocupan la sede de la institución para exigir a las autoridades la anulación del sistema de claustros en que se basa la elección de rector y vicerrector.

MARTES 12 Cientos de vecinos de localidades adyacentes al centro de la ciudad de Cochabamba se movilizan hacia la plaza 14 de septiembre para exigir a las autoridades municipales la adopción de medidas tendientes a reforzar la seguridad ciudadana y controlar la ola de delitos en la ciudad.

MIÉRCOLES 20 Médicos de todo el país realizan un paro de labores por 24 hs en demanda de que el gobierno cumpla con el convenio firmado en el pasado mes de mayo por medio del cual se acuerda un aumento salarial de 3,5%, la institucionalización de cargos jerárquicos y la creación de nuevas plazas de trabajo.

AGOSTO

JUEVES 4 Funcionarios del poder judicial realizan un paro de labores por 24 hs en todo el país en repudio al recorte salarial y al proceso de institucionalización de los cargos anunciado por las autoridades del gobierno nacional. El consejero de la judicatura expresa que la medida adoptada por los trabajadores es inaceptable y que los responsables serán sometidos a un proceso disciplinario o bien remitidos al Ministerio Público.

Campesinos cocaleros de la región de los Yungas, departamento de La Paz, ocupan las instalaciones de la Dirección General de la Hoja de Coca (DIGECO) e inician una huelga de hambre en rechazo a las tareas de control comenzadas días atrás por efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR).

MARTES 9 Médicos de todo el país inician un paro de labores por 72 hs convocado por el Colegio Médico de Bolivia (CMB) en repudio a la intención de las autoridades de los ministerios de Salud y Trabajo de modificar el escalafón médico y privilegiar los méritos profesionales antes que los gremiales y asistenciales.

MIÉRCOLES 10 Médicos de todo el país levantan el paro iniciado el pasado martes, luego de firmar un acuerdo con autoridades gubernamentales por medio del cual las partes se comprometen a conformar, en un plazo no mayor a 30 días, una comisión jurídica con el objetivo de presentar un informe para la redacción de un nuevo decreto supremo que defina los términos del escalafón docente.

LUNES 15 Funcionarios del poder judicial extreman las medidas de presión e inician un paro de labores por 72 hs y una huelga de hambre en la sede de la COB de la ciudad de La Paz en repudio a la reducción salarial anunciada por el Consejo de la Magistratura y a las sanciones a los huelguistas exigidas por el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

MIÉRCOLES 17 Funcionarios del Poder Judicial, representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales y Administrativos (ANAFUJA) y autoridades del Consejo de la Judicatura firman un acuerdo por el cual se levanta el paro de labores y la huelga de hambre iniciada días atrás por los trabajadores del sector. El documento establece la conformación de una comisión mixta con el objetivo de elaborar un estudio del marco normativo para analizar el proceso de institucionalización en cada caso en particular, la conservación de los niveles salariales actuales y la garantía de no aplicar sanciones contra los huelguistas.

LUNES 29 Alrededor de 100 vendedores ambulantes marchan por diversas calles del centro de La Paz en repudio a la futura aplicación del Plan de Ordenamiento y Regulación del Comercio en Vías y Espacios Públicos anunciada por las autoridades municipales.

GLOSARIO DE SIGLAS

AASANA	Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
ANAFUJA	Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales y Administrativos
APG	Asamblea del Pueblo Guaraní
ATL	Asociación de Transporte Libre
CMB	Colegio Médico de Bolivia
COB	Central Obrera Boliviana
COD	Central Obrera Departamental
COMIBOL	Corporación Minera de Bolivia
CONAMAQ	Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo
COR	Central Obrera Regional
CPEMB	Central de Pueblos Mojeños de Beni
CPESC	Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
DIGECO	Dirección General de la Hoja de Coca
FEJUVE	Federación de Juntas Vecinales
FONVIS	Fondo Nacional de la Vivienda Solidaria
FSUTCOP	Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de Potosí
GES	Grupo Especial de Seguridad
IDH	Impuesto Directo a los Hidrocarburos
MAS	Movimiento Al Socialismo
MIP	Movimiento Indígena Pachakuti
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionario
MNR	Movimiento Nacionalista Revolucionario
MSTB	Movimiento Sin Tierra de Bolivia
NFR	Nueva Fuerza Republicana
PTJ	Policía Técnica Judicial
UMOPAR	Unidad Móvil de Patrullaje Rural
UMSA	Universidad Mayor de San Andrés
UMSS	Universidad Mayor de San Simón
UPEA	Universidad Pública de El Alto
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Realizada por el Observatorio Social de América Latina.
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, El Diario, Correo del Sur y La Prensa.
Otras fuentes: Indymedia Bolivia y Bolpress.

Colombia

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 En el Día Internacional de los Trabajadores decenas de miles de personas, convocadas por la Gran Coalición Democrática (GCD), el Comando Nacional Unitario (CNU), la Central General de Trabajadores Democráticos (CGTD), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Red Colombiana de Acción contra el Libre Comercio y el Área de Libre Comercio de las Américas (RECALCA), la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas (ANTHOC), además de otras organizaciones políticas, marchan por las principales ciudades del país para repudiar la política económica del gobierno del presidente Álvaro Uribe, el Tratado de Libre Comercio (TLC), la reforma pensional, las políticas privatizadoras y las persecuciones y asesinatos a los sindicalistas, entre otras cuestiones. En Bogotá, miembros del Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) reprimen a jóvenes con gases lacrimógenos y balas de goma, golpeando a varias personas en la cabeza, entre ellas a un joven anarquista que muere a los pocos días. También hay varios detenidos y otros heridos. Por otra parte, el movimiento sindical junto con organizaciones sociales, populares y gremiales, lanzan una consulta sobre el TLC.

MARTES 3 Decenas de miembros del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL) bloquean la calle frente a la Defensoría del Pueblo, en el Atlántico, para repudiar el asesinato de su compañero Adán Pacheco, ex sindicalista del sector, el pasado 2 de mayo.

JUEVES 5 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejército se enfrentan en Anaime, zona rural de Cajamarca, Tolima.

Por la madrugada, paramilitares se lanzan a una captura masiva de estudiantes de la Universidad de Antioquia (UDEA); allanan la vivienda de uno de los jóvenes estudiantes, así como las de otras personas, dejando un saldo de 14 detenidos.

MARTES 10 La Asamblea General de Estudiantes de la UDEA, sede Medellín, declara un paro de actividades en rechazo a la política privatista de Uribe para la educación pública, al TLC y a la detención de sus compañeros.

MIÉRCOLES 11 El ejército se enfrenta con las FARC en la vereda Durameina, jurisdicción de Aracataca, Magdalena y en el municipio de Puerto Rico, Meta.

DOMINGO 15 El ejército se enfrenta con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los departamentos de Antioquia y César, en el noroeste y norte respectivamente, y en el Valle del Cauca y Cauca, suroeste, donde también combate con paramilitares.

Sicarios en motocicleta intentan asesinar al presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) en Cartagena, produciéndose enfrentamientos con disparos entre aquellos y los custodios del sindicalista, que resulta ileso.

LUNES 16 El ejército se enfrenta con el ELN en la serranía del Perijá, vereda Matecaña, jurisdicción de Becerril y en la Sierra Nevada. Asimismo, las fuerzas militares combaten con las FARC en Filo Machete, San José de Oriente.

MIÉRCOLES 18 El vicepresidente, Francisco Santos, afirma que no tienen previsto suspender las fumigaciones de cultivos ilícitos con el herbicida glisofato en la frontera, como pide el gobierno de Ecuador.

JUEVES 19 En Barrancabermeja, trabajadores de la empresa Unión Temporal JPM, contratista de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), con el apoyo de la USO, paran en demanda de aumento salarial, del pago en término y de que los doten de instrumentos para trabajar.

Organizaciones sindicales y estudiantiles de la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, marchan hasta la gobernación en rechazo a la liquidación del Hospital Universitario y del cierre de otros centros asistenciales.

Las FARC y el ejército se enfrentan en la localidad de San Antonio de Getuchá, Caquetá.

En Palmira, trabajadores agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) instalan una carpa contra el despido de varios de sus compañeros y los salarios de hambre que reciben los trabajadores de Coca Cola, Fleischman y Kraft Foods SA.

VIERNES 20 Las FARC y el ejército combaten en las veredas Alto y Bajo del Inglés y El Cidral, en la zona del nudo de Paramillo, dejando un saldo de 11 guerrilleros y 4 militares muertos.

Los trabajadores de la Electrificadora, seccional Barrancabermeja, levantan las protestas luego de que el SINTRAELECOL acuerda con la gerencia la igualdad de condiciones para los trabajadores y el escalafón, y que no haya sanciones.

Tras 5 días de paro cívico, los pobladores de Guapi destruyen la fachada de la alcaldía, saquean el lugar y marchan por las calles de ese lugar en protesta por la deficiente prestación de los servicios públicos y los permanentes cortes de electricidad. La zona se encuentra militarizada.

LUNES 23 Los estudiantes de la UDEA levantan el paro. Un sector de los jóvenes afirma que seguirá impulsando espacios de discusión sobre los decretos, el TLC y la detención de sus compañeros.

MIÉRCOLES 25 Más de 10 mil trabajadores de 7 ingenios azucareros inician una huelga por tiempo indeterminado en rechazo a las condiciones de trabajo y a la falta de un salario básico y dotaciones, entre otras cuestiones. Cerca de 2 mil obreros se concentran en las instalaciones del Ingenio del Cauca (INCAUCA), mientras otros 400, en el corregimiento de Cabuyal, Candelaria, donde permanecen bloqueados por la fuerza pública, que les impide unirse a resto de los huelguistas.

SÁBADO 28 El gobierno de Uribe y los paramilitares reinician conversaciones de paz que buscan desmovilizar a 20 mil combatientes.

MARTES 31 En Barranquilla, trabajadores, afiliados a la ANTHOC, mantienen un paro parcial de labores y bloquean el octavo piso de la alcaldía para exigir el pago de la totalidad de las deudas de la Ley 550, correspondientes a sus acreencias.

JUNIO

VIERNES 3 En Santa Marta, estudiantes y organizaciones de protección del medio ambiente realizan una concentración contra la fumigación de cultivos ilícitos con glisofato en la Sierra Nevada.

En Barranquilla, trabajadores de Coca Cola realizan una protesta frente a la embotelladora de la empresa, en el marco de una jornada nacional convocada por el SINALTRAINAL contra la multinacional, acusando a la misma de destruir el medio ambiente y violar los derechos humanos y laborales de los obreros. Al terminar la manifestación, grupos paramilitares con armas de fuego obligan a subir a una camioneta a 3 estudiantes de la Universidad del Atlántico y del colegio Pestazzi, que se solidarizan con los trabajadores, mientras que otros 2 estudiantes logran escapar.

SÁBADO 4 Paramilitares instalan un retén en la vía entre Ariari de Medellín y Puerto Esperanza y detienen a un militante comunista y dirigente campesino del municipio de El Castillo, que posteriormente es asesinado.

DOMINGO 5 El Banco Mundial (BM) otorga a Colombia un crédito por 70 millones de dólares para financiar proyectos de agua potable y saneamiento básico en el país.

Más de 9 mil arroceros de los departamentos de Tolima, Huila, Meta y Casanare, que poseen el 90% del área cultivada de ese grano del país, participan de la Consulta Popular Arrocera contra el TLC, organizada por la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Niegan, por amplia mayoría, la inclusión del arroz en las negociaciones del TLC entre Colombia y Estados Unidos y la de los productos agropecuarios subsidiados por Norteamérica.

LUNES 6 Más de 3 mil profesores, agremiados al Sindicato de Educadores de Santander, inician un paro para exigir el pago del último mes, aumento salarial y el reintegro de 300 docentes provisionales.

SÁBADO 11 En la zona franca del Pacífico, municipio de Palmira, Valle del Cauca, el gerente de Recursos Humanos de la multinacional Kraft Foods SA, el gerente de la planta y el de producción, junto con otros supervisores, en complicidad con las fuerzas policiales, secuestran a un grupo de 30 trabajadores para obligarlos a firmar su renuncia laboral, provocándoles graves lesiones. Los obreros rechazan dicha exigencia.

DOMINGO 12 Las FARC y el ejército combaten en zona rural del municipio de Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá.

JUEVES 16 Trabajadores agremiados al Sindicato de Educadores del Magdalena realizan un paro de 24 hs para exigir la reincorporación de los docentes provisionales, entre otras cuestiones.

LUNES 20 El Congreso aprueba una nueva reforma a las pensiones que, a partir de 2010, limita los derechos de los pensionados y elimina los regímenes especiales de jubilaciones.

JUEVES 23 Más de 700 víctimas de paramilitares crean un movimiento nacional, promovido por diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), contra el proyecto de Ley de Justicia y Paz. Participan la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).

SÁBADO 25 Las FARC y el ejército combaten cerca de la frontera con Ecuador, en una zona rural de Puerto Asís, Putumayo, dejando un saldo de, al menos, 25 militares muertos. Más tarde, el ejército detiene masivamente a campesinos en el corregimiento de Villanueva, en la región del sur de Bolívar, que posteriormente son presentados públicamente como guerrilleros.

LUNES 27 El presidente Uribe admite que hubo fallas militares en el ataque a las FARC, que dejó 25 uniformados muertos en la frontera con Ecuador.

MARTES 28 La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba la Ley de Presupuesto de Ayuda Exterior, que compromete un monto de más de 600 millones de dólares en concepto de ayuda a Colombia.

JULIO

DOMINGO 3 Las FARC realizan una incursión armada en Caldoso, suroeste, además de enfrentarse con el ejército en Silvia, departamento del Cauca.

El ELN inicia un paro armado en Arauca, manteniendo incomunicado el departamento con el resto del país.

MARTES 5 La Organización Indígena de Colombia (ONIC) denuncia que unos 1.600 indígenas tuvieron que desplazarse a raíz de los permanentes combates entre las FARC y el ejército en la frontera con Ecuador.

Las FARC intentan tomar el poblado de Caldoso, Cauca, enfrentándose con el ejército y la policía.

VIERNES 8 El ministro de Defensa renuncia debido a un enfrentamiento con mandos militares y el retiro del respaldo político de los parlamentarios que apoyan en el Congreso al gobierno de Uribe.

DOMINGO 10 Presuntos miembros de las FARC realizan un ataque contra un grupo de concejales de la población de Campoalegre, 360 km al suroeste de Bogotá, dejando un saldo de 4 muertos.

JUEVES 14 La ANTHOC, seccional Cari, inicia un paro en rechazo a la reestructuración en la entidad y al inminente despido de trabajadores que esta implica, y para exigir el pago de los salarios y primas de mitad de año que se les adeuda.

VIERNES 15 Luego de iniciada la huelga indefinida el 25 de mayo pasado, los trabajadores de los 7 ingenios azucareros levantan la medida de fuerza tras acordar con los empresarios incrementos del 6%, en promedio, en las tarifas de corte, compensaciones por prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, dotaciones y elementos de trabajo, entre otras cuestiones.

LUNES 18 El gobierno anuncia la creación de una nueva división del ejército, conformada por 20 mil hombres, aproximadamente, para operar en regiones vecinas a la frontera con Panamá.

El ejército se enfrenta con las FARC en el Meta, y con paramilitares en la vereda El Codo, municipio de Samaná, Caldas. Por otra parte, el ejército combate con el ELN en la vereda El Porvenir, de Toledo, al norte de Santander.

Comienza en Miami, EE.UU., la XI ronda de negociaciones del TLC de los países andinos con EE.UU. El jefe del equipo negociador de Colombia pide a EE.UU. que dé una respuesta a su propuesta agrícola sobre medidas sanitarias y fitosanitarias.

MARTES 19 Más de 900 trabajadores de la Empresa Social del Estado (ESE) José Prudencio Padilla, en la Costa Caribe, con el apoyo del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguro Social (SINTRAISS), inician un paro por tiempo indeterminado en demanda del pago del sueldo de junio y de las primas de mitad de año, y contra la liquidación de la entidad. Los empleados bloquean las entradas de las 7 clínicas que tiene la institución en la región.

MIÉRCOLES 20 Las FARC liberan a un militar retenido tras el ataque que dejará un saldo de 22 soldados muertos el pasado 25 de junio, en una acción de esa guerrilla que no se registra desde hace 4 años.

Más de 800 trabajadores del Instituto Materno Infantil (IMI) realizan una manifestación en rechazo a la inminente liquidación del mismo y para exigir el pago de los 8 meses de sueldos y los más de 3 años de cesantías y primas legales adeudados.

JUEVES 21 Los trabajadores de la ESE José Prudencio Padilla, levantan el paro luego de que la gerencia se compromete a cancelar el mes de junio a los trabajadores de la planta y mayo a los empleados vinculados a través de las cooperativas.

VIERNES 22 Las FARC emiten un comunicado en el que aseguran que la liberación del militar es un hecho de paz, fruto de las gestiones de un emisario del presidente de Francia a favor de un canje de rehenes por guerrilleros presos.

El presidente Uribe sanciona la ley de Justicia y Paz que le da un marco jurídico a las negociaciones entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y reconoce como delincuentes políticos a los jefes paramilitares, contemplando que los delitos de rebelión y sedición son indultables.

DOMINGO 24 El presidente Uribe anuncia que pagará recompensas a los campesinos que entreguen hojas de coca o amapolas que hayan sembrado o informen donde se encuentran escondidas.

LUNES 25 Las FARC y el ejército combaten en Cubarral, Meta, con un saldo de al menos 7 militares y otras 5 personas muertas.

MARTES 26 Trabajadores de la empresa Avianca/Sam, nucleados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Transporte Aéreo (SINDITRA) realizan mitines en Barranquilla, Medellín y Bogotá, entre otros lugares, para exigir un incremento salarial y que el convenio colectivo tenga una vigencia de 2 años.

MIÉRCOLES 27 Cientos de pobladores de San Juan del César, La Guajira, se dirigen enardecidos hasta la estación de ese lugar, arremetiendo contra el puesto donde se encuentran refugiados 6 agentes oficiales que, en la madrugada, asesinan a un estudiante de la Universidad de La Guajira. Los manifestantes prenden

fuego a los vehículos de los efectivos y a la casa fiscal y lanzan piedras provocando destrozos en la sede oficial. La policía reprime con gases lacrimógenos y lanza balas de plomo contra los pobladores. El gobierno nacional, por su parte, ordena a la dirección de la policía suspender a los uniformados adscritos a la estación de San Juan del César.

Las FARC y el ejército se enfrentan en zona rural de San Pablo, Bolívar.

JUEVES 28 Cientos de personas marchan en Neiva, Huila, para pedir la liberación de todos los secuestrados. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz respalda la iniciativa.

El ejército y las FARC se enfrentan en la vereda el Caño Veinte, del municipio de Vistahermosa, Meta, y en los municipios de Yopal, Casanare, de Bello, Antioquia y en Rovira, Tolima.

En San Juan del César, La Guajira, decenas de personas destruyen oficinas públicas y queman vehículos para protestar por el asesinato de un estudiante en manos de la policía. En Pupiales, Nariño, la comunidad declara no grata a la policía de su jurisdicción, luego de que 3 estudiantes resultaran heridos de bala cuando la policía intervenía en un robo.

AGOSTO

MARTES 2 El gobierno de EE.UU. certifica a Colombia en materia de derechos humanos, por lo que se liberan unos 70 millones de dólares en asistencia para las fuerzas armadas.

MIÉRCOLES 3 Las FARC reiteran sus condiciones para realizar un acuerdo de liberación de guerrilleros presos por secuestrados, insistiendo en la desmilitarización de 2 municipios y la repatriación de 2 guerrilleros extraditados a EE.UU. Además, intentan tomar el municipio de Piamonte, Cauca, produciéndose enfrentamientos con la policía que dejan un saldo de 3 uniformados muertos. Asimismo, 5 vehículos son incinerados por la guerrilla en la vía Pasto-Mocoa y en la carretera Mocoa-Puerto Asís. Más tarde, alrededor de 5 mil personas realizan marchas en Mocoa, Putumayo, para exigir el fin del paro armado que lleva adelante la guerrilla desde hace varios días.

MARTES 9 En la vereda La Cristalina, las fuerzas armadas llegan intempestivamente y destruyen y saquean el Centro Arqueológico Comunitario.

MIÉRCOLES 10 La ONIC denuncia que, debido al conflicto armado que vive el país, 66 indígenas han sido asesinados y 18.602 se han visto obligados a abandonar sus regiones de origen en lo que va del año.

JUEVES 11 Según un comunicado oficial, los gobiernos de Colombia y EE.UU. no logran llegar a acuerdos que permitan destrabar las negociaciones agrícolas del TLC, tras la ronda bilateral en Washington.

VIERNES 12 Más de 1.000 campesinos huyen de los combates entre el ejército y las FARC en el departamento de Putumayo.

LUNES 15 Presuntos miembros de las FARC asesinan a 2 sacerdotes y 2 civiles que se movilizaban en un vehículo de la curia de Teorema, en el departamento de Norte de Santander.

MARTES 16 El presidente Uribe sanciona el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

MIÉRCOLES 17 Las FARC proponen establecer un despeje, durante 30 días, de los municipios de Florida y Pradera para negociar con el gobierno el canje de prisioneros.

LUNES 22 Más de 500 docentes públicos de todos los municipios del Valle ocupan la gobernación en protesta por presuntas irregularidades en la selección de docentes para ocupar 891 plazas vacantes, y exigen hablar con el gobernador.

Los trabajadores del Hospital San Rafael de Barrancabermeja y el Magdalena Medio realizan una protesta en las afueras del ente estatal para exigir el pago de sus sueldos. Cuentan con el apoyo del Foro Social del Magdalena Medio.

MARTES 23 Más de 500 docentes de todos los municipios del Valle, que mantienen ocupada desde el lunes pasado la gobernación, se declaran en huelga de hambre en protesta por presuntas irregularidades en la selección de docentes para ocupar 891 plazas vacantes, y exigen hablar con el gobernador.

Más de 9 mil personas inician la Minga Indígena, Campesina y Popular, en el municipio de Guamo, para marchar hasta la ciudad de Ibagué, capital del departamento de Tolima. Rechazan la negociación del TLC con EE.UU. y exigen que se respeten sus derechos, el desmonte de la ley forestal –que busca la privatización del patrimonio natural– y cambios constitucionales y legales a favor de sus comunidades. El gobierno anuncia la designación de una comisión especial que atenderá a los manifestantes.

JUEVES 25 El ELN se declara dispuesto a dialogar con el gobierno en la búsqueda de la paz, pero condiciona esa posibilidad a que el presidente Uribe reconozca que en el país hay un conflicto armado interno.

VIERNES 26 La Minga Indígena, Campesina y Popular llega a la ciudad de Ibagué, Tolima, donde a los cerca de 9 mil manifestantes se suman más de 3 mil personas de otros sectores sociales.

DOMINGO 28 Las FARC insisten en la desmilitarización de 2 municipios del suroeste del país para negociar con el gobierno el intercambio de un grupo de políticos y uniformados secuestrados por guerrilleros presos.

GLOSARIO DE SIGLAS

ANTHOC	Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
BM	Banco Mundial
CEDAW	Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
CGTD	Central General de Trabajadores Democráticos
CNU	Comando Nacional Unitario
CTC	Confederación de Trabajadores de Colombia
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
ECOPETROL	Empresa Colombiana de Petróleos
ELN	Ejército de Liberación Nacional
ESE	Empresa Social del Estado
ESMAD	Escuadrón Antidisturbios
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FECODE	Federación Colombiana de Educadores
GCD	Gran Coalición Democrática
IMI	Instituto Materno Infantil
INCAUCA	Ingenio del Cauca
ONGs	Organizaciones No Gubernamentales
ONIC	Organización Indígena de Colombia
ONU	Organización de las Naciones Unidas
RECALCA	Red Colombiana de Acción contra al Libre Comercio y el Área de Libre Comercio de las Américas
SINALTRAINAL	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos
SINDITRA	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Transporte Aéreo
SINTRAELECOL	Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia
SINTRAISS	Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguro Social
TLC	Tratado de Libre Comercio
UDEA	Universidad de Antioquia
UE	Unión Europea
USO	Unión Sindical Obrera

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
Otras fuentes: Indymedia Colombia y Rebelión.

Ecuador

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 En el Día Internacional de los Trabajadores, integrantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC), entre otros, anuncian que vigilarán de cerca al gobierno de Alfredo Palacio, a quien le piden que respete el derecho de contratación y organización y derogue un reglamento de trabajo por horas que consideran dictatorial. Reclaman también la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. En Guayaquil, además de exigir mejoras laborales, los trabajadores reclaman, bajo la consigna "que se vayan todos", la eliminación del Parlamento y una urgente convocatoria a una asamblea nacional que permita modificar con equidad el actual sistema democrático del país.

JUEVES 12 Más de 2 mil forajidos rodean el edificio del ex Banco Central, en Quito, y protestan contra los diputados que se encuentran tramitando la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial (LOFJ). Al anochecer, los manifestantes que se encuentran en la Av. Shyris marchan hasta el Congreso al grito de "que se vayan todos" y declaran cesados a todos los diputados. Luego, un grupo de manifestantes se dirige al Palacio de Carondelet para exigirle al gobierno que reforme la ley de elecciones y de partidos políticos, permitiendo a todos los ciudadanos elegir y ser elegidos.

JUEVES 19 Más de 16 mil personas, entre estudiantes secundarios, universitarios, dirigentes barriales, campesinos, autoridades civiles, gremios profesionales y las cámaras de producción, marchan hasta el Consejo Provincial de Esmeraldas, para reclamar que el gobierno otorgue 100 millones de dólares para la provincia. Los taxistas y los transportistas intercantonales colaboran con la manifestación acercando gente de las parroquias más lejanas.

JUNIO

SÁBADO 4 Parte desde Quito hacia Guayaquil una caravana ciudadana encabezada por Acción Ecológica en rechazo al TLC con EE.UU., en el marco de la X ronda de negociaciones del TLC a realizarse en dicha ciudad a partir del próximo lunes 6.

LUNES 6 Delegados de Colombia, Ecuador y Perú inician en Guayaquil la X ronda de negociaciones del TLC con EE. UU. Activistas de Acción Ecológica burlan la seguridad del hotel Milton Colón, donde se realiza el encuentro, y entregan a miembros de EE. UU. una carta de protesta en la que piden que se suspendan las negociaciones, y donde acusan a dicho país de negociar utilizando presiones y chantajes. Se producen forcejeos entre los agentes de seguridad y los manifestantes.

MARTES 7 El ex mandatario Lucio Gutiérrez renuncia al asilo político que le brinda Brasil, y viaja a EE.UU.

JUEVES 9 Representantes del Partido Socialista, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), la Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador (FENACLE) y asambleas populares de varias provincias marchan hasta el Hotel Milton Colón, en Guayaquil, en protesta contra el TLC. Cuando un grupo intenta romper un cerco policial en las cercanías del Banco del Progreso, la policía lanza gases lacrimógenos dispersando a los manifestantes. El ministro de Comercio Exterior, Oswaldo Molestina, sale del hotel para dialogar con los dirigentes de la protesta y permite que 15 de ellos ingresen para exponer las razones de su rechazo al TLC.

MARTES 21 Maestros, médicos y trabajadores públicos, todos integrantes de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOLS), marchan hacia el Congreso en reclamo a la reforma de la Ley de Seguridad Social, a fin de que se permita la entrega del 100% de los Fondos de Reserva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a sus afiliados.

MIÉRCOLES 29 La embajadora de EE.UU., Kristie Kenney, informa que Washington suspende la asistencia militar a Ecuador ante la negativa del país de firmar un convenio de inmunidad para los estadounidenses frente a la Corte Penal Internacional (CPI).

JULIO

LUNES 4 Los habitantes de Portoviejo, Manabí, convocados por la alcaldesa Patricia Briones, inician un paro cantonal por 48 hs para exigir al gobierno la financiación y contratación del Plan Maestro de Agua Potable y la terminación del alcantarillado, entre otras demandas. Obstruyen vías y puentes de acceso. Siete cantones se suman a la medida y bloquean las vías que comunican Manabí con las provincias Guayas y Pichincha. Organizaciones civiles de Santa Ana, Rocafuerte y Montecristi también realizan protestas. En Chone, los manifestantes toman el Municipio y exigen la salida del alcalde Eliécer Bravo y de los concejales.

MARTES 5 Los huelguistas de Portoviejo y demás lugares de Manabí declaran indefinido el paro luego de que la comisión formada por el prefecto provincial y 8 diputados no llega a acuerdo alguno con las autoridades gubernamentales en las

reuniones realizadas en Quito. Los manifestantes toman la gobernación, provocando el retiro de la policía.

VIERNES 8 Los habitantes de Manabí levantan el paro luego de un acuerdo alcanzado entre una comisión enviada por el gobierno, la alcaldesa de Portoviejo y dirigentes del paro. El gobierno se compromete a entregar 40 millones de dólares para el Plan Maestro de Agua Potable, 23 millones para el Sistema de Alcantarillado y 2,1 millones para canales de riego, entre otras asignaciones.

LUNES 11 Integrantes de la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE) marchan en Quito en rechazo a las petroleras internacionales que operan en el país y a los efectos de la explotación en la zona del Parque Nacional Yasuní. La Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana le exige al presidente Palacio que declare la caducidad del contrato de la empresa estadounidense Petrolera Occidental (OXY), ya que el territorio donde trabaja dicha empresa es el que ocupan los Kichwas, Secoyas, Shuar y Signas.

MARTES 12 Unos 100 integrantes de la ONHAE ocupan la Plaza Grande, Quito, para exigirle al gobierno acciones para remediar el impacto ambiental que produce la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Exigen la salida de la empresa Petróleo Brasilero SA (PETROBRAS) del Parque Nacional Yasuní. Luego, se reúnen con el ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, quien finalmente delega en el subsecretario de Gobierno la conformación de una comisión para inspeccionar el lugar.

MIÉRCOLES 13 El Congreso aprueba la redistribución del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP), propuesta por el ministro Correa. Entre otras cosas, el 35% se destina a reactivación productiva, pago de la deuda al IESS y de la deuda pública y privada, y el 5% a la investigación científica y tecnológica.

MIÉRCOLES 20 Los trabajadores de los hospitales estatales realizan un paro acatando un llamado a huelga de la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud (OSUNTRAMSA) en reclamo de la devolución total de los fondos de reserva, una nueva tabla de homologación salarial y la restitución del pago por antigüedad, entre otras cosas.

JUEVES 21 El presidente Palacio resuelve la devolución del total de los fondos de Reserva para los afiliados del IESS a partir de septiembre, a pesar de emitir un veto parcial.

VIERNES 22 El presidente de la Corte Superior de Quito, Alberto Moscoso, dicta una orden de prisión contra del ex presidente Lucio Gutiérrez, sobre la base de la instrucción iniciada por el fiscal Washington Pesantez, quien lo investiga por el

presunto delito de atentar contra la seguridad del estado. Gutiérrez debe desistir de su intención de ingresar al país, y permanecer en Perú.

AGOSTO

LUNES 1 El Banco Mundial (BM) le niega al Ecuador un préstamo de 100 millones de dólares para el presupuesto. El ministro de Economía, Rafael Correa, califica la negativa como una "ofensa al país" y asegura que el BM cambia las reglas de juego y da marcha atrás a la entrega del desembolso ya aprobado por el directorio, debido a la eliminación del FEIREP.

MIÉRCOLES 3 El presidente ejecutivo de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR), Carlos Pareja, deja su cargo. Previamente, pide la caducidad del contrato con la compañía petrolera estadounidense OXY por no justificar el traspaso del 40% de sus derechos a la empresa canadiense EnCana, sin autorización del Ministerio de Energía y Minas.

El ministro de Economía, Rafael Correa, presenta su renuncia. En la misma le asegura al presidente Palacio no entender su disgusto por supuestos compromisos internacionales adquiridos por él sin su consentimiento y teme que el verdadero problema sean las fuertes presiones que existen para impedir cualquier relación con un país hermano como Venezuela.

Centenares de forajidos salen a las calles de Quito con pancartas, ollas, antorchas, velas y correas para protestar contra el presidente Palacio por ceder a las presiones de EE.UU., los organismos multilaterales, las transnacionales petroleras, y por aceptar la renuncia de Rafael Correa al Ministerio de Economía; renuncia que el pueblo no acepta. Una fila de vehículos que ocupa unas 8 cuadras cercanas al Palacio de Gobierno, hace sonar sus bocinas.

LUNES 8 El Comité de Paro de Chone inicia una huelga indefinida y bloquea las vías que conectan la zona con el cantón Manabí, en rechazo al alcalde Eliécer Bravo. Ocupan también el Cabildo y queman un vehículo municipal. La policía vigila los lugares donde se obstruye el paso vehicular.

Jubilados se concentran en las afueras de la Caja del Seguro Social, en Guayaquil, para exigir al gobierno el aumento a sus pensiones y la salida de Rubén Barberán, presidente del Consejo Directivo del IESS, quien sería sustituido por Raúl Zapater.

JUEVES 11 Luego de la renuncia de Barberán a la presidencia del Consejo Directivo del IESS y de sus denuncias acerca de la existencia de mafias dentro del instituto, cientos de jubilados de Guayaquil y Quito realizan marchas en ambas ciudades para exigir la renuncia de los otros directivos del IESS y un aumento a sus pensiones.

DOMINGO 14 Campesinos, indígenas, integrantes de gremios y autoridades de las provincias de Sucumbíos y Orellana, que conforman la Asamblea Biprovincial, inician un paro en rechazo al mal manejo de la política petrolera, la renuncia del ministro de Economía, la salida del ex presidente de PETROECUADOR, la falta de atención brindada a las autoridades de ambas provincias por parte del ministro de Energía, Iván Rodríguez, y para exigir la caducidad de los contratos de la petrolera OXY, entre otras cosas. El inicio de la medida se produce con la toma del aeropuerto de Coca, en Francisco de Orellana, luego de una marcha de 3 mil personas; en Nueva Loja, 1.000 personas toman el aeropuerto del lugar luego de realizar una marcha. Habitantes de la zona ocupan 25 pozos petroleros y cierran vías. En Shushufindi, las acciones se concentran en la parroquia Limoncocha, donde opera OXY, y se produce un enfrentamiento con los militares cuando los manifestantes ocupan la plataforma. Después de 1 h son desalojados violentamente. La huelga comienza luego de que representantes de las 7 empresas transnacionales que operan en la región no llegan a la segunda cita programada en Quito para tratar el tema "empleo y políticas petroleras", pendiente en los acuerdos logrados en junio.

MARTES 16 Las autoridades de Orellana y Sucumbíos acceden al diálogo y se acuerda realizar una reunión en Lago Agrio, Sucumbíos. Luego, en un intento de los manifestantes de tomar la estación de bombeo y almacenamiento de crudo de Lago Agrio y pozos petroleros en ambas provincias, se producen enfrentamientos con las fuerzas armadas. Estas últimas retienen al presidente de la Asamblea, Guillermo Muñoz, y detienen a más de 100 personas. Por su parte, los manifestantes retienen a 2 policías. Una comisión mediadora permite realizar el intercambio de rehenes. Unas 60 personas resultan heridas.

Los bananeros de las provincias de El Oro, Los Ríos y Guayas inician un paro indefinido y bloquean las vías de acceso a Machala en protesta porque varias exportadoras no pagan el precio oficial de 3 dólares por la caja de banano y para exigir la salida del ministro de Agricultura, Pablo Rizzo, a quien acusan de no proteger los intereses de los productores.

MIÉRCOLES 17 Unas 3 mil personas marchan por las calles de Nueva Loja ante la decisión del ministro de Gobierno de no viajar a la ciudad donde se lo espera para una reunión. Las petroleras condicionan el diálogo a que este se realice en una ciudad fuera del escenario de conflicto. Un grupo de manifestantes intenta bloquear el puente sobre el río Napo y son reprimidos violentamente por el ejército. Por la tarde, se declara el estado de emergencia. En Sucumbíos, otro grupo de pobladores intenta tomar la Gobernación y la policía reprime ferozmente. Con piedras y bombas molotov, los manifestantes desalojan a los agentes y logran ingresar. Según los huelguistas, infiltrados destruyen la dependencia, lo que provoca la salida de los militares a las calles. Por la noche se declara el toque de queda. Los enfrentamientos durante el día dejan un saldo de 50 manifestantes heridos, aproximadamente.

JUEVES 18 El presidente Palacio suspende las exportaciones de crudo del país. Los huelguistas de Sucumbíos realizan una gran marcha con consignas en contra del decreto de emergencia, de las petroleras y del gobierno. Militares lanzan gases lacrimógenos dispersando la manifestación, que se reactiva con menores incidentes a lo largo de toda la tarde. En horas de la noche, los 5 mil manifestantes que mantienen tomado el aeropuerto de Orellana, entregan las instalaciones del mismo al gran número de militares que los rodean. Durante el toque de queda 16 personas quedan detenidas, entre ellas el alcalde de Nueva Loja, Máximo Abad, lo que agudiza las tensiones.

Representantes del sector bananero de El Oro levantan el paro y firman con el gobierno un acta de compromiso para hacer respetar el precio de la caja de banano a 3 dólares.

VIERNES 19 Militantes del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), que se oponen a la permanencia del alcalde de Chone, atacan el edificio del banco de Pichincha y del Banco Nacional de Fomento, bloquean las carreteras que unen a la ciudad, dejándola aislada, y realizan protestas callejeras que motivan el cierre de los negocios y la suspensión de las clases. Los manifestantes se mantienen en las cercanías del municipio para impedir el retorno del alcalde, quien es ratificado en el puesto por el Consejo Provincial de Manabí. Varios manifestantes son heridos y otros detenidos.

El ministro de Defensa, Solón Espinosa, renuncia a pedido del mandatario, quien lo responsabiliza por deficiencias en materia de seguridad, lo que ha "facilitado" la toma de las instalaciones petroleras. En su lugar, Palacio designa, por decreto, a Oswaldo Jarrín. Por su parte, los manifestantes de Lago Agrio toman las calles luego de conocer la noticia de la detención del alcalde Máximo Abad y del concejal Ismael Bravo. La población intenta tomar los edificios públicos pero son fuertemente reprimidos por las fuerzas de seguridad.

SÁBADO 20 El presidente Palacio realiza un pedido de crudo a Venezuela para atender la crisis derivada de las manifestaciones en las provincias de la Amazonía; su par venezolano, Hugo Chávez, ofrece todo su apoyo.

El presidente declara el estado de emergencia en Chone. La ciudad se calma; según el Comité de Paro es una tregua para cambiar de estrategia y continuar exigiendo la renuncia de Bravo.

DOMINGO 21 La Asamblea Biprovincial de Sucumbíos y Orellana se abre al diálogo y suspende las marchas y movilizaciones. Condiciona el diálogo a la liberación de unos 40 manifestantes, a la ausencia de los representantes de OXY y EnCana en las negociaciones (una de las demandas es la caducidad de los contratos de estas empresas en el país); a que se levante el estado de emergencia y se otorguen salvoconductos, entre otras cosas. Por la tarde, dirigentes de ambas

provincias viajan a Quito. El comercio y el transporte intercantonal e interprovincial de Francisco de Orellana se reanudan en un 70%. En Nueva Loja el comercio vuelve a la normalidad.

LUNES 22 Comienza el diálogo entre el gobierno, las petroleras y las autoridades de Sucumbíos y Orellana para buscar una salida al conflicto. Sin embargo, la situación de vialidad y la caducidad de la empresa OXY producen discordia en la reunión, que es levantada por la tarde, sin llegar a acuerdo alguno. Queda pendiente una contrapropuesta de los representantes provinciales a la oferta de las petroleras.

MARTES 23 Se realiza la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno y las autoridades de las provincias amazónicas. Las autoridades provinciales piden que se levante el estado de emergencia, y realizan una contrapropuesta a las petroleras flexibilizando sus posiciones en lo referente a montos y cantidades de obras. La reunión se levanta por la tarde, con algunos acuerdos, pero los directivos de las petroleras no responden a la contrapropuesta, lo que produce cierto malestar entre las autoridades amazónicas.

La Fiscalía abre una investigación sobre la presunta existencia de una red encargada de vender altos cargos públicos desde la Presidencia, a través de la falsificación de la firma del presidente Palacio.

MIÉRCOLES 24 El Consejo Directivo del IESS aprueba el reglamento para la devolución de los fondos de reserva del Instituto a partir del 1º de septiembre de 2005.

JUEVES 25 Las autoridades de Sucumbíos y Orellana levantan el paro biprovincial luego de arribar a un acuerdo con las petroleras, las cuales se comprometen a asfaltar 260 km de carreteras y donar a los gobiernos seccionales 16 puntos del 25% de las utilidades que pagan al estado por Impuesto a la Renta. Lo que facilita la firma del acuerdo es la revocatoria del estado de emergencia. El acuerdo es firmado por el ministro de Gobierno y por los prefectos de Sucumbíos y Orellana. Los representantes de las petroleras no asisten, pero dejan firmado un documento. Los dirigentes del paro aseguran que no están satisfechos con el acuerdo, ya que representa unos pocos centavos para las potencias económicas, como son las petroleras.

Fausto Bravo, ex edecán del presidente Palacio, abandona el país luego de solicitar un permiso para acudir a la fiscalía a explicar su versión de los hechos dentro de la indagación previa, abierta por la presunta falsificación de la firma del mandatario y la venta de cargos públicos. Ya son 8 los funcionarios que presentaron sus renuncias.

VIERNES 26 La justicia rechaza el amparo constitucional interpuesto por PETROBRAS en contra de la resolución de la ministra de Ambiente de suspender las operaciones en el Yasuní.

La población de Sucumbíos y Orellana rechaza el acuerdo arribado entre los representantes del paro, las petroleras y el gobierno porque no incluye la cláusula de no iniciar acciones legales en contra de los huelguistas, que aún permanecen detenidos, y porque las petroleras no han firmado el acta de acuerdo.

SÁBADO 27 Retorna al país el ex edecán del presidente Palacio, Fausto Bravo, por temor a ser considerado un desertor.

DOMINGO 28 Más de 800 personas se reúnen en el coliseo de Francisco de Orellana y deciden otorgar un plazo de 48 hs al gobierno y a las petroleras para que se cumpla el acta firmada o, de los contrario, reiniciarán el paro biprovincial. Los dirigentes aseguran que al documento original se le realizaron modificaciones que contradicen los acuerdos alcanzados en Quito.

LUNES 29 Unos 200 jubilados se encadenan al edificio Zarzuela del IESS, en Quito, para exigir al gobierno un aumento a sus pensiones. Se realizan acciones similares en Tulcán y Guayaquil. Por la tarde, el Consejo Directivo del IESS decide incrementar las pensiones de jubilados y beneficiarios. Dicho incremento es de 20, 25 y 30 dólares, de acuerdo con la pensión básica vigente de cada jubilado. Los manifestantes no deponen la medida hasta que el gobierno entregue los 35 millones de dólares necesarios para el aumento.

MARTES 30 Los representantes de las petroleras y las autoridades seccionales de Sucumbíos y Orellana se reúnen en el Ministerio de Energía para conocer el documento único del acta de compromiso que da por finalizado el paro biprovincial y superados los puntos controversiales. Las petroleras firman el documento, frenando así la reactivación del paro en la Amazonía. Por otro lado, el ministro Fiscal Distrital de Sucumbíos notifica al presidente de la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja el inicio de la indagación fiscal en contra del concejal de Lago Agrio y de otros manifestantes, por el presunto delito de sabotaje durante el paro biprovincial.

El Congreso levanta el estado de emergencia en el cantón Chone, donde militantes roldosistas exigen la renuncia de Eliécer Bravo.

Pese a que el Consejo Directivo del IESS aprueba un incremento adicional de 40 millones para las pensiones, los jubilados de Quito y Guayaquil vuelven a protestar. Acusan al representante de los empleadores, Manuel Vivanco, de no firmar el convenio que permite el alza.

MIÉRCOLES 31 El canciller Antonio Parra y su homóloga colombiana se reúnen en Bogotá, Colombia, para destrabar las negociaciones entre ambos países sobre las aspersiones aéreas con glisfosato, que Colombia realiza en la frontera, para erradicar los cultivos de coca. El encuentro finaliza sin mayores avances.

GLOSARIO DE SIGLAS

BM	Banco Mundial
CEDOC	Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas
CEOLS	Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CPI	Corte Penal Internacional
FEIREP	Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público
FENACLE	Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador
FENOCIN	Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
FUT	Frente Unitario de Trabajadores
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
LOFJ	Ley Orgánica de la Función Judicial
ONHAE	Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana
OSUNTRAMSA	Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud
OXY	Petrolera Occidental
PETROBRAS	Petróleo Brasilero SA
PETROECUADOR	Empresa Estatal Petróleos del Ecuador
PRE	Partido Roldosista Ecuatoriano
TLC	Tratado de Libre Comercio

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Diarios: Hoy, La Hora y El Comercio.

Perú

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, los dirigentes sindicales de la Central Única de Trabajadores (CUT) rinden homenaje al desaparecido fundador de la central, Gustavo Mohme Llona, en el cementerio Jardines de la Paz de La Molina.

MARTES 3 Cientos de pobladores de Cabanas y Collahuas, provincia de Caylloma, Arequipa, bloquean vías del Valle del Colca, reclamando a las autoridades que sus municipios administren los recursos de la Autoridad Autónoma de Colca (AUTOCOLCA), el asfaltado de la carretera al Cañón del Colca y la construcción de la represa de Angostura. Se enfrentan a la policía, tras lo cual varias personas resultan heridas y 17 detenidas. Grupos de comuneros de Sibayo, Callalli, Yanque, Chivay, Maca, Lari, Madrigal y Cabana se unen a la protesta.

MIÉRCOLES 4 Los pobladores de Caylloma, Arequipa, comienzan una huelga por tiempo indefinido. Más de 3 mil personas mantienen bloqueadas todas las carreteras que conducen a los distritos de esta provincia, mientras que otro grupo avanza 24 km hacia la ciudad de Arequipa.

MARTES 10 Las protestas del Valle del Colca se incrementan. Las carreteras de la provincia están bloqueadas y sus 20 distritos permanecen aislados y miles se manifiestan por las principales calles de Arequipa. Asimismo, el alcalde provincial mantiene una huelga de hambre, iniciada el día anterior, para exigir al gobierno que envíe a la zona una comisión de alto nivel.

JUEVES 12 El Congreso aprueba, por mayoría, otorgar a Caylloma el directorio del AUTOCOLCA, y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se compromete a asfaltar las principales vías que conducen a la provincia. Los pobladores comienzan a desbloquear las carreteras.

MARTES 24 Más de 2 mil pobladores de la provincia El Espinar, Cusco, comienzan una huelga por tiempo indefinido e ingresan en el asentamiento minero de BHP Billiton Tintaya SA, provocando destrozos en las instalaciones de la empresa . Exigen la disminución de la contaminación, la construcción de una carretera a

Arequipa y el desembolso de 20 millones de dólares anuales a favor de la comunidad. Los manifestantes son reprimidos por la policía, que hiere a 16 personas y detiene otras 20. La compañía minera paraliza sus operaciones.

SÁBADO 28 Campesinos de Puerto Pizana, Tocache, se enfrentan a la policía, que destruye 40 ha de cultivos de coca como parte de un operativo antidrogas. Diecisiete campesinos resultan heridos, 3 por herida de bala.

JUNIO

MIÉRCOLES 1 Los 65 mil médicos de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores de Salud (FENUTSA) en huelga desde el 24 de mayo pasado levantan la medida de fuerza luego de la firma por parte del presidente en ejercicio, David Waisman, de un acta por la cual los trabajadores de provincia recibirán una bonificación de 150 soles, igual a la que perciben los de Lima.

JUEVES 2 Los 7 mil médicos del Seguro Social de Salud (EsSalud), nucleados en la Asociación Médica del Seguro Social del Perú (AMSSOP), marchan hasta el Congreso y comienzan una huelga nacional indefinida en demanda del cumplimiento del pago de guardias, el nombramiento de alrededor de 4.500 médicos contratados y la renovación de la infraestructura.

VIERNES 3 Miles de personas agrupadas en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CONAGUAVIDA) se manifiestan por las calles de Lima hasta el Congreso, y en 23 regiones del país realizan marchas en rechazo al Anteproyecto de Ley del Agua que prevé la privatización del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SEDAPAL).

JUEVES 9 Estudiantes de diversas facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos toman el comedor de la ciudad universitaria en oposición al pago de las raciones de alimentos, y reclaman libre acceso a los comedores de la casa de estudios.

El presidente regional de Ayacucho aprueba una ordenanza por la que la hoja de coca es declarada patrimonio cultural y de seguridad alimentaria en los valles de los ríos Apurímac y Ene.

VIERNES 10 Las autoridades de la Universidad de San Marcos ordenan la intervención policial del comedor universitario y resultan detenidos 80 estudiantes. En respuesta, unos 500 alumnos se movilizan hasta la fiscalía de la nación y toman la ciudad universitaria, consiguiendo que sus compañeros sean liberados.

LUNES 13 El gobierno regional de Cusco aprueba la ordenanza que reconoce a la planta de hoja de coca como producción tradicional y legal sin topes en los valles de La Convención, Yanatile y Qosñitapa.

Estudiantes de la Universidad de San Marcos toman nuevamente el comedor universitario.

MARTES 14 Durante la madrugada, los estudiantes que mantienen tomado el comedor universitario de la Universidad de San Marcos son reprimidos por matones encapuchados que tiran a un estudiante desde una de las ventanas del segundo piso. Los alumnos vuelven a tomar varias facultades.

LUNES 27 Más de 100 mil productores de hoja de coca de 7 valles de la selva central inician una huelga indefinida y realizan piquetes en las regiones del Alto Huallaga, Ucayali, Junín, Ayacucho y Puno, en protesta por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y exigien, además, el cese de las erradicaciones forzadas de sus cultivos, entre otros puntos.

JULIO

LUNES 4 Los docentes de universidades públicas, agrupados en la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), inician una huelga nacional indefinida en reclamo de la homologación de sus sueldos con los de los magistrados del Poder Judicial y de mayor presupuesto para las universidades.

Los sectores agropecuarios y campesinos de todo el país, nucleados en la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO), entre otras, realizan un paro de 24 hs en rechazo al TLC con EE.UU. y en defensa de la producción nacional.

MARTES 5 Los técnicos asistenciales de EsSalud levantan la huelga iniciada el 22 de junio luego de acordar con las autoridades de la institución una calificación profesional similar a la de médicos y psicólogos.

MIÉRCOLES 6 Luego de que los transportistas deciden, de manera unilateral, levantar la protesta iniciada el 27 de junio para que se rebaje el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), las organizaciones sindicales y populares articuladas en el Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA) deciden continuar con una huelga regional indefinida hasta que arribe a la ciudad una comisión de alto nivel para solucionar las demandas de la población. Piden, entre otros puntos, una rebaja en el gas doméstico y en los combustibles. En Tacna, por otra parte, comerciantes y transportistas deciden continuar con la huelga indefinida que los mantiene aislados del resto del país. Cerca de 6 mil personas participan de una marcha por las calles de la ciudad.

LUNES 11 Los campesinos cocaleros del Alto Huallaga acuerdan levantar el paro que llevan adelante desde hace 2 semanas a fin de iniciar un diálogo con el gobierno y encontrar soluciones a sus demandas.

JUEVES 14 Encabezadas por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), más de 5 mil personas se movilizan por las calles de Lima hasta el Congreso en rechazo al TLC con EE.UU. y para exigir un referéndum sobre el tema, una nueva Ley General del Trabajo y el llamado a una Asamblea Constituyente. Los pobladores de Cusco paran durante la jornada y realizan manifestaciones en Arequipa, Chiclayo, Lambayeque y Talara.

JUEVES 21 La presidenta regional de Huanuco suscribe la ordenanza que legaliza los cultivos de hoja de coca en los valles de la región.

AGOSTO

LUNES 1 Entre mil y 3 mil ronderos, de acuerdo a distintas fuentes, se enfrentan a 400 policías de la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), cerca del campamento de la minera Majaz, distrito de Carmen de la Frontera, Piura, en un intento por tomar los campamentos de la empresa y expulsar a sus trabajadores. Los muertos ascienden a 7, aunque oficialmente se confirma sólo 1, los heridos a 40, los detenidos a 27 y a 20 los desaparecidos. La información policial también da cuenta de 14 policías heridos.

VIERNES 5 Ronderos que protestan contra la minera Majaz bloquean por quinto día 4 carreteras que conectan a las localidades de Las Lomas y La Trocha a Huancabamba.

MIÉRCOLES 10 Cientos de docentes universitarios de la FENDUP, que permanecen en huelga indefinida desde el 4 de julio pasado, marchan hasta el Congreso. En Arequipa, Trujillo y Ayacucho, también realizan movilizaciones.

JUEVES 18 Miles de ronderos de Huancabamba, Jaén y Ayabaca, Piura, realizan un paro interregional en rechazo a la explotación de la minera Majaz y bloquean las principales vías de acceso a las ciudades de la región. Unos 6 mil comuneros marchan por las calles de Huancabamba hasta la Plaza de Armas, donde realizan un mitin junto a sus alcaldes.

El secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, llega al país y se reúne con el presidente Toledo y el ministro de Defensa para discutir sobre la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

MARTES 23 Luego de una reunión con los dirigentes de la FENDUP y rectores de universidades públicas, el presidente Toledo anuncia el inicio del proceso de homologación de sueldos a los docentes universitarios, con un incremento del 10% a partir de septiembre próximo.

JUEVES 25 Alrededor de 2 mil sindicalistas de la CGTP bloquean calles del centro histórico de Lima para protestar contra el reciente nombramiento del primer minis-

tro, Pedro Pablo Kuczynski y su nuevo gabinete. Acusan al jefe de gabinete de favorecer a empresas chilenas en la concesión de varios puertos.

DOMINGO 28 Más de 2 mil campesinos intentan realizar una movilización pacífica a la Plaza de Armas de Tambobamba, Apurímac, para exigir que ProInversión se retire del Comité de Fideicomiso creado para realizar obras a favor de las comunidades de las provincias de Grau y Cotabambas, donde se encuentran los yacimientos mineros de Las Bambas. Sin embargo, la policía se los impide, tras lo cual 6 personas resultan detenidas y 8 heridas.

GLOSARIO DE SIGLAS

AMSSOP	Asociación Médica del Seguro Social del Perú
AUTOCOLCA	Autoridad Autónoma de Colca
CCP	Confederación Campesina del Perú
CGTP	Confederación General de Trabajadores del Perú
CNA	Confederación Nacional Agraria
CONAGUAVIDA	Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
CONVEAGRO	Convención Nacional del Agro Peruano
CUT	Central Única de Trabajadores
DINOES	División Nacional de Operaciones Especiales
EsSalud	Seguro Social de Salud
FACA	Frente Amplio Cívico de Arequipa
FENDUP	Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú
FENUTSA	Federación Nacional Unificada de Trabajadores de Salud
PCM	Presidencia del Consejo de Ministros
SEDAPAL	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SOAT	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
TLC	Tratado de Libre Comercio

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios La República, RPP Noticias y 24 Horas Libre.
Otras fuentes: Indymedia Perú, CLAJADEP, Rebelión, Comunidad Web de Movimientos Sociales, ADITAL, Aymara UTA, Contrainformación en Red, Frente Regional Puno y ALAI.

Venezuela

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 En el Día Internacional de los Trabajadores, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) realiza una gran marcha por Caracas que finaliza con un discurso del presidente Hugo Chávez. Durante el mismo, el primer mandatario reitera que dentro del modelo capitalista es imposible lograr las metas que están planteadas en la Constitución. Por su parte, la opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) también marcha en la capital pero con escasa concurrencia. Durante el acto que da inicio a esta marcha, la dirigencia sindical propone que el aumento del salario mínimo llegue también a quienes trabajan en las distintas misiones del gobierno y que se otorgue una amnistía a los trabajadores y presos políticos. En Valencia, los sectores oficialistas exigen mejoras salariales y piden que se eliminen las irregularidades en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que la Asamblea Nacional (AN) apruebe la Ley de Protección al Adulto Mayor y que se incrementen las ayudas económicas del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología (INAGER).

MARTES 3 Unos 250 trabajadores de 4 compañías contratadas por Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) detienen 5 taladros de perforación en Campo Boscán, municipio Urdaneta, estado Zulia, por un supuesto incumplimiento del contrato colectivo vigente. Luego de 12 hs de paralización, los dirigentes sindicales llegan a un acuerdo preliminar con los representantes de las empresas, mediante el cual estos últimos se comprometen a cumplir parte de sus exigencias.

JUEVES 5 Más de 1.000 maestros, alumnos y representantes de diferentes instituciones educativas realizan una marcha en Maracaibo, estado Zulia, en protesta por la demora en la aprobación de una nueva contratación colectiva por parte del Ejecutivo regional que se traduzca en un aumento salarial.

VIERNES 6 Los trabajadores de las 3 plantas pertenecientes a la empresa Manufacturas de Papel (MANPA), ubicada en Maracay, estado Aragua, se manifiestan frente a las instalaciones de la compañía impidiendo el ingreso del resto de sus compañeros, paralizando la producción en protesta por presuntas violaciones al contrato colectivo y a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).

DOMINGO 8 Los presos de la cárcel El Rodeo I se amotinan en protesta por el retraso en el inicio de la visita dominical y los actos organizados por ellos para celebrar el Día de la Madre. Durante la protesta se producen disparos, resultando heridos un recluso y un agente de la Guardia Nacional (GN). Por su parte, 91 familiares de los presos de la cárcel Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, permanecen voluntariamente en el internado en protesta por la prohibición de ingreso a menores de edad, las inhumanas requisas que realizan las funcionarias de la GN a las mujeres que acuden para visitar a los reclusos, el retardo procesal y el acceso limitado de los presos a algunos beneficios.

LUNES 9 Conductores de las 5 líneas urbanas que prestan el servicio de transporte público en el municipio Guacara, estado Carabobo, inician un paro indefinido ante la negativa de las autoridades municipales de aumentar la tarifa a 500 bolívares y en rechazo a los conductores ilegales que invaden sus zonas de trabajo sin que la alcaldía tome medidas al respecto.

Miembros de 19 organizaciones de desempleados de la industria petrolera protestan en la plaza El Obrero, Punto Fijo, estado Falcón, en rechazo al Sistema de Democratización del Empleo (SISDEM) que pondrá en vigencia PDVSA a partir del próximo 15 de mayo como parte de la nueva contratación colectiva que aboliera la cláusula mediante la cual los sindicatos tenían una cuota en la asignación de los puestos de trabajo.

Más de 600 reclusos de la cárcel de La Pica, estado Monagas, inician una huelga de hambre en rechazo a las pésimas condiciones de salubridad, la mala alimentación, los tratos inhumanos por parte de las autoridades de la GN y los retardos procesales; amenazan con radicalizar el conflicto si no son atendidos por funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) y de la Dirección de Prisiones, y por los jueces penales de la entidad.

MARTES 10 Los trabajadores de MANPA que mantienen paralizada la producción desde el pasado viernes se manifiestan frente a las instalaciones de la empresa contra las presuntas violaciones al contrato colectivo. Durante la protesta, se enfrentan con efectivos de la policía del estado Aragua, resultando una persona herida.

MIÉRCOLES 11 Cerca de 600 estudiantes pertenecientes a 5 liceos de Los Teques realizan protestas y cortan el tránsito en las avenidas Bolívar, La Hoyada y varias calles adyacentes en el centro de la ciudad en demanda de mejoras en la infraestructura de los colegios y en contra de la directiva del liceo Francisco de Miranda. Durante la protesta, se enfrentan con vecinos y efectivos de la policía del estado Miranda y la municipal de Guaicaipuro, con un saldo de 6 estudiantes heridos y una decena de detenidos.

Los representantes de las 5 líneas urbanas de transporte de Guacara, estado Carabobo, levantan el paro iniciado el pasado lunes tras llegar a un acuerdo

con las autoridades del Instituto Municipal de Transporte y Vialidad que establece el aumento del pasaje a 500 bolívares a partir del lunes 16.

VIERNES 13 Al cumplirse 8 días del conflicto laboral en MANPA, propietarios y trabajadores firman un acuerdo en la AN que pone fin a la controversia y establece la reanudación de operaciones, reincorporándose a sus labores los 1.500 trabajadores de la planta de papel. Además, continúan las negociaciones contractuales ante la Inspectoría del Trabajo.

DOMINGO 15 Los más de 600 reclusos de la cárcel de La Pica levantan la huelga de hambre que mantienen desde el pasado lunes luego de la firma de un documento por el cual la comisión integrada por funcionarios del MIJ y de la Asamblea Legislativa de la región se compromete a atender sus demandas. Sin embargo, cerca de 300 familiares de los presos inician un autosecuestro para exigir que se aceleren los procesos que mantienen a estos últimos en prisión. Por su parte, un tercio de los 600 presos de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en San Juan de los Morros, estado Guárico, inician una huelga de hambre en protesta por la falta de atención y el pésimo estado de los alimentos. Lo mismo ocurre en los penales de Barinas y en la Máxima de Duaca, estado Lara.

JUEVES 19 Según fuentes del MIJ, los reclusos de las cárceles de Uribana, Barinas, Vista Hermosa, Yare I y Yare II levantan su protesta tras suscribir acuerdos con las autoridades. Por su parte, los presos del penal de La Pica insisten en mantenerse en conflicto hasta tanto no se les garantice que sus procesos serán agilizados.

JUEVES 26 Tras 11 días de conflicto, los reclusos del Retén Judicial de La Pica, estado Monagas, llegan a un acuerdo con las autoridades del MIJ, poniendo fin al autosecuestro de familiares iniciado el pasado domingo 15. El acuerdo establece la evaluación de los expedientes de aproximadamente 100 internos cuyos procesos presentan retrasos.

VIERNES 27 Miles de trabajadores de la industria del calzado protestan en los principales puertos del país contra la entrada ilegal de aproximadamente 40 millones de pares de calzado al año.

SÁBADO 28 Centenares de opositores al gobierno marchan en Caracas hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para pedir la liberación de los presos políticos y la designación de un defensor especial que investigue todos los casos de persecución política en el país. Por su parte, simpatizantes oficialistas encabezados por el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, marchan también en la capital para manifestarse contra el terrorismo y en defensa de PDVSA.

LUNES 30 Más de 150 campesinos indígenas pertenecientes a las etnias japreria, wayuu, yukpa, barí y añú, provenientes de los municipios fronterizos Mara, Páez, Jesús Enrique Losada y La Cañada de Urdaneta, realizan la Marcha por la Vida,

en Maracaibo, estado Zulia, para repudiar los ataques y maltratos a la población campesina, y exigir justicia por los campesinos José Paz y Julio Fernández, asesinados el pasado 4 de mayo en el sector El Valle, en Machiques de Perijá.

MARTES 31 Empleados dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) toman las instalaciones del Sistema Regional de Salud en protesta por las deudas que la institución mantiene con ellos desde 1997, que incluyen un bono anual de 80 mil bolívares correspondientes a los años 2001 y 2002, un bono de profesionalización de 2002 y diferencia por cestatíckets.

JUNIO

MIÉRCOLES 1 Los trabajadores de la refinería de Puerto La Cruz paralizan sus labores y cierran el portón que da acceso a la instalación petrolera, impidiendo la entrada de vehículos de PDVSA, en protesta por la falta de respuesta a los reclamos que realizan desde hace varios días para exigir el pago del retroactivo del incremento salarial estipulado en la contratación colectiva, las tarjetas electrónicas que no han sido entregadas y mayor seguridad industrial.

MIÉRCOLES 15 Más de 120 trabajadores contratados para la recolección de residuos en el municipio San Francisco, estado Zulia, bloquean con unos 30 camiones las inmediaciones del Centro Comercial Antiguo Nasa Sur, para exigir a la empresa Sabenpe, dependiente de la alcaldía, aumento de sueldos, seguro de hospitalización, póliza contra accidentes y la entrega de implementos para la recolección de la basura, entre otras demandas.

VIERNES 17 Más de 2 mil miembros participantes de los distintos programas del gobierno nacional, realizan la marcha denominada "Con las misiones crece Venezuela", hasta la sede del Ministerio de Energía y Petróleo (MEyP) en Maracaibo, estado Zulia, en apoyo a las misiones Barrio Adentro, Ribas, Sucre y Vuelvan Caras.

MIÉRCOLES 22 Los desempleados de la industria petrolera cierran los accesos a la refinería y al edificio sede de PDVSA en Guaraguao, Puerto La Cruz, suspendiendo el suministro de gasolina en el llenadero de esa ciudad durante más de 6 hs, en protesta porque no les han sido otorgados 250 puestos de empleo supuestamente ofrecidos por la gerencia petrolera. La protesta concluye con la intervención de la policía y la GN que lanzan gases lacrimógenos y detienen a 60 manifestantes.

JUEVES 30 Los vecinos del barrio San Esteban de Yagua, municipio Guacara, estado Carabobo, que mantienen cerrada la Av. José Rafael Pocaterra desde el pasado martes, secuestran 4 unidades del transporte público de Guacara, un autobús de la alcaldía y una camioneta de pasajeros, y declaran que los manten-

drán en su poder hasta que los gobiernos local y regional inicien los trabajos de drenaje, cloacas y asfaltado, prometidos desde hace años y aún no ejecutados, y hasta que la compañía eléctrica Eleoccidente restablezca el servicio suspendido desde hace 5 días como consecuencia de la explosión de 3 transformadores. Por su parte, en horas de la tarde, algunos transportistas del municipio cierran la Autopista Regional del Centro (ARC) a la altura del sector Negro Primero para protestar por la retención de las 4 unidades pertenecientes al Transporte Guacara.

Unos 1.400 funcionarios de la policía del estado Guárico cierran el acceso a la Comandancia General en la Av. Miranda de San Juan de los Morros y paralizan sus actividades para reclamar el pago de diversas deudas salariales, entre ellas la homologación del sueldo pendiente desde hace 2 años, y el pago de prestaciones sociales y cestatíckets.

JULIO

VIERNES 1 La Federación Médica Venezolana (FMV) realiza un paro activo por media hora en 10 estados del país, en las áreas de consulta externa y hospitalización, para informar a los usuarios de los diversos hospitales y ambulatorios respecto de la crisis que atraviesa la salud venezolana y las exigencias del sector, entre ellas, la firma de la contratación colectiva que permanece congelada desde el año 2000. Además, protestan por la invasión de médicos cubanos que ocupan los cargos de los galenos venezolanos.

SÁBADO 2 Los vecinos del barrio San Esteban de Yagua, municipio Guacara, estado Carabobo, que mantienen retenidas unidades del transporte público desde el pasado jueves, liberan los autobuses luego de que representantes de los gobiernos municipal y regional firman un acuerdo mediante el cual se comprometen a enviar máquinas para comenzar los trabajos de mejoramiento en esa zona.

Cientos de manifestantes pertenecientes a grupos opositores al gobierno marchan por las calles de Caracas hasta la sede de la Fiscalía General de la República para solicitar la renuncia del fiscal general, Isaías Rodríguez, y protestar por la muerte de 3 estudiantes universitarios asesinados recientemente.

LUNES 4 Estudiantes de las universidades Santa María, de Oriente, y del Instituto Tecnológico José Antonio Anzoátegui, cortan la Av. Intercomunal que une Barcelona con Puerto La Cruz para protestar por el asesinato de los estudiantes acribillados en la urbanización Kennedy por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Otras protestas por el mismo motivo se registran en Valencia con los estudiantes de la Universidad de Carabobo (UC), en la Universidad de Los Andes, y en El Paraíso, con los estudiantes del Pedagógico de Caracas.

LUNES 11 Cerca de 5 mil campesinos provenientes de 12 estados del país, convocados por el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, junto con el ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, marchan en Caracas hasta la Fiscalía General para repudiar la muerte, a manos de sicarios, desde 1999, de 130 dirigentes agrarios que auspiciaran la aplicación de la Ley de Tierras. Los manifestantes piden que se designen fiscales especiales para investigar los casos y luchar contra la impunidad. Luego, pasan por la AN y llegan hasta el Palacio de Miraflores para reclamar hechos concretos en la lucha contra el latifundio y quejarse por la precaria situación que se vive en las zonas fronterizas en cuanto a contrabando de combustible y mal estado de las vías.

LUNES 18 Decenas de desempleados, junto con sindicalistas y vecinos, protestan en las instalaciones de PDVSA de Lagunillas y Baralt en rechazo al SISDEM, impidiendo el paso hacia las oficinas principales en El Menito y reteniendo a los obreros de las plantas de gas y bombeo de petróleo Barúa I y Motatán IV. Secuestran 18 gandolas cargadas de gasolina frente al edificio de Exploración y Producción en Mene Grande. El sistema de contratación instaurado a partir del pasado 11 de mayo permite a la petrolera estatal administrar todas las vacantes, en lugar de que lo hagan sindicatos y contratistas.

JUEVES 28 Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago (UNESUR), municipio Santa Bárbara, estado Zulia, paralizan las clases, secuestran 18 camiones cargados con diversos productos y los mantienen dentro de la institución para exigir al Ministerio de Educación Superior (MES) y a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) que se conforme un Consejo Universitario, se abran nuevas carreras como Contaduría Pública y Tecnología de los Alimentos, y se instale un comedor para los alumnos, entre otras demandas.

SÁBADO 30 Tras una reunión de 3 hs con la comisión ejecutiva del MES, los estudiantes de la UNESUR levantan el paro que mantienen desde el pasado jueves y devuelven los camiones retenidos. En el encuentro se firma un acta compromiso en la cual se especifican las necesidades planteadas por los estudiantes, se dispone la creación de canales permanentes de comunicación entre las partes, se establece la revisión del Proyecto de Reglamento General de la casa de estudios y el Reglamento Estudiantil, y se explicita que no se tomarán represalias contra quienes ocuparan las instalaciones.

DOMINGO 31 Los reclusos de la Penitenciaría Centro Occidental de Uribana, estado Lara, retienen a más de 750 personas en protesta por el traslado de 22 internos hacia El Dorado tras los hechos de violencia que se registran en el penal desde hace casi un año, con un saldo de 20 reclusos muertos y 120 heridos.

AGOSTO

LUNES 1 Varios desempleados cierran la autopista Cantaura-El Tigre, en el estado Anzoátegui, en protesta contra el SISDEM, señalando que no es transparente la designación de puestos y que los responsables de manejarlo están cobrando por cada asignación. Por su parte, desempleados, ex trabajadores petroleros y miembros de algunas comunidades de los municipios San Francisco, Cabimas y Lagunillas, estado Zulia, protestan en las adyacencias del llenadero de gasolina de Bajo Grande, argumentando que el SISDEM viola el derecho de los trabajadores y favorece a una minoría. Por su parte, más de 100 desempleados de 7 comunidades del municipio Jesús Enrique Lossada, del mismo estado, toman 3 instalaciones petroleras pertenecientes a empresas contratistas y paralizan la construcción de un tanque de almacenamiento de crudo en protesta porque la empresa Latinoamericana de Construcción no respetó la asignación de los puestos de trabajo acordados en la asamblea vecinal.

MARTES 2 Tras llegar a un acuerdo con las autoridades del MIJ, los reclusos de la cárcel de Uribana, estado Lara, liberan a las más de 750 personas que permanecían secuestradas dentro de la penitenciaría desde el pasado domingo. En el convenio suscripto se acuerda el pase al área de máxima en El Dorado de los 16 reclusos que fueran enviados a dicho penal la semana anterior por estar involucrados en los hechos de violencia ocurridos dentro del penal de Uribana en los últimos meses.

SÁBADO 6 Los transportistas de 8 líneas de buses cortan con 300 unidades y durante más de 2 hs la autopista Petare-Guarenas, a la altura de Terrazas del Ávila, para protestar por la muerte de un conductor, asesinado el día anterior en Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

DOMINGO 7 Se desarrollan sin incidentes las elecciones municipales en todo el país, lográndose la disminución de la cifra histórica de abstención, que pasa de un 76,2% en el año 2000 a un 69,18% en 2005 y logrando el oficialismo 1.642 concejales, lo que representa el 71,95% de los cargos en disputa. Además, las fuerzas chavistas obtienen de manera global el 75% de los 3.114 cargos para junta parroquial adjudicados hasta el momento.

LUNES 8 Con un acto encabezado por el presidente Hugo Chávez y varios funcionarios del gobierno, y con la presentación de las delegaciones de 130 países y más de 11 mil participantes extranjeros, se inicia la 16º edición del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Los Próceres, Caracas.

MIÉRCOLES 10 Pese a la ola de protestas presentadas en todo el país por diversos grupos de trabajadores, las autoridades de PDVSA ratifican la aplicación, a escala nacional, del SISDEM, alegando que el mismo descansa sobre pilares de objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades para la captación, selección y

postulación del personal de las empresas contratistas encargadas de la ejecución de las obras, trabajos y servicios en el ámbito petrolero.

MIÉRCOLES 17 Cerca de 1.000 personas que solicitan sus pasaportes realizan una protesta alrededor de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) Maracaibo II, en Sierra Maestra, Maracibo, estado Zulia, debido al retraso en el trámite de los documentos y la presunta aplicación de cobros por gestores.

MIÉRCOLES 24 Las enfermeras y trabajadores de la Maternidad Concepción Palacios cortan la Av. San Martín en Caracas para protestar por el retraso en la cancelación de las deudas laborales que mantiene con ellos la Alcaldía Mayor desde 1997 y que incluyen la doceava parte de la bonificación de fin de año de 2003, el aumento salarial correspondiente a años anteriores y la diferencia de cestatickets de 2003, los cuales suman un monto cercano a los 800 mil bolívares por cada trabajador. También les adeudan becas y útiles escolares, intereses sobre prestaciones sociales del viejo y del nuevo régimen, actualización de la antigüedad de los años 2002, 2003 y 2004, y bonos por matrimonio y nacimiento de hijos.

Miembros de 5 cooperativas encargadas de las labores de mantenimiento del Campo de Carabobo realizan una protesta en la Autopista Valencia-Campo de Carabobo, sector La Encrucijada, estado Carabobo, en reclamo del pago de unos 150 millones de bolívares que la empresa Palmaven les adeuda a unos 150 trabajadores. La policía estadual disuelve la protesta con gases lacrimógenos y balas de goma, resultando 13 personas heridas, de las cuales 7 son detenidas, entre ellas un concejal. En horas de la tarde, los manifestantes vuelven a cerrar la autopista en el sector Chaparral y protestan frente al Palacio de Justicia de Valencia para exigir la liberación de los detenidos, que se concreta horas más tarde.

SÁBADO 27 Dirigentes y simpatizantes de la oposición al gobierno del presidente Chávez realizan una marcha convocada por el Frente Nacional por la Libertad de los Presos Políticos hasta la AN para entregar un documento en el que exigen a los diputados el nombramiento de nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral (CNE). Cuando la marcha llega a la esquina Corazón de Jesús, Av. Universidad, es interceptada por un grupo de personas supuestamente identificadas como simpatizantes oficialistas, quienes lanzan piedras, botellas y fuegos artificiales, generando un enfrentamiento en el que 6 personas resultan heridas. Por su parte, un grupo de simpatizantes del presidente Chávez se concentra en la Plaza Bolívar para manifestar en contra del llamado al magnicidio planteado por el pastor estadounidense Pat Robertson.

GLOSARIO DE SIGLAS

AN	Asamblea Nacional
ARC	Autopista Regional del Centro
CICPC	Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
CNE	Consejo Nacional Electoral
CTV	Confederación de Trabajadores de Venezuela
DIM	Dirección de Inteligencia Militar
FMV	Federación Médica Venezolana
GN	Guardia Nacional
INAGER	Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología
IVSS	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
LOT	Ley Orgánica del Trabajo
MANPA	Manufacturas de Papel
MES	Ministerio de Educación Superior
MEyP	Ministerio de Energía y Petróleo
MIJ	Ministerio del Interior y Justicia
MSDS	Ministerio de Salud y Desarrollo Social
ONIDEX	Oficina Nacional de Identificación y Extranjería
OPSU	Oficina de Planificación del Sector Universitario
PDVSA	Petróleos de Venezuela SA
PGV	Penitenciaría General de Venezuela
SISDEM	Sistema de Democratización del Empleo
UC	Universidad de Carabobo
UNESUR	Universidad Nacional Experimental Sur del Lago
UNT	Unión Nacional de Trabajadores

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios Últimas Noticias, El Universal, Panorama Digital y Notitarde.
Otras fuentes: Centro de Medios Independientes Chiapas.

Región Norte

Panamá 2005: movilización popular en defensa de la seguridad social[1]

Marco A. Gandásegui (h)*

* *Profesor de la Universidad de Panamá y Director del Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena" (CELA). Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Estados Unidos de CLACSO.*

El gobierno de Martín Torrijos

El último de los cuatro gobiernos conservadores que se han sucedido desde la invasión militar norteamericana en 1989 vio llegar al poder a Martín Torrijos en septiembre de 2004. Miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) fundado por su padre, el general Omar Torrijos, en 1978, presentó un programa de gobierno neoliberal con políticas de privatizaciones, flexibilización laboral y descentralización estatal.

Torrijos reemplazó en el ejecutivo a la presidenta Mireya Moscoso, del Partido Panameñista, cuya gestión (1999-2004) se caracterizó por la incompetencia de su equipo y la corrupción que afectó a todos los estratos gubernamentales. Torrijos, incluso, acuñó el lema "Corrupción cero" para ganarse simpatías durante la campaña electoral de 2004. Las tres principales propuestas del nuevo gobierno han sido la reforma fiscal, la reforma del sistema de seguridad social y la ampliación del Canal de

Panamá, todas íntimamente relacionadas y que afectan directamente a los sectores populares.

Las primeras dos iniciativas han sido exigidas por el Banco Mundial para colocar al gobierno panameño como sujeto de crédito. Esto es de mucha importancia para los sectores gobernantes en la medida en que se comenzarán a ejecutar los planes de ampliación del Canal de Panamá, que demandará una inversión calculada entre los 5 mil y 8 mil millones de dólares.

La reforma fiscal, aprobada en marzo de 2005, afectó principalmente a los sectores productivos, a los profesionales y a los sectores populares. Los sectores industriales y agroindustriales (incluyendo a los productores agropecuarios) pidieron un conjunto de incentivos y subvenciones. A su vez, los trabajadores independientes se vieron también afectados por incrementos impositivos. La reforma fiscal representó asimismo un crecimiento de los precios de los productos de la "canasta básica" y, a la vez, una pérdida de empleos en los sectores más dinámicos de la economía panameña.

Esta reforma fiscal, empero, no afectó a los sectores que controlan la banca, los servicios marítimos, la intermediación comercial (Zona Libre de Colón) y otros servicios especulativos, incluyendo el turismo empresarial. Según informes estadísticos del gobierno, los servicios representan más del 80% del producto interno bruto (PIB) del país. Esta reforma despertó fuerte oposición entre los productores del país, que se movilizaron para cuestionar la nueva legislación; asimismo, los gremios profesionales lograron disminuir parcialmente los efectos de la reforma. Sin embargo, los sectores populares, más allá de algunos pronunciamientos aislados, no se movilizaron.

Las reformas a la seguridad social

Las reformas a la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS) propuestas por el gobierno de Torrijos incluyeron un aumento de la edad de retiro de los trabajadores, un incremento de la cuota obligatoria y una extensión de la cantidad de cuotas que debe pagar el asegurado (densidad). Según la propuesta, la mayoría de los trabajadores jamás podrían retirarse para disfrutar de un merecido descanso[2].

La iniciativa de reformar la ley orgánica de la CSS había sido tomada por la administración anterior presidida por Mireya Moscoso. Durante este período se instaló una mesa de diálogo que naufragó ante las demandas irreconciliables del Banco Mundial (BM), los trabajadores y los empresarios. Torrijos se propuso saltear el diálogo y aprobar rápidamente una reforma que satisficiera las demandas del BM[3]. Sin embargo, no contó con dos obs-

táculos que aparecieron en el camino. En primer lugar, la población ya estaba sensibilizada y no aceptó el discurso oficial. Los medios de comunicación, adeptos al gobierno de turno, se mostraron tímidos en su apoyo y cedieron espacio a quienes rechazaban la propuesta oficial. En segundo lugar, durante la gestión de Mireya Moscoso los sectores populares habían creado el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FRENADESSO) para encabezar las luchas contra la privatización de la CSS y también contra la política de empobrecimiento general.

"La reacción popular de rechazo a las reformas a la ley orgánica de la CSS, presentada formalmente por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el 18 de mayo, fue inmediata"

El gobierno no cedió ante las presiones populares. El 18 de mayo de 2005 el Ejecutivo envió el proyecto de ley con las reformas a la legislación vigente sobre seguridad social a la Asamblea Nacional de Diputados. De manera expedita el proyecto de reforma pasó por los tres debates en esta Asamblea. El 27 de mayo, sólo diez días después de haber recibido la propuesta, la Asamblea aprobó las reformas. El 1 de junio de 2005, la Ley 17 –"Ley de la Muerte", como fue bautizada por el pueblo panameño– fue publicada en la *Gaceta Oficial*. En el proceso se dieron duros enfrentamientos entre el FRENADESSO y el gobierno. Torrijos logró, sin embargo, sumar a la mayoría de los sindicatos adheridos al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), viejo cascarón laboral creado por el general Torrijos a principios de la década de 1970. También creó divisiones entre los trabajadores de la salud, los maestros y los pensionados. Este trabajo tendría repercusiones importantes posteriormente.

Las protestas populares

La reacción popular de rechazo a las reformas a la ley orgánica de la CSS, presentada formalmente por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el 18 de mayo, fue inmediata. La población, sin distinción de organizaciones o ideologías, se manifestó contraria a las reformas. Los asegurados –más de 800 mil de una población económicamente activa de casi 2 millones– sintieron de una vez el *shock* del gobierno de Torrijos.

La iniciativa gubernamental fue emplazada por el FRENADESSO, que convocó a una primera concentración y marcha el 17 de marzo, antes incluso de que Torrijos sometiera las reformas a la consideración de la Asamblea. La protesta multitudinaria llegó a la presidencia de la República, donde se vieron las señales de un movimiento bien organizado con representación de todos los sectores sociales y con mucho espíritu combativo.

El punto álgido de la coyuntura se produjo el 25 de mayo cuando el FRENADESSO convocó a una marcha que culminó en la Asamblea Nacional. Cerca de 40 mil personas se movilizaron hacia la Asamblea, donde los diputados apresuraban los debates para aprobar las reformas a la ley. Durante la marcha, varios partidos políticos de oposición hicieron acto simbólico de presencia.

En la Plaza 5 de Mayo, frente a la Asamblea, se congregaron las organizaciones populares y los dirigentes del FRENADESSO, que ingresaron a la Asamblea para expresar su rechazo a las reformas ante una Comisión de diputados. Cuando en el interior del recinto parlamentario un grupo de provocadores comenzó a lanzar objetos contundentes a los contingentes policíacos que rodeaban a la Asamblea, la policía respondió atacando a las organizaciones populares –que fueron obligadas a replegarse– y detuvo a cerca de cien personas, miembros de estas organizaciones, sin preocuparse por perseguir a los provocadores –que incluso procedieron a destruir semáforos y otras propiedades públicas.

Sin embargo, la represión no impidió que el FREENADESSO redoblara sus esfuerzos por evitar que la Asamblea procediera, dos días después, a aprobar las reformas que perjudicaban a los asegurados. Dicho Frente está formado por cincuenta organizaciones populares, entre las que se destacan el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, los gremios de profesores y maestros de la República, y los trabajadores organizados de la salud (incluyendo médicos pero no a la organización de enfermeras). El éxito del FRENADESSO se puede atribuir a sus organizaciones constitutivas y a su total coincidencia con las demandas populares. En una campaña contra las reformas a la Caja del Seguro Social, el FRENADESSO organizó, en dos meses, cinco marchas de repudio que convocaron a todas las organizaciones sociales del país.

Una vez aprobada la ley que reformaba la seguridad social en la Asamblea Nacional, el 27 de mayo, el FRENADESSO declaró a todas sus organizaciones miembros en huelga indefinida. Durante un mes, hasta el 27 de junio, se paralizó la construcción en todo el país, se cerraron todos los planteles educativos oficiales, los servicios de salud fueron afectados, y otros sectores se declararon en estado de alerta. La población apoyó a los huelguistas, especialmente a los trabajadores de la construcción, que complementaron sus fondos de huelga con donaciones que recogían en todo el país.

La demanda de las movilizaciones tuvo dos momentos. Durante todas las marchas organizadas se insistió en la derogación de las medidas "para-métricas" que aumentaban la edad de jubilación e incrementaban la densidad de las cuotas. Además, las organizaciones de trabajadores de salud hacían énfasis en la necesidad de rechazar las medidas que privatizaban los servicios médicos de los hospitales de la CSS. En segundo lugar, se le exigía al gobierno que convocara a un diálogo nacional para preparar una nueva ley que contemplara los intereses de los asegurados y del pueblo. Al cabo de un mes de huelga, movilizaciones y represiones, el gobierno fue obligado a ceder. El país se había volcado en contra de Torrijos, cuyos sondeos de opinión lo colocaban con sólo el 28% de aceptación y perdiendo terreno[4].

El diálogo

El 24 de junio, Torrijos anunció que convocaría a un diálogo para someter las reformas a la ley a un amplio debate. Respondía a las demandas populares y a la exigencia del FRENADESSO. También acogió la "súplica" que le hacían los obispos de la Iglesia católica. Por otra parte, el FRENADESSO también exigió la derogación de la ley. Así, en una segunda aparición por televisión, Torrijos anunció, el 25 de junio, que procedería a enviar un proyecto de ley a la Asamblea para "suspender todos los efectos de la Ley Nº 17" por un período de tres meses. Mientras la Asamblea procedía con los trámites de la ley, el gobierno organizó el diálogo, nombrando al presidente del Consejo de Rectores, Salvador Rodríguez, como facilitador, a la Conferencia Episcopal y al Comité Ecuménico (de las iglesias) como garantes, y confeccionando una lista de participantes entre los cuales una clara mayoría era oficialista[5].

El FRENADESSO no se sumó al diálogo, iniciado el 28 de junio, hasta que la ley que suspendía los efectos de la anterior no fue publicada oficialmente en la *Gaceta Oficial*. Cuando se integró al mismo, el 5 de julio, descubrió que el gobierno tenía todo preparado e, incluso, ya había iniciado las deliberaciones. En un principio el FRENADESSO sólo contaba con tres de las trece organizaciones seleccionadas por el gobierno: el propio Frente, con el profesor Andrés Rodríguez a la cabeza; la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CONUSI), dirigida por su secretario general, Gabriel Castillo; y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS), encabezado por Genaro López, su secretario general.

En el diálogo se produjeron enfrentamientos entre el gobierno, representado por el Ministerio de Salud y la dirección de la CSS, y el FRENADESSO. Los choques generaron reacciones entre los otros participantes, que comenzaron a manifestar su simpatía por los trabajadores. La batalla se trasladó de las calles de las ciudades del país a los salones del Consejo de Rectores. El

gobierno había maniobrado para enfriar las protestas populares, cuyo costo político le estaba restando apoyo en sectores importantes de la sociedad. Por su lado, el FRENADESSO había logrado su objetivo principal: suspender los efectos de la Ley 14. Sin embargo, continuar con la huelga exigía un sacrificio material que en ese momento se consideró mejor no pedirles a los trabajadores, especialmente a los trabajadores de la construcción.

La convocatoria al diálogo por parte del gobierno tuvo el propósito político de recuperar su imagen y prepararse para futuras iniciativas. Formalmente, el presidente Torrijos invitó a los trabajadores, a los empresarios, a los jubilados y a los profesionales a sentarse con el gobierno: un total de trece organizaciones, el CONEP por los empresarios, el FEDAP por los profesionales, la Confederación de Jubilados, y ocho gremios. Entre los gremios sindicales estaban el CONATO y el CONUSI. Por el sector salud estaban los médicos y las enfermeras. También estaba la representación de los maestros y de los profesores, estos últimos en el FRENADESSO.

El presidente anunció que todos los artículos de la ley suspendida podían ser reformados; al mismo tiempo, le dio al diálogo un plazo de tres meses. Al sumarse al diálogo, el FRENADESSO planteó que no quería debatir un nuevo articulado. Su objetivo era, decían sus dirigentes, redactar una ley totalmente nueva sobre la base de principios que recogieran los intereses de los trabajadores asegurados.

Desde un principio, el gobierno y el FRENADESSO chocaron. El Frente exigió que el gobierno presentara sus cálculos para justificar los aumentos de la edad de jubilación y de la densidad de las cuotas. El gobierno nunca presentó los números, restándole credibilidad a la propuesta oficialista. El diálogo fue reducido a discutir, uno por uno, cada artículo de la suspendida Ley 17.

Las propuestas de los sectores populares presentes en el diálogo fueron calificadas como fuera de orden por parte del facilitador nombrado por el presidente Torrijos, que sin embargo, no podía salir del atolladero, ya que un número significativo de organizaciones simpatizaba con el FRENADESSO. Si el gobierno había calculado que tendría diez votos en la mesa del diálogo contra sólo tres del Frente; para su sorpresa, en el primer enfrentamiento, descubrió que sólo tenía cuatro votos seguros y que las restantes organizaciones podían fluctuar según sus intereses.

Del diálogo a la imposición

Esta situación le dio al FRENADESSO espacio para maniobrar y presentar sus alternativas en las cuatro comisiones de trabajo que se habían creado en el diálogo: "administración",

"invalidez, vejez y muerte", "salud" y "riesgos profesionales". El gobierno, mientras tanto, decidió introducir tácticas viejas en el manejo del diálogo. Por un lado arremetió contra las organizaciones que pretendían mantener su independencia, y por el otro modificó unilateralmente las reglas para determinar cómo se conformaban las mayorías cuando se aprobaba una iniciativa o un artículo de la ley que estudiaban las comisiones.

En este último caso, cuando una mayoría de nueve organizaciones aprobó una propuesta del FRENADESSO que cuestionaba un aspecto financiero, el facilitador decidió cambiar el reglamento. Según él, a partir de ese momento la mesa estaría formada por cinco "sectores" y no trece organizaciones: el gobierno, la empresa privada, los trabajadores, los pensionados y los trabajadores independientes o profesionales. Así, el gobierno sólo necesitaría cuatro votos para imponer sus propuestas en el resto del diálogo si imponía este criterio: los dos del gobierno, el de la empresa privada y el de los pensionados. Aun cuando los trabajadores tenían nueve votos (del total de trece), no podían aprobar sus iniciativas. Ante esta situación, el FRENADESSOse retiró del diálogo el 27 de julio y pidió reuniones, tanto con la Conferencia Episcopal como con el Consejo Ecuménico, para solicitar la intervención de los garantes en lo que parecía ser el fin del diálogo. Las iglesias panameñas se mostraron tímidas y no exigieron correctivos por parte del gobierno y el facilitador, comprometiéndose a ser más vigilantes y asegurar que no se produjeran más deslices. El FRENADESSO, que estaba a punto de retirarse, recapacitó y se reintegró al diálogo.

"El gobierno estaba consciente de que su victoria podía ser pírrica si no procedía rápidamente a modificar la correlación de fuerzas"

El gobierno estaba consciente de que su victoria podía ser pírrica si no procedía rápidamente a modificar la correlación de fuerzas. Efectuó un estudio de las debilidades de cada organización y procedió a someterlas a un desgaste interno que las haría inoperantes. En el caso de los médicos, logró que uno de los grupos de galenos resolviera un problema judicial que tenía pendiente y que su directiva fuera reemplazada por la ante-

rior, que había sido desplazada por un supuesto manejo ilegal de recursos. Al retomar la vieja directiva el mando del gremio, se mostró ajena a las demandas gremiales y se cuadró políticamente con la línea gubernamental. En el caso de la Coordinadora Magisterial de maestros, el gobierno utilizó la táctica de dividir a sus dirigentes, que se pelearon en público y fueron desacreditados ante sus bases. El comportamiento de los maestros se convirtió en un arma en manos del gobierno y, en un plazo muy corto, fueron neutralizados.

El intento de tomar la Federación de Asociaciones de Profesionales (FEDAP) resultó más difícil. La FEDAP está dominada por gremios independientes que rara vez participan en debates políticos y cuidan sus intereses. En una reunión previa al inicio del diálogo, una Asamblea de FEDAP eligió a un ex-presidente, Luis Chen, para representarla en todo asunto relacionado con la reforma a la ley de la seguridad social. Como suplente fue nombrado el presidente de la Federación, Julio Zúñiga. Este arreglo le resultó desfavorable al gobierno, ya que Chen no se alineaba automáticamente con las iniciativas oficiales. Zúñiga entendió la situación y procedió a convocar una Asamblea donde intentó desplazar a Chen. Aún cuando le fue imposible, notarió un acta con su firma aduciendo que él había sido electo como representante de FEDAP en el diálogo. A pesar de que el documento no tenía fundamento legal alguno, el facilitador lo acogió y desconoció a Chen. Ante ello los miembros de FEDAP aceptaron una tregua y convocaron otra Asamblea, donde ratificaron su apoyo a Chen. El presidente Aizpurúa no asistió y denunció la misma. Así, el facilitador del diálogo continuó reconociendo al presidente sin representación, al tiempo que Chen continuó asistiendo. Al final, el facilitador forzó la salida de la FEDAP del diálogo: otro triunfo del gobierno.

Cuando le tocó a CONUSI coordinar las actividades de CONATO entre septiembre y octubre, los gremios sindicales afiliados al Partido Revolucionario Democrático (PRD), del presidente Torrijos, se opusieron. Mediante una misiva firmada por una mayoría de los miembros de CONATO dirigida al facilitador, los sindicatos oficialistas desconocieron su reglamento interno. CONUSI sin embargo asumió su papel y se instaló en las oficinas de CONATO, tomando posesión del lugar que le correspondía en el diálogo. Una turba de "varilleros" atacó las oficinas de CONATO tratando de desalojar a los miembros de CONUSI. Aun cuando destruyó el local, no logró su objetivo. Posteriormente, una orden espuria de una autoridad municipal obligó a CONUSI a abandonar el local para evitar más violencia. A la vez, en el diálogo, el facilitador desconoció el reglamento interno de CONATO y continuó reconociendo al representante anterior. El FRENADESSO optó por no continuar enfrentando al gobierno sobre este punto. Como resultado de todo este proceso los nueve miembros del diálogo que podían apoyar por razones gremiales la iniciativa del FRENADESSO quedaron reducidos a cuatro: los tres miembros originales y la Comisión Médica.

Para el movimiento popular, el diálogo había cumplido su objetivo: obligar al gobierno a tomar en cuenta la voz de los trabajadores organizados. Aún cuando fue controlado por el gobierno desde un principio, también sirvió para que el FRENADESSO expusiera las alternativas a la Ley 17.

El alto costo político

En este sentido, se enfatizó que la reforma a la ley de la CSS no contribuía a resolver lo que algunos actuarios llamaban un "déficit". Los políticos de turno habían tomado este déficit "actuarial" para alarmar a los asegurados, señalando que la CSS estaba en quiebra. Sobre la base de este juego de números el gobierno justificó la incorporación a las reformas de medidas extremas en perjuicio de la población asegurada. Por un lado, aumentó la edad de jubilación e incrementó la densidad de cuotas de 180 meses a 300 meses. Por otro lado, aumentó la cuota obrero-patronal y abrió las reservas de la institución a la especulación del sector privado.

El presidente Torrijos y su grupo más cercano justificaron estas medidas en tanto "salvarían" a la Caja del Seguro Social. Sin embargo, la agenda del gobierno no pasaba por los problemas de la institución; más bien se trataba de lo que el ministro de Economía, Ricaurte Vásquez, había señalado a principios de 2005: para cumplir con las exigencias del Banco Mundial, Panamá tenía que reformar su sistema tributario (fiscal) y la ley de la CSS para garantizar una mayor entrada de fondos al estado. Las entradas adicionales le permitirían al gobierno sanear algunas áreas de sus finanzas y convertirse en un mejor sujeto de crédito. Entre las reformas fiscales y las de la CSS se calculaba alcanzar un incremento tributario de aproximadamente 750 millones de dólares anuales. El aporte de esta suma provendría en gran parte de los sectores más empobrecidos por las medidas de ajuste económico neoliberales del decenio anterior[6].

La reacción de protesta general de todos los sectores sociales fue rápida y contundente. A pesar de las movilizaciones de protesta y la resistencia a las reformas del sistema de seguridad social, Torrijos no pretende dar marcha atrás. Sin embargo, el gobierno ha insinuado que el aumento de la edad de jubilación y el incremento de la densidad pueden atenuarse y, probablemente, en octubre de 2005, el presidente envíe nuevamente un proyecto de ley con las reformas retocadas.

Esto es un reconocimiento de que el enfrentamiento con los sectores populares organizados tiene un "alto costo político" para el gobierno. Según sondeos realizados, su aceptación en 2005 se desplomó al 28% en mayo y se estabilizó en 45% en agosto. Además, según los mismos sondeos de opinión, sólo el 30% de la población apoya las

reformas a la seguridad social. Lo más complicado es que su negociación con el Banco Mundial está relacionada con el proyecto de ampliación del Canal de Panamá. Por un lado, el presidente se sintió obligado a hacer las reformas a la seguridad social para cumplir con el BM, que le abriría las compuertas a los créditos necesarios para la inversión en el Canal de Panamá a corto plazo. Por el otro, sin embargo, alejó el apoyo popular a su gestión, imprescindible si pretende un voto favorable al proyecto de ampliación del Canal que debe someterse a un futuro referéndum constitucional.

El año 2005 se centró en las batallas por la defensa de la seguridad social del pueblo panameño, encabezadas por el FRENADESSO. El 2006 preanuncia nuevas batallas en torno al Canal de Panamá. El gobierno, debilitado y desprestigiado, tendrá que enfrentarse nuevamente a un movimiento popular que les exigirá cuentas claras a Torrijos y a su equipo. La pregunta en este caso es muy sencilla: ¿un canal *pro-mundi beneficio* o un canal al servicio del desarrollo nacional?

Bibliografía

FRENADESSO 2005a "Presentación al Segundo Diálogo Nacional por la Seguridad Social", 5 de julio.

FRENADESSO 2005b "Diagnóstico alternativo sobre la problemáica de la CSS", frebrero (resumen ejecutivo).

Gandásegui, Marco A. (h) 2005 "Reformas a la CSS perjudican a los trabajadores" en *Haciendo Camino*, Nº 14, mayo.

Notas

1 N. del Ed.: El presente artículo es una versión resumida de la versión original. El texto en su formato completo puede consultarse en la sección debates de la página web del OSAL <http://osal.clacso.org>.

2 Las reformas a la CSS contemplan cambios que perjudicarán a los trabajadores panameños. En primer lugar, se aumentaría la edad de jubilación de los trabajadores (a 65 años los hombres y a 62 años las mujeres). Además, se contempla aumentar la cuota que deben abonar los asalariados. Las reformas también proponen aumentar el número total de cuotas mensuales (la densidad) que debe cotizar el asegurado antes de pensionarse, de un total de 180 meses (15 años) a 300 meses (25 años).

3 "El paquete de reformas, a su vez, quiere destinar el 25% de las reservas de la CSS a los bancos privados nacionales y extranjeros para que puedan especular en los mercados internacionales. Las reformas propuestas responden a los lineamientos del Banco Mundial dados a conocer a fines de 2004. El Banco recomienda que todos los países deben aumentar las recaudaciones de los sistemas de seguridad social y, a la vez, disminuir los

gastos. El Banco Mundial también recomendó que los países con sistemas de seguridad social no deberían privatizar las reservas de sus instituciones, ya que la experiencia ha sido negativa" (Gandásegui, 2005).

4 "Si estamos todos aquí hoy –y en esto queremos ser muy claros y enfáticos– es, exclusivamente, porque FRENADESSO convocó, encabezó y condujo una huelga nacional de más de 30 días en la cual participaron decenas de miles de panameñas y panameños en todas las capitales de provincia y por lo cual la ciudadanía ha tenido que pagar un alto precio: más de 1.600 detenidos –de los cuales 3 siguen injustamente presos–, 3 heridos de bala, 3 atropellados, la pérdida de la vista de un manifestante, uno con fracturas múltiples, 25 con medidas cautelares, 15 fianzas y la apertura de más de 60 expedientes represivos abiertos por la Policía y el Ministerio de Gobierno y Justicia" (FRENADESSO, 2005a).

5 Miembros del Diálogo Nacional por la Caja del Seguro Social: Confederación de Jubilados y Pensionados, Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Asociación Nacional de Enfermeras, Coordinadora Nacional de Gremios y Profesionales de la Salud, Comisión Médica Negociadora Nacional, Federación de Asociaciones de Profesionales (FEDAP), Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FRENADESSO), Confederación Nacional de Unidad Sindical (CONUSI), Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Coordinadora Nacional de Unidad Magisterial, Consejo Nacional de Trabajadores Organizado (CONATO), Caja de Seguro Social, Ministerio de Trabajo.

6 En febrero de 2005, meses antes de la propuesta del gobierno, FRENADESSO señalaba que "en la base del planteamiento de la alianza entre gobierno y sectores dominantes, en plena coincidencia con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, está la idea de que la base del problema debe encontrarse en la excesiva generosidad del sistema. La solución, de acuerdo a este enfoque, pasa por la reducción de dicha generosidad, lo cual implica la elevación de la edad de jubilación, el incremento del número de cuotas a ser aportadas para obtener el derecho a la jubilación, la reducción del cálculo de la pensión base y el aumento de la cuota aportada por el asegurado trabajador. El segundo eje central del planteamiento de la alianza entre gobierno y sectores económicos dominantes está dado por la idea de que la solución de los problemas planteados pasa por lo que llaman un sacrificio compartido, idea que esconde el interés de cargar sobre los trabajadores del país el costo completo de las reformas de la CSS" (FRENADESSO, 2005b).

Costa Rica

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 Unas 3 mil personas, entre empleados públicos, trabajadores de la salud, educadores, estudiantes, artistas, campesinos y ambientalistas, marchan en San José en el marco del Día Internacional de los Trabajadores bajo la consigna "No al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos".

DOMINGO 15 La vicepresidenta Lineth Saborío advierte a los trabajadores del sector público que no percibirán su salario si se declaran en huelga y participan de la marcha convocada por las centrales sindicales para protestar contra del TLC con EE.UU.

LUNES 16 Diversos grupos sociales se declaran en huelga y se movilizan por las calles de todo el país en el marco de una jornada de protestas convocada por la Comisión Nacional de Enlace (CNE) y el Movimiento Cívico Nacional (MCN) contra el TLC entre Centroamérica y EE.UU. El paro de labores logra un apoyo parcial en el sector público: el gremio educativo (primaria, secundaria y universidades públicas), trabajadores de la salud, agricultores, transportistas y funcionarios de aduanas y acueductos, entre otros. Diversas manifestaciones tienen lugar en varias provincias, como Cartago, Heredia, Puntarenas y Limón. En la capital, un grupo de manifestantes marcha hacia la sede del Congreso; otro grupo se desplaza frente a la Corte Suprema de Justicia. También se producen manifestaciones en el parque Central, en pleno corazón capitalino. Por otra parte, un grupo de agricultores desfila hacia la Casa Presidencial, mientras que los estudiantes de la estatal Universidad de Costa Rica (UCR) bloquean una de las vías estratégicas que conecta la zona este de la ciudad.

SÁBADO 21 Vecinos de diferentes lugares de la zona sur protestan frente a las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito para manifestar su oposición al TLC entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU. (DR-CAFTA, por sus siglas en ingles).

JUNIO

MARTES 7 Cientos de personas, entre quienes se encuentran muchas mujeres con niños, marchan hacia la Casa Presidencial al grito de "Queremos Casa!" para reclamar un bono de vivienda. Los manifestantes llegan a San José desde todo el país, incluyendo Guanacaste, Heredia, Cartago, entre otras regiones, luego de que el ministro de Hacienda anuncia el recorte de 10 mil millones de colones para bonos de vivienda.

MIÉRCOLES 8 Estudiantes de la UCR toman la Facultad de Ciencias Sociales en protesta por el mal estado del edificio.

MIÉRCOLES 15 Vecinos del cantón de Nandayure, Guanacaste, se levantan nuevamente en huelga indefinida por el pésimo estado de la red vial nacional, y bloquean las rutas nacionales 901, 903 y 160. Por su parte, los estudiantes del Liceo de San Francisco de Coyote y del Colegio Técnico de Carmona, ambos del cantón de Nandayure, inician una huelga indefinida en apoyo a los vecinos de esa zona. De acuerdo con los manifestantes, más de 300 estudiantes no pueden llegar a clases debido a diversos problemas en los caminos tales como alcantarillas colapsadas y calles de tierra convertidas en barriales a causa de las fuertes lluvias de los últimos días. Alegan también que en repetidas ocasiones, tanto líderes comunales como el alcalde y miembros del Consejo Municipal de Nandayure, han solicitado al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) que repare estas vías, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria.

Trabajadores de la recolección de basura de la Municipalidad de Limón paran en reclamo del pago de los aumentos salariales acordados con el municipio.

JUEVES 16 Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) inician una huelga en reclamo de aumento salarial.

VIERNES 17 Vecinos, estudiantes y transportistas del cantón de Nandayure, Guanacaste, cumplen el tercer día de protestas por el pésimo estado de las carreteras nacionales de la zona y aseguran que continuarán realizando manifestaciones y bloqueos por tiempo indefinido hasta que el CONAVI soluciones el problema.

Representantes de agrupaciones campesinas, cooperativistas, arroceros, ambientalistas y gremios, entre ellos los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), se reúnen con el presidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella, en la Casa Presidencial en San José para reiterarles su oposición al DR-CAFTA.

MARTES 21 A 15 días de la primera marcha por la vivienda realizada en San José, cientos de familias provenientes de todo el país protestan nuevamente bloqueando la calle frente a la Casa Presidencial, en Zapote, en demanda de viviendas de interés social.

JULIO

MIÉRCOLES 6 Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) aplican "tortuguismo" como medida de presión en reclamo del pago de horas extra y que se mejore el equipo de trabajo.

LUNES 11 Los trabajadores de la Municipalidad de Tibás, provincia de San José, encargados de la recolección de basura y del aseo y limpieza de dicho cantón, se declaran en huelga indefinida. Los trabajadores exigen el pago adeudado correspondiente al aumento salarial del primer semestre y el giro del salario escolar. Solicitan, además implementos de trabajo, pues desde hace tres años no se les provee de vestimenta ni elementos de limpieza para recoger los desechos de los 72 mil habitantes del cantón tibaseño.

MIÉRCOLES 13 Representantes de la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC) que reúne a los sindicatos y organizaciones sociales de Centroamérica, acuerdan –luego de dos días de reuniones– que Costa Rica sea la sede, en octubre de 2005, de la I Cumbre Político Sindical, cuyo objetivo será el de planificar y unificar criterios para la ofensiva que adoptará el istmo, como bloque, contra el DR-CAFTA.

LUNES 18 Mientras se inicia la segunda semana de huelga de los trabajadores encargados de la recolección de basura en la Municipalidad de Tibás, el juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial falla a favor del alcalde de Tibás, Percy Rodríguez, y decide declarar ilegal la huelga.

MARTES 19 Estudiantes de la UCR forman una gran cadena humana que impide el ingreso del ex presidente y candidato liberacionista, Oscar Arias, a la universidad, donde iba a dar una charla en el marco de un programa de posgrado.

MARTES 26 Los trabajadores encargados de la recolección de basura en la Municipalidad de Tibás alcanzan un acuerdo con el Concejo de dicho municipio y levantan la huelga. Las partes convienen destinar 8 millones de colones del superávit del período fiscal anterior al pago parcial del salario escolar adeudado a los empleados municipales desde enero. La Municipalidad se compromete también a entregar, en un plazo máximo de 15 días, los implementos exigidos por los trabajadores, que incluyen uniformes y elementos de higiene. Según Albino Vargas, secretario general de la ANEP, el levantamiento de la medida

de fuerza es temporal, pues está condicionada a que no se tome ninguna medida contra quienes se alzaron en huelga (declarada ilegal el 18 de julio) y al cumplimiento de las promesas.

MIÉRCOLES 27 El congreso de EE. UU. ratifica el DR-CAFTA con 217 votos a favor y 215 en contra.

AGOSTO

MARTES 9 En plenario legislativo el Congreso Nacional aprueba el TLC con la Comunidad de Naciones del Caribe (CARICOM).

MIÉRCOLES 17 Luego de algunas horas de paro, que afectan principalmente la recolección de basura, los trabajadores de la Municipalidad de San José aceptan levantar la medida de fuerza luego de que miembros del Consejo Municipal y la alcaldesa en ejercicio les promete que no habrá despidos ni privatizaciones.

JUEVES 18 Los 67 trabajadores de la municipalidad de Tibás, que el mes anterior llevaran adelante una huelga de casi 3 semanas son despedidos sin responsabilidad patronal por el alcalde de ese cantón, Percy Rodríguez. El 18 de julio el juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial había fallado a favor del alcalde de Tibás, declarando ilegal la huelga. Sin embargo, la ANEP hizo uso de su plazo de apelación de 3 días, mientras la declaratoria quedaba en firme.

Trabajadores de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA) de Ciudad Quesada inician una huelga en rechazo al despido de 6 compañeros.

VIERNES 19 Los 67 trabajadores despedidos del ayuntamiento de Tibás inician una huelga de hambre en las afueras del palacio municipal. Reclaman ser reincorporados a sus funciones. La carta de notificación de despido recibida por los trabajadores el día anterior, justifica la decisión de cesantearlos por la participación en la huelga declarada ilegal.

MARTES 23 Los 67 trabajadores despedidos de la Municipalidad de Tibás, en huelga de hambre desde el viernes 19, son reinstalados a sus puestos de trabajo por orden de la justicia.

MIÉRCOLES 24 El juzgado civil y de trabajo de Ciudad Quesada, San Carlos, declara ilegal la huelga de los trabajadores de COOPELESCA iniciada hace casi una semana.

GLOSARIO DE SIGLAS

ANEP	Asociación Nacional de Empleados Públicos
AyA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
CARICOM	Comunidad de Naciones del Caribe
CNE	Comisión Nacional de Enlace
CONAVI	Consejo Nacional de Vialidad
COOPELESCA	Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos
DR-CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU.
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad
JAPDEVA	Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
MCN	Movimiento Cívico Nacional
PSCC	Plataforma Sindical Común Centroamericana
TLC	Tratado de Libre Comercio
UCR	Universidad de Costa Rica
UNDECA	Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Sol Denot.
Fuentes: diarios La Prensa Libre y La Nación.

El Salvador

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 Miles de personas, entre trabajadores de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), la Coordinadora Nacional de Vendedores (CNV), estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES), miembros del Bloque Popular Social (BPS) y representantes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se movilizan por el centro de la ciudad de San Salvador en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, en repudio a la política económica del gobierno, del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y EE.UU. y en demanda de mejoras salariales y fuentes de empleo. Al promediar la movilización, un grupo de manifestantes realiza pintadas contra el gobierno en edificios públicos, apedrea los ventanales de la sede del Scotiabank y quema una bandera de EE.UU.

LUNES 2 Argumentando que los trabajos privarán del servicio de agua potable a su comunidad, decenas de personas residentes de la colonia El Molino de la ciudad de San Miguel, miembros del comité Pro Protección del Agua, impiden los trabajos de excavación y construcción de zanjas para la instalación de tuberías que realiza un grupo de empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

JUEVES 26 Seis ex empleados administrativos dependientes del Ministerio de Gobernación inician, en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana del centro de San Salvador, una huelga de hambre en repudio al despido de 114 trabajadores de la Dirección de Centros Penales y de la Dirección Nacional de Correos. Los huelguistas, integrantes de AGEPYM, afirman que no cesarán en su medida de protesta hasta que las autoridades gubernamentales recontraten a todos los despedidos o bien los indemnicen justamente.

JUNIO

MIÉRCOLES 1 Miles de personas marchan por las distintas cabeceras departamentales del país en protesta contra el gobierno de Antonio Saca en el primer aniversario de su administración. En la ciudad de San Salvador, integrantes del Movimiento Popular Revolucionario 12 de Octubre (MPR-12), el BPS, la Red Ciudadana Sinti Techan, trabajadores de la salud y de la educación, dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), de la Acción para Salud en El Salvador (APSAL), de la Coordinadora Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS) y estudiantes de la UES marchan hacia el hotel Presidente en repudio al acto oficial. Entre las demandas expresadas por los manifestantes se destacan la reactivación del agro, el acceso a la salud y educación, el repudio al aumento del desempleo, al incremento en los precios del combustible y de la canasta básica y el rechazo del plan de seguridad denominado "Super Mano Dura". En horas de la tarde, cientos de militantes del FMLN se movilizan con las mismas demandas hacia la plaza cívica.

MARTES 7 Dos ex trabajadores del Ministerio de Gobernación se suman a la huelga de hambre iniciada por otros 6 compañeros.

VIERNES 10 Integrantes de diversas organizaciones sociales, entre el BPS y laFederación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos de El Salvador, bloquean las calles del centro de San Salvador para demandar al gobierno la resolución del conflicto por el que un grupo de 8 ex trabajadores del Ministerio de Gobernación realiza una huelga de hambre en reclamo de la recontratación de 114 empleados despedidos.

JUEVES 30 Los 8 ex trabajadores del Ministerio de Gobernación levantan la huelga de hambre mantenida durante 36 días luego de que la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) los convocara a suspender la medida de fuerza debido a los serios riesgos para la salud que la misma implica. No obstante, los ex empleados deciden permanecer dentro de la Catedral Metropolitana hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas.

JULIO

MIÉRCOLES 6 Alumnos del Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN) y del Instituto Albert Camus, junto a estudiantes de la UES, bloquean avenidas en el centro de San Salvador en repudio al aumento de las tarifas de transporte urbano. En horas del mediodía, alrededor de 75 efectivos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) reprimen con gases lacrimógenos y balas de goma. Los manifestantes se refugian en el edificio de la

UES, para luego volver a bloquear calles céntricas hasta las primeras horas de la tarde.

MIÉRCOLES 27 La Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. aprueba por 217 votos a favor sobre 215 en contra el TLC con Centroamérica, conocido como DR-CAFTA (por sus siglas en inglés). Diversas organizaciones sociales del país convocan a la población a resistir y derrotar el acuerdo comercial.

AGOSTO

MIÉRCOLES 10 Alrededor de 150 vendedores ambulantes del centro de San Salvador, integrantes de la CNV, bloquean calles y apedrean edificios públicos y privados en repudio al desalojo de más de 100 puestos de venta realizado en horas de la madrugada por agentes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM). Cerca del mediodía, efectivos de la UMO intervienen la protesta, detienen a 10 personas y obligan a los trabajadores a retirarse hacia otras zonas de la ciudad. Por su parte, vendedores de Santa Tecla bloquean la 2º avenida norte para protestar contra el desalojo de un grupo de comerciantes realizado por miembros del CAM bajo órdenes de las autoridades municipales.

VIERNES 12 Decenas de profesores de la UES inician un paro de labores por tiempo indefinido convocado por el Movimiento por la Dignificación del Docente (MDUES) para exigir el respeto a los niveles salariales acordados en el ámbito del Consejo Superior Universitario (CSU) el pasado 19 de julio. Dicho acuerdo establece que, de conformidad con el escalafón docente, estos deben percibir entre 1.300 y 2.400 dólares.

MIÉRCOLES 24 El MDUES determina la suspensión del paro docente mantenido por 2 semanas en la UES luego de proceder a la firma de las planillas para cancelar el bono correspondiente a los profesionales de esa casa de estudios superiores.

GLOSARIO DE SIGLAS

AGEPYM	Asociación General de Empleados Públicos y Municipales
ANDA	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
APSAL	Asociación para la Salud en El Salvador
ASTRAM	Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales
BPS	Bloque Popular Social
CAM	Cuerpo de Agentes Municipales
CNV	Coordinadora Nacional de Vendedores
CSTS	Coordinadora Sindical de Trabajadores Salvadoreños
CSU	Consejo Superior Universitario

DR-CAFTA	TLC entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU.
FMLN	Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
INFRAMEN	Instituto Nacional Francisco Menéndez
MDUES	Movimiento por la Dignificación del Docente
MPR-12	Movimiento Popular Revolucionario 12 de Octubre
PDDH	Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
STISSS	Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
TLC	Tratado de Libre Comercio
UES	Universidad de El Salvador
UMO	Unidad de Mantenimiento del Orden

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino y El Diario de Hoy.

Guatemala

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 Encabezadas por la Unión Guatemalteca de Trabajadores (UGT) y el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP), cerca de 30 mil personas se movilizan desde el monumento al trabajo hasta la Plaza de la Constitución, donde participan de un acto en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Repudian el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Concesiones, y se pronuncian en contra del clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país, la falta de educación y salud, así como el alza de las gasolinas que ha provocado una escalada inflacionaria. En el interior del país también se organizan actos de protesta en los departamentos de Quetzaltenango, Izabal, Suchitepéquez, Escuintla y Juitapa, entre otros.

MIÉRCOLES 11 Vecinos de varias colonias de Escuintla, Guatemala, realizan barricadas para evitar el ingreso de camionetas a la colonia Madrid, en la zona 3, en rechazo al incremento del pasaje urbano. Mientras, algunos jóvenes apedrean varias unidades de transporte.

JUEVES 12 Luego de 4 días de reuniones en 10 ciudades estadounidenses, los presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana se reúnen en Washington, EE.UU., con su par George W. Bush, para avanzar en las negociaciones por el DR-CAFTA.

MIÉRCOLES 18 Integrantes de diversas organizaciones sociales protestan frente al edificio de la Gobernación en Guatemala, demandando que se investiguen los constantes allanamientos ilegales a sus oficinas. En el transcurso del año se han producido 66 ataques contra varios organismos, de los cuales 15 son allanamientos a oficinas de entidades que se oponen al TLC.

JUEVES 26 Cientos de personas integrantes de organizaciones sindicales, de pueblos indígenas, maestros, alumnos e inquilinos de mercados cantonales realizan una marcha pacífica desde la Plaza Italia, zona 4 de la capital, hacia el Parque de la

Constitución para pronunciarse en contra del incremento del precio de diferentes productos de primera necesidad, así como en rechazo a la pretendida ley de concesiones y al RD-CAFTA.

LUNES 30 Centenares de estudiantes y maestros de las escuelas públicas de las 23 comunidades de Chiché, Guatemala, desfilan por las calles del municipio en protesta de la actividad minera que ha autorizado el gobierno en la región.

Alrededor de 100 campesinos invaden una finca ubicada en la aldea Sanyuyo, Jalapa. Aunque luego desocupan el lugar pacíficamente, el dueño de las tierras dispara contra varias familias, asesinando a uno de los ocupantes.

JUNIO

VIERNES 10 Campesinos de la Montaña de Xalapán, Jalapa, marchan hasta la gobernación departamental para exigir la legalización de sus tierras y una investigación sobre la muerte a balazos de un campesino ocurrida a fines de mayo en la finca Los Cebollines.

MIÉRCOLES 15 El Congreso aprueba la creación del Registro de la Información Catastral (RIC). Con esta ley, que responde a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá crear tribunales agrarios que solucionen los casos pertinentes a esta materia.

SÁBADO 18 Los vecinos de Sipacapa, San Marcos, realizan una consulta popular para decidir si quieren o no la explotación minera en sus tierras. Participan el 99% de los vecinos y de las 13 aldeas que conforman el municipio, 11 optan por el no, una de ellas por el sí y otra se abstiene. Mientras tanto, la legalidad del proceso está en duda por un amparo interpuesto por la empresa Montana, que tiene una explotación minera en el vecino municipio de San Miguel Ixtahuacán y 3 licencias de exploración para ubicar nuevos yacimientos en Sipacapa. Los pobladores argumentan que no fueron consultados para autorizar las actividades de la citada mina.

VIERNES 24 El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) informa que, en el transcurso del año, se han registrado más de 70 atentados contra operadores de justicia y activistas de derechos humanos.

JUEVES 30 Unos 650 trabajadores de la maquiladora Dae Jong protestan en el km 39 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Palín, por temor al cierre de la empresa y que no les sean pagadas sus prestaciones.

JULIO

LUNES 11 Los ministros de Gobernación de Guatemala y Honduras sostienen una reunión en la ciudad de Guatemala donde acuerdan la creación de una fuerza binacional integrada por agentes de seguridad de ambos países para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

MARTES 12 Ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) bloquean la carretera a Chiquimula y se enfrentan a la Policía, mientras sus representantes se presentan en el Congreso para exigir una compensación por los servicios prestados durante los años del conflicto armado interno. Asimismo, 4 ex patrulleros son condenados a 5 años de prisión por la retención ilegal de 4 periodistas durante protestas ocurridas en 2003.

MIÉRCOLES 27 El Senado de EE.UU. ratifica el DR-CAFTA con una ajustada mayoría: 217 votos a favor y 215 en contra.

JUEVES 28 Miles de sindicalistas, trabajadores y maestros pertenecientes a la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), la Coordinadora Nacional Sindical y Popular (CNSP) y la Organización Nacional de Estudiantes de Guatemala (ONEG), entre otras organizaciones, realizan manifestaciones en la capital y en las cabeceras departamentales con el fin de rechazar la política neoliberal del gobierno y exigir un incremento salarial para los maestros, entre otras demandas. En la capital, marchan desde la zona 13 hasta el Congreso, pasando por la embajada de EE.UU. y el Ministerio de Educación (MINEDUC), rechazan el DR-CAFTA y exigen la renuncia de la ministra de esa cartera.

AGOSTO

MARTES 2 El presidente de EE.UU., George Bush, firma el DR-CAFTA.

MIÉRCOLES 3 Cientos de campesinos del departamento de Totonicapán, acompañados de los representantes indígenas y alcaldes auxiliares de los 48 cantones de esta cabecera municipal, se manifiestan frente al Congreso en contra de la iniciativa de la ley general de aguas. Consideran que la misma pretende una privatización de los mantos acuíferos de la región.

JUEVES 4 Aproximadamente, 300 inquilinos del mercado La Terminal, zona 3 de Quetzaltenango, protestan frente a la gobernación departamental y la municipalidad para reclamar a las autoridades más vigilancia dentro y fuera del mercado, debido al pago de "impuestos" que deben hacer a los grupos pandilleros para no sufrir asaltos en el lugar.

Alrededor de 6 mil personas de la tercera edad sin cobertura social se manifiestan por las calles del Centro Histórico de Guatemala hasta el Congreso, donde exigen la aprobación de una pensión económica.

LUNES 15 Integrantes de la Mara Salvatrucha atacan a integrantes de la Mara 18 en 5 centros carcelarios y un correccional de menores del país, dejando como saldo 36 internos muertos y otros 22 pandilleros heridos.

JUEVES 18 Los médicos del Hospital Roosevelt comienzan un paro en apoyo a los médicos residentes que demandan anestesiólogos, quirófanos y equipos.

LUNES 29 La Justicia absuelve a un finquero acusado de matar a 6 campesinos en la finca El Corozo, Samayac, el 24 de enero pasado.

GLOSARIO DE SIGLAS

CNSP	Coordinadora Nacional Sindical y Popular
CSJ	Corte Suprema de Justicia
DR-CAFTA	TLC entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU.
MICSP	Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular
MINEDUC	Ministerio de Educación
ONEG	Organización Nacional de Estudiantes de Guatemala
PAC	Patrullas de Autodefensa Civil
PDH	Procuraduría de Derechos Humanos
RIC	Registro de la Información Catastral
TLC	Tratado de Libre Comercio
UASP	Unidad de Acción Sindical y Popular
UGT	Unión Guatemalteca de Trabajadores

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Prensa Libre y La Hora y el Servicio Informativo del Centro de Estudios Guatemala (CEG).
Otras fuentes: IMC Chiapas, CLAJADEP, Rebelión, ALAI y ADITAL.

Honduras

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 En el Día Internacional de los Trabajadores, más de 15 mil personas, en su mayoría afiliadas a la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), a la Central General de Trabajadores (CGT) y a la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), marchan en Tegucigalpa para exigir un aumento general de salarios, la protección de los recursos naturales del país, y que se busque una solución a los altos costos de los combustibles y de los productos de la canasta básica. Además, se manifiestan en contra de la creación de una ley del salario mínimo, de la implementación de empleos temporales y del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. En San Pedro Sula, más de 30 mil obreros de esa ciudad y otras comunidades del norte del país, junto a campesinos, maestros y estudiantes, marchan hasta la Catedral sumando a las reivindicaciones citadas el rechazo a la concesión del agua potable y las privatizaciones de servicios públicos. También exigen mejores condiciones de trabajo en las maquiladoras y la destitución de los ministros de Trabajo, Finanzas e Industria y Comercio, del presidente del congreso, Porfirio Lobo Sosa, y del alcalde sampedrano, Oscar Kilgore. Otras manifestaciones y protestas se registran en Puerto Cortés, La Ceiba y Juticalpa.

LUNES 16 Unos 2.100 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (SITRATERCO), paralizan la producción en 10 fincas pertenecientes a la empresa en los sectores de La Lima y El Progreso, en protesta por la implementación de un nuevo sistema de asistencia médica que obliga al empleado a presentarse en su puesto de trabajo el día en que solicita tratamiento, independientemente de su estado de salud.

MARTES 17 Los alumnos de los colegios secundarios estatales de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, inician un paro indefinido para reclamarle al gobierno que les pague el bono estudiantil de transporte, y que el monto del mismo sea igual al que perciben los estudiantes de la capital. Demandan también que se mejoren las condiciones pedagógicas y de seguridad en los centros educativos, la dotación de mobiliario para las escuelas, que se establezcan costos bajos para útiles escolares, vestido y calzado, y que se otorgue una beca por excelencia académica de 1.500 lempiras mensuales a partir del año 2006.

LUNES 23 El secretario de Trabajo, Germán Leitzelar, anuncia que los trabajadores de SITRATERCO que mantienen paralizadas las plantaciones bananeras de la Tela Railroad Company desde hace una semana, tienen 24 hs para desistir de la huelga, o la misma será declarada ilegal y podrán ser despedidos sin prestaciones. Por su parte, los secretarios generales del sindicato, deciden continuar con la medida.

MIÉRCOLES 25 Luego de 9 días de huelga y tras una larga reunión en Tegucigalpa, representantes del gobierno, ejecutivos de la Tela Railroad Company y miembros del SITRATERCO, firman un acuerdo que pone fin a la paralización de los trabajos en 10 fincas bananeras pertenecientes a la transnacional. El acuerdo establece que no se modificará la forma de recibir tratamiento médico por parte de los empleados y que no habrá represalias de ningún tipo con los mismos, pero la empresa logra que sea utilizada por el término de 3 meses una bolsa plástica para proteger los racimos, que los obreros consideran dañina para su salud.

LUNES 30 Miles de personas pertenecientes al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y otros sectores organizados del área rural y urbana del departamento de Intibucá, marchan en la ciudad de La Esperanza en rechazo a la deforestación de la selva, la privatización del agua, el TLC con EE.UU., las concesiones mineras, la introducción de semillas transgénicas y el abuso en la venta y uso de agrotóxicos, entre otras cuestiones.

JUNIO

MIÉRCOLES 1 Tras una reunión entre la comisión del Ministerio de Educación y los dirigentes estudiantiles de los institutos públicos de la zona norte del país, el gobierno decide aumentar de 300 a 400 lempiras el bono estudiantil para los alumnos de esa región, entregar las becas estudiantiles para los alumnos que tengan un índice académico superior al 91% y conformar una comisión integrada por el gobierno, los directores y los alumnos para ir evacuando cada una de las necesidades respecto de los problemas de infraestructura, mobiliario y seguridad. La firma del acuerdo queda pendiente para el jueves próximo en la Dirección Departamental de Educación en San Pedro Sula.

JUEVES 2 Los dirigentes estudiantiles de San Pedro Sula rechazan el acta compromiso propuesta por las autoridades educativas el día anterior y mantienen la huelga por tiempo indefinido dado que el documento no contempla otorgar el bono estudiantil a la totalidad de los alumnos y no se determinan las fechas para cumplir con el resto de las solicitudes.

MARTES 21 Unos 3 mil empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) paralizan sus labores a nivel nacional y marchan hasta la Casa

Presidencial para exigirle al presidente Ricardo Maduro que tome medidas que permitan la subsistencia de la empresa sin privatizarla.

SÁBADO 25 Después de varias horas de negociación, el ministro de Educación, Roberto Martínez Lozano, y los representantes de los estudiantes de San Pedro Sula, firman un acta de compromiso para finalizar la huelga estudiantil. La misma establece, entre otras cosas, el pago durante el mes de agosto del bono de transporte por 400 lempiras a cada estudiante, dotar con becas de 1.200 lempiras a los estudiantes con un índice superior al 91% y hacer un inventario de necesidades más urgentes a las cuales se les dará solución en el transcurso del año, y a las que no se les pueda dar una respuesta se incluirán en el presupuesto del año próximo.

MIÉRCOLES 29 En la ciudad de Tegucigalpa se realiza la VII Cumbre de Presidentes de Centroamérica, México, Colombia y República Dominicana, bajo el nombre de Mecanismo y Concertación de Tuxtla Gutiérrez, donde los mandatarios y representantes de los países participantes acuerdan, entre otras cosas, destinar 7.300 millones de dólares para financiar, hasta el año 2008, la ejecución de proyectos del Plan Puebla Panamá (PPP), confirmar el interés y la voluntad mutua de profundizar la asociación estratégica entre México y Centroamérica y buscar fuentes alternas y nuevos mecanismos de ahorro de combustible.

JULIO

LUNES 4 Grupos campesinos cortan por tiempo indefinido la carretera que conduce a Trujillo, departamento de Colón, para exigir el saneamiento y titulación de las tierras de todas las empresas campesinas del Aguán, Sico y Paulaya. Exigen además al Instituto Nacional Agrario (INA) la pronta agilización de los trámites de modificación de personería jurídica y constitución de empresas asociativas campesinas de producción.

MIÉRCOLES 6 Tras 2 días de negociaciones entre representantes de grupos campesinos que mantienen cortada la carretera que conduce a Trujillo y miembros de la Policía Preventiva, las partes acuerdan dejar libre el paso en la ruta a la espera de una reunión entre una comisión de alto nivel del gobierno y los dirigentes campesinos, pautada en La Ceiba para el próximo viernes.

JUEVES 28 Con la realización de asambleas departamentales y movilizaciones en las principales ciudades, los maestros de primaria y secundaria de todo el país cumplen el segundo día de un paro nacional de 48 hs en reclamo del pago de frontera a los docentes de algunos departamentos y del reconocimiento de los técnicos universitarios, entre otras cosas. Al final del día, los representantes del magisterio llegan a un acuerdo con el gobierno mediante el cual este último se compromete al pago de lo reclamado por los docentes en concepto de zonaje

en las fronteras y por calificación académica, quedando pendiente de resolución la fecha de reintegro de los directores distritales de Islas de la Bahía.

SÁBADO 30 Tras un paro de labores de 3 días, concluye el conflicto entre el gobierno y el sector magisterial, reanudándose las clases en todos los niveles de la educación a partir del próximo lunes, luego del reintegro a sus cargos de los directores distritales de la Dirección Departamental de Educación de Islas de la Bahía.

AGOSTO

MARTES 2 Al aparecer publicado en el diario oficial *La Gaceta*, Honduras se convierte en el primer país en poner en vigencia el TLC entre Centroamérica, EE.UU. y República Dominicana.

MARTES 9 Tras las protestas protagonizadas en los pasados meses de mayo y junio, más de 80 mil estudiantes de todo el país cobran las 400 lempiras del bono de transporte que les entrega el gobierno.

MARTES 16 Miles de estudiantes de varios colegios capitalinos realizan 2 marchas y sendas protestas en el centro y otros sectores de Tegucigalpa para exigir el bono estudiantil de transporte para todos los estudiantes, ya que el beneficio no incluye a los mayores de 25 años, a los alumnos que repiten, ni a los que cursan materias retrasadas o cobran becas del estado. Además, exigen más plazas de maestros, equipamiento de talleres y mejoras en los edificios.

MIÉRCOLES 24 Estudiantes de enseñanza media de Tegucigalpa toman las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán y del Ministerio de Educación en protesta por la negativa del gobierno de otorgar el bono de transporte a los alumnos aplazados, a los repitentes y a los mayores de 25 años.

GLOSARIO DE SIGLAS

CGT	Central General de Trabajadores
COPINH	Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
CTH	Confederación de Trabajadores de Honduras
CUTH	Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
HONDUTEL	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
INA	Instituto Nacional Agrario
PPP	Plan Puebla Panamá
SITRATERCO	Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company
TLC	Tratado de Libre Comercio

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios La Prensa, La Tribuna, Tiempo y El Heraldo.
Otras fuentes: Centros de Medios Independientes Chiapas.

México

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 En el Día Internacional de los Trabajadores se realizan distintas manifestaciones. En el zócalo capitalino se congregan 150 mil personas convocadas por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Frente Sindical Mexicano (FSM), cuyos líderes levantan consignas contra el gobierno y las reformas laboral y energética y reivindican al precandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador. El Congreso del Trabajo (CT) realiza un acto breve, también en el zócalo capitalino, luego del cual sus líderes acuden a un encuentro con el presidente Fox, el secretario de Trabajo y los ejecutivos que mandan en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Algunas de las restantes demostraciones se suceden en Tlalnepantla, Toluca, Matamoros, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Hermosillo y Chihuahua.

LUNES 2 La sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA) inician en conjunto sendas huelgas indefinidas exigiendo al gobierno del estado un aumento presupuestario que les permita acceder a mejoras salariales, además de la restitución del Fondo Solidario para el Retiro y la liberación de 4 maestros indígenas presos. Miles de agremiados de ambos sindicatos se concentran en la plaza principal de Tuxtla Gutiérrez.

LUNES 9 López Obrador declara el cierre del período de resistencia civil pacífica y anuncia que competirá para ser candidato presidencial en 2006.

MIÉRCOLES 11 Ejidatarios guerrerenses del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) protestan en Acapulco frente al Tribunal Unitario Agrario y la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para exigir que sea denegada una autorización a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que construya una presa hidroeléctrica en dicho paraje.

JUEVES 12 Tres mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan en el Distrito Federal (DF) hacia la Secretaría de Gobernación (SG) para debatir el aumento salarial anual, así como solidari-

zarse con los huelguistas de Chiapas, luego de lo cual instalan una carpa de protesta en la Plaza de la Constitución.

DOMINGO 15 Un millar de miembros de la CNTE marcha en el día del maestro hacia el zócalo capitalino para repudiar a la dirigente del sindicato oficial, Elba Esther Gordillo, quien suscribe un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) que supone un incremento salarial del 6%. Unos 45 mil profesores de Oaxaca marchan en la capital del estado.

VIERNES 20 Seis mil maestros de la CNTE marchan en el DF a la sede del SNTE, atravesando la sede del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la SEP, donde rechazan la privatización del seguro social y la política educativa del gobierno. Unos 15 mil maestros y trabajadores de la salud chiapanecos se movilizan hacia el zócalo estatal.

SÁBADO 21 La sección 50 del SNTSSA resuelve levantar el paro luego de que el gobierno chiapaneco acepta entregar un paquete de 21 millones de pesos para solventar programas de capacitación e incrementos salariales por horas extra y anula los castigos por la huelga.

LUNES 23 Los maestros de la sección 7 del SNTE resuelven deponer las movilizaciones sin haber obtenido una respuesta favorable a sus reclamos por parte del gobierno estatal, pero sí un compromiso de no ejecutar el despido de 200 anoticiados por la SEP. Alrededor de 40 mil maestros acuden nuevamente a la ciudad de Oaxaca, donde instalan un plantón indefinido para apoyar la protesta docente en el DF.

MARTES 24 El diálogo entre el gobierno federal y la CNTE fracasa debido a que las autoridades de la SEP se ausentan del encuentro acordado en Cuernavaca, Morelos, junto al sindicato y representantes del ISSSTE y la SG. Las agrupaciones disidentes del gremio de Guerrero, Oaxaca y Michoacán llevan a cabo protestas en sus respectivas entidades.

JUNIO

MIÉRCOLES 8 La CNTE levanta la carpa instalada en el zócalo el 12 de mayo sin haber logrado su propósito ante el gobierno.

VIERNES 10 El Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Derechos Humanos de la Mazahua se instala en plantón en la sede principal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) e inicia una huelga de hambre líquida para exigirle a dicha entidad que cumpla los compromisos asumidos en octubre pasado, aún pendientes.

DOMINGO 19 Medio millar de indígenas de Jalisco, Durango, estado de México, el DF, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Michoacán se dan cita en el caracol Erupción en Rebeldía de la localidad michoacana de Zirahuén para realizar la decimosexta reunión del Congreso Nacional Indígena (CNI)-Región Centro Pacífico, y emiten la Declaración de Zirahuén, en la que anuncian que desobedecerán las leyes de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, Aguas Nacionales, Propiedad Industrial, la Ley Federal de Acceso a Recursos Genéticos y Biológicos, la de Minería y la de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas.

MIÉRCOLES 22 Las mujeres del movimiento mazahua en defensa del agua suscriben un acuerdo con el director de la CONAGUA por el cual los gobiernos federal y del estado de México se comprometen a implementar redes de distribución y un aumento del caudal para 11 comunidades en la entidad.

SÁBADO 25 Más de 25 mil personas disfrazadas de diablos, ángeles, *barbies*, princesas y bailarinas participan en la XXVII Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti y Transexual en la capital del país, para reclamar al gobierno metropolitano que legalice los matrimonios entre homosexuales.

LUNES 27 En la ciudad canadiense de Ottawa, los gobiernos de México, EE.UU. y su vecino del Norte suscriben 313 regulaciones sobre comercio, carreteras y pasos transfronterizos en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que también se conoce como Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) *Plus*. Dicho tratado busca establecer mecanismos de seguridad contra el terrorismo y el denominado crimen organizado transnacional.

MARTES 28 Los zapatistas dan a conocer las dos primeras partes de su Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que continuará con la divulgación de las 4 últimas partes en los 2 días siguientes. La primer entrega aborda la historia del zapatismo como un movimiento indígena que, al grito de "¡Ya basta!", se alzó como milicia armada en 1994, para luego apuntar a los Acuerdos de San Andrés y a su puesta en práctica de hecho con los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno. Las partes tercera y cuarta, dadas a conocer el miércoles 29, relatan que hoy día es el capitalismo lo que domina y que se despliega como una conquista, como una guerra mundial que expande sus modos y valores pervirtiendo todo en mercancía; a las personas, la naturaleza, la cultura, la historia y la conciencia en aquello que llaman la *Globalización Neoliberal*, que también genera una "globalización de la rebeldía"; y es querer de los zapatistas que su palabra llegue a los corazones de todos aquellos que participan de ella. Pero en particular se refieren a México y lo que encuentran es que rige un tratado de librecomercio que sumerge al país en la miseria, uno que goza del favor de la clase política, que así contribuye a la muerte de lo que da sustento a la nación mexicana. Las dos partes

que concluyen la declaración, del jueves 30, cuentan que con los *otros* en discordia con el capitalismo, los zapatistas quieren hacer un mundo de la resistencia en que todos quepan y el paso inmediato que anuncian es su pretensión de ir a hablar allí donde sean invitados en el país, para hacer con la izquierda social una campaña por debajo de la electoral, que a través del compromiso de la palabra apunte hacia un programa nacional de lucha, uno anticapitalista y antineoliberal, que aspira a otra Constitución.

JULIO

JUEVES 14 La comandancia general zapatista emite un comunicado a nombre de la Comisión Sexta del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CCRI-CG del EZLN) que convoca a la Campaña Nacional por Otra Política; tal comisión será la encargada de organizar los encuentros de dicha campaña. Esta prevé una sucesión de encuentros entre agosto y mediados de septiembre próximos en que los zapatistas se reunirán respectivamente con las organizaciones políticas de izquierda; las organizaciones indígenas y pueblos indios de México; las organizaciones sociales de izquierda; las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs); las mujeres, ancianos, niños y niñas que acudan a título individual o comunitario, y con aquellos que no entren en tal clasificación y que quieran asistir a los primeros encuentros en tierras zapatistas.

MIÉRCOLES 27 Alrededor de 50 mil agricultores de caña acuden al DF provenientes de 15 estados del país para marchar a la sede de la Secretaría de Agricultura, donde exigen al gobierno que no vete y que en cambio publique la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; también reclaman la destitución del titular del despacho y la del director del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero. Los agricultores forman parte de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), a las cuales pertenecen la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) y la Unión Nacional de Productores de Caña (UNPC), respectivamente.

AGOSTO

MARTES 2 Los cultivadores de caña ocupan las dependencias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (SAGARPA) en los estados de Campeche, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Nayarit, Chiapas, Quintana Roo, Morelos, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Colima y Tamaulipas. La medida es acompañada con marchas en algunas de las capitales de los estados.

SÁBADO 6 Los zapatistas, presididos por la Comisión Sexta, compuesta por 9 mujeres y 7 varones de la comandancia zapatista, se reúnen en la comunidad de San Rafael con unos 200 delegados de 32 organizaciones políticas de izquierda, comunistas, trotskistas, maoístas y anarquistas que inauguran los debates de la otra campaña con jóvenes, sindicalistas y luchadores del campo.

LUNES 8 Cerca de 8 mil cañeros acuden a la sede capitalina de la SAGARPA para iniciar un plantón indefinido, que es reprimido con gases.

JUEVES 11 Los secretarios de Gobernación y Agricultura y los presidentes de las comisiones legislativas de agricultura llegan a un acuerdo con los cañeros según el cual el presidente Fox deberá promulgar la Ley para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en las próximas semanas. Tras ello, los aproximadamente 8 mil cañeros instalados en la capital inician el retorno a sus lugares de origen.

SÁBADO 13 Cerca de 300 luchadores indígenas de 51 organizaciones acuden a la comunidad Javier Hernández para intercambiar experiencias comunes de resistencia a la opresión colonizadora y capitalista, y cultivar la memoria de sus luchas.

SÁBADO 20 Medio millar de delegados de un centenar de organizaciones sindicales, coordinadoras y movimientos, junto a trabajadores sueltos y agrupados, entre otros, se hace presente en la comunidad zapatista de Dolores Hidalgo. Asisten también campesinos, pescadores, desempleados, ex braceros, maestros, feministas, lesbianas, académicos, colonos urbanos y ecologistas, entre otros activistas.

MIÉRCOLES 24 Unos 300 comuneros del CECOP, reunidos en la comunidad Agua Caliente, del municipio de Acapulco, declaran la guerra a la CFE y al gobierno de Guerrero, y anuncian que han cerrado los accesos a los bienes comunales de Cacahuatepec. Asimismo, afirman que consideran ilegales las asambleas en las que la comisión alienta la venta de las tierras colindantes.

SÁBADO 27 Unos 650 activistas de más de 200 ONGs, principalmente, aunque también participan activistas independientes y de otros colectivos, se hacen presentes en la comunidad de Juan Diego. Entre ellos hay un abanico de entre las ONGs nacionales e internacionales instaladas en la selva Lacandona, que se completa con la asistencia de radios comunitarias, centros de estudios sociales y económicos, y grupos ecologistas, entre otros.

GLOSARIO DE SIGLAS

ASPAN	Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte
CCE	Consejo Coordinador Empresarial
CCRI-CG del EZLN	Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
CECOP	Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNI	Congreso Nacional Indígena
CNPR	Confederación Nacional de Propietarios Rurales
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
CT	Congreso del Trabajo
DF	Distrito Federal
FSM	Frente Sindical Mexicano
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ONGs	Organizaciones No Gubernamentales
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP	Secretaría de Educación Pública
SG	Secretaría de Gobernación
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTSSA	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UNPC	Unión Nacional de Productores de Caña
UNPCA	Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar
UNT	Unión Nacional de Trabajadores

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
Otra fuente: Indymedia Chiapas.

Nicaragua

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

LUNES 2 Centenares de pobladores realizan tranques en varios de los puntos principales de la carretera Tipitapa Masaya y en el sector de la Ciudadela para repudiar la nueva tarifa de buses autorizada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y que los transportistas vienen aplicando desde hace 3 semanas. Los manifestantes denuncian que los "buseros" obligan a descender a los pasajeros de las unidades y les cobran aparte por los bultos que llevan.

MARTES 3 Los trabajadores del Consejo Supremo Electoral (CSE) inician un paro de labores en protesta de que desde hace más de un año no llegan a ningún acuerdo en la aprobación de 25 cláusulas de las 54 que forman parte del convenio colectivo laboral.

MIÉRCOLES 4 Luego de una larga jornada de negociaciones, la Alcaldía de Tipitapa, los pobladores y los transportistas alcanzan acuerdos temporales sobre la tarifa del servicio, resultando 2,50 córdobas el costo del transporte urbano local y 3,50 córdobas el trayecto Tipitapa-Zona Franca Las Mercedes. La propuesta aún debe ser discutida por el Consejo Municipal.

JUEVES 5 Trabajadores de la empresa médica previsional del Hospital Alemán Nicaragüense realizan un paro de actividades en demanda de un incremento del 30% en el salario de todo el personal médico.

Pobladores de Ciudad Sandino protestan en las paradas de buses de esa localidad contra el incremento de 0,50 córdobas en las tarifas del transporte. Los manifestantes intentan quemar llantas y lanzar morteros, pero la policía que resguarda la zona les inpide su accionar.

VIERNES 6 El Concejo de Tipitapa rechaza por unanimidad la tarifa del transporte aprobada por el MTI en ese municipio y ratifica el costo de 2 córdobas del pasaje urbano, según fuera aprobado por los concejales en abril pasado. Los concejales deciden no respaldar la propuesta transitoria de la Alcaldía y los transportistas de bajar la tarifa en 0,50 córdobas. La demanda de los pobladores de pagar 2 córdobas por la tarifa urbana, 3 córdobas Tipitapa-Zona Franca y 4,50

córdobas Tipitapa-Managua es respaldada por los concejales, quienes hacen un llamado a no pagar el pasaje actual.

JUEVES 12 Trabajadores de la Policlínica Oriental realizan paros escalonados en demanda de un incremento salarial del 30%.

LUNES 16 Trabajadores de la empresa Tritón Minera, en Malpaisillo, León, realizan un tranque en una de las entradas a las instalaciones de la empresa en demanda de una recomposición salarial del 50%. Durante la protesta, los trabajadores impiden la entrada hacia la veta Talavera, obstaculizando el sector conocido como La Quebradita y El Guanacaste, evitando así que los camiones trasladen broza hacia el área de procesamiento.

MARTES 17 Los trabajadores de la Mina El Limón de la empresa Tritón Minera inician una huelga por aumento de salarios, luego de frustradas las negociaciones entre los sindicatos y la empresa.

Una nueva misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) arriba al país, a solicitud del presidente Enrique Bolaños, para recabar información sobre la situación política del país en relación a la crisis institucional originada por la aprobación de las reformas constitucionales. El canciller, Norman Caldera, explica que el objetivo de la misión es analizar las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, especialmente las relacionadas con el Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (INPRUR), la Superintendencia de Servicios Públicos (SISEP), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y las reformas fiscales.

MIÉRCOLES 25 Más de 300 pescadores y pobladores del puerto El Bluff, Bluefields, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), toman las instalaciones de la empresa pesquera norteamericana Gulf King, paralizando unas 54 embarcaciones. Los pescadores del Bluff, así como sus familiares y amigos, demandan mejoras salariales, condiciones de salubridad ambiental en los barcos pesqueros y seguros de vida.

JUEVES 26 Más de 3.500 campesinos de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) y productores de diferentes regiones del país marchan hasta la Asamblea Nacional para exigir la creación de un banco de fomento y desarrollo, que se estimule la producción agropecuaria, mejoras en la infraestructura productiva, protección de los recursos naturales y que no sea ratificado el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU. (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).

Unos 500 ex trabajadores de la Alcaldía de San Rafael del Sur, Managua, mantienen un plantón iniciado hace más de dos meses frente a las instalaciones de esa institución en rechazo al despido injustificado del 75% de los trabajadores.

Los más de 300 pescadores y pobladores del puerto El Bluff, Bluefields, RAAS, que tomaran las instalaciones de la empresa pesquera norteamericana Gulf King, deciden mantener la medida de fuerza ante la falta de respuesta a sus reclamos de aumento salarial y mejoras sanitarias en los barcos. Los pescadores costeños mantienen tomados, además, 43 barcos pesqueros norteamericanos y 11 coreanos.

VIERNES 27 Luego de 10 hs de negociaciones, los pescadores costeños alcanzan acuerdos con los socios de la empresa pesquera norteamericana Gulf King y levantan las medidas de fuerza. Los acuerdos contemplan aumentos salariales, el compromiso por parte de la empresa de inscribir a los trabajadores ante el INSS para que los profesionales del mar puedan acceder a los beneficios de los asegurados. También darán 3 días de descanso después de cada expedición de pesca (17 días), mientras que si el período de pesca es de 8 días, el descanso será de 24 horas.

JUNIO

MIÉRCOLES 8 Transportistas organizados en la Cooperativa de Transportes de Corinto (COTRACO) obstaculizan el paso de 30 de los 70 cabezales desplazados por la Empresa Transnacional Gash SA. Los transportistas locales realizan un tranque en la salida hacia Managua e impiden la marcha de los contenedores de la Empresa NYK hacia a la naviera Vassali, la cual hace 6 días, inexplicablemente, dejó desempleados a los miembros de la COTRACO.

Luego que el Movimiento Comunal en Rivas rechazara el incremento en el costo de la energía, unos 500 medidores de la distribuidora de electricidad Unión Fenosa aparecen manchados con pinturas de aceite y de spray en la ciudad y en los municipios de Carazo. Los medidores no podrán ser reparados debido a que los mismos no resisten los químicos de la pintura, según José Martínez, jefe de emergencia de la Distribuidora del Sur (DISSUR). Las manchas en Rivas se producen después de que el Movimiento Comunal ha llamado a la población a que rechace el incremento de energía.

JUEVES 9 Representantes del Movimiento Comunal Nicaragüense y de la Asociación de Consumidores de Masaya (ACODEMA), junto a delegaciones de León, Carazo, Rivas, Granada y Managua, marchan en Masaya para exigir el retiro de Unión Fenosa del país y para reclamar que se nacionalice la energía. Durante la manifestación, varias personas con palos y esponjas manchan con pintura los medidores a lo largo de varias cuadras antes de llegar a las oficinas de la empresa.

LUNES 13 Más de 300 taxistas asociados en cooperativas realizan un plantón de 6 horas frente a las instalaciones de la Alcaldía de Masaya para exigir que se destraben los trámites de permisos retenidos.

JUEVES 16 Decenas de miles de personas, convocadas por el Movimiento Por Nicaragua, entre otras organizaciones y partidos políticos, marchan hacia la Asamblea Nacional, en Managua, en repudio al pacto entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La llamada marcha "anti-pacto" provoca congestionamiento en las principales avenidas de la ciudad, ya que las articulaciones principales se encuentran ocupadas por los manifestantes y las vías alternas son bloqueadas por quienes no apoyan la protesta. Al llegar hasta la tarima central, dos jóvenes leen una proclama en la que exigen elecciones libres y rechazan las reformas constitucionales aprobadas el año pasado. Por su parte, grupos de estudiantes universitarios realizan una "contra-protesta" ubicando tranques por más de 5 hs frente a la Universidad Centroamericana (UCA), lo que provoca enfrentamientos con quienes se dirigen al punto de concentración de la marcha. También en León y Carazo, partidarios del pacto ubican tranques en carreteras y lanzan "miguelitos" para demorar la llegada a Managua.

VIERNES 17 Más de 300 pobladores de la isla de Corn Island, RAAS, toman el aeropuerto en demanda de que la empresa municipal de energía eléctrica mejore el servicio y en repudio a los intentos de aumento de la tarifa. Los pobladores se ubican en las pistas del aeropuerto e impiden la salida y el aterrizaje de vuelos. Los manifestantes denuncian que, desde hace aproximadamente 10 meses, sólo reciben 6 hs de electricidad por día. La protesta se extiende por más de 9 hs.

MIÉRCOLES 22 Más de 250 personas marchan por las calles de la ciudad de Someto, Madriz, para exigir que la empresa española a cargo de la distribución de la energía eléctrica, Unión Fenosa, se retire del país.

VIERNES 24 Cierra el Foro Centroamericano del Agua iniciado el día anterior en la ciudad de Managua con una declaración contra la privatización de este recurso. También se aprueba un "plan de acción conjunto" que contempla manifestaciones populares en cada país y a nivel regional para evitar que se logren concretar las distintas legislaciones y los mecanismos bajo los cuales "se disfraza la privatización de la distribución del servicio de agua potable". Los reclamos también serán en el ámbito internacional por cuanto los acuerdos incluyen "el boicot del IV Foro Mundial del Agua", a realizarse en México en 2006 donde –según Edwin Garzona, del movimiento Pro Derecho del Agua de Guatemala– el Banco Mundial y las trasnacionales definirán políticas de privatización.

LUNES 27 El presidente Enrique Bolaños ordena a la Policía Nacional no acatar resoluciones de poderes del estado ni de entidades autónomas que vayan en contra de la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), escalando así la crisis constitucional nicaragüense a niveles mayores. El conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo surge cuando la Asamblea Nacional ratifica en segunda legislatura las enmiendas a la Carta Magna, reconocidas como legítimas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y declaradas inaplicables por la CCJ, dado que le restan facultades a Bolaños.

MARTES 28 Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial se reúnen en Managua como consecuencia del decreto firmado el día anterior por Bolaños que obliga a la policía a no acatar las resoluciones judiciales, y se declaran en sesión permanente. Así, inician un paro laboral casi total a nivel nacional, y cesa la emisión de órdenes de captura y de allanamiento, así como la convalidación de algunos actos policiales.

JULIO

VIERNES 1 Los jueces de Chontales, El Rama y Nueva Guinea mantienen suspendidas sus funciones de manera general, por lo cual no extienden órdenes de captura y allanamiento. Tampoco realizan trámites de juicios ni dictan sentencia, sólo reciben escritos. Los jueces cierran los juzgados y marchan hacia la Asamblea Nacional en demanda de una reforma a la Ley 228 que habilita la conformación de una Policía Judicial. El Juez Local Civil de Juigalpa, Heberto Castellón Flores, explica que esta decisión del Ejecutivo hace delinquir a los miembros de esta institución del orden público, ya que es el Sistema Judicial el responsable de dirimir las discordias entre los poderes de Estado.

JUEVES 7 La Coordinadora civil, grupos indígenas y otros movimientos sociales realizan un plantón frente a la sede del parlamento, en Managua, para protestar contra la Ley General de Aguas y exigir a los legisladores que no sea privatizado el servicio.

DOMINGO 17 Miles de personas marchan en Granada, por segunda vez en lo que va del mes, en rechazo al pacto entre los ex presidentes Daniel Ortega, del FSLN y Arnoldo Alemán, del PLC.

MIÉRCOLES 27 El congreso de EE. UU. ratifica el DR-CAFTA con 217 votos a favor y 215 en contra.

AGOSTO

JUEVES 18 Transportistas realizan un tranque con más de 30 unidades en la salida de San Marcos hacia Managua para exigir un aumento de 3 córdobas en el pasaje a dicha ciudad. Por su parte, en la Carretera Sur, en la zona de La Danta, unos 20 buses de varias cooperativas obstaculizan el paso a quienes mantienen la misma tarifa.

VIERNES 19 Fuerzas antimotines desalojan a transportistas que realizan tranques en la zona de Jinotepe, y detienen a 87 personas que portan cadenas y objetos corto-punzantes, durante el segundo día de paro de los transportistas de Carazo, quienes reclaman al MTI que autorice un aumento en la tarifa del transporte.

Representantes de la Federación Médica realizan un plantón en reclamo de la firma de un nuevo convenio colectivo con el Ministerio de Salud (MINSA).

SÁBADO 20 Las cooperativas de transporte de Jinotepe y el MTI alcanzan un acuerdo que pone fin al paro de 2 días que afecta al transporte público en dicho departamento. Según el mismo, el pasaje en los llamados buses expresos a la capital aumenta de 14 a 16 córdobas, mientras que en los ómnibus ordinarios el costo del pasaje asciende de 9 a 12 córdobas.

LUNES 22 Veintiún alcaldes de Jinotega y Matagalpa marchan, con una delegación de transportistas y productores, en demanda de la reparación y construcción de 800 km de carreteras troncales en Jinotega, Matagalpa y Chontales.

VIERNES 27 Más de 45 taxistas de Someto, Madriz, realizan un paro de labores en protesta por el ingreso a esa localidad de unidades procedentes de otros municipios. Denuncian que la falta de control del municipio les ocasiona una reducción de sus ingresos.

DOMINGO 28 Bajo una gran bandera con la consigna "Ni asamblea pactista, ni gobierno entreguista", miles de personas se movilizan en Chinandega contra el pacto. Participan de la movilización los precandidatos presidenciales José Antonio Alvarado, Eduardo Montealegre y Herty Lewites.

GLOSARIO DE SIGLAS

ACODEMA	Asociación de Consumidores de Masaya
CCJ	Corte Centroamericana de Justicia
COTRACO	Cooperativa de Transportes de Corinto
CSE	Consejo Supremo Electoral
CSJ	Corte Suprema de Justicia
DISSUR	Distribuidora del Sur
DR-CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU.
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional
INPRUR	Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural
INSS	Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
MINSA	Ministerio de Salud
MTI	Ministerio de Transporte e Infraestructura
OEA	Organización de los Estados Americanos
PLC	Partido Liberal Constitucionalista
RAAS	Región Autónoma del Atlántico Sur
SISEP	Superintendencia de Servicios Públicos
UCA	Universidad Centroamericana
UNAG	Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Sol Denot.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.

Panamá

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 En el marco de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, cientos de trabajadores y estudiantes se congregan en la ciudad de Panamá y marchan hasta la plaza 5 de Mayo en repudio a las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS) y la ampliación del Canal de Panamá (CP).

MIÉRCOLES 18 Tras varios meses de postergaciones, el gobierno de Martín Torrijos Espino presenta en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma de la ley orgánica de la CSS. El primer mandatario anuncia que las reformas serán graduales y reitera que no se privatizará la institución. Entre las reformas se destacan el aumento de la edad jubilatoria y el de la cuota obrero-patronal. En repudio a las reformas presentadas, estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) cortan la vía Transísmica, mientras que la Policía Nacional (PN) rodea la Asamblea Nacional.

JUEVES 19 Tal como lo anunciara la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS (ANFACSS), se realizan piquetes en 5 puntos de la ciudad de Panamá para repudiar las reformas de la CSS.

VIERNES 20 Unos 500 representantes de alrededor de 50 organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FRENADESSO) –entre los que se encuentra el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y varias organizaciones docentes y estudiantiles– cortan la vía Transísmica frente a la sede de la UP para anunciar que emprenderán una huelga general indefinida en caso de que se apruebe la reforma a la ley orgánica de la CSS.

LUNES 23 En diferentes puntos de la ciudad de Panamá y del interior del país se realizan manifestaciones de repudio a la reforma de la ley orgánica de la CSS. Por su parte, estudiantes del Instituto Nacional, del colegio Artes y Oficios y del Instituto Isabel Herrera Obadía cierran varias calles de la ciudad de Panamá y se producen enfrentamientos con efectivos de la PN que los reprime fuertemente, dejando un saldo de más de 80 estudiantes detenidos y 15 heridos, tras lo cual se suspenden las clases.

MARTES 24 Se realizan manifestaciones de repudio a la reforma de la CSS en las ciudades de Panamá, Colón, Santiago y San Miguelito, entre otras, en las que participan principalmente estudiantes y trabajadores. Luego de las protestas, se suspenden las clases en casi todas las ciudades convulsionadas. En la ciudad de Panamá se realiza una multitudinaria marcha hacia la Asamblea Nacional convocada por la CONUSI que concluye con el enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de la PN con un saldo de más de 200 detenidos. La división antimotines de la PN estrena un nuevo equipo provisto de balas de goma y gases lacrimógenos.

MIÉRCOLES 25 En la ciudad de Panamá se realiza una multitudinaria movilización convocada por el FRENADESSO en repudio a las reformas de la CSS, que concluye en la plaza 5 de Mayo con un fuerte enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de la PN con un saldo de más de 70 detenidos y alrededor de 15 heridos. La persecución a los manifestantes continúa en barrios populares de la ciudad, donde obreros acusados de "sospechosos" son arrebatados de sus casas y apresados. Por su parte, el presidente Martín Torrijos cataloga a las manifestaciones como actos vandálicos, por lo cual dispone el aumento de efectivos policiales en las calles. Por la noche, se aprueba, en primer debate, el proyecto de reforma de la ley orgánica de la CSS.

JUEVES 26 El FRENADESSO declara una huelga general indefinida en reclamo de la suspensión a la reforma de la CSS. La Asociación de Profesores de la República de Panamá, el SUNTRACS, la CONUSI, la ANFACSS, y la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) entre otras organizaciones, apoyan la medida de fuerza. En todo el país se realizan numerosas protestas de repudio. Mientras trabajadores del SUNTRACS realizan varios cortes de calle en la ciudad de Panamá, estudiantes de la UP realizan un piquete en la vía Transísmica, tras lo cual se cierra la sede universitaria. En la provincia de Colón, se llevan a cabo varias protestas, mientras que en la provincia de Chiriquí estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) cierran la vía Interamericana.

VIERNES 27 Mientras avanza el segundo debate legislativo sobre la reforma a la ley orgánica de la CSS, se inicia el primer día de huelga general indefinida en todo el país convocada por el FRENADESSO. Las escuelas se encuentran cerradas y la atención en los centros de salud está suspendida, sólo funcionan guardias para urgencias. En la ciudad de Panamá, docentes, estudiantes, médicos y obreros llevan a cabo una concurrida movilización desde el Parque Porras hasta la Asamblea Nacional. Al finalizar la marcha, se producen enfrentamientos con efectivos de la PN que reprimen a los manifestantes con un saldo de 13 heridos y 207 detenidos.

LUNES 30 La Asamblea Legislativa aprueba en segundo debate –durante la madrugada– con 45 votos a favor y 25 en contra, la reforma de la ley orgánica de la CSS. En repudio, integrantes del SUNTRACS cierran la vía España en la ciudad de Panamá desde donde marchan hacia el Parque Porras. Allí se inicia una movi-

lización convocada por el FRENADESSO. Por su parte, el alcalde del distrito de Colón decreta un toque de queda para los menores de edad a fin de evitar que los estudiantes secundarios produzcan desmanes y los colegios secundarios de la ciudad de Panamá, Colón y San Miguelito continúan cerrados.

JUNIO

MIÉRCOLES 1 Unas 40 mil personas participan, al son de tamboriles y al ritmo de la murga, de la marcha convocada por las 50 organizaciones miembros del FRENADESSO contra las reformas de la CSS en la ciudad de Panamá. La llamada "madre de todas las marchas" es una de las movilizaciones más concurridas de los últimos 15 años, en la que participan gremios y organizaciones de profesionales, estudiantes y obreros de todo el país. Los manifestantes se concentran en el Parque Porras y marchan hacia la presidencia de la República donde realizan un acto; anuncian que continuarán con las medidas de fuerza y que mantendrán la huelga general indefinida hasta que se derogue la Ley N° 17, que aumenta la edad jubilatoria.

SÁBADO 4 Integrantes del SUNTRACS realizan piquetes en varios puntos de la ciudad de Panamá en repudio a la reforma de la CSS hasta que la unidad de control de multitudes de la PN los reprime con un saldo de 7 detenidos. El número de detenidos durante las protestas asciende a más de 700.

Tras varias horas de debate en el paraninfo de la UP, voceros del FRENADESSO anuncian que se mantendrá la huelga general indefinida y realizan un llamamiento a la desobediencia civil instando a la población a no pagar los servicios de luz y de agua, a realizar apagones diarios y boicotear la lotería nacional, los casinos, los bingos y discotecas, además de abstenerse de consumir licores, agua embotellada y cigarrillos para presionar al gobierno en pos de la derogación de la Ley N° 17 de la CSS. Asimismo, llaman a la población a rechazar el referéndum sobre la ampliación del CP, los Tratados de Libre Comercios (TLC) que se están negociando y el Plan Puebla-Panamá (PPP).

MARTES 7 En demanda de que se derogue la Ley N° 17 de reforma de la CSS, trabajadores del SUNTRACS realizan piquetes en varios puntos de la ciudad de Panamá que son reprimidos por la PN con un saldo de más de 240 detenidos y 5 heridos. Por su parte, un grupo de estudiantes universitarios bloquea la vía Transísmica, frente a la sede de la UP, en la ciudad de Panamá, y se enfrenta con efectivos antimotines de la PN que los reprime con gases lacrimógenos, tras lo cual se suspenden las clases. En Veraguas, la PN detiene a unos 200 docentes que se dirigen a la ciudad de Santiago para manifestarse contra las reformas de la CSS. Tras la fuerte represión sufrida en la jornada, miembros del FRENADESSO denuncian el grave ataque que están padeciendo los manifestantes por parte del gobierno nacional. El ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Alemán, alega que la PN actúa conforme al reglamento policial, y considera las movilizaciones como parte de un plan para desestabilizar el país.

MIÉRCOLES 8 Un grupo de docentes marcha desde Cativá hasta la ciudad de Colón, por la vía Transísismica, en protesta por los más de 500 arrestos sufridos el día anterior durante las movilizaciones contra las reformas de la CSS.

JUEVES 9 Tras varias horas de diálogo con representantes del gobierno nacional, el FRENADESSO decide continuar con la huelga general indefinida y con las acciones de protesta en exigencia de que se derogue la Ley N° 17 de reforma a la CSS.

VIERNES 10 Continúan en varias partes del país las manifestaciones en repudio a las reformas de la CSS. En Veraguas, docentes y obreros del SUNTRACS cierran la vía Interamericana y efectivos antimotines de la PN los reprimen con un saldo de 20 detenidos y más de 10 heridos. Mientras, estudiantes universitarios, maestros y profesores protestan en Chitré y se enfrentan con la PN.

LUNES 13 El presidente Martín Torrijos llama a un diálogo nacional, mediante el cual convoca a todos los gremios y centrales sindicales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), CONUSI y SUNTRACS, a que discutan durante 90 días las reformas a la CSS.

MARTES 14 Las protestas en repudio a las reformas a la CSS continúan en todo el país. Docentes de las provincias de Coclé, Chiriquí, Los Santos y Colón bloquean varias vías y, en la ciudad de Panamá, empleados de la CSS, estudiantes universitarios e integrantes del SUNTRACS realizan protestas frente a la sede de la UP y en el punte San Miguelito. Efectivos antimotines de la PN reprimen a los manifestantes dejando un saldo de 27 detenidos.

MIÉRCOLES 15 La CONATO acepta participar del diálogo convocado por el presidente Martín Torrijos. Por su parte, la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) y el Comité Ecuménico de Panamá confirman su participación como observadores del diálogo nacional. Mientras, el FRENADESSO decide continuar con la huelga general indefinida y con las medidas de fuerza en tanto no se suspenda la Ley N° 17.

JUEVES 16 El FRENADESSO realiza una multitudinaria marcha desde el Parque Porras hasta la Presidencia de la República en exigencia de la derogación de la Ley N° 17. Los manifestantes cargan una enorme cruz de la que cuelgan muñecos que simbolizan a obreros, campesinos, médicos y estudiantes martirizados por las reformas. Demandan al presidente Martín Torrijos la suspensión por 90 días de la Ley N° 17, como condición para participar del diálogo nacional por la CSS. Asimismo, unas 3 mil personas realizan una marcha por las calles de la ciudad de Santiago, en Veraguas. Las protestas se multiplican en las provincias de Chiriquí, Coclé y Herrera.

VIERNES 17 El presidente Martín Torrijos afirma que no suspenderá la Ley N° 17 para que se establezca el diálogo nacional, por lo cual, el FRENADESSO anuncia que

intensificará las medidas de fuerza y continuará con la huelga general indefinida. Asimismo, los gremios en huelga general indefinida desde hace más de 3 semanas piden a la población que rechace el referéndum sobre al ampliación del CP que impulsa el gobierno nacional.

LUNES 20 El Arzobispado de Panamá solicita al presidente Martín Torrijos la suspensión por 90 días de la Ley N° 17, mientras se abre el diálogo nacional para solucionar el conflicto en torno a la CSS.

MARTES 21 Se realizan múltiples protestas en varios puntos del país en demanda de la derogación de la la Ley N° 17, bautizada por los manifestantes como Ley de la muerte. En Bocas del Toro, un grupo de manifestantes que corta la vía Almirante-Changuinola es fuertemente reprimido por miembros de la PN y al menos 20 manifestantes resultan detenidos.

MIÉRCOLES 22 El presidente Martín Torrijos, tras una reunión con la CEP y el Comité Ecuménico, anuncia que suspenderá por un plazo de 90 días la Ley N° 17 para abrir el diálogo nacional en torno a las reformas de la CSS.

JUEVES 23 Se realizan movilizaciones en varias partes del país convocadas por el FRENADESSO en demanda de la derogación de la nueva ley orgánica de la CSS. Se realizan protestas en la ciudad de Panamá, Azuero, Coclé, Veraguas y Chiriquí. Sólo en Coclé marchan más de 5 mil personas entre maestros, médicos, obreros y estudiantes. Asimismo, otras 5 mil personas llevan a cabo una marcha por las principales calles de la ciudad de David, en Chiriquí.

SÁBADO 25 Luego de un mes de huelga general indefinida, el FRENADESSO decide suspender el paro y levantar las medidas de fuerza tras la presentación ante la Asamblea Nacional, por parte del presidente Martín Torrijos, de un proyecto que suspende por 90 días la Ley N° 17 de la CSS.

MARTES 28 Se inicia la primera sesión del diálogo nacional por la CSS sin la participación del FRENADESSO, que exige la publicación del proyecto de suspensión por 90 días de la Ley N° 17 en la Gacetilla Oficial y la liberación de todos los detenidos durante las movilizaciones, como condición para incorporarse al diálogo.

JUEVES 30 La mesa del diálogo nacional por la CSS acuerda tomar la exigencia del FRENADESSO y solicita al presidente Martín Torrijos la liberación e indulto de todos los manifestantes detenidos por las protestas.

JULIO

LUNES 4 El FRENADESSO se incorpora al diálogo nacional por la CSS, luego de que se publicara en la Gacetilla Oficial la suspensión por 90 días de la Ley N° 17. Sin embargo, objeta la figura del facilitador y la metodología de trabajo aprobada.

JUEVES 7 Se lleva a cabo la quinta sesión ordinaria de la mesa de diálogo nacional sobre la reforma de la CSS con una fuerte discusión entre el FRENADESSO, representantes del empresariado y otros sindicatos que se oponen al cambio en la metodología de trabajo.

JUEVES 28 Se realiza en la ciudad de Panamá la IV Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) en la que participan –entre otros– el presidente Martín Torrijos, los primeros mandatarios de México, Colombia y República Dominicana, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Mientras sesiona la cumbre, 3 ex trabajadores estatales despedidos por una ley de 1990, escalan el puente de las Américas del CP y amenazan con suicidarse si no se cumple el fallo dictado a su favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La cumbre concluye con una declaración sobre la importancia de la integración regional en el combate a la pobreza y a la "amenaza terrorista".

El FRENADESSO abandona provisoriamente la mesa de diálogo nacional y realiza una marcha en la ciudad de Panamá hacia la presidencia de la República en repudio a lo que denomina "el secuestro del diálogo por la CSS".

AGOSTO

LUNES 1 El FRENADESSO se reintegra al diálogo nacional por la CSS y se modifican 3 artículos de la Ley N° 17.

VIERNES 5 Se inicia la Operación Panamax 2005, maniobra militar conjunta de prevención de posibles "ataques terroristas", con ejercicios de vigilancia aérea y marítima en aguas de los Océanos Pacífico y Atlántico, así como en la zona terrestre aledaña al CP. Participan de la operación efectivos militares de 15 países, entre los que se encuentran representantes de las fuerzas armadas de Argentina, Canadá, Chile, Francia, México, Uruguay, Panamá y EE.UU. Varios aviones P-33, 8 buques de guerra y unos 4 mil marinos desarrollarán maniobras a lo largo de 12 días. Los norteamericanos comandan el centro de operaciones marítimas, los mandos panameños y el centro de operaciones terrestre. Las operaciones del Pacífico quedan en manos de efectivos peruanos y las operaciones del Atlántico son dirigidas por mandos colombianos.

DOMINGO 14 Tres miembros del Servicio Marítimo Nacional (SMN), un sargento y dos marinos, fallecen ahogados durante las maniobras militares de la Operación Panamax 2005, en la Isla Huacha, provincia de Colón, durante un simulacro de ataque terrorista. Tras el siniestro, los efectivos panameños suspenden las maniobras para iniciar una investigación por los hechos ocurridos, sin embargo, las maniobras en aguas internacionales que llevan a cabo las fuerzas multinacionales, continúan.

VIERNES 19 Durante un acto que se lleva a cabo en la ciudad de La Habana, presidido por el presidente panameño, Martín Torrijos Espino, y por el primer mandatario de la República de Cuba, Fidel Castro, se reestablecen plenas relaciones diplomáticas entre ambos países. Presencia el acto el presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

MARTES 30 Miembros del SUNTRACS de la provincia de Chiriquí realizan un piquete frente a la Defensoría del Pueblo para solicitar su intervención en la reapertura de las causas por las torturas cometidas por parte de efectivos policiales a miembros del sindicato en la provincia de Bocas del Toro durante las manifestaciones en repudio a las reformas de la CSS.

MIÉRCOLES 31 Más de 1.000 personas, en su mayoría miembros de la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE) de la Costa Abajo, realizan una manifestación por las principales calles de la ciudad de Colón y cierran el ingreso a la ciudad en repudio a la construcción de nuevos embalses que inundarían sus tierras y exigen la construcción de un puente sobre el CP.

GLOSARIO DE SIGLAS

AEC	Asociación de Estados del Caribe
ANFACSS	Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS
CCCE	Coordinadora Campesina Contra los Embalses
CEP	Conferencia Episcopal Panameña
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
COMENENAL	Comisión Médica Negociadora Nacional
CONATO	Coordinadora Nacional de Trabajadores Organizados
CONUSI	Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente
CP	Canal de Panamá
CSS	Caja de Seguro Social
FRENADESSO	Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social
OEA	Organización de Estados Americanos
PN	Policía Nacional
PPP	Plan Puebla Panamá
SMN	Servicio Marítimo Nacional
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
TLC	Tratado de Libre Comercio
UNACHI	Universidad Autónoma de Chiriquí
UP	Universidad de Panamá

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.
Fuentes: diarios Crítica y La Prensa.
Otras fuentes: Caritas Panamá.

Puerto Rico

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, la Central Puertorriqueña de los Trabajadores (CPT), junto a grupos ambientalistas del campamento Playas Pa'l Pueblo, marchan hacia el complejo hotelero del hotel Marriott, en el Balneario de Carolina, en repudio a la privatización de las playas públicas. Por su parte, la Coordinadora Sindical, el Frente Socialista y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (UTIER) protestan frente al Capitolio y marchan hacia La Fortaleza reclamando beneficios para los trabajadores.

LUNES 2 La Guardia Universitaria retoma el control de la casi totalidad de los portones del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), luego de más de 3 semanas de clausura a causa de la huelga estudiantil contra el alza en la matrícula. Por su parte, el Recinto de Aguadilla continúa en huelga indefinida.

JUNIO

JUEVES 9 Miles de empleados públicos de Caguas, nucleados en el sindicato de Empleados Civiles Organizados (ECO), marchan desde el Capitolio hasta La Fortaleza. Exigen que se cumplan las promesas de aumentos salariales y que se concreten aquellos ya negociados en convenios colectivos.

MARTES 28 Médicos internos y residentes del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la UPR inician un paro de labores por 24 hs en protesta por el incumplimiento de compromisos de aumentos salariales.

Decenas de miembros de la Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques protestan frente a La Fortaleza y entregan una carta en donde exigen al gobernador que atienda el asunto de la descontaminación de la Isla Nena. En la misiva, esta organización denuncia que la marina de guerra de Estados Unidos continúa detonando bombas en los terrenos federales de la isla municipio.

JULIO

JUEVES 7 Empleados públicos agremiados en Servidores Públicos Unidos (SPU) realizan un piquete frente al Centro Gubernamental Minillas para protestar por la incertidumbre en torno al otorgamiento de partidas económicas para los próximos convenios colectivos de trabajo.

DOMINGO 10 Tiene lugar en el país un referéndum no vinculante impulsado por sectores de la sociedad civil que reclaman una modificación en la composición de la Legislatura que la reduzca a una sola cámara. La opción por el sistema unicameral resulta ganadora con el 83,4% de los votos. Sin embargo, el referéndum no consigue un importante nivel de participación puesto que concurre a votar sólo el 22,3% del padrón.

MARTES 12 Los médicos residentes del Centro Médico de Río Piedras de la UPR –organizados en el Comité de Internos y Residentes– decretan un paro en reclamo de aumento salarial y de un acuerdo que garantice sus derechos laborales.

MIÉRCOLES 13 Unos 200 médicos residentes del Recinto de Río Piedras realizan un piquete en las oficinas de la presidencia de la UPR y deciden extender hasta el próximo viernes la huelga iniciada el día anterior en reclamo de aumento salarial.

JUEVES 14 Los médicos internos y residentes del RCM, que se encuentran en huelga en reclamo de aumentos salariales, marchan hacia La Fortaleza para solicitar la intervención del gobernador en el conflicto, luego de que el presidente de la UPR se niega a reconocerlos como empleados del sistema.

MIÉRCOLES 20 Desde la madrugada, miles de camioneros de la Unión de Tronquistas (UT) paralizan sus labores en los diferentes muelles de todo el país donde se abastece la carga que transportan como medida de presión para que el gobierno aumente las tarifas fijadas por sus servicios y atienda sus quejas sobre las multas a los furgones, entre otros reclamos. Además, líderes de la UT y del Frente Amplio de Camioneros (FAC), junto al liderato de más de 50 organizaciones de camioneros, deciden autoconvocarse en asamblea permanente para definir las medidas a tomar hasta que se resuelvan sus demandas.

Tras años de batalla, las enfermeras y enfermeros del país logran que se conviertan en ley dos proyectos que establecen un alza salarial para los profesionales del sector público y privado.

JUEVES 21 Continúa el paro de camioneros en todo el país, generando caos frente al pánico desatado por el posible desabastecimiento en determinados productos como la gasolina. Miles de puertorriqueños hacen largas filas en las gasolineras ante la escasez del producto, tras la paralización del transporte de bienes por parte de los camioneros. Varios municipios del país ya carecen de

gasolina y circulan rumores de inminente escasez de otros productos de primera necesidad. Mientras tanto, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá anuncia la decisión de dar por concluidas las negociaciones con los camioneros y activar la Guardia Nacional y todos los instrumentos del Estado "para que se garantice la entrega de gasolina, productos de primera necesidad y el regreso a la normalidad". Se movilizan agencias del orden público, federales y puertorriqueñas en todo el país. Los portavoces de los camioneros responden a esta acción asegurando que no han obstruido las entradas a los muelles, acción de la que se los acusa; sostienen que fue la Autoridad de los Puertos (AP) la que cerró los portones. Los camioneros exigen un alza de 10% en carga general y agregados, y de 30% en las tarifas de transporte vigente. Al final del día el gobernador pronuncia un discurso en el que declara que no negociará bajo chantaje y que "bajo estas condiciones, se acabaron las negociaciones. No hay nada que hablar hasta que no permitan que el país regrese a la normalidad".

VIERNES 22 Por la mañana, el portavoz del FAC, Víctor Rodríguez, anuncia en conferencia de prensa que el paro continúa a pesar del cambio de panorama tras la decisión del gobierno de dar por finalizadas las negociaciones: "La asamblea [que decretó el paro] sigue en sesión permanente y va a seguir permanente hasta que el gobierno se siente a negociar", declara Rodríguez. Por la noche, los tronquistas y los camioneros llegan a un acuerdo con el gobierno que establece el inicio de vistas públicas para discutir las modificaciones a la tarifa de transporte. Una vez alcanzado el acuerdo entre las partes, los camiones cargados de gasolina comienzan a abastecer a toda la isla.

MIÉRCOLES 27 Un grupo de estudiantes universitarios irrumpe con panderos en mano y entonando consignas contra el alza de la matrícula en las oficinas privadas del secretario de la Junta de Síndicos de la UPR en Milla de Oro, Hato Rey, para protestar contra el alza del 33% en las cuotas y tarifas la de matrícula, a partir de agosto próximo.

VIERNES 29 Los camioneros que llevaran a cabo una huelga la semana anterior aceptan una orden de entredicho permanente que les prohíbe volver a emplear las mismas tácticas para lograr su objetivo de obtener aumentos en las tarifas que cobran por sus servicios. Esta orden de entredicho permanente, firmada por el juez federal Juan Pérez Jiménez, les prohíbe obstaculizar los accesos al Muelle de Puerto Nuevo a través de la Avenida Kennedy y la carretera 28 frente al Centro de Detención Federal de Guaynabo.

AGOSTO

JUEVES 4 Decenas de trabajadores públicos protestan frente al Departamento de Hacienda en rechazo al tranque en el diálogo entre el liderato obrero y el Ejecutivo para buscar una solución a la crisis fiscal del gobierno. Los trabaja-

dores reclaman que la Legislatura apruebe las medidas de recaudo que proponen las uniones, incluyendo un impuesto a las megatiendas por volumen de venta y otro a la repatriación de ganancias de las compañías multinacionales. Se oponen a la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos.

VIERNES 5 Cientos de trabajadores realizan una protesta masiva frente al Departamento de Hacienda para expresar su rechazo a la reducción de la jornada de trabajo y el salario de los empleados públicos.

MIÉRCOLES 10 Más de 3 mil trabajadores del estado realizan piquetes en unos 37 centros de trabajo del Departamento de Familia (DF) en protesta contra la propuesta de reducción de la jornada de trabajo y la baja de los salarios. El Departamento de Trabajo (DT) también es escenario de un piquete organizado por la Hermandad de Empleados del DT y el Programa de Solidaridad (PROSOL) de la UTIER.

VIERNES 12 Cientos de trabajadores se congregan en el Capitolio y marchan hasta La Fortaleza en rechazo a la propuesta de reducción de la jornada laboral de los empleados públicos y al aumento en el costo de los servicios del gobierno, y en demanda de que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar sus empleos.

MIÉRCOLES 17 Trabajadores organizados en la UTIER y el PROSOL marchan frente al edificio principal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en Santurce, para manifestar su firme oposición a la continuación de la estrategia del gobierno de reducir la jornada laboral y el sueldo de los empleados públicos.

VIERNES 19 Empleados de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) del gobierno realizan un piquete frente a las oficinas centrales en Hato Rey para manifestar su rechazo a la reducción voluntaria de la jornada de trabajo en la agencia. Con el mismo reclamo, decenas de personas vistiendo camisas de la Unión General de Trabajadores (UGT) marchan al mediodía en su hora de almuerzo.

GLOSARIO DE SIGLAS

AEE	Autoridad de Energía Eléctrica
AP	Autoridad de los Puertos
ASR	Administración de los Sistemas de Retiro
CPT	Central Puertorriqueña de los Trabajadores
DF	Departamento de Familia
DT	Departamento de Trabajo
ECO	Empleados Civiles Organizados
FAC	Frente Amplio de Camioneros
PROSOL	Programa de Solidaridad
RCM	Recinto de Ciencias Médicas
SPU	Servidores Públicos Unidos
UGT	Unión General de Trabajadores
UPR	Universidad de Puerto Rico
UT	Unión de Tronquistas
UTIER	Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Sol Denot.
Fuentes: diarios El Nuevo Día Interactivo y El Vocero.
Otras fuentes: Indymedia Puerto Rico.

República Dominicana

[cronología mayo-agosto 2005]

MAYO

DOMINGO 1 La Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Central de Trabajadores Unitaria (CTU), la Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Sindicato de Trabajadores de Arrimo Portuario (POASI) y el Consejo Nacional Unidad Sindical, entre otros, marchan en el Día Internacional de los Trabajadores hasta el parque Independencia de la capital en demanda de la vigencia del Seguro Familiar de Salud (SFS) y de que se respete la libertad sindical.

MIÉRCOLES 4 El Colegio Médico Dominicano (CMD) inicia una huelga por 48 hs en todos los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y demás nosocomios del país, en demanda de aumento salarial y equipamiento de los centros asistenciales.

LUNES 9 Organizaciones populares de Salcedo, entre ellas, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), el Comité de Lucha Jesús Diplán (CLJD), el Movimiento Independiente de Liberación de Salcedo (MILS) y el Comité de Lucha Amelio Silva (CLAS), inician una huelga de 48 hs en demanda de la solución a la escasez de agua, la reconstrucción de carreteras, escuelas y del Hospital Metropolitano de Santiago, entre otras cosas. La zona es militarizada.

MARTES 10 Las organizaciones de Salcedo levantan el paro luego de la conformación de una comisión para dar seguimiento a la ejecución de obras en la comunidad.

VIERNES 13 Cientos de profesores de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de todo el país marchan hasta la sede de la Secretaría de Educación, en la capital, en demanda de la reposición de maestros cancelados, aumento salarial y pago a pensionados, entre otras cuestiones. Participan de la actividad el FALPO, el Colectivo de Organizaciones Populares (COP), el Consejo de Unidad Popular (CUP), gremios del área de salud y otras organizaciones que integran el Foro Social Alternativo.

El CMD y el gobierno arriban a un acuerdo en el cual este último se compromete a consignar un aumento salarial para los médicos en el presupuesto

general para 2006 y a crear una comisión técnica que analizará la propuesta de reparación y equipamiento de los hospitales. El CMD se compromete a cesar los paros.

MARTES 17 Estudiantes del liceo Manuel María Castillo de San Francisco de Macorís (SFM) realizan diversas protestas para exigir un laboratorio de ciencias y la instalación de Internet, entre otras cosas. Al llegar al lugar, la policía enfrenta a tiros y pedradas a los manifestantes, y varios estudiantes son hospitalizados.

La ADP se reúne con la secretaria de Educación, Alejandra Germán, quien se compromete a reponer a los docentes cancelados. Discuten también un posible aumento de sueldo para el próximo presupuesto.

MIÉRCOLES 18 Los maestros de la ADP y los estudiantes se retiran, por tiempo indefinido, de los centros educativos de SFM, alegando falta de garantías luego de que agentes de la policía ingresaran al liceo Manuel María Castillo y dejaran un saldo de 10 alumnos heridos. El FALPO y Juventud Rebelde incendian neumáticos en distintos puntos de la ciudad. Por la noche, la ciudad es militarizada luego de que tropas policiales disuelven a tiros una marcha proveniente de la zona norte que pretende unirse a maestros y estudiantes. Miembros del batallón de cazadores y policías cercan los barrios y 4 personas resultan detenidas. Más tarde, se reúnen dirigentes de los grupos populares con la gobernación provincial.

Residentes de Los Ciruelitos, en Santiago, realizan protestas para exigir la construcción de varias calles. La policía reprime a balazos y un menor de 13 años muere bajo las balas policiales.

JUEVES 19 Continúan las protestas callejeras con quemas de llantas en El Ciruelito, Santiago. La medida se produce luego de asistir al entierro del chico asesinado por la policía el día anterior cuando protestaban en demanda del arreglo de calles. La policía cerca el barrio.

VIERNES 20 Retorna la calma a SFM luego de que las autoridades de la gobernación deciden trasladar al subdirector del departamento de investigaciones criminales de la región y el retiro de los militares de la zona, prometen dar respuesta a las demandas de los estudiantes. Los detenidos durante los disturbios son liberados.

DOMINGO 29 El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo SA (REFIDOMSA) anuncia que la eliminación del subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) es una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y no una decisión del gobierno.

MARTES 31 Decenas de choferes del Consejo Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) marchan hasta la sede de la Secretaría de Industria y Comercio de

la capital, donde realizan un piquete en demanda de que se mantenga el subsidio al GLP.

JUNIO

MARTES 14 Grupos populares de unas 12 comunidades de Santiago inician una huelga por 48 hs, paralizando el transporte, la docencia, las actividades comerciales y las productivas, como parte de la jornada de protesta convocada por el Foro Social Alternativo y la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU). Los manifestantes exigen la mejoría de los servicios y de la calidad de vida, que el gobierno revise el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), los precios de los artículos de consumo diario y que se mantenga el subsidio al GLP. La policía ocupa las comunidades y se producen enfrentamientos. Dos personas resultan heridas de bala y varios manifestantes detenidos. También se realizan protestas en el Cibao. En Nagua, se realiza un piquete en la sede de la gobernación provincial y en Navarrete una marcha contra el hambre. En SFM centenares de personas, convocadas por el FALPO, la Fuerza de la Revolución (FR), la ADP y la Coordinadora de Organizaciones Populares, entre otros, marchan hasta el edificio de oficinas públicas frente al parque Duarte en demanda de la construcción de un acueducto, la rebaja de los precios de los artículos de consumo básico, y contra las negociaciones con el FMI, el TLC y la eliminación del subsidio al GLP.

MARTES 28 Pobladores de Navarrete inician una huelga por 48 hs convocada por el FALPO en demanda de la construcción de un hospital, que se mejore el servicio de agua potable, la construcción de carreteras y la reposición de profesores cancelados. El comercio queda prácticamente paralizado y la policía y el ejército patrullan la zona.

JULIO

LUNES 25 Las comunidades del noroeste, en Dajabón, convocadas por organizaciones comunitarias encabezadas por la Federación Regional del Transporte, se declaran en huelga para exigirle al gobierno que disponga la construcción de las carreteras Dajabón-Montecristi, El Pino-Loma de Cabrera y Santiago Rodríguez-Dajabón. Agentes policiales vigilan las carreteras y las poblaciones.

MARTES 26 El embajador de EE.UU. revela que su país ha incrementado la ayuda militar a República Dominicana, luego de que el gobierno firmara un acuerdo mediante el cual las autoridades se comprometen a no enviar a la Corte Penal Internacional (CPI) a militares estadounidenses que cometan crímenes o delitos en territorio dominicano.

JUEVES 28 El Congreso de EE.UU. aprueba el DR-CAFTA. El presidente Fernández muestra satisfacción por la aprobación y agradece a su par estadounidense, George Bush, los esfuerzos realizados para el feliz desenlace de dicha iniciativa.

AGOSTO

LUNES 1 Se inicia, en Santo Domingo, el Encuentro Internacional de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Vía Campesina. En la Declaración de Quisqueya, las campesinas y campesinos provenientes de distintas regiones del mundo mencionan estar unidas en contra del capitalismo y el patriarcado, en solidaridad y respeto de la diversidad y de la igualdad entre las personas. Se oponen al neoliberalismo y a su intento de convertir el campo en una empresa mundial, y rechazan la deuda externa y los TLC. Exigen respeto a todos los derechos, en particular, los políticos, de género, de libre expresión, autonomía y autodeterminación.

MARTES 2 El presidente de EE.UU., George Bush, firma el DR-CAFTA, que elimina inmediatamente el 80% de los aranceles entre los países. Por su parte, el presidente Leonel Fernández y su antecesor, Hipólito Mejía, se reúnen y acuerdan impulsar la aprobación de dicho tratado en el Congreso dominicano, así como la reforma fiscal que suplirá los recursos de los que se desprenderá el estado por la entrada en vigencia del acuerdo comercial.

La asociación de juntas de vecinos y el FALPO inician una huelga por 48 hs paralizando el comercio y el transporte en 5 sectores de la zona norte de SFM, en demanda de la continuación de los trabajos de la escuela Porfirio Jerez, la construcción de un puente entre los sectores Figueres y Ugamba y el asfaltado de calles. Los manifestantes obstaculizan carreteras dejando incomunicadas a unas 12 comunidades rurales. Mientras, agentes de la policía patrullan la zona.

MIÉRCOLES 3 Un grupo de instituciones de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de la región norte del país (Alianza Mipymes Región Norte) emiten un documento titulado "Manifiesto del Cibao sobre el DR-CAFTA", acordado en un encuentro entre representantes de los sectores productivos, agropecuarios, industriales, sindicales, profesionales, académicos, populares y organizaciones de la sociedad civil de la región del Cibao y del resto del país, preocupados por las asimetrías en las condiciones en que se ha ido impulsando el tratado.

Los huelguistas de SFM levantan el paro luego de una reunión con la gobernadora provincial y otros funcionarios, quienes se comprometen a reparar 6 escuelas y realizar el empalme del servicio de agua y el inicio de los estudios para la pavimentación de las calles.

El gobierno logra un acuerdo con el FMI que incluye la creación de 2 nuevas secretarías de estado, la eliminación de la práctica del uso del "excedente pre-

supuestario" a discreción de la Presidencia de la República y la definición de la política de ingresos y gastos para el próximo año.

SÁBADO 13 Organizaciones comunitarias de la zona noroeste de Santiago realizan una marcha de protesta en demanda de que los diputados rechacen el acuerdo concertado entre el gobierno y el sector empresarial en base a la propuesta de una reforma fiscal.

MARTES 16 En una sesión extraordinaria convocada para cambiar el cuerpo legislativo municipal de Piedra Blanca, en Bonao, la oposición por parte del síndico del ayuntamiento de Sonador a que un regidor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fuera escogido presidente de la Sala Capitular, como se había pactado la noche anterior, genera una pelea en la que resultan 4 ediles muertos y varios heridos. Los fallecidos son integrantes del PLD y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) expresa su rechazo al proyecto de ley de reforma fiscal consensuado entre un segmento del sector empresario y el gobierno, por considerar que el mismo lesiona la calidad de alimentación de los más pobres y perjudica la competitividad del comercio.

MIÉRCOLES 17 La población de Piedra Blanca y de Villa Sonador paralizan todas las actividades como consecuencia del tiroteo producido el día anterior, en el que perdieron la vida 4 regidores del PLD y del PRD. Efectivos de Operaciones Especiales de la policía mantienen vigilada la casa donde se velan a los hermanos Eddy y Domingo Marte Almonte, quienes fueron muertos en el hecho. Sus otros 2 hermanos acusan al síndico de Sonador, José Luis Díaz, de ser el responsable del incidente.

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y más de 100 organizaciones regionales de productores agrícolas y pecuarios de Santo Domingo rechazan la aplicación de gravámenes a los insumos, equipos y maquinarias utilizados en la producción agropecuaria y forestal, así como a los productos de consumo masivo de la población. Afirman que frente al TLC firmado, es imprudente proponer que se incluya en la lista de bienes no exentos del Impuesto a la Transparencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), los insumos esenciales utilizados en la producción agrícola, como los fertilizantes y sus componentes, así como otros agroquímicos de uso generalizado.

VIERNES 19 La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) demanda la aplicación de una política de comercio integral que aumente las potencialidades de los sectores productivos y que se reviertan las proyecciones de una investigación del congreso estadounidense sobre el impacto del DR-CAFTA, que revela que las exportaciones norteamericanas hacia la región crecerá un 17%, mientras que las ventas hacia EE.UU. de las 6 naciones integrantes del tratado aumentarán sólo un 1%.

SÁBADO 20 El síndico de la comunidad de Sonador, José Luis Díaz López, es detenido por participar en el hecho ocurrido el pasado martes 16 en la legislatura de Piedra Blanca.

LUNES 22 Varias organizaciones comunitarias de Nagua, entre ellas el FALPO, el CUP y el COP, realizan un paro por 48 hs en demanda de la terminación de un acueducto y otras obras, el cese de los apagones y la rebaja de los precios de los artículos básicos. El comercio, el transporte y las actividades educativas, se paralizan. Cientos de policías y agentes antimotines son apostados en la zona. Un niño es asesinado por la policía que realiza disparos sin que se produzcan enfrentamientos con los huelguistas. Luego del hecho, en protesta, los manifestantes copan las calles. La Comisión de Derechos Humanos y las organizaciones responsabilizan al gobernador de la provincia por lo ocurrido. El paro se vuelve indefinido.

MARTES 23 Más de 80 asociaciones de productores agropecuarios de todo el país se movilizan hasta el Congreso, en Santo Domingo, para exigir medidas compensatorias y un trato igualitario en el DR-CAFTA. Advierten que de ser aprobado sin modificaciones dicho tratado, será una "puñalada mortal" para el sector agropecuario nacional.

En el segundo día de huelga en Nagua, representantes de organizaciones populares y familiares del niño asesinado por la policía, marchan con el féretro del menor hasta la iglesia Nuestra Señora de La Altagracia, donde realizan una misa. De allí, trasladan el cajón hasta la sede de la Gobernación en señal de protesta. El comercio, el transporte y demás labores productivas, excepto la bancaria, continúan totalmente paralizadas. Por su parte, el gobierno refuerza las tropas en la zona. Desde el inicio de la medida se ha producido una cantidad importante de heridos de bala y de perdigones.

VIERNES 26 Con fuertes medidas de seguridad, el Senado aprueba con 27 votos de los 29 senadores presentes, el DR-CAFTA. El embajador norteamericano, Hans Hertell, felicita a los senadores en nombre de su gobierno. Por su parte, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera define como "inaudito" que el acuerdo sea aprobado sin la puesta en vigencia de la reforma fiscal y sin la adopción de medidas para que los sectores productivos sobrevivan a la apertura comercial. En consecuencia, el Senado deberá remitir el proyecto a la cámara de Diputados para que lo incluya en su agenda.

GLOSARIO DE SIGLAS

ADP	Asociación Dominicana de Profesores
AIRD	Asociación de Industrias de República Dominicana
CASC	Confederación Autónoma Sindical Clasista
CGT	Central General de Trabajadores
CLAS	Comité de Lucha Amelio Silva
CLJD	Comité de Lucha Jesús Diplán
CMD	Colegio Médico Dominicano
CNTD	Central Nacional de Trabajadores Dominicanos
CNTU	Central Nacional de Transportistas Unificados
CONATRA	Consejo Nacional de Organizaciones del Transporte
COP	Colectivo de Organizaciones Populares
CPI	Corte Penal Internacional
CTU	Central de Trabajadores Unitaria
CUP	Consejo de Unidad Popular
DR-CAFTA	TLC entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU.
FALPO	Frente Amplio de Lucha Popular
FDC	Federación Dominicana de Comerciantes
FMI	Fondo Monetario Internacional
FR	Fuerza de la Revolución
GLP	Gas Licuado de Petróleo
IDSS	Instituto Dominicano de Seguros Sociales
ITBIS	Impuesto a la Transparencia de Bienes Industrializados y Servicios
JAD	Junta Agroempresarial Dominicana
MILS	Movimiento Independiente de Liberación de Salcedo
PLD	Partido de la Liberación Dominicana
POASI	Sindicato de Trabajadores de Arrimo Portuario
PRD	Partido Revolucionario Dominicano
REFIDOMSA	Refinería Dominicana de Petróleo SA
SFM	San Francisco de Macorís
SFS	Seguro Familiar de Salud
SNTP	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
TLC	Tratado de Libre Comercio

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, Listín y El Nacional.
Otras fuentes: Comunidad Web de Movimientos Sociales.

La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable

Economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza[1]

Enrique Leff*

* *Coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Integrante del Grupo de Trabajo Ecología Política de CLACSO.*

Globalización económica y capitalización de la naturaleza

El planeta que habitamos siempre ha sido global: un globo terráqueo. La tierra se desprendió de su planicie e inició el vuelo de su globalización en el siglo XVI, una vez que el mundo fue circunnavegado y que los intercambios comerciales fueron interconectando a las diferentes civilizaciones y culturas. Más adelante, la generalización de los intercambios comerciales se convirtió en ley, y esta se fue universalizando, invadiendo todos los dominios del ser y los mundos de vida de las gentes. Con la invención de la ciencia económica y la institucionalización de la economía como reglas de convivencia universales, comenzó un proceso de cinco siglos de economización del mundo. Mas el orden físico y la vida en el planeta que dan origen y sustentan al género humano no encuentran en sus raíces ninguna esencialidad económica más allá de la pulsión de producir con la naturaleza para satisfacer

necesidades humanas. Este proceso de expansión de la racionalidad económica culmina con su saturación y su límite, el límite de su extrema voluntad de globalizar al mundo engullendo todas las cosas y traduciéndolas a los códigos de la racionalidad económica, razón que conlleva la imposibilidad de pensar y actuar conforme a las leyes límite de la naturaleza, de la vida y la cultura.

En este sentido, el proceso de globalización cuya naturaleza intentamos descifrar –los crecientes intercambios comerciales, las telecomunicaciones electrónicas con la interconexión inmediata de personas y flujos financieros que parecen eliminar la dimensión espacial y temporal de la vida, la planetarización del calentamiento de la atmósfera, e incluso el aceleramiento de las migraciones y los mestizajes culturales–, ha sido movilizado y sobredeterminado por el dominio de la racionalidad económica sobre los demás procesos de globalización. Es esta sobre-economización del mundo la que induce una homogeneización de los patrones de producción y de consumo, contra una sustentabilidad planetaria fundada en la diversidad ecológica y cultural.

Desde los orígenes de la civilización occidental, la disyunción del ser y el ente que opera el pensamiento metafísico preparó el camino para la objetivación del mundo. La economía afirma el sentido del mundo en la producción; la naturaleza es cosificada, desnaturalizada de su complejidad ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico; los recursos naturales se vuelven simples objetos para la explotación del capital. En la era de la economía ecologizada la naturaleza deja de ser un objeto del proceso de trabajo para ser codificada en términos del capital. Mas ello no le devuelve el ser a la naturaleza, sino que la transmuta en una forma del capital –capital natural– generalizando y ampliando las formas de valorización económica de la naturaleza (O'Connor, 1993). Es en este sentido que, junto con las formas ancestrales de explotación intensiva que caracterizaron al "pillaje del tercer mundo" (Jalée, 1968), hoy se promueve una explotación "conservacionista" de la naturaleza. La biodiversidad aparece no sólo como una multiplicidad de formas de vida, sino como zonas de reservas de naturaleza –territorios y hábitat de esa diversidad biológica y cultural– que hoy están siendo valorizados por su riqueza genética, sus recursos ecoturísticos y su función como colectores de carbono.

En este sentido las políticas recientes en torno a la biodiversidad no responden tan sólo a una preocupación por la pérdida de especies biológicas y por su importante papel en el equilibrio ecológico del planeta. La biodiversidad se ha revelado como un enorme banco de recursos genéticos que son la materia prima de los grandes consorcios de las industrias farmacéuticas y de alimentos, cuyo valor económico supera ya el de los consorcios petroleros. Por su parte, para los países y los pueblos donde se encuentran localizadas las áreas de mayor biodiversidad, esta representa, por un lado, el referente de significaciones y sentidos culturales que son trastocados cuando son transformados en

valores económicos; por otro, la biodiversidad es la expresión del potencial productivo de un ecosistema, ante el cual se plantean las estrategias posibles de su manejo sustentable así como las formas de apropiación cultural y económica de sus recursos.

"La geopolítica de la biodiversidad y del desarrollo sustentable no sólo prolonga e intensifica los anteriores procesos de apropiación destructiva de los recursos naturales, sino que cambia las formas de intervención y apropiación de la naturaleza y lleva a su límite la lógica de la racionalidad económica"

La geopolítica de la biodiversidad y del desarrollo sustentable no sólo prolonga e intensifica los anteriores procesos de apropiación destructiva de los recursos naturales, sino que cambia las formas de intervención y apropiación de la naturaleza y lleva a su límite la lógica de la racionalidad económica[2]. Esta nueva geopolítica de la sustentabilidad se configura en el contexto de una globalización económica que, al tiempo que lleva a la desnaturalización de la naturaleza, promueve con el discurso del desarrollo sostenible una estrategia de apropiación que busca "naturalizar" la mercantilización de la naturaleza. En esa perversión de "lo natural" se juegan las controversias entre la economización de la naturaleza y la ecologización de la economía.

Por otra parte, la economía política engarzada en la relación de la fuerza de trabajo, el capital y la tierra se desplaza hacia una ecología política en la que los antagonismos de las luchas sociales se definen en términos de identidades, territorialidades y procesos de sustentabilidad. Las relaciones de producción y las fuerzas productivas ya no se establecen entre el capital y el proletariado industrial –entre capital, trabajo y tecnología. En el nuevo discurso sobre la biodiversidad y el desarrollo sustentable-sostenible, los conceptos de territorio, de autonomía y de cultura se han convertido en conceptos políticos que cuestionan los derechos del ser y las formas de apropiación productiva de la naturaleza (Leff, 2001b).

Ante la complejidad ambiental (Leff et al., 2000), las políticas de la globalización económico-ecológica ponen de manifiesto la impotencia del conocimiento para comprender y solucionar los problemas que han generado sus formas de conocimiento del mundo; el discurso del crecimiento sostenible levanta una cortina de humo que vela

las causas reales de la crisis ecológica. Así, ante el calentamiento global del planeta, se desconoce la degradación entrópica que produce la actividad económica ejercida bajo la racionalidad económica (cuyo último grado de degradación es el calor) y se niega el origen antropogénico del fenómeno al calificar sus efectos como desastres "naturales".

La geopolítica del desarrollo sostenible mira con optimismo la solución de las contradicciones entre economía y ecología al proponer la reconversión de la biodiversidad en colectores de gases de efecto invernadero, con lo cual se exculpa a los países industrializados de sus excedentes de sus cuotas de emisiones, mientras se induce una reconversión ecológica de los países del tercer mundo. Fundadas en un supuesto control del proceso de largo plazo a través del automatismo del mercado, estas políticas desconocen los factores de incertidumbre de los procesos económicos y ambientales, la ineficacia de las políticas públicas y los intereses encontrados sobre las estrategias de apropiación de la naturaleza.

Los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMAs) y la OMC

Desde la adopción del CITES en 1973 se han venido acordando, elaborando e implementando diferentes tratados, convenciones, convenios y protocolos para la protección del medio ambiente. Al tiempo que se ha logrado disminuir el uso indiscriminado e inconsciente de sustancias como el DDT, el plomo, el asbesto, las dioxinas y los CFC, en la implementación de algunos de estos nuevos instrumentos jurídicos de la normatividad ecológica internacional –como el protocolo de Montreal sobre la capa de ozono– se registran importantes logros.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) celebrada en 1992 marca un punto de inflexión importante en la geopolítica ambiental global. A partir de Río-92, las políticas del desarrollo sostenible han promovido y puesto en operación un nuevo marco legal internacional, basado en un conjunto de Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMAs), que incluyen una serie de instrumentos jurídicos que buscan establecer normas a los agentes económicos y sociales para limitar y revertir los impactos de los procesos económicos y tecnológicos sobre el ambiente.

Los AMAs incluyen los Convenios de Cambio Climático y Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y los protocolos de Cartagena sobre Bioseguridad, de Kyoto sobre Cambio Climático y de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Entre esos instrumentos, quizá los más controvertidos han sido los convenios de cambio climático y de diversidad biológica –y sus respectivos protocolos– por sus implicaciones globales y la diver-

© Martín Fernández

sidad de intereses y conflictos que se dirimen en su interior, poniendo de manifiesto las dificultades para internalizar los costos ecológicos y amalgamar las políticas económicas y ambientales.

Más allá de los intentos de los negociadores de algunos países por abrir las agendas hacia temas controversiales sustantivos, en la práctica estos instrumentos se establecen sobre principios de orden más pragmático: reglas de procedimiento, cuestiones de financiamiento, indicadores mensurables. Las consideraciones éticas y filosóficas, las controversias políticas en torno a valores e intereses que definen las alternativas del desarrollo sustentable y que no son traducibles al patrón común de la valorización económica, son desplazadas de estos niveles de la diplomacia internacional hacia el campo de la ecología política, donde se genera la fuerza social para la apertura de las agendas globales. Es en este plano que se expresan los intereses por la diversidad biológica y cultural frente a la homogeneidad del mercado y las estrategias de la globalización económica. No es de sorprenderse que buena parte de las causas que han retardado los acuerdos y la implementación de estos mecanismos de gobernabilidad global sean las controversias en torno a asuntos relacionados con el comercio: la mercantilización de los bienes naturales y la evaluación económica de los riesgos ambientales.

Las dificultades para la puesta en vigor y la efectiva implementación de los AMAs ponen de manifiesto las resistencias del orden económico para internalizar los costos ambien-

tales y acomodarse a las normas de la sustentabilidad ecológica. Ejemplo de ello son los obstáculos interpuestos para el cumplimiento de los acuerdos de Río –esto es, para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el avance del calentamiento global del planeta. Al mismo tiempo, la OMC ha venido diseñando sus propios regímenes ambientales bajo el predominio de las reglas del mercado y los derechos de propiedad intelectual. Si bien se han logrado avances en los AMAs, como la reciente firma del Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático, los mismos son acordados bajo el principio de un mínimo común denominador que logre concertar voluntades de los gobiernos, pero que reduce sus alcances y diluye sus objetivos. Así, las cláusulas sobre el comercio de permisos de emisiones de gases de efecto invernadero no aseguran que cada país o cada industria limite al máximo sus emisiones; al contrario, ese objetivo se pervierte ante la posibilidad de que los países que se excedan de sus cuotas las transfieran a otros países, o que las compensen cubriendo el valor ficticio de su captura por parte de los países ricos en biodiversidad.

Al poner énfasis sobre la comercialización de derechos de emisiones, el Protocolo de Kyoto ofrece un salvoconducto a los países del Norte, que en vez de reducir sus emisiones de CO_2 y de gases de efecto invernadero las compensan transfiriendo sus costos a países (como los de la ex Unión Soviética) que se encuentran por debajo de sus cuotas y que incluso, por su situación económica, no estarían en condiciones de incrementar sus emisiones. Por otra parte, la asignación de precios a la captura de carbono por las reservas de biodiversidad dentro del MDL funciona como un verdadero subterfugio que permite a los países que exceden su huella ecológica transferir el monto equivalente a algún país rico en biodiversidad cuya flora y suelos supuestamente secuestran el exceso de gases emitidos por las industrias del país industrializado a precios de "dumping" –a falta de un mecanismo de formación de precios de captura– y al "mejor postor" porque, como afirma Martínez Alier, los países pobres venden barato sus servicios ambientales.
A través del MDL se vienen introduciendo cambios en el uso del suelo y formas de cultivo como por ejemplo la siembra directa, mediante la cual se pretende reducir las emisiones de gases y la aplicación de agroquímicos al tiempo que se implantan cultivos transgénicos, cuyos riesgos ecológicos y para la salud están lejos de poder ser evaluados y en particular cuantificados. Así, no sólo no se generan sinergias entre los AMAs, sino que estos funcionan como velos que encubren y escudos que sirven de parapeto a los procesos de "reconversión ecológica" que bajo su protección y legitimación se ejecutan en favor del "desarrollo sostenible". En este sentido es cuestionable la efectividad del Protocolo de Kyoto, ya que el "valor de uso sumidero" de la biodiversidad seguramente no habrá de reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero que seguirá generando el imperio de la racionalidad económica, debilitándose las acciones de mitigación a través del MDL y el uso de tecnologías limpias. Como resultado, el calentamiento global seguirá agravándose.

En el fondo de los debates en torno a estos AMAs y los disensos para su aprobación y aplicación están la controversia entre la racionalidad ecológica y la ética que subyacen a las normas ambientales, y los principios y reglas de la racionalidad económica. Sus incompatibilidades no sólo se expresan en la resistencia de gobiernos como los de Estados Unidos y Japón a firmar y ratificar los AMAs. Al mismo tiempo, la OMC ha venido generando sus propios regímenes ambientales sometidos a la supremacía de los intereses y mecanismos económicos. De esta manera, los Acuerdos sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) buscan legitimar y legalizar los derechos de las empresas por encima de las provisiones a los derechos de indígenas, campesinos y agricultores en la CDB y el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.

Estas controversias desembocan finalmente en la necesidad de establecer marcos internacionales de gobernabilidad que, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, sean capaces de generar sinergias y relaciones que se refuercen mutuamente entre los AMAs y la OMC (UNEP, 2001). Sin embargo, en su ánimo de evitar disputas formales así como de prever y resolver anticipadamente los conflictos entre los regímenes ambientales y comerciales, la integración de las consideraciones ambientales en la toma de decisiones de los asuntos económicos y sociales tiende a ceder la aplicación de las normas ecológicas y los principios ambientales a los regímenes del libre comercio. En este sentido se ha acelerado la tendencia a elaborar y aplicar instrumentos económicos para la gestión ambiental y a reducir el valor de la naturaleza a los precios que esta puede adquirir en el mercado de bienes y servicios ambientales.

Valor y territorio: una política del lugar y la diferencia

Frente al proceso de globalización regido por la racionalidad económica y las leyes del mercado, y junto con los movimientos "globalifóbicos", está emergiendo una política del lugar, del espacio y del tiempo (Leff, 2001c) movilizada por los nuevos derechos a la identidad cultural de los pueblos (CNDH, 1999; Sandoval y García, 1999), legitimando reglas más plurales y democráticas de convivencia social. La reafirmación de la identidad es también la manifestación de lo real y de lo verdadero frente a la lógica económica que se ha constituido en el más alto grado de racionalidad del *ser humano*, ignorando a la naturaleza y a la cultura, generando un proceso de degradación socioambiental que afecta las condiciones de sustentabilidad y el sentido de la existencia humana.

El *territorio* es el lugar donde la sustentabilidad se enraiza en bases ecológicas e identidades culturales. Es el espacio social donde los actores sociales ejercen su poder para controlar la degradación ambiental y para movilizar potenciales ambientales en proyectos

autogestionados generados para satisfacer necesidades, aspiraciones y deseos de los pueblos que la globalización económica no puede cumplir. El territorio es el *locus* de las demandas y los reclamos de la gente para reconstruir sus mundos de vida. El nivel local es donde se forjan las identidades culturales, donde estas se expresan como una valorización social de los recursos económicos y como estrategias para la reapropiación de la naturaleza. Si la economía global genera el espacio donde las sinergias negativas de la degradación socioambiental hacen manifiestos los límites del crecimiento, en el espacio local emergen las sinergias positivas de la racionalidad ambiental y de un nuevo paradigma de productividad ecotecnológica (Leff, 1994 y 1995).

El territorio es un espacio donde se precipitan tiempos diferenciados, donde se articulan identidades culturales y potencialidades ecológicas. Es pues el lugar de convergencia de los tiempos de la sustentabilidad: los procesos de restauración y productividad ecológica, de innovación y asimilación tecnológica, de reconstrucción de identidades culturales. Por ello el slogan "pensar globalmente y actuar localmente", tan tenazmente promovido por el discurso del desarrollo sostenible, ha sido en realidad una artimaña para generar un pensamiento único sobre "nuestro futuro común". Ante los retos del desarrollo sustentable alternativo, induce en las culturas locales un pensamiento global que no es otro que el discurso economicista del crecimiento sostenible, cuando el reto de la sustentabilidad es pensar las singularidades locales y construir una racionalidad capaz de integrar sus diferencias, asumiendo su inconmensurabilidad, su relatividad y su incertidumbre.

Una nueva política del lugar y de la diferencia está siendo construida a partir del sentido del tiempo en las luchas actuales por la identidad, por la autonomía y por el territorio. Lo que subyace al clamor por el reconocimiento de los derechos a la supervivencia, a la diversidad cultural y la calidad de vida de los pueblos, es una *política del ser*, una política *del devenir y la transformación*, que valoriza el sig-

"Una nueva política del lugar y de la diferencia está siendo construida a partir del sentido del tiempo en las luchas actuales por la identidad, por la autonomía y por el territorio"

nificado de la utopía como el derecho de cada individuo y cada comunidad para forjar su propio futuro. Los *territorios culturales* están siendo fertilizados por un tiempo que recrea las estrategias productivas y los sentidos existenciales. No es sólo la reivindicación de los derechos culturales que incluyen la preservación de los usos y costumbres de sus lenguas autóctonas y sus prácticas tradicionales, sino una política cultural para la reconstrucción de identidades, para proyectar a sus seres colectivos trascendiendo un futuro prefijado y excluyente. Es resistencia a la hegemonía homogeneizante de la globalización económica y afirmación de la diversidad creativa de la vida, construida desde la heterogénesis cultural-ecológica.

Esto lleva a repensar el sentido mismo de la geopolítica. Las geografías, como marcas dejadas por las civilizaciones en la tierra, son el *locus*, el hábitat en el que se asienta un mundo que ha sido trastocado por la globalización, que desplaza el lugar de su lugar, que hace prevalecer la globalidad de una razón única, universal, dominante. Pero son también la escritura que van dejando en la naturaleza los nuevos movimientos sociales de reapropiación de la naturaleza (Gonçalves, 2001). De esta manera, las poblaciones indígenas están afirmando sus derechos culturales para recuperar el control sobre su territorio como un espacio ecológico, productivo y cultural para reapropiarse de un patrimonio de recursos naturales y significados culturales. La racionalidad ambiental está siendo internalizada por nuevos actores sociales, expresándose como una demanda política que guía nuevos principios para la valorización del ambiente y para la reapropiación de la naturaleza, arraigándose en nuevos territorios y nuevas identidades.

La geopolítica de la globalización se ha centrado en las falsas virtudes del mercado y de la capacidad empresarial para guiar y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Se confiere al mercado la capacidad de internalizar los costos ambientales y de absorber actividades productivas sobre el capital natural y los servicios ambientales que hasta ahora han sido campos tradicionales de apropiación y manejo de un patrimonio y bienes comunales que funcionan fuera del mercado, para transformarlos en nuevas oportunidades de negocios. Más aún, asumen *a priori* la voluntad de los pueblos del tercer mundo –en particular poblaciones indígenas y campesinas– de colaborar en este propósito, cediendo a las iniciativas del mercado temas fundamentales del desarrollo sustentable: manejo de recursos naturales, pobreza rural, seguridad alimentaria, etcétera. Por el contrario, las controversias entre la racionalidad económica y la racionalidad ambiental en las perspectivas del desarrollo sustentable llevan a contrastar y oponer a la lógica del valor de cambio una racionalidad productiva fundada en el valor de uso, que va más allá de los principios de la "calidad total" y la "tecnología limpia" de la nueva ecoindustria, así como de una calidad de vida fundada en la "soberanía del consumidor". La racionalidad ambiental lleva a repensar la producción a partir de los potenciales ecológicos de la naturaleza y las significaciones y simbolismos asignados a la naturaleza por la cultura. Esta

© Comité de Derechos Humanos de Orellana, Red de Líderes Comunitarios Angel Shingre y Oficina de Pastoral Social del Vicariato de Aguarico

lleva a una política del ser, de la diversidad, de la diferencia, que replantea el sentido de la naturaleza, de la producción y del desarrollo sustentable.

Bibliografía

CNDH 1999 "El derecho a la identidad cultural" en *Gaceta* (México: Comisión Nacional de Derechos Humanos) Nº 103.

Gonçalves, Carlos W. Porto 2001 *Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad* (México DF: Siglo XXI).

Jalée, Pierre 1968 *Le Pillage du Tiers Monde* (Paris: François Maspero).

Leff, Enrique 1994 *Ecología y capital* (México DF: Siglo XXI).

Leff, Enrique 1995 *Green Production. Towards an Environmental Rationality* (New York: Guilford Press).

Leff, Enrique 2000 "Pensar la complejidad ambiental" en Leff, Enrique (coord.) *La complejidad ambiental* (México DF: Siglo XXI/UNAM/PNUMA).

Leff, Enrique 2001a *Epistemología ambiental* (São Paulo: Cortez Editora).

Leff, Enrique 2001b "Los derechos del ser colectivo y la reapropiación social de la naturaleza: a guisa de prólogo" en Leff, Enrique (coord.) *Justicia ambiental. Construcción y defensa de los nuevos derechos ambientales, culturales y colectivos en América Latina*

(México DF: PNUMA/CEIICH-UNAM) Serie Foros y Debates Ambientales Nº 1, Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe.

Leff, Enrique 2001c "Espacio, lugar y tiempo. La reapropiación social de la naturaleza y la construcción local de la racionalidad ambiental" en *Nueva Sociedad* (Caracas) Nº 175, septiembre-octubre.

Leff, Enrique 2002 (1998) *Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder* (México DF: Siglo XXI/UNAM/PNUMA).

Leff, Enrique y Bastida, Mindahi (coords.) 2001 *Comercio, medio ambiente y desarrollo sustentable. Las perspectivas de América Latina y el Caribe* (México DF: PNUMA/CEIICH-UNAM) Serie Foros y Debates Ambientales Nº 2, Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe.

O'Connor, Martin 1993 "On the Misadventures of Capitalist Nature" in *Capitalism, Nature, Socialism*, Vol. 4, Nº 3.

Sandoval, I. E. y García Colorado, G. 1999 *El derecho a la identidad cultural* (México DF: Instituto de Investigaciones Legislativas, H. Cámara de Diputados).

Notas

1 N. del E.: El presente artículo es una versión resumida del texto original, una de cuyas primeras ediciones fue publicada en la compilación de A. E. Ceceña y E. Sader *La Guerra Infinita. Hegemonía y Terror Mundial* (Buenos Aires: CLACSO, 2002); así como también forma parte del reciente libro de Enrique Leff *Racionalidad Ambiental. La Reapropiación Social de la Naturaleza* (México: Siglo XXI, 2004), entre otras publicaciones. El artículo, en formato completo, puede consultarse en la sección debates de la página web del OSAL <http://osal.clacso.org>.

2 Economistas ecológicos como René Passet, Herman Daly y Joan Martínez Alier han argumentado sobre las limitaciones del mercado para regular efectivamente los equilibrios ecológicos y su capacidad para internalizar los costos ambientales a través de un sistema de normas legales; sugieren que la economía debe constreñirse a los límites de expansión que asegure la reproducción de las condiciones ecológicas de una producción sustentable y de regeneración del capital natural. Sin embargo, la economía (la racionalidad económica, el proceso económico) carece de flexibilidad y maleabilidad para ajustarse a las condiciones de la sustentabilidad ecológica. El debate político se ha enriquecido con los aportes de la ciencia sobre la insustentabilidad creciente del planeta y los riesgos ecológicos que la amenazan, pero no ha logrado desujetarse de las razones de fuerza mayor del mercado. La ley de la entropía, preconizada por Georgescu-Roegen (1971) como la ley límite del crecimiento económico, aparece como la negatividad negada por la teoría y las políticas económicas sobre su vínculo con la naturaleza. Mas la teoría crítica de la economía basada en la ley de la entropía, antes de haber llegado a fundar la positividad de un nuevo paradigma económico (de una economía ecológica), ha abierto las compuertas de una ecología política donde el debate científico se desplaza hacia el campo político; la cuestión de la sustentabilidad se inscribe en las luchas sociales contra la globalización y por la reapropiación de la naturaleza, desplazando el discurso y la acción al campo de la deconstrucción de la lógica económica y la construcción de una racionalidad ambiental (Leff, 1998; 2001a).

Paraguay: eje de la dominación del Cono Sur[1]

Ana Esther Ceceña*
y Carlos Ernesto Motto**

A pesar de no ser uno de los países destacados regularmente por los analistas, Paraguay es hoy uno de los puntos nodales de la estrategia hegemónica de Estados Unidos y, por lo mismo, del trazado de las nuevas lógicas de ordenamiento continental. Su ubicación y características geográficas, sus abundantes ríos y sus otrora maravillosas zonas selváticas, diezmadas hoy por la soja transgénica y la modernización agrícola-forestal, han sido a la vez beneficio y causa de desastres. Desde la sangrienta instalación de misiones evangelizadoras hace cerca de quinientos años, las guerras de la Triple Alianza (1865-1870) y del Chaco (1932-1935), hasta la actual ocupación, Paraguay ha sido un país castigado por sus riquezas y por la persistencia de un pueblo que no se doblega y sigue pretendiendo la descolonización y donde "el problema de la propiedad de la tierra sigue siendo decisivo [puesto] que el 1% de la población es dueño del 90% de la tierra disponible" (Polo, s/f).

* *Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Coordinadora del Grupo de Trabajo Hegemonías y emancipaciones de CLACSO y del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.*

** *Sociólogo. Profesor de las Facultades de Ciencias Sociales y Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.*

Este país donde persiste el guaraní como lengua *natural* es la bisagra que une en una franja transversal a los ricos yacimientos y corrientes de agua de la zona de la triple frontera con Brasil y Argentina con la región petrolera y gasífera de Bolivia y el Norte de Argentina, continuando con los valiosos minerales de la cordillera.

La triple frontera y el agua

La triple frontera que conforma Paraguay con Brasil y Argentina, marcada por los surcos de los ríos Paraná e Iguazú, es un territorio de disputa por múltiples razones. El magnífico caudal del Paraná que baja desde la cuenca amazónica alimenta los mantos subterráneos que conforman el Sistema Acuífero Guaraní, rodea Paraguay, y superficialmente alimenta la represa de Itaipú. La cuenca formada por este río, con todos sus afluentes, suma 970 mil km2.

Itaipú es la mayor represa del mundo, con una potencia instalada de 12.600 megawatts (18 unidades generadoras de 700 mw cada una) que está previsto aumentar a 14 mil. En el año 2000, en que tuvo una producción récord (93,4 mil millones de kilowatts/hora), suministró el 95% de la energía eléctrica consumida en Paraguay y el 24% de toda la demanda del mercado brasileño, que produce su electricidad fundamentalmente en centrales hidráulicas (96%); ver <www.itaipu.gov.py> .

El río Paraná, a su vez, alimenta la represa de Yacyretá, gran proyecto paraguayo-argentino que al 60% de la capacidad total prevista funciona con 20 generadores y actualmente es la principal proveedora del mercado argentino, que demanda 25 mil mw al año: "La energía que se puede producir anualmente es de 19.000 Gwh equivalente al 65% de la generación eléctrica de Paraguay y la Argentina" (ver <www.eby.gov.py>). En 2002 la producción de Yacyretá representó el 16% del total de la demanda del Sistema Argentino de Interconexión y el 33% de la energía de origen hidroeléctrico del país (ver <www.yacyreta.org.ar>).

Así Paraguay está geográficamente en posición de tener influencia en estas dos grandes represas, manteniendo una importancia estratégica sobre Argentina por la dirección del flujo acuífero y sobre Brasil por la importancia de Itaipú en el suministro doméstico de electricidad. Por otra parte las formaciones subterráneas de agua de esta región, por sus dimensiones, han adquirido importancia mundial. El Sistema Acuífero Guaraní (SAG) es aparentemente el yacimiento subterráneo de agua dulce más grande del planeta. Abarca un área de 1.195.700 km2 aproximadamente, 70% bajo suelo brasileño, 19% en Argentina, 6% en Paraguay y 5% en Uruguay (Reynoso, s/f). Sus reservas de agua (su capacidad de almacenamiento) se estiman en 40 mil km3, con una recarga de 160 km3.

"Por estar ubicado en una zona transfronteriza [el Sistema Acuífero Guaraní] puede ser hoy objeto de elaboración de una legislación específica, supranacional, que evada las restricciones marcadas en las Constituciones nacionales sobre la propiedad y aprovechamiento de los recursos estratégicos"

Y ese inmenso yacimiento, por estar ubicado en una zona transfronteriza, puede ser hoy objeto de elaboración de una legislación específica, supranacional, que evada las restricciones marcadas en las Constituciones nacionales sobre la propiedad y aprovechamiento de los recursos estratégicos o vitales de la nación. El Banco Mundial está impulsando legislaciones relativas a recursos transfronterizos en muchas partes del mundo pero el caso del SAG, por su importancia y oportunidad, parece poder convertirse en un paradigma a ese respecto. Las legislaciones supranacionales tienen el inconveniente de que se colocan por encima de las nacionales pudiendo invalidarlas, además de que su elaboración y modificación requiere del consenso de las partes, que no siempre obtienen beneficios equivalentes y, por tanto, podrían tener visiones contradictorias.

Aunque la Tierra es un planeta con abundancia de agua, el 99,7% de sus reservas no son aptas para el consumo humano y animal. Del agua dulce existente, 7 millones de millas cúbicas están concentradas en forma de hielo en los polos y glaciares, y 3,1 millones en la atmósfera terrestre. El agua subterránea, los lagos y los ríos aportan otros 2 millones de millas cúbicas. La mayor reserva de agua en glaciares está ubicada en el Sur de Argentina y Chile y en la Antártida, cuestión que ha empezado a dirigir los intereses estratégicos y empresariales hacia esa zona. No obstante, con la tecnología y las condiciones de rentabilidad actuales, es todavía complicado el uso masivo del agua de los glaciares. Esto refuerza la importancia de los yacimientos en tierra, más accesibles, como el Acuífero Guaraní. Con una situación mundial de creciente demanda y relativa escasez de agua, el acceso y control de las grandes fuentes del planeta son absolutamente sustanciales.

La bisagra de América del Sur

La triple frontera en cuestión es un punto de conexión natural, con la libertad que eso implica, entre los dos paí-

ses económicamente más relevantes de América del Sur. Paraguay constituye en esa frontera una especie de eslabón poroso que multiplica las posibilidades de tránsito irrestricto por la zona, y que en conjunto es propicio para la multiplicación de vínculos –sólo enturbiados por las guerras del pasado– que dan al MERCOSUR o a cualquier otro proyecto integrador el carácter de sancionadores de realidades en buena medida ya construidas en la práctica. Por lo mismo, el taponamiento de esas porosidades que permiten la evasión de diversas normatividades relativas al tránsito de personas y mercancías –legales e ilegales– es visto como necesario para volver a disciplinar los comportamientos regionales.

Desde antes de septiembre de 2001 los mandos militares de EE.UU. están interesados en tener posiciones seguras y permisivas en esta zona, que además de su riqueza natural es vista como cuña para desactivar cualquier proyecto entre Argentina y Brasil que prescinda de la mediación de EE.UU. o de sus políticas continentales impulsadas por los organismos regionales y, particularmente, que vaya a contramano de la propuesta del ALCA.

El mantenimiento de la hegemonía implica para EE.UU. el diagnóstico de la situación mundial en términos de campo de batalla con escenarios movibles. Cualquier punto en el planeta, *como mariposa aleteando en China*, puede producir una alteración que, de no ser atendida en tiempo y forma, es susceptible de provocar grandes vendavales. En este contexto, en todo momento hay que estar atentos a la identificación de los focos rojos que anuncien riesgos o amenazas a la "seguridad".

Thomas Barnett, uno de los cerebros del Comando Conjunto de EE.UU., detectaba desde los años noventa dieciséis áreas de "problemas reales" (*real trouble*) para el mundo, empezando por lo que él llama el "patio trasero" (*backyard*): Haití (que después fue invadido por EE.UU.); Colombia (donde EE.UU. cuenta con varias instalaciones militares propias y libre movilidad de sus tropas); y como tercer punto Brasil y Argentina (Barnett, 2003; Ceceña, 2004).

Después del análisis realizado por Barnett ocurrió el *crack* financiero argentino, sucedido por una crisis política sin precedentes. Los ajustes monetarios de Brasil y Argentina, provocados por su participación en el mercado mundial y sus relaciones con el FMI, minaron los intercambios mutuos y debilitaron las perspectivas de la integración mercosureña, pero en realidad han resultado insuficientes para dejarlos sin margen de maniobra. Paraguay, entonces, destaca como potencial punto estratégico del posicionamiento de EE.UU. en la zona.

Hay una larga historia de complicidades en la que el apoyo estadounidense al dictador Stroessner durante 34 años, y la participación de Paraguay en la Operación Cóndor, son

datos centrales. Stroessner fue, desde el golpe de estado de 1954, una pieza del ajedrez estadounidense en la región. Con un gobierno salvajemente represivo, fue el primero en permitir el trabajo conjunto de las actividades de inteligencia de los ejércitos de Argentina y Chile con el de Paraguay inaugurando un estilo de lucha contrainsurgente que luego se oficializaría, en noviembre de 1975, en la llamada Operación Cóndor. Sin embargo, el mantenimiento de Stroessner en el poder sólo fue posible sobre la base de una degradación social fomentada a través de la corrupción, el contrabando y la impunidad. Todo esto lo fue convirtiendo en un caso de los que los estrategas de Washington tipifican como "Estado fallido" que requiere que "*[…] some external power steps in and plays Leviathan full-time*" (algún poder externo penetre en ellos y ocupe integralmente el papel de Leviatán) (Barnett, 2003).

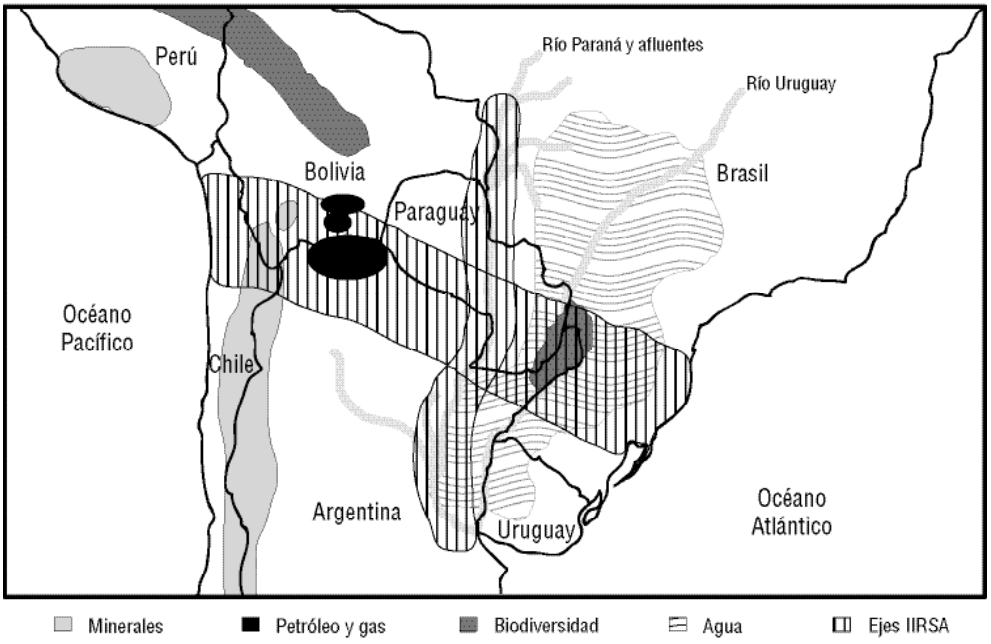
Los estados latinoamericanos, exceptuando a los de Brasil, México, Chile y Argentina, nunca han sido muy fuertes. Atravesados desde su constitución por presiones y determinaciones externas que condicionaron su carácter subordinado, y pocas veces representativos de la diversidad societal o por lo menos cultural contenida en su seno, su debilidad o incompletud, confrontada con una modernidad vertiginosa, se expresó en políticas internas de genocidio y destrucción del sentido "nacional". Y si bien las dictaduras fueron derrotadas por las sociedades que intentaban reconstruirse desde ahí, el estado no ha logrado reconquistar (o crear) una legitimidad interna amplia, entre otras cosas porque mantiene relaciones de subordinación clientelares con los grandes poderes del mundo, particularmente concentrados en el estado norteamericano, que piensa que "*We are the only nation on earth capable of exporting security in a sustained fashion, and we have a very good track record of doing it*" (Somos la única nación en la tierra capaz de exportar seguridad sostenible, y tenemos un muy buen récord haciéndolo) (Barnett, 2003).

La franja Capricornio-Paraná

"El Eje Porto Alegre-Asunción-Jujuy-Antofagasta está conformado por la región norte de Argentina (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy), el estado de Río Grande Do Sul de Brasil, la región norte de Chile (Antofagasta, Atacama) y la región sur occidental de Paraguay" (ver <http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=9383&ms=8>). De esta manera se describe una de las franjas de comunicación entre los dos océanos que bañan el continente en el proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, mejor conocido como IIRSA.

A lo largo del Trópico de Capricornio, pasando entre llanuras, ríos y montañas, se tienden las líneas de aprovechamiento rentable de las riquezas de esta región, que no por

Mapa 1. Recursos estratégicos y franjas de desarrollo IIRSA en el Cono Sur



modernas dejan de ser las venas abiertas del trágico saqueo del que nos hablaba Eduardo Galeano. Al agua se suman algunos manchones de selva; el petróleo de Mosconi, el gas de Tarija, el cobre, oro y tungsteno de la cordillera que separa a Chile de Argentina; las salidas a los océanos en varios puntos que abren los ríos de manera natural o que facilitarán las modernas carreteras o ferrovías.

Combinando el eje Capricornio con otro que baja por el río Paraguay, cruzando el país del que tomó su nombre, se despliega un ambicioso proyecto de conexión destinado a fortalecer la inserción del Sur americano en el mercado mundial.

El eje Paraguay-Paraná baja desde Brasil hasta la desembocadura del río Paraná en Argentina, marcando una ruta natural de acceso y salida hacia el centro de América del Sur que los gobernantes y empresarios locales ven como oportunidad de negocios y de atracción de inversiones, y las organizaciones y movimientos sociales perciben como un peligro para el medio ambiente, que no sólo recibirá los impactos de la activación de esta ruta sino que será el objeto privilegiado de apropiación de los capitales interesados en la zona.

Los dos ejes marcados por el proyecto IIRSA indican franjas de interés múltiple en las que se incluyen proyectos de construcción o adecuación de vías de comunicación que garanticen un tránsito expedito para mercancías, personas, y por supuesto también tro-

pas. Si este proyecto funcionara como ha sido previsto, propiciaría agrupamientos regionales o espacios de cohesión muy distintos a los de los actuales estados latinoamericanos y llamaría al establecimiento de legislaciones supranacionales sobre bases diferentes a las de la defensa de las soberanías nacionales implícita en los pactos constitucionales de casi todos los países de esta zona.

Paraguay es el centro geográfico e hidrográfico de estos dos corredores, manteniendo en ese sentido una posición estratégica. Seguramente eso justifica el incansable interés de EE.UU. por mantener una presencia sustancial en ese país.

Epicentro de la militarización del Cono Sur

En 2003, el comandante de la OTAN, general James Jones, dijo que "existen grandes zonas no gobernadas, que son potenciales santuarios para los terroristas del mundo y para los futuros mercaderes de todo tipo de elementos, a los que tratamos de combatir". Esta reflexión no se circunscribe únicamente al escenario europeo ni al terrorismo islámico ni a los narcotraficantes sino que parece ser más amplia. Agregó: "tenemos la oportunidad de establecer una presencia estratégica, de ser necesario una presencia operacional, mucho más rápido que lo que hayamos hecho antes. Por lo tanto, razonablemente se espera que analicemos los emplazamientos de bases para asegurarnos que haremos las cosas bien en el futuro". Continúa el general Jones: "cualquier cosa que hagamos, cualquier propuesta que hayamos hecho, es para hacer más ágiles a las fuerzas [de] que disponemos", al tiempo que aclara que "el sentido de cualquier tipo de reajuste en nuestras fuerzas es para disponer un mayor efecto estratégico" (Osacar, 2005).

Es en este contexto que hay que entender los nuevos convenios firmados entre los gobiernos de EE.UU. y Paraguay como parte de los delirios de dominación de espectro completo (*full spectrum dominance*) con que los estrategas del Pentágono quieren llegar al año 2020 (USJC, 2000). Pero si bien el ámbito de dominación propuesto es planetario por lo menos, el primer bastión está localizado en América. La guerra contra Irak, nos dice David Harvey, "era una gran oportunidad para imponer una nueva sensación de orden social en Estados Unidos y meter en cintura a la sociedad civil". Una vez más "el malvado enemigo externo se convirtió en chivo expiatorio para exorcizar o domeñar los diablos que acechaban en el interior" (Arrighi, 2005: 37).

Efectivamente, aunque el despliegue territorial es incesante, el enemigo del capitalismo crece en su seno. El 11 de septiembre de 2001 fue una oportunidad de corregir un descuido, creando el Comando Norte del ejército estadounidense, que hasta ese momento tenía comandos asignados a todo el planeta, concebido de las fronteras de

EE.UU. hacia el resto del mundo. A partir de entonces la militarización no sólo incluiría el *homeland*, sino que le otorgaría una atención prioritaria. La sociedad norteamericana empezó a ver limitados sus derechos con los cambios en la Ley Patriótica. Los extranjeros en territorio de EE.UU. se volvieron todos sospechosos, y el área de América del Norte, incluyendo a Canadá, México, Puerto Rico y Cuba, fue puesta bajo supervisión del Comando Norte.

El *homeland* se concibe estrictamente como el territorio de EE.UU. No obstante, con una visión un poco más flexible que apunta a las definiciones estratégicas, este se extiende primero al área completa de América del Norte como en círculos concéntricos, y enseguida a la gran isla continental que es América. La primera frontera de esta extensión comienza en el Sur de México y abarca hasta el paso de Darién entre Panamá y Colombia. Es una frontera amplia por la diferencia de mecanismos utilizados para lograr su ordenamiento. En el caso de México se ha logrado ya un tratado de seguridad conjunto (ASPAN), en algunos países centroamericanos y del Caribe hay bases militares estadounidenses, y Haití directamente es un país ocupado con una posición geográfica de alto perfil. A la permeabilidad de la mayoría de los gobiernos locales ante el despliegue de tropas norteamericanas se le suma una red de pistas y puertos de operación que van desde la península de Florida hasta Granada, pasando por la base permanente de Guantánamo en Cuba, las de Puerto Rico, y por Haití en el Caribe. En Centroamérica el sistema se articula en torno a la base de Soto Cano en Honduras y la pista de Comalapa en El Salvador. Este amplio territorio es lugar habitual de operaciones con presencia masiva de tropas de EE.UU., especialmente dentro del esquema de las operaciones llamadas Nuevos Horizontes, conjuntamente con los patrullajes permanentes de mar, tierra y aire que alcanzan las costas venezolanas.

La segunda frontera la conforma el área amazónica, o incluso andino-amazónica por las extensiones recientes del Plan Colombia hacia Ecuador y Perú. EE.UU. tiene 1.600 efectivos entre tropas y contratistas privados en Colombia, epicentro regional, y un amplio despliegue de actividades financiadas dentro del marco del Plan Colombia. El sistema se sustenta en una red de bases militares en los tres países, siendo Manta y Tres Esquinas las más importantes, y un conjunto de radares colocados en Colombia y Perú.

La tercera frontera es la que agrupa la región conosureña, hasta ahora difícil de abarcar a pesar de los múltiples convenios contra el terrorismo[2], y en la que Paraguay se erige hoy como punto de irradiación o centro neurálgico: "En diciembre [de 2003], una delegación interinstitucional de alto nivel de Estados Unidos asistió a una reunión especial en Asunción, Paraguay, de la Comisión Tripartita de la Triple Frontera, mecanismo de seguridad establecido por los tres países de la zona en 1998. Esta reunión de Tres más uno (los tres países de la Triple Frontera más Estados Unidos) sirve de foro permanente para

la cooperación entre los cuatro países en la lucha contra [el] terrorismo y su prevención. Durante las conversaciones de diciembre los países intercambiaron perspectivas actuales sobre la prevención del terrorismo en la región y sobre las medidas para aumentar la cooperación, entre ellas *propuestas para establecer un centro regional con - junto de inteligencia*, convocar a una conferencia de las unidades de inteligencia financiera de los Tres más uno para la primera mitad de 2004, *intensificar la cooperación en materia de seguridad fronteriza* y aumentar el intercambio de ideas entre los fiscales nacionales responsables de los casos contra el terrorismo" (US-State, 2004, las cursivas son nuestras).

"Guerra contra el terrorismo, con los daños que todos conocemos, que parece estar queriendo recrearse en todo el Continente"

La ley antiterrorista aprobada en 2005 en Paraguay no marca realmente un gran cambio para ese país, si no fuera porque está relacionada con cambios en la normativa de seguridad que tienden a ser generales en el continente. La lucha antiterrorista, particularmente dura en el Sur de América Latina, ha sido una política cíclica del capitalismo que busca mantener en la práctica lo que difícilmente puede ser legitimado y que, en épocas todavía no superadas completamente, tomó cuerpo en el tenebroso Plan Cóndor. "El rasgo de la Operación Cóndor más explícitamente descrito en los documentos fundacionales […] fue la creación de un banco de datos centralizado al que todos los países miembros contribuirían con información de inteligencia" (Dinges, 2004: 173). "El sistema […] consistía en una compleja infraestructura multilateral de inteligencia, con oficina central en Chile y sucursales en cada país. Estos elementos –información, comunicaciones, envío de personal operativo– representaban una enorme capacidad potencial para desplegar actividades en el nivel internacional; y nadie debía tener falsas expectativas respecto del uso que se pensaba hacer de esta capacidad" (Dinges, 2004: 178).

Guerra contra el terrorismo, con los daños que todos conocemos, que parece estar queriéndose recrear en todo el Continente. El establecimiento de las llamadas

fronteras inteligentes, que ya se han puesto a funcionar en muchos de los países de la región, está relacionado con el proyecto del Pentágono de crear un *Network centric war - fare* (DARPA, 2003; Ceceña, 2004), obviamente asentado en EE.UU., que funciona como gran nodo centralizador de información de todo el mundo para poder manejarla en *tiempo real*, en cualquier parte del mundo donde sea requerida.

Los registros de tránsitos internacionales, a partir de los códigos en los pasaportes, alimentan esta gran base de datos que está al servicio de la guerra y de las acciones de seguridad. ¿No es parecido a lo instrumentado con el Plan Cóndor?

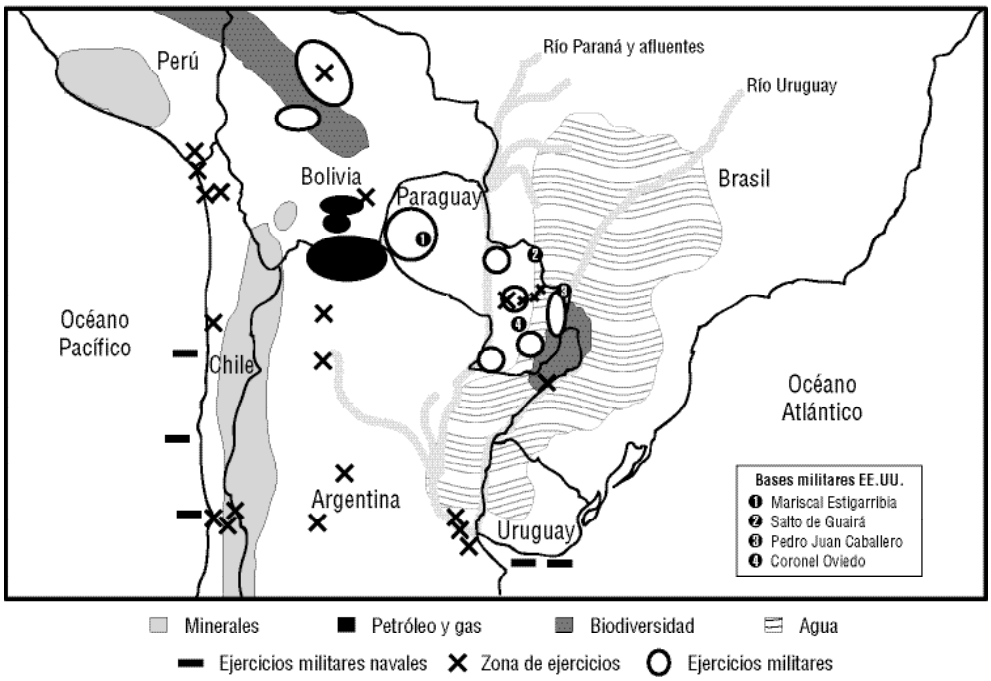
Los ejercicios militares conjuntos

Por lo menos desde 1986 Paraguay ha sido una de las sedes privilegiadas de realización de ejercicios y entrenamientos donde se construyen las condiciones de posibilidad de la insularidad estratégica de EE.UU., de la constitución efectiva de una fuerza de seguridad hemisférica, y donde se trabaja en el reconocimiento del terreno físico y sociopolítico del Cono Sur. Como un reforzamiento del rol asumido por y desde Paraguay, es convertido hoy en un verdadero epicentro que, combinado con las posiciones en Tolhuin (Antártida), Bolivia y Perú, con la buena cooperación de Chile y con los ejercicios por mar, permite a EE.UU. "envolver" militarmente toda la región. Paraguay se encuentra en uno de los extremos del área crítica del mundo delineada en el llamado Mapa del Pentágono (Barnett, 2003; Ceceña, 2004). Geográficamente representa una lengüeta que desciende de Colombia para adentrarse en la triple frontera, marcando la punta de lanza de una penetración en Brasil, Argentina y Bolivia[3].

Cuando se observa el movimiento de las fuerzas y la localización de los ejercicios y operaciones militares de EE.UU., se comprueba que su actividad es continua y extendida a la casi totalidad del territorio del Cono Sur. Sin embargo, una de las áreas de mayor recurrencia se encuentra en el corredor Paraguay-Paraná, escenario de los ejercicios de mayor continuidad: los "UNITAS Ribereños". Desde que Paraguay se incorporó a estos ejercicios para cubrir la fase ribereña en 1987, se han venido repitiendo sin interrupción entre 2000 y 2003, teniendo como centros operativos Puerto Rosario en Paraguay y Zárate en Argentina (ver <http://www.usmc.mil>). El área de mayor presencia en la última década ha sido la de Paraguay-Paraná, ya que a los ejercicios multilaterales conjuntos se agregan otros bilaterales (los IMARA-USMC en Argentina) y los cursos en EE.UU. a los que asisten los oficiales latinoamericanos.

El otro tipo de operaciones que se repiten en Paraguay son las de "carácter humanitario". En 2001 registramos un operativo Nuevos Horizontes que se prolongó por cien días, del 2 de

Mapa 2. Recursos estratégicos y posiciones militares



abril al 30 de junio. Los *New Horizons* tienden a concentrarse en América Central y el Caribe pero fundamentalmente están destinados a la zona crítica del Mapa del Pentágono, que requiere de una atención directa de acuerdo con la percepción del estado norteamericano. La concepción que los anima, según el Comando Sur Naval, es la de ser "misiones de ayuda, humanitarias y civiles, diseñadas para promover la buena voluntad y mejorar las relaciones entre Estados Unidos y la nación organizadora. Un ejercicio típico consiste en proyectos de construcción de ingeniería y ejercicios de entrenamiento médico […] los New Horizons también proporcionan una oportunidad de entrenar a soldados, marineros, y marines en el mismo ambiente austero que verán en las operaciones futuras. El entrenamiento incluye movilización y despliegue de Estados Unidos hacia la nación organizadora, actuación de filantropía y la ayuda cívica proyectada, y la vuelta a Estados Unidos" (ver <http://www.cusns.navy.mil/>). En este caso se conformó la *Task Force Guarani Spring*, integrada por entre 300 y 350 efectivos de EE.UU., 18 militares argentinos y 200 paraguayos, realizando distintas actividades en varias localidades de Concepción.

Otro tipo de operaciones que se dan recurrentemente en Paraguay son los llamados Medrete (*Medical Readiness Training Exercises*), que consisten en operativos de prestación de servicios médicos de variado tipo a la población civil de una región y que en ocasiones están comprendidos en Nuevos Horizontes y, en otras, se desarrollan independientemente. Del 21 de febrero al 4 de marzo de 2005 hubo un operativo tipo Medrete

en el que participaron la Fuerza Aérea y el ejército de EE.UU. con sus equivalentes paraguayos en el área de Asunción.

La realización de ejercicios conjuntos en Paraguay y en la zona argentina del Paraná revela una presencia cotidiana de efectivos militares estadounidenses ocupándose de diversas tareas de reconocimiento regional y de la construcción de complicidades y disciplinas compartidas con sus similares de los países latinoamericanos involucrados en los ejercicios. Es prioritario en estos ejercicios el desarrollo de la capacidad de respuesta ante un evento inesperado, con un mínimo conocimiento del terreno y de la idiosincrasia social, con códigos compartidos y normas de trabajo conjunto bien establecidas. Eso que no supieron o no quisieron instrumentar en la catástrofe de Nueva Orleáns es lo que constantemente se experimenta aquí. Simulacros de recuperación de plantas petroleras tomadas por los trabajadores, de sofocamiento de insurrecciones populares, de control de vías de comunicación, de control de pasos transfronterizos; trabajos de logística, de operación directa, de inteligencia… Es decir, preparación para la guerra interna, no para "repeler un ataque de una potencia extranjera".

Entrenamientos para la seguridad interna que a la vez la ponen en riesgo total porque son proporcionados por la mayor amenaza a las soberanías de los países latinoamericanos: el ejército de EE.UU., que para cumplir con la defensa de sus intereses vitales (Ceceña, 2002), como garantizar su propia estabilidad, seguridad y el acceso irrestricto a los recursos que le son estratégicos dondequiera que estén, tiene que arrasar los nuestros.

Ese es el modo americano (*american way*) de prevenir la guerra: la militarización total. La creación del panóptico no es una ficción sino un plan de trabajo de la cúpula del poder que hoy intenta dominar el mundo, y una de sus piezas estratégicas está en Paraguay. Más que las pistas de aterrizaje de Mariscal Estigarribia, Coronel Oviedo, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero, que ya estaban en operación desde los años ochenta (aunque no con la intensidad que se está previendo ahora), es necesario hacer frente a una nueva manera de organización social, militarizada, que se está empezando a desarrollar en esta región bajo la dirección y mediante la operación directa de EE.UU. Obviamente Mariscal Estigarribia está llamada a jugar un papel central en el abastecimiento logístico y el movimiento de tropas; seguramente también en las tareas de inteligencia que podrían establecerse en esa base (todavía no conocemos el lugar de operación de inteligencia). Y, por supuesto, se debería evitar que esto ocurra[4].

La apuesta está echada, no cabe duda, y un plan de despliegue sobre el Cono Sur como el que se está perfilando en Paraguay tiene muchas aristas, varias muy poco visibles y muy difíciles de investigar. Este plan transita por los parlamentos; modifica leyes; impone

políticas de seguridad y represión para resolver los diferendos políticos; naturaliza los controles de frontera, el uso de documentos de identidad, la vigilancia constante; instala la desconfianza y promueve la delación como práctica ciudadana.

La inmunidad para las tropas estadounidenses en Paraguay ha abierto una caja de Pandora. No podemos ser cómplices de la destrucción comunitaria y el retroceso democrático que esta ocupación trae consigo. Una vez más los pueblos de América Latina tendrán que pelear por su autodeterminación. Una vez más América Latina está en la encrucijada.

Bibliografía

Agência Nacional de Águas (ANA) 2003 *Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní* (Brasilia). En <http://www.aquiferoguarani.hpg.ig.com.br>.

Barnett, Thomas 2003 "The Pentagon's new map" in *Esquire*, march. In <http://www.nwc.navy.mil/newrulesets/>.

Ceceña, Ana Esther 2002 "Estrategias de dominación y planos de construcción de la hegemonía mundial" en Gambina, Julio (comp.) *La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).

Ceceña, Ana Esther 2004 "Estrategias de construcción de una hegemonía sin límites" en Ceceña, Ana Esther (coord.) *Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI* (Buenos Aires: CLACSO). En <http://www.geopolitica.ws>.

Craddock, Bantz J. 2005 "Posture statement before the 109th Congress House Armed Services Committee", march 9th.

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 2003 *Strategic plan* in <http://www.arpa.mil/body/strategic.html>, February.

Departamento de Estado de Estados Unidos (US-State) 2004 "Tendencias del terrorismo mundial" (Washington DC). En <http://www.usinfo.state.gov.>, 29 de abril.

Dinges, John 2004 *Operación Cóndor* (Chile: Quebecor).

Iniciativa para la Interconexión de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en <http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=9383&ms=8>.

Mendel, William W. 2002 "La frontera tripartita y los nuevos centros de gravedad" en *Military Review*. En <http://www-cgsc.army.mil/milrev/spanish/JanFeb02/>.

Osacar, Ignacio J. 2005 "La presencia militar de Estados Unidos en Paraguay" en *Nueva Mayoría.com*. Disponible en <http://www.nuevamayoria.com/GO/?main=/ES/INVESTIGACIONES/defensa/050809.html>.

Polo, Higinio s/f "Paraguay: la sombra de Stroessner" en <http://www.ellatinoamericano.cjb.net>.

Reynoso, Lisandro s/d "Apropiación del Acuífero Guaraní".

Scott Tyson, Ann 2005 "U.S. Pushes Anti-Terrorism in Africa" in *Washington Post,* July 26th.

USJC 2000 *Joint vision* 2020.

Notas

1 Este artículo es parte de los resultados de investigación del *Observatorio Latinoamericano de Geopolítica* <www.geopolitica.ws> con sede en CLACSO y auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Forman parte del equipo de investigación Claudia Korol, Patricia Agosto, Paula Lucía Aguilar, Paula Porras y Roxana Longo. Todas ellas han enriquecido la reflexión que estamos presentando y han contribuido con la búsqueda de la información requerida (N. del Ed.: el presente artículo es una versión resumida del texto original; el mismo, en formato completo, puede consultarse en la página web del *Observatorio Latinoamericano de Geopolítica*).

2 Los tres países que conforman la triple frontera más importante de América del Sur –por lo menos en este momento– firmaron el 15 de agosto de 2003 la Declaración de Asunción que los compromete a apoyar a Colombia en su lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas ilícitas. Además, Argentina y Brasil firmaron las doce convenciones y protocolos antiterroristas en el continente (Argentina es parte en 10 y Brasil en 9) y "Paraguay ha colaborado con la coalición mundial contra el terrorismo mediante la ratificación de varios tratados y convenciones internacionales, además de su firme apoyo, en la ONU y la OEA, a la lucha contra el terrorismo" (US-State, 2004).

3 Hay que recordar los intentos de involucrar a la población paraguaya en las actividades de las FARC en enero de 2005 y a la de la triple frontera con las actividades de Al Qaida desde 2001.

4 Simultáneamente se ha pactado un plan de entrenamientos, ejercicios y seminarios en Paraguay como parte del convenio de inmunidad recientemente firmado. Ver cuadro sobre los mismos en el texto completo del presente artículo en <http://osal.clacso.org>.

La economía política de la política exterior de Estados Unidos para América Latina

James Petras*

* *Profesor Emérito de la Universidad Estatal de Nueva York, Binghamton, EE.UU.*

Artículo traducido por Joseph Schneider.

Introducción

En el presente artículo analizaremos críticamente, si bien de manera breve, los cuatro enfoques teórico-conceptuales utilizados para comprender la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica para luego referirnos a los instrumentos político-económicos y las políticas específicas que definen esa relación. Para concluir haremos una evaluación sobre los fracasos y los éxitos de la política de EE.UU. en América Latina y, más importante aún, sobre las contingencias y estrategias políticas que contextualizan dichos resultados.

Cuatro enfoques sobre las relaciones entre EE.UU. y Latinoamérica

El enfoque más común para analizar las relaciones entre EE.UU. y América Latina, adoptado por la mayoría de los

politólogos norteamericanos, pone énfasis en la "interdependencia" entre las dos regiones. Este enfoque pasa por alto todo lo que resulta esencial para definir y entender esta relación: el poder desigual existente entre ambas partes, la intervención unilateral, el flujo unidireccional de ganancias y pago de intereses y el desigual control sobre las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

El segundo enfoque, el neoliberal, enfatiza la "globalización" subrayando la incorporación de todas las regiones del planeta en el mercado mundial y su sometimiento a los imperativos del mercado. Los neoliberales ignoran el papel determinante que les cabe a los países imperiales, como EE.UU., en la fijación de las llamadas "reglas del mercado", política que se realiza incluso desconociendo los tratados internacionales e imponiendo su dominio con la fuerza de las armas.

"El marco conceptual más amplio y riguroso para comprender y explicar las relaciones entre EE.UU. y Latinoamérica es el concepto marxista de imperialismo"

El tercer enfoque, el progresista, opina que las relaciones desiguales entre EE.UU. y Latinoamérica son el resultado de la *hegemonía*. Es decir, que los intereses y la ideología de EE.UU. han sido "internalizados" por los países dominados. Este enfoque pasa por alto el hecho de que en cada asunto importante para EE.UU., los pueblos, cuando pueden elegir y expresarse libremente (por ejemplo, sobre las privatizaciones en Bolivia, Perú, Uruguay o donde sea), rechazan la posición estadounidense. A lo sumo puede afirmarse que es la clase gobernante o la clase política, elegida por el voto de la ciudadanía, la que se encuentra bajo una dominación "hegemónica". En este sentido los progresistas no exponen adecuadamente el grado en que EE.UU. y sus regímenes clientes recurren al uso de la *fuerza*, en vez de a la influencia ideológica, para imponer sus intereses.

El marco conceptual más amplio y riguroso para comprender y explicar las relaciones entre EE.UU. y Latinoamérica es el concepto marxista de imperialismo.

Este enfoque incorpora la explotación económica y la dominación político-militar como determinantes centrales del desarrollo desigual de las dos regiones, la transferencia masiva de riqueza desde el Sur hacia el Norte y la centralidad de la intervención del estado imperial mediante las IFIs, los sátrapas militares locales y los regímenes electorales de "centro-izquierda".

En esta perspectiva, la política exterior de EE.UU. es a la vez un producto de la construcción del imperio y un instrumento para fomentar la confiscación imperial de los activos lucrativos (bancos, energía, telecomunicaciones, etc.) y el dominio de los mercados locales, cobrar por la fuerza deudas ilegales, exigir pagos perpetuos de regalías, facilitar la fuga de capitales y tomar prestados los ahorros locales. La acumulación y concentración de las riquezas y su transferencia a bancos y corporaciones multinacionales (CMN) del imperio, así como también las balanzas de pagos favorables, definen la naturaleza imperial de las relaciones entre EE.UU. y América Latina.

Instrumentos de construcción del imperio

El propósito de la política exterior de EE.UU. consiste entonces en defender y extender el imperio. Así la política estadounidense hacia América Latina opera básicamente a través de tres instrumentos: el estado imperial, las IFIs y las CMN. El estado imperial cumple un papel central para crear el "universo" y el "marco" que permita a los bancos estadounidenses, las CMN y los contratistas de regalías operar transfiriendo riquezas y asegurando ventajas comparativas sobre sus rivales imperiales. Este estado imperial está compuesto por un conjunto de agencias de inteligencia, espionaje y asesinato (CIA, DIA, NSA, AID, DEA[1]), instituciones militares (Pentágono, Operaciones Especiales), ministerios económicos (Comercio, Agricultura y Tesoro) y agencias políticas y diplomáticas (el Departamento de Estado). A pesar de que puedan existir, y existen, algunas fricciones internas y rivalidades entre estas por los presupuestos y prioridades, todos estos instrumentos político-militares tienen la tarea principal de ampliar las oportunidades de negocios y la rentabilidad de los bancos y las empresas norteamericanas. En este sentido el estado imperial defiende los intereses de las CMN, desestabilizando regímenes nacionalistas o independientes y apoyando regímenes pro-CMN, al tiempo que margina a los estados competidores.

Entre los instrumentos cruciales del estado imperial figuran las Instituciones Financieras Internacionales, cuyos funcionarios de primer nivel son nombrados y aprobados por Washington y Bruselas. Estas instituciones están directamente bajo el control de los estados imperiales y elaboran políticas macro-socioeconómicas que promueven los intereses de los bancos de EE.UU., Europa y Japón. Por otra parte, los bancos y las corporaciones

multinacionales son las unidades centrales del capital norteamericano y europeo –son los sectores más grandes, más rentables y más influyentes de la clase capitalista. De esta manera, las CMN, las IFIs y el estado imperial son la fuerza motriz de la política imperial de EE.UU. hacia América Latina.

La política exterior de EE.UU.: la política del saqueo

El cuarto de siglo que se extiende entre 1980 y 2005 puede considerarse como el de los "años dorados" del imperialismo norteamericano en Latinoamérica. Durante ese período, millones de millones de dólares en pagos de capital e intereses, centenares de miles de millones de dólares en ganancias y regalías, y decenas de miles de millones de dólares en evasión impositiva y fuga de capitales fueron transferidos de América Latina a EE.UU. Este proceso de pillaje y explotación ha sido posible debido a las políticas amplias y sistemáticas elaboradas por los responsables de la política exterior estadounidense.

Las políticas de "ajuste estructural" promovidas por las IFIs incluyeron la privatización de las empresas públicas y la desnacionalización de la propiedad; la desregulación de la economía; el pago y la refinanciación de la deuda; las políticas selectivas y asimétricas de "libre comercio"; y la reconcentración del ingreso "hacia arriba y hacia afuera".

En este conjunto de medidas los pagos de la deuda externa son una importante fuente de enriquecimiento del imperio, pero las negociaciones y refinanciaciones de la deuda resultan aún más importantes desde la perspectiva de la construcción del imperio a largo plazo. Las negociaciones de la deuda externa suelen llevarse a cabo bajo el auspicio del FMI, cuyas autoridades son nombradas por las multinacionales estadounidenses y europeas y actúan como sus instrumentos. El FMI utiliza la deuda externa como una palanca para abrir toda la economía a la explotación de las CMN y condiciona la refinanciación, la reprogramación de los vencimientos de las deudas impagas y otras "concesiones" a que los regímenes latinoamericanos privaticen sectores lucrativos y estratégicos de la economía, desregulen los mercados financieros y garanticen superávits presupuestarios para asegurar los pagos de la deuda en tiempo y forma. Mientras que el pago de la deuda es una deshonrosa fuente de descapitalización de las economías latinoamericanas, la refinanciación de la deuda permite que las CMN exploten toda la economía "abierta", privatizada y desnacionalizada, incrementando geométricamente la salida de capitales, ganancias y pagos de intereses.

Los acuerdos comerciales asimétricos, llamados acuerdos de "libre comercio", son el tercer vehículo tanto para la explotación como para la construcción del imperio. Contradiciendo la retórica imperial de los economistas ortodoxos, el estado imperial

© Patricio Realpe

practica la "preferencia imperial": obtiene la eliminación de las barreras aduaneras en América Latina para las mercancías procedentes de EE.UU. y Europa a la vez que multiplica las barreras aduaneras contra las exportaciones de Latinoamérica que son más competitivas que las producciones domésticas en el imperio. Este trato asimétrico maximiza el porcentaje de participación en el mercado y las ganancias de los exportadores estadounidenses a la vez que se limitan los ingresos latinoamericanos y se generan balanzas comerciales favorables a EE.UU. Esta política lleva a la bancarrota de los productores locales, que no pueden exportar a los mercados estadounidenses debido a aranceles prohibitivos (hasta 100%), cuotas, y aranceles no tradicionales para más de 300 productos agrícolas e industriales como el acero, el algodón, el azúcar, los textiles y el jugo de naranja, entre otros. El resultado neto es que el superávit comercial de EE.UU. con América del Sur le permite reducir su déficit comercial global y así evitar que el dólar se devalúe aún más.

El cuarto conjunto de políticas que ha profundizado el control imperial de EE.UU. ha sido la imposición de la desregulación financiera. Bancos multinacionales estadounidenses y europeos ya son dueños de la vasta mayoría de los bancos en Brasil, México y Argentina, facilitando el uso de los ahorros locales para financiar la adquisición por parte de las CMN de las empresas públicas y compañías nacionales privatizadas.

Mediante el control de los créditos, los bancos estadounidenses "seleccionan" los "ganadores" y "perdedores" entre las empresas competitivas, favoreciendo a las CMN cuyos directorios se encuentran fuertemente vinculados a los bancos. No constituye un dato menor el hecho de que en las audiencias del Senado norteamericano se haya revelado que bancos de EE.UU. en el exterior –como el Citicorps, el Bank of America y el Bank of Boston– están fuertemente comprometidos en el lavado de dinero y la fuga de capitales por un monto total que se calcula entre los 20 y los 100 mil millones de dólares por año. En suma, la desregulación de los mercados financieros ha resultado en un flujo mucho mayor de capitales hacia el centro del imperio que desde este hacia Latinoamérica.

El contexto político de los "años dorados" del imperio

Los regímenes militares de la década del setenta pusieron los "cimientos" para este modelo de acumulación centrado en el imperio al destruir físicamente las oposiciones nacionales y de clase. Pero fueron los regímenes electorales posteriores los que construyeron la arquitectura del nuevo imperio económico de EE.UU. mediante la profundización y extensión de las privatizaciones, un cuarto de siglo de pagos de la deuda, la aceptación de reglas comerciales desiguales, la desnacionalización de los minerales estratégicos y la reducción de ingresos y salarios a través de los programas de austeridad selectivamente clasistas.

Los "años dorados" del saqueo imperial coinciden con el acceso al poder de regímenes electorales y de una clase política bajo la hegemonía constante de EE.UU. En América Latina ni un solo presidente o Congreso popularmente elegido aprobó pieza alguna de legislación que revirtiera las privatizaciones o redujera las ganancias, intereses o regalías imperiales en los últimos veinticinco años. Las consecuencias políticas han sido la profundización de la polarización entre la urna y la "calle", entre la clase política electoral apoyada por EE.UU. y los movimientos socio-políticos de masas. Las revueltas políticas subsiguientes en Argentina (2001), Bolivia (2003 y 2005), Ecuador (1997, 2000 y 2005), Venezuela (2002), México (1994) y Perú (2000) han tenido como blancos tanto a los gobiernos clientes de EE.UU. como al modelo de acumulación centrado en el imperio.

En este sentido la preferencia imperial es obtenida al precio de una permanente inestabilidad política. La política exterior de EE.UU. reconoce y acepta el hecho de que, en el mejor de los casos, sus gobiernos-clientes, surgidos de elecciones, apenas lograrán terminar sus mandatos. En este contexto, en el nuevo milenio y de modo notable, Washington ha diseñado una política flexible para negociar el acceso al poder de un

nuevo subconjunto de la clase política: aquella que recibe el nombre de "centro-izquierda". Desde México hasta Ecuador y Bolivia, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, ha surgido un nuevo conjunto de discípulos del FMI que guarda una tradicional identificación con la izquierda pero cuyo punto de referencia actual es el modelo de acumulación centrado en el imperio.

Si comparamos y evaluamos los logros obtenidos por EE.UU. en alcanzar sus objetivos de política exterior en la década actual, los datos demuestran que esta estrategia político-electoral norteamericana ha sido mucho más exitosa que su estrategia militar en la promoción de los intereses imperiales. La historia reciente demuestra que las políticas militares estadounidenses de mayor envergadura han fracasado. El Plan Colombia no pudo ni vencer ni reducir la efectividad de la guerrilla colombiana. El golpe militar orquestado por EE.UU. en Venezuela fue derrotado. Las amenazas militares contra Cuba fortalecieron la cohesión interna de la isla y ampliaron las relaciones político-económicas de La Habana con Venezuela y Asia. El programa para erradicar la coca no ha reducido su cultivo. La represión militar-policial de gobiernos clientes de EE.UU., como De la Rúa en Argentina y Sánchez de Lozada en Bolivia, radicalizó las revueltas populares. Más allá de Latinoamérica, en Irak y Afganistán la política militar de EE.UU. también ha sido un desastre total. Por otro lado, las CMN y los bancos estadounidenses han aumentado sus ganancias y su seguridad después de las victorias electorales de Fox en México, Lula en Brasil, Toledo en Perú, Kirchner en Argentina y Vázquez en Uruguay. Es evidente que el imperialismo norteamericano ha logrado un mayor éxito a través de la "vía electoral" y de su política de cooptación del centro-izquierda que mediante las confrontaciones militares y políticas con Chávez en Venezuela y Castro en Cuba.

Conclusión

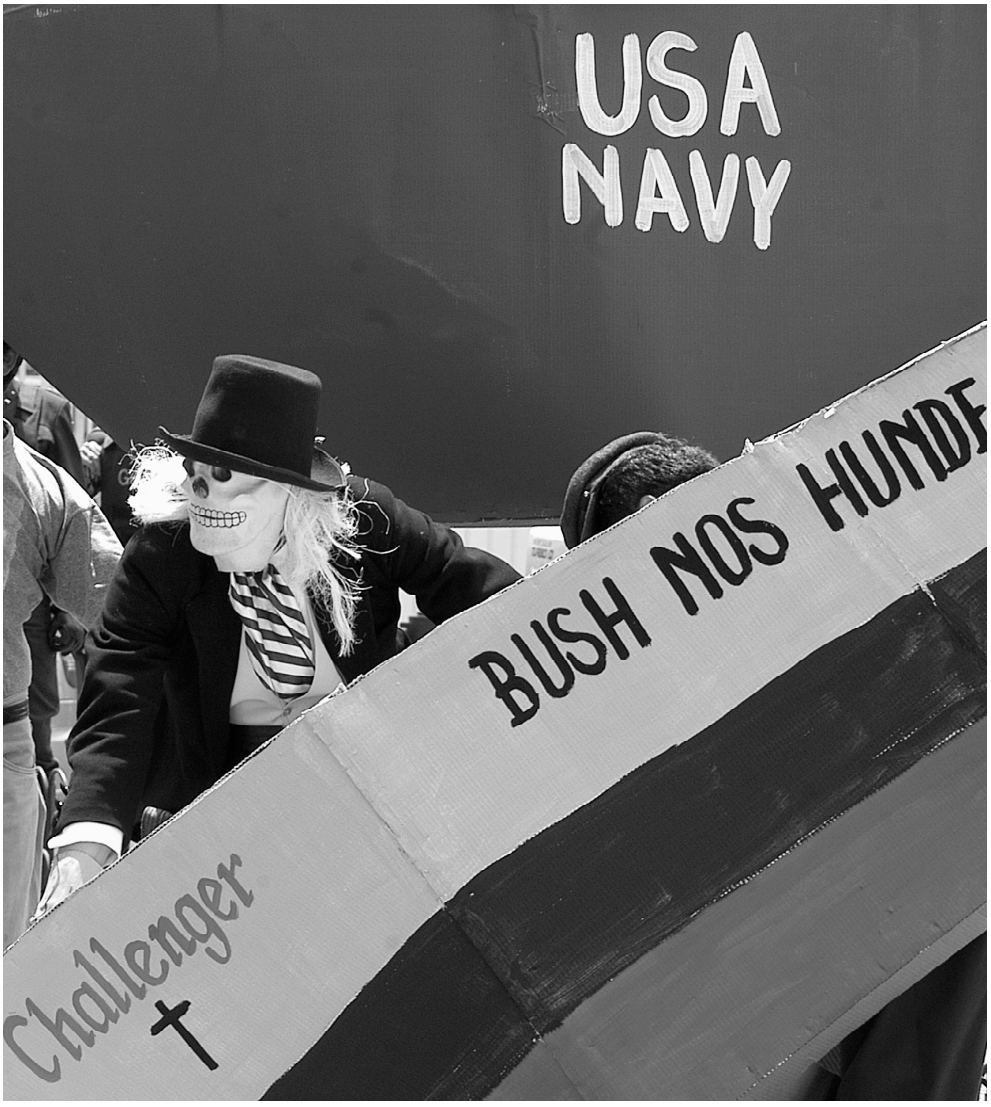
La Cumbre de las Américas en Argentina en noviembre pondrá a la vista los éxitos y fracasos de la política exterior imperial de EE.UU. Puertas adentro, durante la conferencia EE.UU. se asegurará el respaldo de sus regímenes-clientes para mantener el modelo de acumulación centrado en el imperio, contra el desafío solitario del presidente Chávez de Venezuela. Pero afuera de la conferencia, las calles de Mar del Plata estarán atestadas con los movimientos sociales, los sindicatos y los pobres urbanos que rechazan por completo la agenda de Washington. La presión combinada de Venezuela adentro de la cumbre y los movimientos de masas afuera limitará las concesiones hacia Washington.

Esto es particularmente así porque, con los precios del petróleo aumentando sideralmente y las tasas de crecimiento disminuyendo, rechazar la agresión de EE.UU. hacia Venezuela tiene sus ventajas. En otras palabras, inclusive los gobiernos-clientes que

intenten obtener concesiones de Venezuela rechazarán la capitulación total. La larga lista de ex gobernantes incondicionales a Washington que ya residen en Miami es un testimonio abrumador de la capacidad de los movimientos de masas para derrocar a gobiernos excesivamente serviles.

Nota

1 CIA: Central Intelligence Agency; DIA: Defense Intelligence Agency; NSA: National Security Agency; AID: Agency for Internacional Development; DEA: Drug Enforcement Administration.



© Patricio Realpe

Recursos naturales y aspectos ambientales en los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos[1]

Ariela Ruiz Caro*

* *Economista peruana. Consultora de la CEPAL. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina de Naciones y participado en el Programa Latinoamericano y Caribeño de Información sobre deuda externa en el Sistema Económico Latinoamericano (SELA).*

El hecho de que las exportaciones de recursos naturales ingresen a los mercados de los países industrializados con aranceles muy reducidos, y en muchos casos exentas de ellos, da lugar a que se piense que su gestión no es tema de negociación en los Tratados de Libre Comercio. Todo lo contrario. Hay una vinculación muy estrecha con su desarrollo sostenible, pues reafirman el modelo productivo primario exportador, característico de la mayoría de las economías latinoamericanas.

Salvo el caso del TLC de México con Estados Unidos y Canadá –que instaura un capítulo sobre energía en el que se establece un tratamiento especial para petróleo, gas, electricidad y petroquímica básica– no existe una mesa de negociación dedicada exclusivamente a temas de recursos naturales. Sin embargo, los capítulos de inversión extranjera, servicios, propiedad intelectual y medio ambiente tienen una vinculación muy estrecha en su gestión.

Los TLC suscriptos por EE.UU. con Chile, Centroamérica, República Dominicana; el que está a punto de concluir con Panamá y el que actualmente se negocia con tres países andinos (Colombia, Ecuador y Perú), se han convertido en el mecanismo para consolidar los lineamientos que explícita e implícitamente subyacen en las políticas económicas recomendadas por los organismos financieros multilaterales y las que promueven los países industrializados desde la Organización Mundial del Comercio. Buscan además elevar la normativa económica que reglamenta los múltiples ámbitos que abarcan al rango de tratados internacionales, con lo cual esta adquiere preeminencia sobre la legislación nacional. El objetivo que se señala es que se generará y garantizará confianza a los inversionistas para que fluyan las inversiones, se impulse la transferencia de tecnología, se incrementen las exportaciones y por ende el crecimiento económico y del empleo, y disminuya el riesgo país.

Es importante tener en cuenta que después del fin de la Guerra Fría los países industrializados han concedido una importancia estratégica mayor que la que siempre otorgaron al aprovisionamiento de los recursos naturales. En el documento Santa Fe IV de fines de 2000, que orienta la política norteamericana hacia la región, se señala que uno de los elementos geoestratégicos fundamentales para su seguridad nacional radica en que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para satisfacer su demanda. Garantizar el libre flujo del comercio e inversiones en las actividades económicas vinculadas a dichos recursos, las rutas de acceso a los yacimientos de crudo y minerales, así como la provisión del potencial genético presente en la enorme biodiversidad existente en el hemisferio Sur, especialmente en América Latina, constituyen objetivos centrales en la estrategia de seguridad nacional de la mayoría de países industrializados.

Asimismo, la Ley de Comercio o *Trade Promotion Authority* (TPA) de 2002[2], por medio de la cual el Congreso norteamericano autoriza al gobierno a negociar con límites muy claros Tratados de Libre Comercio con otros países, establece que "el comercio es un factor crítico para el crecimiento económico del país, su liderazgo en el mundo y su seguridad nacional […] Hoy día los acuerdos comerciales sirven al mismo objetivo que los pactos de seguridad durante la Guerra Fría, comprometiendo a las naciones por medio de una serie de derechos y obligaciones".

Los TLC constituyen un medio uniforme que facilita el comercio y, en el ámbito de los recursos naturales, busca evitar todo tipo de restricciones a su acceso y facilitar la participación de las empresas transnacionales en todas las fases del proceso productivo, independientemente de su condición de empresas nacionales o extranjeras. Por eso buscan que los países otorguen trato nacional a los proveedores norteamericanos en las compras que realizan las empresas estatales, especialmente las petroleras, que aún mantienen algunos países latinoamericanos. Buscan asimismo que mediante un tratado inter-

© Patricio Realpe

nacional se siga eximiendo a las inversiones de requisitos de desempeño. Esto quiere decir que los gobiernos no podrán exigir el cumplimiento de requisitos tales como: alcanzar un determinado grado de contenido nacional; otorgar preferencia a bienes o a servicios producidos localmente; relacionar el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones o el monto de las entradas de divisas con la inversión realizada; topes o condicionamiento de importación de insumos; o exigencias de transferencia de tecnologías, entre otras.

Estos tratados incluyen, en el capítulo de servicios, disposiciones para garantizar el acceso a mercados y trato nacional. Con ellas se trata de eliminar medidas tales como el límite en el número de proveedores del servicio. Se busca asimismo eliminar regulaciones que pudieran exigir negocios mancomunados entre empresas nacionales y extranjeras que en general se instrumentan para que los gobiernos puedan limitar la propiedad extranjera de empresas nacionales. Asimismo, se les prohíbe a los gobiernos la facultad de establecer precios mínimos de exportación, medida que podría ser utilizada para conservar los recursos no renovables.

Además buscan apuntalar todo tipo de garantías a las inversiones, como es el caso del mecanismo de solución de controversias que permite a las empresas demandar a los estados nacionales y solicitar resolución mediante arbitrajes internacionales. Ello conlleva una restricción en la participación del estado en la definición de políticas sectoriales, en momentos en que las actividades de las empresas transnacionales vinculadas a la industria extractiva son crecientemente cuestionadas.

En efecto, desde distintos ámbitos y con diferentes desenlaces, que oscilan entre la aplicación de mayores impuestos y la caída de gobiernos, los cuestionamientos y críticas al desempeño de las empresas transnacionales se centran en tres aspectos: la desigual distribución de los beneficios, las repercusiones en el medio ambiente, y la sobreexplotación de los recursos naturales como resultado de la falta de visión de un desarrollo sostenible. Estos reclamos constituyen temas de preocupación no sólo de varios gobiernos de la región, especialmente en Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Argentina, sino también de organismos internacionales, incluidos aquellos que impulsaron las reformas económicas de los noventa, así como de la sociedad civil.

"Los cuestionamientos y críticas al desempeño de las empresas transnacionales se centran en tres aspectos: la desigual distribución de los beneficios, las repercusiones en el medio ambiente, y la sobreexplotación de los recursos naturales"

En *De los recursos naturales a la economía del conocimiento*, publicado por el Banco Mundial, se recomienda a los países de América Latina "no dar la espalda a sus recursos naturales ni a su proximidad geográfica con los EE.UU., y otorgar una favorable acogida a las inversiones extranjeras, ya que estas constituyen un elemento clave para aumentar la eficiencia de los sectores económicos existentes y crear nuevas oportunidades de empleo" (De Ferranti et al., 2002). Sin embargo, investigaciones recientes señalan que no se ha cumplido con las expectativas que impulsaron a los gobiernos de los países receptores de las inversiones a modificar sus legislaciones y otorgarles toda clase de garantías e incentivos tributarios. Se aspiraba a que estas impulsaran exportaciones basadas en recursos naturales con alto contenido local que diera lugar a la generación de empleo en zonas no urbanas y que contribuyera al incremento de ingresos fiscales a través de impuestos. La experiencia ha demostrado que las empresas transnacionales encuentran dificultades para articularse con las economías nacionales. La CEPAL señala que generan poco valor agregado, el nivel de procesamiento local es bajo, y los ingresos por concepto de impuestos sobre los recursos no renovables resultan escasos.

Además, la competencia entre países dotados de recursos naturales por hacerse más atractivos a las inversiones

extranjeras ha incidido significativamente en el desarrollo sostenible de los recursos naturales. La liberalización generalizada de la actividad económica y del comercio, combinada con altas tasas de crecimiento económico, ha generado un aumento en la presión sobre la explotación de los recursos naturales, tanto en los energéticos y en la minería como en la agricultura, bosques y pesca, lo cual a su vez tiene un profundo impacto en la biodiversidad.

El daño ambiental que la actividad extractiva puede provocar en el entorno de sus operaciones, a pesar de las reglas estrictas que está obligada a cumplir, es uno de los aspectos cuestionados por sectores de la sociedad, especialmente por las poblaciones aledañas que sostienen que las secuelas que dejan tales actividades son difíciles de mitigar a corto y mediano plazo. Ejemplos recientes de estas reacciones no sólo se ven en el Perú en los casos de Tintaya y Yanacocha, sino también en el juicio que se lleva a cabo en Ecuador contra Texaco, el rechazo de la comunidad local al proyecto Alumysa en el Sur de Chile que obligó a su postergación, y la paralización del proyecto de explotación de oro y cobre en Esquel, Argentina, debido a la oposición y protestas de la población.

Amplios sectores de la sociedad perciben que las medidas de promoción a la inversión en recursos naturales (reducción de impuestos, utilización de subsidios, promulgación de exenciones tributarias, virtual eliminación de la obligación de abastecer al mercado interno en el caso del petróleo por ejemplo, libre disponibilidad de divisas, y arbitraje internacional para la solución de controversias) no sólo se han desvinculado de normas que permiten una adecuada y rigurosa protección del patrimonio integral de la sociedad –natural, cultural, social–, sino que existe desigualdad en la distribución de los beneficios en la explotación de estos recursos. Este es el aspecto más controvertido de los cuestionamientos a estas inversiones, pues si bien pocos entienden de cánones, regalías, impuestos específicos a las rentas operacionales, sí sienten que el crecimiento económico, impulsado en gran parte por estas empresas, es un fenómeno cada vez más lejano, que no comparten.

La biodiversidad

Otro ámbito importante de resaltar con respecto a la seguridad estratégica que representa el control de los recursos naturales es la biodiversidad. Hay un reconocimiento creciente a nivel internacional del hecho de que los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos están siendo actualmente utilizados para generar invenciones que luego son patentadas en el extranjero, mereciendo los titulares de tales patentes derechos exclusivos sobre esas invenciones. En dicho proceso, ni los estados sede de estos recursos ni los pueblos indígenas reciben compensaciones, y más bien deben afrontar el

costo que significa acceder al producto generado gracias a dichos conocimientos o recursos pagando patentes (INDECOPI, 2005).

En efecto, "los mecanismos de protección de la propiedad intelectual no fueron creados con la finalidad de proteger los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas ni de regular el acceso a los recursos genéticos, ni tampoco asegurar el reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven del uso de esos recursos genéticos o conocimientos tradicionales" (INDECOPI, 2005). Tal como señala el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, "las aplicaciones prácticas de las plantas americanas encontradas en las expediciones botánicas de Humboldt y Mutis revolucionaron la medicina de la época, como hoy lo hacen los descubrimientos de propiedades genéticas de plantas y vegetales que forman parte de esa misma biodiversidad, localizada en nuestras selvas y bosques ecuatoriales como una valiosa reserva del conocimiento de la humanidad. Esta aún no es reconocida por las normas de propiedad intelectual global, tan acuciosas en preservar los derechos a la innovación de los grandes conglomerados transnacionales, como parcas en el reconocimiento del denominado conocimiento tradicional" (Samper, 2004: 15).

Por eso, el reparto de los beneficios derivados de la explotación de la biodiversidad ha adquirido relevancia en las negociaciones multilaterales en los últimos años. Los países industrializados intentan aplicar los derechos de propiedad intelectual mediante el establecimiento de patentes a los descubrimientos o alteraciones genéticas que se realicen en especies vivas halladas en estos ecosistemas. El sistema de patentes fue concebido para los inventos industriales, y no para los productos de la biodiversidad y el conocimiento asociado a ella. La innovación a escala local y comunitaria es el producto de un proceso colectivo resultado de varias generaciones, que no debería ser cercenado.

Actualmente no hay un instrumento internacional que delimite y regule claramente este tema, razón por la cual la apropiación indebida de recursos genéticos y conocimientos tradicionales no se ha reducido. La celeridad en la evolución de las nuevas tecnologías –en especial de la biotecnología[3]– y su creciente importancia para la agricultura y la industria farmacéutica, principalmente en las dos últimas décadas, determinan que el reparto de los beneficios y la regulación del acceso a los recursos genéticos presentes en los ecosistemas del hemisferio Sur sean tema de conflicto creciente. El escenario de las divergencias son los foros internacionales, especialmente en el Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde tienen lugar los intercambios entre los países en desarrollo, que no siempre actúan coordinadamente, y los países desarrollados.

Los TLC vienen siendo un mecanismo funcional a los intereses de las corporaciones vinculadas a las actividades mencionadas. En estos tratados se omiten referencias a los derechos de acceso a los recursos genéticos, la biodiversidad del territorio y los conocimientos tradicionales. No se invocan principios como la participación en los beneficios (*profit sharing*) entre las comunidades nativas y los inversionistas extranjeros en el uso de los recursos biológicos que aquellas han utilizado y mejorado mediante selección natural desde tiempos remotos. Ello ocurre a pesar de que estos principios están reconocidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) vigente desde 1994, que contempla "la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos" y reafirma el derecho soberano de los países sobre dichos recursos. EE.UU. no ha ratificado el CDB, y en los TLC no se demanda la adhesión a este Convenio Internacional, del que son parte más de 180 estados del mundo, incluidos todos los países latinoamericanos que han suscripto ya, o se encuentran negociando, un TLC.

Los tres países andinos que actualmente negocian el TLC con EE.UU., en su doble condición de suscriptores del CDB –ser miembros del Grupo de Naciones Mega-Biodiversas y además disponer de una decisión comunitaria[4] que regula el acceso a los recursos genéticos–, exigen que en el tratado se establezca una reglamentación en la que se expliciten claramente los términos de acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales de la población, en los que la contraprestación económica o de cooperación para su conservación y desarrollo deben ser principios rectores.

Los aspectos ambientales en los TLC

Si bien es cierto que los cambios en la estructura productiva de América Latina y el Caribe han dado lugar a una pérdida del peso relativo de la producción primaria en favor del sector servicios y de manufacturas, la mayoría de los estudios coinciden en señalar que tal transformación no se ha traducido en una menor presión ambiental. Por el contrario, la extracción de recursos naturales mineros, fósiles, forestales y pesqueros ha registrado una tendencia creciente. Asimismo, la frontera agrícola ha continuado incrementándose. Según la CEPAL, las políticas favorables al mercado han mostrado ciertas limitaciones debido a que en algunas esferas el incremento en las oportunidades comerciales puede conducir a la especialización y producción de bienes muy contaminantes o a la intensificación de prácticas no sostenibles. Algunos cultivos conducen a la deforestación, que ocasiona pérdida de biodiversidad, desestabilización de los ciclos hídricos y erosión de suelos. La reducción de impuestos, la utilización de subsidios y la promulgación de exenciones tributarias destinadas a atraer inversiones y proyectos en sectores de recursos naturales y actividades de reconocido impacto ambien-

tal han tenido un efecto negativo sobre el medio ambiente y no son coherentes con el desarrollo de instrumentos que ayuden a cuantificar e internalizar los costos sociales de la degradación ambiental (CEPAL, 2004: 166).

Ni el TLCAN ni el TLC suscripto por EE.UU. con Chile y los países centroamericanos y la República Dominicana establecen una armonización jurídica de sus normas ambientales. Sin embargo, procuran que los países socios no atraigan inversiones mediante regulaciones ambientales más laxas que las existentes en su regulación nacional. Este objetivo se ve desdibujado al no existir medidas muy claras que establezcan la imposición de sanciones en circunstancias en que un país reduzca sus estándares ambientales para ganar competitividad.

En efecto, en estos tratados prevalece una serie de limitaciones con relación al tema ambiental, al haber aspectos que no están considerados o que se limitan a exhortaciones que no tienen carácter vinculante. Las causas de estas insuficiencias se deben a la poca experiencia internacional en este terreno y a lo complejo de las negociaciones. La ausencia de una organización supranacional que atienda lo relativo a la materia ha determinado que las políticas conservacionistas descansen en muchos casos en los mecanismos comerciales para la aplicación de la ley. Por ejemplo, en ninguno de los tratados firmados por países latinoamericanos con EE.UU. se establecen medidas para la conservación de los recursos naturales, como los métodos agrícolas, por ejemplo. El régimen de resolución de controversias previsto en el ámbito del medio ambiente no puede atender lo que se refiere al manejo insostenible de los recursos naturales, pues no hay una normativa específica para ello (Shatan, 1997).

En el caso de México, la propia Comisión para la Cooperación Ambiental del TLCAN ha identificado "vínculos entre este tratado y niveles mayores de contaminación de aire y agua, nuevas y crecientes vías para las especies invasivas que dañan la agricultura y el medio ambiente y un aumento en el comercio transfronterizo de desechos y materiales peligrosos" (Citizen Trade Campaign, 2003: 2). Esto ha ocurrido a pesar de que desde el ingreso de México al GATT la estructura de las exportaciones mexicanas se ha modificado. Las exportaciones de productos primarios y bienes intensivos en recursos naturales están disminuyendo su participación en las exportaciones totales, mientras que la participación de las exportaciones de los sectores de tecnología alta e intermedia se ha incrementado (Guevara Sanguinéz, 2004).

El retraso en la formación de buena parte de las organizaciones previstas en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) se ha combinado con las dificultades económicas de México. Entre otros, se ha pospuesto la contribución del país para cumplir con los

objetivos establecidos por el Banco Norteamericano de Desarrollo –institución creada para ayudar a financiar la estructura ambientalmente sana a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, una de las áreas más contaminadas de América del Norte. Ello ha dado lugar a que buena parte de los objetivos establecidos en el TLCAN, en este ámbito, hayan sido incumplidos (Novelo Urdanivia, 2002). Y a que el deterioro ambiental, expresado en términos absolutos, haya seguido una tendencia creciente. Valorado en términos monetarios, este se ha incrementado después de la firma del TLCAN (Guevara Sanguinéz, 2004: 249).

Conclusión

A pesar de que algunos estudios resaltan los avances concretos en la sustitución y/o la menor intensidad de recursos energéticos y mineros en la industria, lo cierto es que la demanda mundial de muchas materias clave está creciendo a un ritmo que podría aumentar en las próximas décadas. El crecimiento demográfico, especialmente en los países subdesarrollados, y el proceso de urbanización e industrialización que perfilan –especialmente algunos países de Asia como China y la India– determinan necesidades crecientes de recursos naturales: alimentos, agua, energía, madera, minerales, fibras, entre otros.

En América Latina y el Caribe no existen cláusulas de condicionalidad que garanticen la explotación racional de los recursos naturales. Por el contrario, la plena libertad asignada a los capitales, y el haber transferido ciertas funciones indelegables del estado al mercado, dan lugar a un uso intensivo de los recursos naturales, en muchos casos sin las compensaciones económicas adecuadas, así como a un deterioro del medio ambiente. La política ambiental de EE.UU. ocupa el lugar 51 de 142 países registrados en el Índice de Sustentabilidad Ambiental, hecho que permite inferir la orientación de la posición de EE.UU. en este ámbito.

Existe un consenso generalizado en afirmar que el cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible es el mejor modo de asegurar el crecimiento económico a largo plazo. El éxito de una sociedad se mide no sólo por su capacidad de generar crecimiento económico sino también por su capacidad de mantener al mismo tiempo su patrimonio natural. Sin embargo, a pesar de las múltiples declaraciones y enunciados que alertan respecto a esta realidad, no son muchas las acciones concretas que se han tomado para revertirla. Por el contrario, la práctica real y la política económica implementadas, en especial las relativas al tratamiento a la inversión extranjera directa, que tienen alta incidencia en el desarrollo sustentable del patrimonio natural, tienden a consolidarse e inclusive a profundizarse a través de los TLC.

Bibliografía

Citizen Trade Campaign 2003 "Comentarios al Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil del Área de Libre Comercio de las Américas, 1º de mayo.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2004 *Desarrollo productivo en economías abiertas* (Santiago de Chile).

De Ferranti, David; Perry, Guillermo E.; Lederman, Daniel y Maloney, William F. 2002 *De los recursos naturales a la economía del conocimiento* (Washington: Banco Mundial).

Guevara Sanguinéz, Alejandro 2004 "Reflexiones acerca del TLCAN y su efecto ambiental en México" en Casares, Enrique y Sobrazo, Horacio (comps.) *Diez años del TLCAN en México: una perspectiva analítica* (México DF: Fondo de Cultura Económica).

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 2005 "Perú: Los intereses nacionales en propiedad intelectual y los TLC: marco referencial" (Lima) marzo.

Novelo Urdanivia, Federico 2002 *Hacia la evaluación del TLC* (México DF: Universidad Autónoma Metropolitana).

Ruiz Caro, Ariela 2005 *Los recursos naturales en los tratados de libre comercio con Estados Unidos* (Santiago de Chile: CEPAL) Serie Recursos Naturales Nº 92.

Samper, Ernesto 2004 *El salto global. Retos de América Latina frente a la globalización* (Bogotá: Taurus).

Shatan, Claudia 1997 *Lecciones de la experiencia de México en materia de medio ambiente. Primeros resultados del TLCAN* (México DF: Foro Internacional) julio-septiembre.

Notas

1 Parte de este artículo se basa en la publicación de Ariela Ruiz Caro (2005).

2 En marzo de 2005 se solicitó su renovación. Fue aprobada y tiene vigencia hasta el 1º de julio de 2007.

3 América Latina es la región más rica en biodiversidad. Sin embargo, salvo Brasil, Cuba, Argentina, México y Chile, que registran algún desarrollo biotecnológico, la región posee la biodiversidad pero no la biotecnología.

4 La Decisión 391 de 1996 es la primera norma comunitaria en el mundo en esta materia. Señala que los países andinos ejercen soberanía sobre sus recursos genéticos y sus productos derivados y, en consecuencia, determinan las condiciones de su acceso.

IIRSA y la integración regional

Gabriel Herbas Camacho*
y Silvia Molina**

* *Presidente del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE). Miembro de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (Bolivia) y docente universitario.*

** *Ingeniera civil. Analista en temas ambientales, actualmente trabaja en el seguimiento de proyectos de infraestructura de integración y megaproyectos de desarrollo.*

Las nuevas necesidades de la globalización

En el incesante mundo del ir y venir de las mercancías, la globalización del capital manifiesta otras necesidades, que ya no se detienen en el simple saqueo de los recursos naturales, como en el pasado. Su preocupación pasa por garantizar también una más rápida y mayor movilidad de los mismos hacia los centros de producción y a su vez asegurar que los productos puedan llegar con una mayor celeridad al mercado para fortalecer las llamadas "ventajas competitivas". Esta nueva "dinámica" generada por la globalización se encuentra presente en todos los continentes, manifestándose en corredores industriales y de materias primas, interoceánicos y comerciales, y expresándose físicamente en la construcción de nuevas carreteras, aeropuertos, ferrocarriles y rutas marítimas más cortas (ampliación y construcción de nuevos canales).

Estos flujos, redes y corredores diseminados internacionalmente han sido destinados a cierta especialidad. Así, en las regiones industrializadas la emergencia es garantizar el transporte de grandes volúmenes de productos industrializados terminados o para ensamblado. En cambio, para los países del Sur la especialización de los mismos está dirigida principalmente a facilitar la extracción de recursos naturales o a mejorar el tránsito de mercancías entre los centros industriales. Estas necesidades surgidas del proceso de globalización generalmente se enmascaran bajo los llamados procesos de integración que, de acuerdo a la región y al grado de desarrollo del capital, culminan en una articulación de diferentes países y territorios que, antes que responder a las necesidades internas o regionales, lo hacen al mercado global y a los intereses de los centros de poder. Por esta razón, es frecuente encontrar simples acuerdos comerciales elevados al más alto rango de la integración en los que se involucran países o regiones con economías de asimetrías pronunciadas.

Procesos de integración regional

Los procesos de integración han ido adquiriendo cada vez mayor importancia, pues se pretende que para alcanzar el crecimiento económico las regiones se incorporen al comercio internacional y a la economía mundial. En este sentido la segunda mitad de la década del ochenta marca un gran cambio económico mundial, con el desarrollo de importantes procesos de integración regionales como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), la ampliación de la Comunidad Europea hacia los países del Sur y Este de Europa, y el posterior intento de integración del continente americano en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), entre otros. Sin embargo, el avance de estos procesos económicos de bloques industrializados requiere un análisis mayor sobre los efectos en países de menor desarrollo económico y sobre experiencias integracionistas en la región sudamericana, como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con las cuales pueden presentarse incompatibilidades.

Los esquemas integracionistas tradicionales son netamente económicos y de comercio. Están basados en la teoría tradicional de Bela Balassa que establece diferentes niveles que van desde la liberación de aranceles, unión aduanera, libertad de circulación, zona monetaria común, hasta alcanzar, con la armonización de políticas, la "integración económica total". Dentro de sus criterios no se consideran aspectos políticos, sociales, científicos, culturales o ambientales.

La Unión Europea es la región que más ha desarrollado el proceso de integración regional, avanzando inclusive hacia una integración política. Sus principios fueron evolucionando a partir de la Comunidad Europea del Carbón (CECA) para constituir posteriormente la

Comunidad Económica Europea (CEE), basada principalmente en la unión aduanera, y que al fusionarse con la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM) dio lugar a la Comunidad Europea (CE). La Unión Europea, a partir de 1991, constituye una nueva etapa del proceso que pretende una integración más estrecha, estableciendo objetivos como: promover el desarrollo económico y social equilibrado y sostenible mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, fortalecer la cohesión económica y social, y establecer la unión económica y monetaria.

"Sin embargo, y a pesar de los avances integracionistas, la Unión Europea es cuestionada por su "déficit democrático", que se manifiesta en el escaso impulso al Parlamento Europeo, las negociaciones que se realizan entre gobiernos sin participación social, información transparente y suficiente"

Para alcanzar estos objetivos, a diferencia del ALCA, el TLC y el MERCOSUR, la Unión Europea ha establecido mecanismos que pretenden evitar la hegemonía de uno o más países con mayor desarrollo económico, y ha destinado ayuda financiera hacia países con economías menos desarrolladas. Estos mecanismos son los Fondos Estructurales y de Cohesión diseñados para apoyar a países de la Unión con un Producto Nacional Bruto (PNB) per capita menor al 90% de la media europea, a los que los países más prósperos transfieren recursos financieros. En el caso del Fondo de Cohesión, estos recursos son utilizados exclusivamente en los sectores de medio ambiente y de las redes europeas de infraestructura de transportes, mientras que recursos de otros Fondos Estructurales se emplean en aspectos como la Política Agraria Común (PAC), el desarrollo de la Agenda 2000, etcétera. Por otra parte, el Programa PHARE ayuda a financiar a países con problemas de fondo por atraso y dificultades económicas que son aspirantes a adherir a la Unión Europea, exigiendo a su vez criterios políticos (existencia de instituciones estables que garanticen democracia, primacía de derecho y respeto a las minorías y su protección) y económicos (contar con una política de mercado viable y con la capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas de mercado en el interior de la Unión Europea) para su adhesión.

Sin embargo, y a pesar de los avances integracionistas, la Unión Europea es cuestionada por su "déficit democrático", que se manifiesta en el escaso impulso al Parlamento

© Comité de Derechos Humanos de Orellana, Red de Líderes Comunitarios Angel Shingre y Oficina de Pastoral Social del Vicariato de Aguarico

Europeo, las negociaciones que se realizan entre gobiernos sin participación social, información transparente y suficiente, y decisiones basadas en criterios esencialmente económicos. El ejemplo europeo evidencia que un proceso de integración regional es mucho más que una iniciativa netamente comercial o de inserción en el mercado hemisférico o mundial. Involucra el desarrollo de instituciones, la definición de políticas y estrategias sectoriales, el desarrollo de infraestructura (de transporte, energética y de telecomunicaciones), y la creación de mecanismos compensatorios y políticas de información y participación, que permitan alcanzar un nuevo equilibrio social y económico.

Bolivia en los procesos de integración sudamericanos

Bolivia participa en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), escenarios de la integración comercial en la región que tienen características muy diferentes en su relación con el país. La CAN, uno de los procesos más antiguos en América Latina, nació con el Acuerdo de Cartagena firmado en 1969 entre los cinco países andinos (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Ve n ezuela), y contó con el apoyo de la Unión Europea en la definición de sus estructuras administrativas y en la elección de un modelo de integración a partir de los mercados (Mazurek, 2003). El

proceso de integración comercial de la CAN, que intenta avanzar de la eliminación de los obstáculos arancelarios, sin haber avanzado en los no arancelarios, hacia la unión aduanera, ha sido muy lento, con un estancamiento de los intercambios comerciales en su interior y con un desarrollo imperfecto de políticas.

El desarrollo de la CAN es afectado por la inestabilidad política y económica de los países que la conforman, incrementada por la ausencia de una política económica común, que permitió al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial la implantación en los países de la Comunidad Andina de una economía de libre competencia y libre mercado, desarrollando una serie de cambios estructurales para retirar a los estados de la actividad económica y promocionar las labores de las empresas privadas a fin de lograr el rápido acceso del continente a la economía global.

Pero para Bolivia el comercio con la CAN es muy importante, principalmente para las exportaciones del denominado complejo oleaginoso (granos, semillas, tortas o harinas, lecitina y aceites crudos refinados de soja y girasol), que han representado el 23,44% de las exportaciones del país en el año 2003, ubicándose en segundo lugar después de las exportaciones de hidrocarburos (30,07%) y antes que las de minerales (22,25%). En promedio, el 28% de las exportaciones bolivianas tiene como destino la CAN, la región más importante para las ventas bolivianas. De este total exportado, el complejo oligoproteico (soja, derivados y girasol) alcanza al 82%. Bolivia es la principal fuente de soja y derivados de la Comunidad Andina. Las mayores ventas corresponden a torta de soja. Los principales compradores son Colombia y Venezuela (Molina y Copa, 2005). Por otra parte, las relaciones comerciales con Perú también tienen características particulares. Es el único país sudamericano a excepción de Brasil –resultado en este caso de las exportaciones de gas– con el cual la balanza comercial es favorable a Bolivia, y se caracteriza por la diversificación de las exportaciones.

El MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con Bolivia y Chile como asociados) surgió en la década del noventa dentro del contexto de los cambios estructurales y bajo las teorías del "Nuevo Regionalismo" promovido por los organismos multilaterales de crédito a fin de alcanzar la apertura de los mercados sudamericanos al comercio mundial como una posible solución a los problemas sociales y económicos. Se planteó como una respuesta a la necesidad de encontrar alternativas a la pérdida de importancia de la región ante la cada vez mayor fortaleza de los bloques de países industrializados. Sin embargo, los evidentes desequilibrios en su interior manifiestan la hegemonía de Brasil y Argentina sobre los demás países, demostrando las diferencias entre los actores de este proceso de integración. Al no desarrollarse al interior del MERCOSUR mecanismos de compensación, de cohesión y de apoyo financiero a las economías más pobres, no considerando la importancia de la hetero-

geneidad de los países que lo conforman, y partiendo de una débil integración comercial, no ha sido posible diseñar estrategias regionales para enfrentar problemas comunes. Al contrario, se reproduce al interior del bloque la avasalladora preponderancia de las economías mayores.

El acuerdo comercial entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el MERCOSUR muestra también contrastes claros. La CAN tiene 120 millones de personas y un Producto Interno Bruto anual de 300 mil millones de dólares; a su vez, el MERCOSUR posee 236 millones de habitantes y 890 mil millones de dólares de producción al año. Este acuerdo creado a partir de los "modelos exportadores" no llega a ser más que un proceso adicional a los acuerdos bilaterales con Estados Unidos para la apertura de las regiones de la CAN y el MERCOSUR al "libre comercio de las Américas", que tienen muy poca relación con las teorías tradicionales de integración.

El papel de la integración de la infraestructura en los procesos de integración regional

De manera independiente a las iniciativas de los bloques de desarrollo regional en Sudamérica –como la CAN o el MERCOSUR–, las políticas de integración de la banca internacional, con miras a la liberalización económica del continente y la negociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC), han consolidado la definición de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que es el establecimiento de una visión geográfica y económica integrada de la región, y han planificado la organización del espacio sudamericano en franjas multinacionales concentradoras de los flujos de comercio actuales y potenciales que convergen hacia un estándar mínimo común de calidad de servicios de infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones. Estas franjas, denominadas Ejes de Integración y Desarrollo, son entonces las grandes regiones en que las oportunidades de negocios intra-regionales y globales están generando, o tienen más probabilidad de generar, flujos de inversión y comercio importantes. Los servicios de infraestructura se diseñan en función de los negocios y cadenas productivas con grandes economías de escala a lo largo de estos ejes, bien sea para el consumo interno de la región o para la exportación a los mercados globales.

IIRSA toma como plan de trabajo siete temas o "procesos sectoriales" que se detallan a continuación (FOBOMADE, 2003).

Los *sistemas operativos de transporte multimodal*, destinados a articular el transporte de mercancías combinando diferentes modalidades de transporte –ferroviario, carretero,

aéreo, fluvial o marítimo– bajo combinaciones de tiempo que optimicen la llegada de las mercancías al destino. Los *sistemas operativos de transporte aéreo*, orientados a mejorar la infraestructura aeroportuaria para despacho y recepción de mercancías. Los *sistemas operativos de transporte marítimo*, para el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura portuaria con la instalación de sistemas modernos para recepción y despacho de mercancías. La *facilitación de pasos de frontera* que busca reducir los tiempos en el flujo de mercancías de ingreso y salida en las fronteras con menos trabas burocráticas, a fin de que la fluidez del comercio no se detenga en la frontera. No existe esta misma predisposición para facilitar el flujo de personas por situaciones laborales o de otro orden. Las *tecnologías de la información y las comunicaciones* destinadas a desarrollar espacios aún no interconectados en el ámbito de las comunicaciones y la información necesaria para facilitar que las empresas inversoras puedan llegar a los países donde se desarrolla esta infraestructura. La *integración energética* que persigue la interconexión de ductos y redes a fin de facilitar la fluidez de los hidrocarburos hacia los grandes centros de consumo. Y finalmente los *instrumentos de financiamiento*, orientados a establecer mecanismos de financiamiento bajo la garantía de los países suscriptores del convenio.

"El conjunto de estos ejes [del IIRSA] coincidentemente cruza zonas donde se encuentra la mayor concentración de recursos naturales: no sólo los tradicionales como la minería y los hidrocarburos, sino principalmente los recursos de la biodiversidad"

En base a ello IIRSA plantea desarrollar los siguientes nueve ejes: 1) eje del Escudo Guayanés; 2) eje del Amazonas; 3) eje Andino; 4) eje Perú-Brasil-Bolivia; 5) eje Interoceánico Central; 6) eje de Capricornio; 7) eje MERCOSUR-Chile; 8) eje Andino del Sur; y finalmente 9) eje de la Hidrovía Paraguay-Paaná. El conjunto de estos ejes coincidentemente cruza zonas donde se encuentra la mayor concentración de recursos naturales: no sólo los tradicionales como la minería y los hidrocarburos, sino principalmente los recursos de la biodiversidad (plantas, animales, microorganismos), que son la actual presa codiciada del capitalismo en expansión.

Quiénes pagan el financiamiento de la IIRSA

Ciertamente esta es la parte más llamativa del plan, ya que mientras gran parte de los beneficios irán a parar a compañías transnacionales, quienes realmente pagarán los créditos serán los pueblos de la región. En este sentido el plan plantea, a través de la tramitación de "créditos concesionales", estructurar estas redes con un incremento considerable de la deuda externa. Tal cual reza en su sitio web (<www.iirsa.org>), el mismo cuenta con una cartera de 335 proyectos con un monto de 37.470 millones de dólares, que se sumarán a la deuda externa de los países suscriptores del acuerdo. Esta cartera de proyectos asume la siguiente estructura.

CARTERA DE PROYECTOS IIRSA

Eje de integración de desarrollo	Nº de grupos	Cantidad de proyectos	Inversión estimada en millones de u$s
Andino	11	74	5.000
De Capricornio	4	34	2.000
Del Amazonas	6	44	2.000
Del Escudo Guyanés	4	32	370
Del Sur	2	21	1.100
Interoceánico Central	5	44	3.300
MERCOSUR-Chile	5	68	12.100
Perú-Brasil-Bolivia	3	18	11.600
Total	**40**	**335**	**37.470**

Fuente: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana <www.iirsa.org>.

La presencia de la IIRSA en Bolivia

Acorde a la estrategia de la banca internacional a partir de 1994, y de acuerdo al nuevo modelo económico establecido a partir de 1985, se definieron importantes políticas para Bolivia dándole un rol dentro de la integración sudamericana. Estas políticas, inmersas en el Plan denominado "El Cambio para Todos", establecieron que Bolivia debía convertirse en "país tránsito del subcontinente y centro distribuidor de gas y otros energéticos" (MDSMA, 1994). Enmarcadas en estos principios, las políticas de transportes se dirigen a satisfacer las demandas de vinculación y de servicios internacionales. En este sentido aparecen como prioridad para Bolivia los denominados Corredores de Integración de la reformulada Red Fundamental de Carreteras, que no son más que corredores de tránsito de mercadería de los países vecinos y corredores exportadores de recursos naturales. El costo de construcción de estas obras proviene de los organismos multilaterales de cré-

© Comité de Derechos Humanos de Orellana, Red de Líderes Comunitarios Angel Shingre y Oficina de Pastoral Social del Vicariato de Aguarico

dito, y constituye el mayor porcentaje de las inversiones del estado, incrementando año a año la dependencia del país y la deuda externa.

Bolivia es en la actualidad un país con una relativa participación en la economía regional y casi ninguna en el ámbito hemisférico, que tiene problemas por la incidencia de la pobreza, la marginalidad y su limitado acceso a servicios. Sin embargo, resulta de gran importancia para la IIRSA, por lo que importantes grupos de proyectos se vienen desarrollando, con la propaganda de que gracias a ellos se están integrando regiones alejadas de Bolivia, de que se podrán vender productos al inmenso mercado externo, y de que gracias a esto se alcanzará el crecimiento económico. Pero la realidad es otra. Las grandes inversiones que se realizan están destinadas a consolidar los ejes de la IIRSA, mismos que guardan características particulares y de gran importancia para el comercio de los países hegemónicos de América Latina y para satisfacer las necesidades energéticas de estos.

Uno de los aspectos más importantes es que la región del altiplano boliviano es el paso más corto y de mejores condiciones para el flujo de mercancías hacia los puertos del Pacífico, gracias a la importancia que van adquiriendo las rutas de comercio y los ejes marítimos de esta cuenca como resultado del surgimiento de los mercados asiáticos, con demandas crecientes de productos. En este sentido, es interés de Brasil, la economía más grande de Sudamérica, alcanzar los puertos del Pacífico por una vía más reducida y que involucre menor tiempo que las rutas marítimas del Estrecho de Magallanes o el Canal de Panamá y el dificultoso paso terrestre de Los Andes a través de Argentina. Alcanzar este objetivo le permitiría avanzar en su anhelo de lograr una posición dominante en América Latina, resultado de la estrategia brasileña, desarrollada desde los

ochenta, de alcanzar el liderazgo regional a través de la incorporación a su zona de influencia de los países de su entorno geográfico más próximo: Argentina, Uruguay, Paraguay, luego Bolivia y Chile, posteriormente los demás países de la Comunidad Andina, y finalmente toda Sudamérica, con el fin de fortalecer su economía frente al ALCA. Esta forma de integración, por todo lo señalado, se constituye en un proyecto ajeno a los pueblos, incrementa los niveles de deuda externa y canaliza el rápido agotamiento de los recursos naturales, tanto para Bolivia como para el resto de los países que abarca el acuerdo.

Bibliografía

Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) 2003 *Las venas del ALCA: Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA). Bolivia un país de tránsito y de extracción de recursos* (La Paz: FOBOMADE).

Mazurek, Hubert 2003 "CAN y ALCA: un difícil matrimonio", mimeo.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA) 1994 *Plan General de Desarrollo Económico y Social: El cambio para todos, 1994-1997* (La Paz: MDSMA).

Molina, P. y Copa, Z. 2005 *¿La agricultura soyera en Bolivia, necesita transgénicos? Factores productivos y competitividad de la soya boliviana* (La Paz: FOBOMADE).